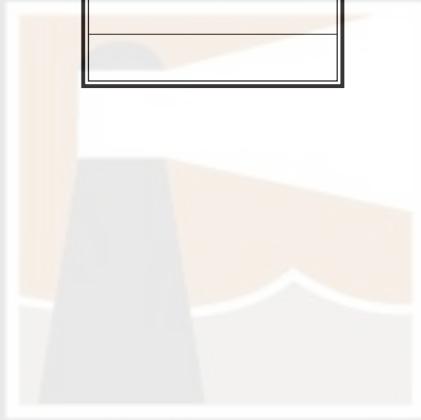




EX LIBRIS



MAREA
EDITORIAL



EL CAMPO POPULAR

MAREA
EDITORIAL



Pedro Peretti

EL CAMPO POPULAR

45 propuestas agrarias para el bien común

Prólogo de
Cristina Fernández de Kirchner



Peretti, Pedro

El campo popular: 45 propuestas agrarias para el bien común / Pedro Peretti;
Prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. 1a ed - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires : Marea, 2024.

256 p. ; 20 x 14 cm. - (Historia urgente / Constanza Brunet ; 112)

ISBN 978-987-823-059-7

I. Política Agropecuaria. I. Fernández de Kirchner, Cristina, prolog. II. Título.
CDD 306.349

Dirección editorial: Constanza Brunet

Coordinación editorial: Víctor Sabanes

Asistencia editorial: Carmela Pavesi

Comunicación: Verónica Abdala

Diseño de tapa e interiores: Hugo Pérez

Corrección: Brenda Wainer

Foto de tapa: Tom Fisk - pexels.com

© 2024 Pedro Peretti

© 2024 Editorial Marea SRL

Pasaje Rivarola 115 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Tel.: (5411) 4371-1511

marea@editorialmarea.com.ar | www.editorialmarea.com.ar

ISBN 978-987-823-059-7

Impreso en Argentina – *Printed in Argentina*

Depositado de acuerdo con la Ley 11.723. Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio
o procedimiento sin permiso escrito de la editorial.

En un mundo enfrentado a grandes desafíos globales —desde el cambio climático hasta las crecientes desigualdades sociales y económicas— la necesidad de repensar nuestros modelos de desarrollo y de crecimiento es permanente e imperiosa. El campo popular es un trabajo de Pedro Peretti que ofrece un recorrido histórico, un análisis profundo y una serie de propuestas para reevaluar el rumbo de la política agropecuaria argentina: una herramienta útil para pensar el desarrollo nacional.

La agricultura es un tema que toca la vida de todos los argentinos, directa o indirectamente. Este libro es un llamado a la reflexión y al diálogo, a la participación activa en la construcción de un modelo agrícola más justo, sostenible y eficiente que pueda enfrentar los retos de este siglo y garantizar la soberanía alimentaria en nuestro país. Peretti, que como productor y dirigente cuenta con una extensa trayectoria en el sector, comparte su conocimiento en la temática y realiza 45 propuestas concretas que buscan mejorar la gestión de nuestros recursos agrícolas. Una inspiración para la acción.

El libro plantea una crítica profunda al modelo agrario monocultivo de gran escala impuesto desde los 90, cuyo resultado evidente fue una mayor concentración de tierras, y la tendencia a la desaparición de otros modelos de producción como la chacra mixta y el chacarero productor, reemplazado por los grandes *pools*, la injerencia del capital

financiero, los rentistas y los contratistas. Este modelo tuvo un impacto negativo en la economía rural, en el ambiente, en la eficiencia logística, en el arraigo, y una pérdida de soberanía y seguridad alimentaria.

Peretti plantea la necesidad de que los temas agrarios tengan un rol protagónico en la agenda política, y que se discuta, diseñe e implemente una política agropecuaria nacional y popular para la construcción de un modelo agrícola que sea justo, sostenible y eficiente. Y busca que esto se haga desde una perspectiva que entrelace lo económico, lo social y lo ambiental, subrayando la interconexión esencial entre el campo y la ciudad.

Estas políticas van en línea con algunas de las que implementamos en nuestros gobiernos, como el reintegro de retenciones a las exportaciones para pequeños productores; créditos segmentados con tasas preferenciales, implementados desde el Banco Nación; los programas de apoyo a pequeños y medianos productores; la ley 27 118 de agricultura familiar sancionada en 2014, entre otras.

El sector agropecuario en Argentina no ha tenido la centralidad histórica que la lógica indica en el debate político. Este libro desafía esa omisión, poniendo a consideración propuestas concretas, como la necesidad de urbanizar el debate rural en todos los niveles y de adoptar un método propio de evaluación del sector. Además, plantea la necesidad de rediseñar nuestras políticas para fomentar una agricultura más integrada y menos dependiente de monocultivos como la soja, que ha dominado nuestro paisaje agrícola a un alto costo social y ambiental.

Como nación, tenemos la oportunidad de liderar en la formulación de respuestas innovadoras a nuestros desafíos más apremiantes. El libro es una herramienta valiosa en este esfuerzo, para promover debates y políticas que busquen el bienestar de todos los argentinos.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Ex presidenta de la Nación

Introducción

Salud y cosechas

Lo agrario es un asunto indispensable para la vida humana y nunca figura en la agenda política. Tierra, suelo, alimento, agua, aire, todo nace o viene de ahí. La derecha solo quiere negocios a costa de la vida, y nosotros preferimos la vida a los negocios.

Este es el debate al que invitamos desde estas páginas. Hay varias cuestiones que me desvelaron estos años y motivaron mi espíritu polémico, y en las páginas que siguen quiero compartirlas con ustedes, queridas y queridos lectores. Las enumero a vuelo de pájaro:

- 1) Ausencia de debate agropecuario en todos los niveles, tanto en el Parlamento como en la comunidad. Ni siquiera está presente durante las campañas electorales.
- 2) Necesidad de urbanizar el debate rural.
- 3) Existencia dominante de latifundios y monopolios.
- 4) Desaparición de la chacra mixta.
- 5) Rentismo rural.
- 6) Agricultura de tres pisos.
- 7) Ausencia de un método propio de evaluación del sector agropecuario. El campo nacional y popular usa las herramientas teóricas de la derecha para medir la actividad. Grave error, por eso nos salen mal las “cosas” cuando somos gobierno.

- 8) Precio de los alimentos, gobernabilidad democrática e irracionalidad logística de la economía agraria son algunas de las claves para entender lo que nos pasa como país.
- 9) Agricultura con agricultores. Definición de productor agropecuario: ¿qué es y quién lo es?
- 10) Soberanía en todos sus aspectos, pero especialmente vinculada con la mejora en la calidad de vida de los sectores populares.
- 11) Políticas de arraigo.

Ale Dixon y Gaby Stoppelman fueron las autoras intelectuales de esta (al menos, para mí) hermosa idea de recopilar los artículos que publiqué en *Página/12*, a los cuales agregué una introducción de contexto y le incorporé 45 propuestas (concretas), para una política agraria nacional y popular. En lo personal no deja de ser un halago, y celebro vivamente que la inquietud haya partido de dos compañeras ciudadanas, no solo por ser el autor, sino porque ellas se han sentido interpeladas por el S.O.S. que venimos lanzando desde hace tiempo, acerca de la necesidad de urbanizar el debate rural y de que el campo Nac & Pop le hinque el diente al tema.

También agradezco a Wado de Pedro por su compromiso con el libro y a Cristina Fernández de Kirchner por la generosidad militante al hacer el prólogo. Por último, gracias a Constanza Brunet y Víctor Sabanes de Marea por cuidar y acompañar este libro.

PEDRO PERETTI

24 de junio de 2024, Máximo Paz



PRIMERA PARTE

Estado de situación

MAREA
EDITORIAL



Capítulo 1

El debate agropecuario pendiente

La Argentina es un país agrario sin debate agropecuario. La derecha lo secuestró y el campo nacional y popular (de *motu proprio*) se desentendió completamente del tema. Salvo honrosas excepciones, lo tercerizó en técnicos sin compromiso social, o directamente “compró” y aplicó las recetas provistas por la derecha agraria, tomándolas –casi– sin ningún tipo de filtro. Es más, el campo popular ignoró, deformó y ocultó sistemáticamente la extraordinaria política agraria que desarrolló el peronismo, en vida de Perón. Así, le hemos hecho “un regalo” tan caro al neoliberalismo agrario, que aún lo seguimos pagando.

A partir de los 90, la Argentina cambió su modelo agrario de chacra mixta por el de monocultivo sojero con concentración de tierras y rentas. Eso fue con Carlos Menem de presidente, Cavallo de ministro de Economía y Felipe Solá, como secretario de Agricultura durante todo el periodo. Ellos lo hicieron y nunca nadie les reclamó por la destrucción de la Junta Nacional de Carnes, la de Granos, por el Instituto de la Yerba Mate, por la disolución de la Corporación Argentina de Productores Ganaderos (CAP), por la privatización de los puertos del Paraná ni por la liquidación a precio de chatarra de la Flota Mercante. Al menemismo se le reclama por la corrupción, las privatizaciones y la extranjerización, pero nunca se analiza el cambio de modelo agrícola que significó todo lo mencionado, ni el impacto de esas medidas sobre el precio de los alimentos. Es más, aún hoy se elogia la modernización que aquello

trajo consigo. No se lo atacó por las cuestiones de fondo, que era por lo que debería habérselo atacado, sino por las formas en que se ejecutaron las medidas. Así, Felipe Solá fue y vino del Justicialismo al liberalismo, sin que se le haya pedido nunca una mínima reflexión autocrítica sobre qué ayudó a hacer con los bienes y el bienestar del pueblo argentino. Un verdadero latrocinio cuyas consecuencias pagamos hasta hoy.

Una de las pocas voces de resistencia a este cambio de paradigma fue la de don Humberto Volando, uno de los más grandes dirigentes agrarios de la historia argentina. El resto aplaudía y ocupaba cargos en el Estado. Nunca se debatió nada. ¿Alguien se acuerda de algún debate de esa época sobre el modelo agrario? Las únicas voces de protesta fueron la de aquella Federación Agraria Argentina –que nada tiene que ver con la actual– y el por entonces incipiente movimiento campesino, con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) a la cabeza.

Nunca en cuarenta años de democracia el sistema de partidos políticos democráticos y populares se ocupó de debatir la cuestión agraria. Pareciera ser que la forma en que se produce, distribuye y exporta lo que comemos resulta una cosa sin relevancia para el campo nacional y popular.

2008: ¿hubo debate?

Los lectores se preguntarán con razón: pero en el 2008, ¿no se discutió mucho sobre el “campo”? La verdad, no. Todo giró en torno a los derechos de exportación (DEX) y la presión fiscal que “soportaba” el sector. Pero nada se debatió sobre el uso y tenencia de la tierra ni sobre la chacra mixta. Es decir, ni una palabra se dijo sobre el modelo de producción de alimentos, el latifundio, el desarrollo rural, los puertos privados, la soberanía del Paraná, la irracional logística agraria (tan costosa e importante), el Canal Magdalena, las economías regionales

y la concentración monopólica. Todo “eso”, que es la médula del tema agrario, ni fue mencionado. La derecha solo quería discutir DEX y cómo bajar impuestos. Y los sectores progresistas no logramos torcer esa decisión, ni meter cuña alguna en el debate. Ni siquiera nos animamos a plantear con fuerza la segmentación de retenciones: que quien más campo tiene y más soja produce pague más que el chico. Modesto e inobjetable principio de equidad tributaria.

Este inmenso conflicto agrario-político se desató (esencialmente) por el desconocimiento que se tenía del sector. Y demostró, entre otras cosas, que la sociedad en general y el campo nacional y popular en particular no tenían la menor idea de qué pasaba dentro de la actividad agropecuaria. Puso en la superficie las serias dificultades para conducir políticamente al sector. No se había anudado ni priorizado ninguna alianza seria con sujeto agrario alguno, que permitiera desarrollar la propia agenda. Todo lo contrario a lo que hizo Perón.

La derecha agraria, que no tiene ni un pelo de zonza y sabe muy bien qué le conviene, usó el desconocimiento generalizado de lo que sucedía en la Argentina rural y aprovechó la huida del debate del campo nacional y popular, para inocular en la sociedad un sentido común agrícola contrario al interés de los sectores populares. Así logró que el modelo de monocultivo sojero con concentración de tierras y rentas sea percibido como el único y más virtuoso camino en materia de desarrollo rural. Pudo imponer con relativa facilidad consignas tan falaces como efectivas: “Todos somos el campo” o “El campo es uno solo”. Burdas mentiras. Ni el campo es uno solo, porque es diverso, ni todos somos el campo, porque el campo tiene dueños y está dominado por un puñado de terratenientes codiciosos que no dudan en matar en defensa de la propiedad privada.

Para el populismo, lo rural sigue siendo un mundo desconocido al que se mira de lejos. Y, cuando nos toca gobernar, seguimos buscando nombres e ideas que vienen del mercado. El mercado siempre puso al secretario de Agricultura, ganara quien ganara las elecciones. Esa

situación la cortó Cristina Fernández de Kirchner. En octubre del 2009 decidió darle jerarquía de Ministerio a la Secretaría de Agricultura y nombró a Julián Domínguez como ministro: un abogado, diputado provincial por Buenos Aires, sin vínculos directos con el sector. Un “hombre de la política” que tuvo una más que aceptable gestión en su primera experiencia como ministro.

En el 2008, los grupos PRO-mercado solo querían discutir las variables de política agraria que los afectaban directamente. Y nosotros no logramos torcer esa lógica. No logramos debatir segmentación, ni monopolios, ni latifundios, ni agricultura de rostro humano. A la agricultura concentrada solo le interesó discutir retenciones y volumen. Por eso pelearon como si hubiera sido una final del mundo y, la verdad, les salió bien. A partir de ahí, cavaron una trinchera donde lograron sumar a buena parte de la política y de la sociedad a sus demandas de eliminación de retenciones, no intervención en los mercados, no regulaciones, cero control fiscal y devaluación: todas medidas a favor de los grupos concentrados y en contra del pueblo en general. El Estado les molesta y lo quieren lejos.

Eso es lo que se discutió en el conflicto de las retenciones móviles. Pero eso no es discutir “lo agrario”: es solo una parte. Los efectos de ese conflicto sobre los DEX llegan hasta nuestros días y tienen, aún hoy, un fuerte impacto político.

¿Dónde se debate lo agropecuario?

Existe un sinnúmero de factores negativos, semiocultos, que nunca son tenidos en cuenta a la hora de evaluar el modelo sojero. ¿Por qué? Por lo que dijimos al comienzo: la derecha secuestró el debate agrario y lo limitó a un selecto y minúsculo número de representantes de los famosos intereses creados. Terratenientes, *pools* de siembra, empresas exportadoras, proveedoras de servicios, puertos privados y técnicos a su

servicio discuten entre ellos. Y generan un gueto productivista que monopoliza el discurso público y ha capturado la representación simbólica del sector. Ahí no entran nunca temas como soberanía y seguridad alimentarias, ni los efectos de las fumigaciones indiscriminadas en la salud, ni la crisis climática, ni la irracionalidad logística de la economía agraria, ni los desmontes, ni las migraciones rurales, ni los accidentes viales producto de los millones de viajes de camión, ni los puertos privados y su opacidad, ni la soberanía del Paraná, ni la construcción del Canal Magdalena. Ahí no entra nada ni nadie que sea pueblo o que tenga que ver con sus necesidades. Bajaron un discurso de defensa cerril del modelo agrario sojero vigente.

Este gueto productivista cuenta con el sostén ideológico y mediático del complejo de medios de comunicación hegemónico, que pone a su disposición una amplia red de periodistas y programas; todo regado en forma abundante por las cuentas publicitarias que las grandes compañías del sector derraman con selectiva precisión a los defensores del modelo. Esa gran masa de dinero va directo a periodistas, suplementos gráficos, radios, tv y redes de diverso tipo, con el único requisito de que se defiendan el modelo sojero agroexportador de libre mercado.

A este esquema de difusión y cooptación de “cabezas” hay que sumarle simposios, conferencias y premios que se otorgan entre ellos, en un autobombo muy bien calculado, con el objetivo de consolidar el modelo. Toda una gama de recursos dinerarios muy importante, orientada a mostrar a la sociedad que el único camino posible es el que ellos militan.

La Argentina democrática se debe un debate serio sobre la cuestión. No un debate de superficie, sino uno que vaya al fondo y supere lo meramente coyuntural, que siempre gira en torno a la cuestión impositiva. Hay que hincarle el diente al uso y tenencia de la tierra y a qué tipo de agricultura necesitamos para poner “el puchero” en la mesa de todos los argentinos: una agricultura democrática, desmonopolizada y de rostro humano, o una agricultura buitre, concentrada, de volumen, sin

productores e integrada verticalmente. Esa es la madre de todas las batallas: quién, cómo y dónde producirá los alimentos que consumimos. Y es la sociedad la que debe poner en agenda esas preocupaciones para que la política las tome. Por eso es fundamental urbanizar el debate rural.

No todo el campo es lo mismo

A la hora de analizar el sector, lo primero que tenemos que hacer –ojalá este libro ayude a su mejor comprensión– es explicar que no todo el campo es igual. Parece una perogrullada, pero no lo es. El campo es “overo”: la diversidad es lo que domina en cuanto a tamaño (cantidad de hectáreas que se poseen), producciones, regiones, formas de propiedad. Lo trabajan *pools* de siembra, megaproductores (que no son *pools*), chacareros, campesinos, indígenas, estancieros y sociedades comerciales de cualquier tipo, sean nacionales o extranjeras. Todos son el “campo” y se sienten el “campo”. Y es verdad: todos lo son. Lo que tenemos que definir es qué intereses queremos representar y servir: si los del pueblo o los de los monopolios y terratenientes.

No es lo mismo ser ocupante precario, arrendatario, contratista rural, o propietario. Tampoco es lo mismo sembrar que ser propietaria/o –aunque a veces coincide la titularidad con el quien siembra–, ni es igual ser un productor de sofá (rentista), que productor activo. No da lo mismo trabajar 5 hectáreas que 50, 500, 5000, 50 000 o 500 000. Todos esos tamaños de propiedad física de la tierra existen y sirven para graficar la diversidad de intereses que surcan el sector. Una correcta política nacional y popular debe identificar esas diferencias con el mayor detalle posible. Pero, por sobre todas las cosas, debe saber y definir a qué sujeto agrario quiere apoyar y a quién quiere beneficiar con su política. Las alternativas son: tener una propuesta, plantarse y debatir, o eludir el debate y que conduzcan los poderosos. El peronismo no nació para servir a la oligarquía sino para enfrentarla.

A fin de operar sobre esa realidad disímil es que existen las políticas públicas diferenciadas (en este libro hay varios artículos). Son un instrumento que la derecha esquivó como el sapo a la guadaña, y que el campo nacional y popular debe usar sin complejos.

Modelo sojero, definición y costos

Definimos el modelo agrario argentino vigente desde los 90, como de *monocultivo inducido con concentración de tierras y rentas*. Decimos que la soja es un “monocultivo inducido” porque no es parte de la historia productiva de nuestro país. Fue impuesto después de la caída del Muro de Berlín, como parte de la nueva división internacional del trabajo que trajo la globalización, luego de la implosión de la URSS y la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC). La decisión del gigante asiático de modernizar su sector agrícola y urbanizar a millones de pobladores tuvo como resultado la necesidad de producir alimentos en cantidades suficientes para alimentar esa nueva y enorme masa urbana.

Y para que suceda se necesitan proteínas en abundancia, que provienen fundamentalmente de cerdos y aves, los cuales a su vez tienen que comer, básicamente, alimentos balanceados a base de soja y maíz. Ahí aparece Argentina, como proveedora de esta materia prima esencial. Que los chinos coman todos los días tiene que ver con la seguridad nacional de esa superpotencia.

Para satisfacer a este nuevo “cliente” se debió reconfigurar todo el sector agropecuario argentino a la medida, no de Argentina, sino de los requerimientos productivos y logísticos de las multinacionales (Cargill, Dreyfus, Bunge, entre otras) proveedoras del mercado chino. Fue esta apertura –nueva y apetitosa– la que indujo a la masificación de la siembra de soja, que ya se sembraba en nuestro país, pero en proporciones bajas.

Satisfacer la demanda china reclamaba volúmenes cada vez más importantes de soja y maíz, para lo cual había que dejar de sembrar otros cultivos y desplazar la ganadería a las zonas extrapampeanas. Fue el fin de lo que conocíamos como chacra mixta, garante de la soberanía y seguridad alimentarias y proveedora del consumo de cercanía, que arraigó a miles de chacareros a su parcela. Esta reconfiguración del sector agrícola argentino orientado a las necesidades chinas se hizo sin filtro y a lo bestia, a voluntad del mercado. Así fue como se destruyeron más de 200 000 chacras mixtas, se hipotecaron 12,5 millones de hectáreas solo en el Banco Nación –que después se intentó privatizar para apropiarse de esas hipotecas–, se destruyeron 900 000 puestos de trabajo en el sector, se privatizaron puertos, ferrocarriles, y el Paraná se entregó a Hidrovía S.A. Se liquidó la Flota Mercante, una de las más importantes del mundo. Se generó un proceso de migraciones internas descontrolado, se deforestaron más de cuatro millones de hectáreas (solo en los 90). En la pampa húmeda la soja le arrebató a la ganadería diez millones de hectáreas, desplazando a las vacas a las zonas extrapampeanas o a los humedales, que después quemaron para que pueda crecer el pasto. Había (y sigue habiendo) que liberar tierras para permitir la siembra de soja. Nacieron los *feedlots*, que se ocupan del engorde de bovinos hacinados en un corral. El modelo sojero fue decisivo en la eliminación del tren y su reemplazo por el camión. También, en la eliminación de los organismos reguladores y de control de exportación de alimentos, como la Junta Nacional de Granos y la de Carnes, la disolución de la Corporación Argentina de Productores de Carne (CAP), el Instituto de la Yerba Mate, por citar algunos. La sojización parió una nueva Argentina rural, productora de forraje para cerdos y aves del sudeste asiático, y no de alimentos para humanos, como aviesamente le hace creer la publicidad neoliberal a la sociedad argentina. Las consecuencias de este modelo, que solo beneficia a un puñado de empresas y terratenientes, fueron nefastas para el país: intensificó el proceso de concentración de tierras y rentas de manera exponencial y desarrolló el

rentismo rural en reemplazo de la chacra mixta. El rentismo rural es un concepto clave y lo veremos en detalle más adelante.

Contrarreforma y breve lista de costos ocultos

En la práctica, la sojización significó una contrarreforma agraria. “[...] desplazó a los pequeños productores y eliminó a la población rural, sea chacarera, campesina, indígena y a la agricultura familiar generando una ruralidad sin población propia. Aumentó la superficie promedio de las explotaciones agropecuarias entre 1988 al 2018 en un 42 %. En efecto, en 1988 la superficie promedio era de 469 hectáreas. En 2002 era de 588 y en 2018 era de 670 hectáreas”¹

Teniendo en cuenta que en la pampa húmeda se estima en 75 hectáreas la Unidad Económica que necesita una familia tipo para vivir dignamente, se produjo una concentración altísima. Fue un auténtico desastre que la política nunca dimensionó; al contrario: miró siempre para otro lado.

Aunque los pasivos del modelo son varios, vastos y exorbitantes, nunca son ponderados correctamente y lo único que se contabiliza es lo que queda en la ventanilla de retenciones. Por su parte, los beneficiarios de la sojización inducida ocultan esos costos a fin de presentar un modelo sin contraindicaciones.

Pero hay dos factores que queremos remarcar: uno es la invisibilización del latifundio, de la que hablaremos más adelante. Otro, la deslocalización y monopolización de la producción de alimentos que incide tan fuertemente en los precios y en los salarios de los sectores populares. Este abandono de la producción de cercanía generó la irracionalidad logística de nuestra producción agropecuaria, que debe

¹ Marisa Duarte, 2023, directora de la revista *Realidad Económica*.

recorrer miles de kilómetro en camión, ¡algo verdaderamente extravagante! Y lo peor es que convencieron a buena parte de la sociedad de que somos muy eficientes en la producción de alimentos. Traigo acá algunos ejemplos que lo desmienten: un litro de leche debe recorrer 1000 km promedio para llegar a la mesa de los argentinos. La producción de pimientos en Embarcación, Salta, se encuentra 1450 km de los mercados. La lechuga recorre miles de kilómetros y lo mismo ocurre con la carne bovina. Podemos seguir dando ejemplos de desequilibrio logístico hasta el cansancio. Latifundio, monopolios e irracionalidad logística son calamidades productivas que trajo el modelo sojero, que nadie debate, denuncia, ni discute, y que afectan seriamente a la soberanía y seguridad alimentarias de la Argentina. El campo nacional y popular aún no registró que este cambio de paradigma agrario fue central en el cataclismo político que estamos padeciendo.

Los que hacen negocios con China son diez exportadoras de granos que manejan el 80 % del mercado, y sus auxiliares productivos: los *pools* de siembra y megaprodutores sojeros. El resto de los argentinos la vemos pasar, pero pagamos todos los costos ocultos. Y “ojo”, que yo estoy en contra del monocultivo de soja, no contra la soja como cultivo. No confundir a Juana con la hermana.

Una breve enumeración de los costos ocultos:

- 1) Crisis climática-pasivos ambientales: cáncer, inundaciones, sequías y deforestaciones.
- 2) Accidentes viales: se necesitan miles de viajes de camión para trasladar la soja y las vacas desde el NEA y el NOA hasta los distantes centros de consumo. También, para mover la cosecha de los campos a los puertos. Solo el 10 % de estos movimientos se hace por tren. De los 40 000 km de vías que teníamos, después de la privatización quedaron poco más de 10 000. Eso genera que Argentina esté entre los países con más muertes por accidentes viales.

- 3) Destrucción de la actividad apícola, que generaba miles de puestos de trabajo y cuya producción se exportaba casi en su totalidad.
- 4) Migraciones rurales-urbanas totalmente descontroladas.
- 5) Destrucción de la chacra mixta.
- 6) Fin del consumo de cercanía.
- 7) Liquidación de los mercados populares de consumo y de los mercados de referencia, como el del cerdo y los lanares.
- 8) Cientos de pueblos del interior profundo transformados en pueblos fantasma.
- 9) Privatización de puertos y del río Paraná.
- 10) Liquidación de la Flota Mercante nacional.

¡Y dicen que este es un modelo exitoso! Pongamos números y evaluemos objetivamente.

La estrategia del neoliberalismo

El modelo ha tenido la perspicacia de diseccionar el debate agrario, imponiendo un método de análisis compartimentado que no muestra nunca el conjunto de la “cosa agraria”, sino solo partes sin relación entre sí. Y “mágicamente” consigue ocultar la relación de las partes con el todo. Siempre analiza las consecuencias en forma autónoma de las causas. Así, el modelo queda limpio e impoluto. Ese es un gran triunfo, ¡joj!

Al modelo nunca se lo conecta con el uso y tenencia de la tierra, ni a esta con la producción de alimentos (pareciera que la lechuga o el tomate se siembran en la estratosfera), ni con las migraciones rurales, como si estas fueran producto de decisiones individuales. Tampoco se vincula al modelo con la deforestación, la crisis climática, la secuela de inundaciones y sequías, los accidentes viales, la logística y el cáncer por glifosato. Todas esas catástrofes son vistas como temas autónomos, sin conexión entre sí, ni con el modelo de producción agraria que los parió.

Son todos rayos de una misma rueda, pero –habilidad comunicacional mediante– son atribuidos a la acción individual de hombres negligentes.

Buena parte de esto sucede porque el campo nacional y popular teme y elude el debate agrario. La última vez que se discutió esta cuestión fue hace exactamente cincuenta años, en el siglo pasado.

Los 70: Lo agrario en debate

En la década del 70 el peronismo batalló duro por una política agraria al servicio del pueblo. Una vez en el gobierno, envió dos anteproyectos de ley de contenido antioligárquico: el de la Renta Normal y Potencial de la Tierra y la Ley Agraria. En simultáneo, operó muy fuerte sobre el precio de los alimentos a través del Pacto Social. Para eso empoderó a la Junta Nacional de Carnes y la de Granos y creó las juntas por producto, donde se analizaban los precios y la producción de cada materia prima (papa, tomate, carne, entre otros) de la canasta básica. Participaban entidades de productores –la Federación Agraria Argentina (FAA) fue muy activa–, el movimiento obrero, cooperativas, empresarios y el Estado. Este tenía la última palabra, no era un mero auspiciante u observador: decidía. Después del golpe de 1976 y hasta nuestros días, el campo nacional y el peronismo en particular abandonaron este debate. Su silencio –entre negligente y cómplice– regaló a la derecha el monopolio de la opinión rural. El peronismo terminó casi siempre comprando ofertas berretas del modelo neoliberal. Hubo honrosas excepciones, pero fueron minoritarias.

En 1973 asumió Héctor J. Cámpora como presidente, José Ber Gelbard como ministro de Economía y Horacio Giberti como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con la renuncia de Cámpora y la asunción de Perón siguieron los mismos funcionarios y la misma política. Es importante señalar que era la política agraria del peronismo en su conjunto, no del camporismo o de la Juventud Peronista.

El primer organismo nacional que se ocupaba de las cuestiones

agropecuarias fue creado en 1871 por Domingo F. Sarmiento quien, dicho sea de paso, tenía una pésima opinión sobre nuestros oligarcas con olor a bosta. Ese organismo era secretaría de Estado, dependiente del Ministerio del Interior. En 1898 el general Julio A. Roca, padre y prócer de nuestra oligarquía terrateniente, la elevó al rango de ministerio. Su primer ministro fue Emilio Frers.

Cuando ganó el Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI) en 1973, el ministerio se rebajó nuevamente a secretaría. ¿Por qué? No fue un acto meramente burocrático que buscara achicar costos o rebajar competencias en la organización del Estado. Fue una decisión en cuanto a qué es la política, quién conduce la economía. Una decisión que implicaba que lo agropecuario debe subordinarse y estar al servicio del proyecto de país.

El ministerio tenía que dejar de representar a la oligarquía terrateniente frente al Estado y pasar a ser –según la concepción del nuevo Gobierno– el representante del Estado frente a ese sector minúsculo, pero poderoso. Debía dejar de ser un enclave autónomo al servicio de intereses antinacionales y ser parte del proyecto de nación. Por eso lo rebajó a secretaría y se lo puso bajo la órbita del Ministerio de Economía, integrado al conjunto del país. ¡Más claro, echale agua!

¿Por qué decimos que fue en los 70 la última vez que el campo nacional y popular discutió la cuestión agropecuaria? Sencillo, porque esa cuestión fue parte central de aquella campaña electoral. ¿Qué decía el programa del FREJULI al respecto?: “Las Pautas Programáticas para el gobierno Justicialista de la Reconstrucción Nacional de enero de 1973 incluyen dentro de su programa la política agropecuaria. Entre los objetivos está lo que se dio en llamar la Reforma Agraria Integral, que discute múltiples aspectos relacionados a las zonas rurales argentinas”.²

2 Silvia Lazzaro: *Acuerdos y confrontaciones: la política agraria peronista en el marco del Pacto Social*, La Plata, Universidad de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2013.

¡Tomá mate con chocolate! La moderación te la debo. Señalo dos detalles importantes del párrafo precedente. El primero es que el texto habla de Reforma Agraria, sin complejos ni eufemismos, es el programa oficial del peronismo, es Juan Perón en vida el que banca esto, no Juan Grabois. El segundo es que el tema agrario es parte del programa de acción de gobierno y de la campaña electoral de Cámpora. Perón, una vez presidente, no modificó esta línea política ni en una coma. Al contrario, fue bajo su presidencia que se presentó el proyecto de Ley Agraria. ¿Cuántas veces vieron ustedes, amigos lectores, el tema agrario en los debates presidenciales? ¿Y cuántos peronistas escucharon hablar de Reforma Agraria Integral de 1983 a la fecha? Hagan memoria.

Para responder adecuadamente debemos ir al párrafo introductorio del anteproyecto de Ley Agraria que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Lo dice todo: “El Poder Ejecutivo Nacional tiene el honor de someter a la alta consideración a vuestra honorabilidad el proyecto de Ley Agraria que se acompaña, que tiende a corregir los defectos de la estructura agraria representados por la presencia de latifundios y minifundios; mejorar el régimen de tenencia de la tierra, compatibilizando con los principios orientadores de la política agraria; propender a un mejor uso y conservación de los recursos naturales y aún más eficiente empleo de los capitales que se invierten en las empresas agropecuarias, incrementar la productividad y rentabilidad de las explotaciones, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población rural, derivar para la comunidad los beneficios que reporten las grandes obras públicas que se construyan”.³

A continuación, enumera los objetivos de la Ley: “1) La tierra agrícola debe cumplir la función social para la que está naturalmente destinada. 2) La tierra constituye un bien de trabajo, no de rentas. 3) La tierra vale por lo que produce. 4) La riqueza que se extrae de la tierra debe ser

3 Fuente: INTA, Estación Experimental de Famaillá.

aprovechada por los productores y por la comunidad toda, en una justa proporción”.

Reitero: era Juan Domingo Perón el presidente y fue la última vez que el campo nacional y popular discutió los temas de la tierra, el latifundio y la producción, todo articulado, no solo con generar divisas, sino con que hubiera alimentos accesibles para los sectores populares. La tenían clara Perón, Gelbard y Giberti. Qué tendrá que ver esto con los pusilánimes que se dicen peronistas y proponen cosas como las granjas chinas, la Ley Agro-bio-industrial, el recule de la estatización de Vicentin, la eliminación de retenciones a los grandes productores, la falta de control del precio de los alimentos, o no construir el Canal Magdalena, por citar algunas de las muchas “lindezas” que nos regaló el peronismo agrario en los últimos tiempos.

El proyecto de Ley Agraria apuntaba a tratar el tema desde lo global, articulando cuestiones económicas, productivas, jurídicas, sociales, laborales y culturales. Todo apostaba a mejorar la vida rural, propiciando una agricultura de rostro humano y con mayor productividad. Los cañones estaban enfocados a duplicar la producción, pero con la gente adentro. Al revés de lo que hace el neoliberalismo agrario en la actualidad, ya sea con la máscara del peronismo *new age* o de Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza, poco difieren. El modelo sojero nunca va a combinar producción, rostro humano, volumen, precio de los alimentos, medioambiente, ruralidad y exportación. Siempre va a priorizar el volumen, la rentabilidad y los negocios, aun a costa del hambre y la miseria del pueblo. Es así, solo le interesa ganar.

Rol del Estado

El Estado peronista tenía un rol rector, claro y definido: estaba al servicio de las mayorías populares, no de los grupos minoritarios. No era una revolución socialista, para nada. Planteaba un capitalismo agrario

muy razonable, cuyo norte era que la Argentina duplicara su producción agrícola, pero con productores agropecuarios, no sin ellos. Tenía claro que la tierra es un recurso finito, no renovable, que tiene una función social indubitable, imposible de soslayar, porque de ella dependemos todos/as para comer, beber y respirar. Sin ella no hay vida. El anteproyecto de Ley Agraria es una muestra palmaria del grado de involucramiento del peronismo fundacional con políticas agrarias reformistas y del rol que le asignaba al Estado.

La parte agraria de la historia del peronismo, constitutiva de su identidad primigenia, es sistemáticamente ocultada, negada y reemplazada por el pensamiento neoliberal, cuyo germen introdujo el menemismo. Muchos de los voceros agrarios del peronismo actual fueron funcionarios de Menem. Cualquier tranvía los deja bien con tal de no perder el “calor oficial”. ¡Qué tendrá que ver Menem con Perón o la política agraria menemista con la peronista! Nunca dos posiciones fueron más lejanas entre sí.

Como vimos, los dos proyectos agrarios que puso en discusión el peronismo fueron el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra (1973) y el proyecto de Ley Agraria (1974). Ambos apuntaban esencialmente a duplicar la productividad que era muy baja, ese tema se siguió discutiendo hasta la década del 90.

Hasta entonces, la baja productividad estaba relacionada con el latifundio. La tierra rendía más por tenerla que por producirla. Esta situación cambió a partir de los 90 con el proceso de sojización que arrasó con la chacra mixta y la soberanía alimentaria y transformó al latifundio en ultraproductivo, merced a la introducción de un paquete tecnológico de siembra directa, semillas transgénicas y glifosato. De la mano de la soja irrumpen en la agricultura la ciencia y el capital financiero, vía *pools* de siembra. Así se configura una agricultura de tres pisos: el dueño de la tierra, el contratista rural y el capital financiero. Es la agricultura sin agricultores.

No somos partidarios de practicar la nostalgia hacia instrumentos de política económica que fueron muy útiles y valiosos en su tiempo,

para un mundo que ya no es el mismo. Cuando cambia la realidad deben cambiar las herramientas de política que pretenden influir sobre ella. Me refiero a que no se puede hacer una Junta Nacional de Granos o un Instituto Nacional de Promoción del Intercambio (IAPI) a imagen y semejanza de aquellos. Tampoco tendría sentido un impuesto como el de la Renta Normal Potencial de la Tierra. Para la productividad actual, es más adecuado un impuesto a las grandes fortunas. Porque hoy el debate no es por la improductividad del latifundio sino por la concentración económica, el acaparamiento de tierras, el rentismo rural y la deslocalización de la producción de alimentos. Lo que debe conservarse es el concepto sobre la necesidad de que el Estado intervenga. Cómo lo hace y con qué instrumento es una cuestión del tiempo histórico en el que nos toca vivir. El “qué” es lo que se mantiene. El “cómo” es una construcción de la etapa histórica.

Un poco de contexto

Un detalle poco conocido, que generó un amplio debate político en todo el campo nacional y popular, fue la asunción de Antonio Américo Di Rocco, presidente en ejercicio de la Federación Agraria Argentina como ministro de Agricultura de la dictadura de Lanusse. Este tomó posesión del cargo en julio de 1971 y delegó el mando federado en su vice, don Humberto Volando.⁴

4 Don Humberto Volando (1927-2012) fue presidente de la Federación Agraria Argentina (1971-1996) y diputado nacional (1997-2001). Es, a mi criterio, el más claro y genuino representante gremial de los pequeños productores agrícolas del país. Un verdadero símbolo federado de activa participación en todo el proceso de recuperación y consolidación democrática en nuestro país. Mientras condujo a la entidad agraria, la alejó de la Mesa de Enlace y actuó en concordancia con los sectores cooperativos (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos), pequeña y mediana empresa, APYME (Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios) y gremiales

Di Rocco llegó al Ministerio con el apoyo de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, una coordinación de las entidades agrarias (Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Confederación Interoperativa y Agropecuaria Limitada –CONINAGRO–) creada en la década del 60. Estas entidades se pusieron de acuerdo en un Plan Agrario común. El nucleamiento se hizo ampliamente conocido en 2008, durante el conflicto por las retenciones móviles. La participación de la FAA en esa asociación es contra natura, ya que la entidad fue fundada para defender a los arrendatarios y pequeños productores, y no a su contraparte, los estancieros. Pero ni a Di Rocco ni a Buzzi les interesó demasiado la historia ni la opinión de los federados y terminaron abrazados a la oligarquía que debían combatir. Fue don Humberto Volando, ya presidente pleno de la entidad, quien en julio de 1972 retiró a la FAA de la Mesa de Enlace y la afilió a la Confederación General Económica (CGE).

Como vemos, la Mesa de Enlace no fue un invento de Eduardo Buzzi durante el conflicto de 2008. Venía de antes y con antecedentes muy potentes, por lo que la presencia de la FAA allí siempre fue muy conflictiva y poco entendible.

Ni bien asumió como ministro, Di Rocco concedió su primera audiencia a la Mesa de Enlace. Le debía el cargo al nucleamiento, coordinado por Jorge Zorreguieta,⁵ un hombre del ruralismo. “Otro que bien

de trabajadores como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) –en ese momento unificada– o el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) que conducían Hugo Moyano y Juan Manuel “Bocha” Palacios. Enfrentó con mucho vigor y decisión al neoliberalismo menemista.

5 Jorge Zorreguieta (1928-2017), dirigente ruralista, primero de Confederaciones Rurales Argentinas y luego de Sociedad Rural Argentina. En la década del 60 y principio de la del 70, fue el primer coordinador de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias. Luego fue subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca durante la dictadura, de 1976 a 1979. Y, después, secretario, desde 1979 a 1981. Procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos en su área durante la gestión, el kirchnerismo le retiró su jubilación de privilegio. Cuando llegó Néstor Kirchner

baila”, Zorreguieta es el padre de Máxima, actual reina de los Países Bajos, procesado por crímenes de lesa humanidad.

Di Rocco había puesto a la FAA en línea con los intereses de la oligarquía y esta le retribuyó especialmente su tibia actuación, cuando se sancionó la Ley 17 253, conocida como Ley Raggio o de desalojos rurales. Esta ley expulsó a cerca de 25 000 arrendatarios rurales, un viejo anhelo de los terratenientes propietarios, largamente reclamado por la oligarquía. La FAA, fundada en 1912 para defender justamente a los arrendatarios rurales, miró para otro lado, mientras la dictadura desalojaba a miles de familias chacareras a las que les ofrecía, como compensación, un crédito en el Banco Nación para comprar un pedazo de campo en otro lugar.

Algunos, los menos, lo aprovecharon y pudieron comprar. No había tanta oferta de tierras para relocalizarse. La mayoría fue a trabajar de peón o a fábricas, como Acindar o Somisa, que en la zona núcleo absorbieron mucha mano de obra proveniente de los sectores rurales chacareros, con una óptima capacitación laboral. En pago a esa traición es que la oligarquía lo hizo ministro a Di Rocco. Alejandro A. Lanusse era un general de cuna terrateniente. Aquella oligarquía pagaba mejor la traición que la de ahora.

al gobierno, Zorreguieta era el coordinador de la sección argentina de la Sociedad Civil del Mercosur, actuaba como delegado del ultra reaccionario Centro Azucarero Argentino (Familia Blaquier). Quien esto escribe, como representante de la FAA y en conjunto con la CTA, le pidió la renuncia al cargo porque no podía un colaborador de la dictadura representar al pueblo argentino. Por la misma razón, el gobierno de Holanda –hoy Países Bajos– le impidió participar de la boda de su hija Máxima con el príncipe Guillermo.

Surgen las ligas agrarias

Esta sumisión de la FAA a los intereses oligárquicos fue uno de los factores desencadenantes de que los pequeños productores del NEA se sintieran sin representación gremial y decidieran crear las Ligas Agrarias. Estas surgen del primer Cabildo Abierto del Agro Chaqueño organizado en Sáenz Peña, Chaco, el 14 de noviembre de 1970. El crecimiento de las Ligas como gremiales aglutinantes de las demandas chacareras fue exponencial. La experiencia chaqueña se trasladó a todo el NEA. Surgieron Ligas en Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Córdoba, en Misiones (donde tomaron el nombre de Movimiento Agrario Misionero-MAM) y en la provincia de Buenos Aires, que produjo el conocido Grito de Lincoln. Fue una auténtica agitación agraria que puso al tema en el centro de la escena política. El terrorismo de Estado las desbarató, dejando un tendal siniestro de muertos, torturados y desaparecidos. Su líder más conocido fue Osvaldo “Quique” Lovey (clandestino y exiliado en la dictadura, estuvo preso en democracia, durante el gobierno de Alfonsín).

Las demandas de la Ligas Agrarias tenían que ver esencialmente con el uso y tenencia de la tierra. También, con las reivindicaciones gremiales de los pequeños productores frente a los intermediarios y acaparadores de la producción, en la rama de los llamados cultivos industriales: algodón, té, tabaco, tung, yerba mate. Las Ligas nacieron como una forma de autonomizarse, gremial y políticamente, de la tutela de la FAA y del Movimiento Rural de la Acción Católica, que tenía mucha influencia en esa zona. Una de las principales demandas del movimiento liguista fue el acceso a la tierra ociosa, ya fuera fiscal o por el sistema de colonización, para que los productores y sus hijos pudieran tener su propia parcela. Esto dio origen a un amplio debate público y ayudó a generar iniciativas como la ya mencionada Ley Agraria, y la del impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra, muy apoyada por las Ligas.

Otro hecho político relevante de aquel tiempo, y que significó un cambio de rumbo en la entidad gremial agraria más numerosa por entonces, fue la actitud que tomó don Humberto Volando de sacar a la FAA de la Mesa de Enlace y sumarla a la Confederación General Económica (CGE), presidida en ese entonces por José Ber Gelbard. Estamos hablando de 1972. Como forma de bienvenida, la entidad empresaria organizó un seminario sobre uso y tenencia de la tierra en el edificio de la CGE. “El instituto de Investigaciones Económicas y Financieras de la CGE ha resuelto organizar este panel sobre la tenencia de la tierra en Argentina. [...] Quiero agradecer especialmente y con satisfacción la presencia de todos ustedes; especialmente a los dirigentes de FAA que agrupa aproximadamente 120 000 productores y que es una fuerza dentro del gremialismo agrario el haber conseguido realizar este acto en forma conjunta”. Estas palabras fueron pronunciadas por Israel Dujovne, presidente del Instituto de Investigaciones de la CGE, abuelo del sátrapa ministro de Economía de Macri, que nos trajo de vuelta el endeudamiento y el FMI. En fin.

El tema del uso y tenencia de la tierra subsume dos debates importantísimos, más para nuestros días, como son el de un Instituto de Colonización Agraria, que existía en Argentina y se llamaba Consejo Agrario Nacional, y el de la Unidad Económica. En esa jornada histórica totalmente ocultada (exprofeso), se discutió también el tema de la reforma agraria, cómo y qué hacer para subdividir los latifundios. Por eso se analizó la Ley 14 392 de Colonización agraria, y su relación con el Consejo Agrario Nacional, creado por Ley 12 636/1940 y disuelto por la dictadura en 1980. Un organismo similar de extraordinaria utilidad aún está activo en el Uruguay, con excelentes resultados. También analizó el concepto de Unidad Económica, que versa esencialmente sobre cómo medir la cantidad de tierra mínima, según el suelo y la zona, para que una familia tipo pueda vivir dignamente. Es una unidad de medida para clasificar qué es un minifundio y qué es un latifundio. En este trabajo se incluyen artículos sobre ambos temas.



Capítulo 2

Agricultura de tres pisos

Es muy importante que entendamos cómo funciona hoy la agricultura argentina, para lo cual hay que correr el cendal protector que se autotendieron sus beneficiarios, con el fin de protegerse de las miradas indiscretas, especialmente las fiscales, ambientales y las atinentes al precio de los alimentos y a la soberanía y seguridad alimentarias. Trataremos de describirla tal cual es, cosa que pocos hacen. Evitaremos la beatificación del modelo y su romantización edulcorada, como la presentan los suplementos agrarios de los diarios hegemónicos.

La de Argentina es una agricultura de tres pisos. El primero es el de los *dueños de la tierra*; el segundo, el de los *contratistas rurales*, es decir los dueños de las máquinas que trabajan la tierra por cuenta y orden de terceros; y el tercer piso es el de los *pools de siembra o mega-productores*: los grupos económicos que siembran miles de hectáreas sin tener una sola máquina, solo con dinero.

Este modelo agrícola se impuso en la Argentina (como ya vimos) en los 90. Para eso fue central la aparición de un nuevo paquete tecnológico: semillas transgénicas, glifosato, siembra directa. Esto significó dejar atrás 5000 años de historia del arado y cambiar radicalmente el paradigma productivo. Ese cambio se hizo “a lo bestia”, sin ningún control ni planificación estatal, sin medir ni atemperar consecuencias, todo a gusto y *piacere* del mercado y de las grandes compañías exportadoras de granos.

A modo de simple enunciación: Jorge Ingaramo, ex vicesecretario de Agricultura de Felipe Solá, anunció como un objetivo deseado del modelo de convertibilidad, que debían desaparecer 200 000 explotaciones agropecuarias. Le erró por poco: desaparecieron 103 000, se hipotecaron 12,5 millones de hectáreas –solo en el Banco Nación, que intentaron privatizar–, se pulverizaron 900 000 puestos de trabajo y pusieron a 600 pueblos del interior profundo al borde de la “fantasmización”. Todo en diez años. Una década le llevó al neoliberalismo sustituir el modelo de chacra mixta por el de sojización con rentismo rural. Es el mismo tiempo que nos va a llevar revertir este proceso (si tomamos la decisión de hacerlo) y producir con otro paradigma, que tenga a la soberanía y seguridad alimentarias como ejes centrales.

Estos cambios en el modelo productivo también exigieron cambios en la logística agraria. Así se privatizaron los puertos y el Paraná, se liquidó nuestra Flota Mercante y se desmantelaron y privatizaron 30 000 km de vías férreas, es decir casi toda la logística en tierra para acercar los granos a los puertos. Este proceso se completó con el dragado del Paraná, otorgado a Hidrovía S.A. Así, los grandes barcos se pueden “meter” hasta bien adentro del territorio por la vía fluvial, mucho más barata que el camión, y llegar directo al lugar de producción de los granos. De ese modo se logra abaratar el flete para todas las mercaderías provenientes de la zona Rosafé⁶ y ya no hay que llegar con el cereal a los puertos de Bahía Blanca o Quequén. Las pocas vías ferroviarias aún en pie fueron privatizadas, y están en manos de los mismos dueños de los puertos.

Se eliminaron todos los organismos reguladores: Junta Nacional de Granos, de Carnes, de Yerba Mate y se flexibilizaron los contratos de arrendamientos rurales. Se liquidó la producción que garantizaba la soberanía y seguridad alimentarias de la Nación y se dio paso a la Argentina que exporta forrajes para animales del sudeste asiático. El

⁶ Se llama zona Rosafé a la zona que circunvala Rosario, donde se produce y tritura grano a la vera del río Paraná.

precio de los alimentos y el lugar donde se producen dejó de ser lo central de la política agropecuaria, para centrarse en exportar *commodities*.

Las nuevas tecnologías incrementan los rindes y generan una plusvalía adicional que fue capturada en parte por el capital financiero, cuyo vehículo de incorporación a la actividad fueron los *pools* de siembra. Las consecuencias de este modelo depredador ya las hemos estado analizando: alta concentración de tierras y rentas, desaparición de los productores agropecuarios genuinos, fumigaciones indiscriminadas y pueblos rurales que languidecen. Porque la actividad agrícola dejó de ser parte del circuito comercial y laboral local, para deslocalizarse geográfica y económicamente. La sede corporativa de los grupos de siembra, por lo general, está en las ciudades y desde ahí se toman las decisiones. Es muy poco lo que estos grupos hacen en las pequeñas localidades: ni siquiera el cereal se acondiciona en el lugar, lo que genera más desocupación y desarraigo.

La silobolsa es otra revolución dentro de la revolución, que cambió radicalmente la forma de acopiar el cereal. Ya no hacen falta costosas estructuras fijas de hormigón y chapa, sino que con una simple bolsa de polietileno de baja densidad se obtienen resultados similares. Esta es una innovación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Estado, ciencia, y después dicen que no sirve), desarrollada por el ingeniero argentino Cristiano Casini.

La irrupción de la silobolsa facilitó la venta directa de granos, del productor al exportador, sin escala lugareña. Es decir, sin que antes pase por el acopio local para acondicionar la mercadería, labor que realizaban cerealistas y cooperativas, lo que generaba trabajo, arraigo y movimiento en las localidades. Esto afecta seriamente el ya de por sí escaso mercado laboral de los pueblos chicos.

La venta directa del productor al exportador genera una posición dominante de las grandes exportadoras (Cargill, Dreyfus, Bunge, entre otras) en las cadenas productivas, es un verdadero saqueo que debería regularse o prohibirse. Esta cuestión la veremos en detalle en un artículo incluido en este libro.

Vamos con tres datos centrales de la agricultura argentina, que resultan una foto ejemplificadora de la película del modelo: según datos de la Secretaría de Agricultura (hoy llamada de Bioeconomía), en el verano de 2024 se sembraron en nuestro país 37 millones de hectáreas, de las cuales el 70 % son alquiladas. La actividad la ejercen casi 80 000 productores agropecuarios. Con estos tres simples datos podemos analizar en forma más que certera el funcionamiento de la actividad: el primer piso son los dueños de esas 37 millones de hectáreas donde se siembra. Son los terratenientes, los dueños de la tierra cada vez más concentrada y en pocas manos que cobran por alquilar un canon variable según el suelo, la distancia del puerto y otras yerbas menores. El segundo piso son los contratistas rurales, quienes la trabajan efectivamente, poniendo máquinas y personal. Grandes y costosas maquinarias son operadas por este segmento. El tercer piso son los *pools* de siembra, megaprodutores que toman distintas formas jurídicas y visibilidad: Grobocopatel, MSU Agro, Lartirigoyen, Tomás Hermanos, hay diversas combinaciones.

La forma jurídica que adopta la concentración agropecuaria en la Argentina es diversa y con mil variantes. Puede ser fideicomiso, sociedad de hecho, anónima, de responsabilidad limitada. No está en discusión aquí lo jurídico sino la concentración en sí misma, sus efectos perjudiciales sobre la soberanía y seguridad alimentarias de la nación y sus daños al erario público.

Los “muchachos” son muy creativos en estas lides: hay que estar muy atentos y no perder de vista el fondo de la cuestión. Lo jurídico es importante pero no determinante. El envoltorio puede ser cualquiera, lo importante es qué lleva adentro. Una chacra mixta puede ser una SRL, una sociedad de hecho o una SA, y un *pool* puede ser también una SRL o una sociedad de hecho o un fideicomiso. Todo depende de cómo se ejercite la agricultura y el tamaño de la explotación.

Lo jurídico siempre lo determina el poder económico. Es fundamental señalarlo, porque hay toda una especialidad en discutir las

formas, como modo de no discutir el fondo. *Metier* en que el neoliberalismo tiene una gran capacidad para llevarte por cualquier camino, con tal de no centrarse en discutir lo que hay que discutir. Por eso es clave visualizar con claridad el latifundio, su papel en la concentración económica de la agricultura y ganadería argentinas, cómo se producen los alimentos, qué, cuánto y cómo se exporta... Lo jurídico, con su maraña de máscaras, está diseñado para encubrir el hecho económico; no lo modifica ni lo define.

Primer piso: la tierra

En este “piso” habita como amo y señor el latifundio, son los dueños de la tierra que es la plataforma sobre la que se plantan los cultivos, donde pastan las vacas, ovejas, cerdos y demás animales que se comercian. Marca las pautas gremiales del sector a través de sus organizaciones: la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, la Mesa de Enlace. Su sentido común político-cultural se expande sobre la sociedad a partir de su incidencia en los grupos hegemónicos de comunicación y los suplementos rurales de estos, que reproducen su mirada sin fisuras. Casi todos los dueños de los medios, como los Saguier, Mitre, Aranda y Sigman, son grandes latifundistas. Su mayor triunfo político es haber invisibilizado exitosamente su existencia. Amplios sectores de nuestra sociedad y dirigentes políticos niegan que exista el latifundio.

En este segmento del modelo se disputa palmo a palmo por la tierra. No solo por su propiedad, sino por quién la trabaja. El 70 % de la tierra no la trabajan sus dueños, se alquila. Más tierra acaparan los terratenientes, menos tienen los otros actores de la vida rural: chacareros, agricultores familiares, campesinos, pueblos originarios. Más tierra trabajan los *pools* y megaprodutores, menos trabajan los agricultores familiares.

“Comprende tierra, no se fabrica más”, decía Mark Twain. Tierra hay la que hay. Y hay que cuidarla, porque es un bien finito y debe alcanzar

para todos/as. Es la plataforma donde se asienta nuestro hábitat, donde se siembra y produce el 97 % de los alimentos que alimenta a los 47 millones de compatriotas, por donde corre y brota el agua que consumimos y el aire que respiramos. No es un tema inocuo, menor o accesorio quién es el dueño de la tierra. Es clave, vital. Es la llave de la vida. Eso es lo que se discute en este piso.

Por el uso y tenencia de la tierra confrontan aquí mundos agrarios disímiles y antagónicos, con la característica común de que estos diversos mundos productivos requieren la plataforma tierra para poder existir. La diversidad impone que las políticas públicas que demandan sean diametralmente distintas. La agricultura concentrada reclama cero Estado. Y la agricultura democrática necesita lo contrario: más Estado. Como es un bien inelástico, cuanta más tierra trabaja Juan Estanciero, menos tierra trabaja Juan Chacarero. No hay agricultura familiar ni democrática sin una alianza con el Estado. Su rol es clave para administrar esta tensión y garantizar que este bien esencial para todos sea administrado en función de la sociedad.

Este segmento es hoy dominado ampliamente por el latifundio rentístico, y ahí va una renta extraordinaria, producto del aumento ininterrumpido de los alquileres en las últimas décadas. Ahora muchos/as niegan que exista el latifundio en la Argentina. ¿Existe?

¿Qué es un latifundio? Todas las definiciones sobre el latifundio son tan escuetas como concretas y coinciden en que es: “Una gran extensión de tierras en una sola mano”. Sencillo, ¿no? Cualquiera sea su forma jurídica o productiva, para disfrazar la definición y ayudar a ocultar su existencia, le agrega algunos requisitos descriptivos, como que la extensión de tierra debe ser de “baja productividad” y que sus dueños deben “sobreexplotar a los campesinos” que laboran en el fundo.

Estos agregados a la definición no son inocentes y menos en nuestro país. Tienen por objetivo ocultar o negar la existencia del latifundio, ya que parten del supuesto de que, al no existir el campesinado como sujeto agrario dominante, y no existir baja productividad de la tierra

merced a la adopción del paquete tecnológico (glifosato, siembra directa), el latifundio no existe. Esta es la forma de evitar el núcleo central de la definición del latifundio, que es la cantidad de tierra. ¡Mirá vos qué vivos! En la Argentina hay mucha, pero mucha tierra, en poquísimas manos. Para saber cuándo un pedazo de tierra es un latifundio o un minifundio hay que guiarse por el concepto de *Unidad Económica*; esta es la vara de medida para referenciar lo mucho y lo poco, en cuanto al tamaño de las explotaciones rurales. Lo veremos más en detalle en este mismo trabajo en el apartado “Terratenientes y glifosato”.

¿El latifundio existe? Diversos dirigentes políticos y agrarios sostienen enfáticamente que el latifundio en la Argentina no existe: es una cosa del pasado y la herencia ha dado cuenta de él.

Se nutren de argumentos que proveen economistas y politólogos de derecha, quienes ignoran olímpicamente los resultados de los censos agropecuarios que la Argentina realiza en forma obligatoria. El último censo (2018) marca una brutal concentración de la propiedad de la tierra: según la Lic. Marisa Duarte, directora de la revista *Realidad Económica*, que analizó en detalle los censos de 1988, 2002 y 2018, en los últimos treinta años se perdieron más de 150 000 explotaciones pequeñas, todas menores de 200 hectáreas. En cambio, los predios mayores a 5000 hectáreas prácticamente no perdieron unidades. Esto significa un aumento del 42 % de la superficie promedio, entre 1988 y 2018. Pasamos de 469 hectáreas promedio, a 670. La Unidad Económica en la pampa húmeda es de alrededor de 75 hectáreas. Una verdadera contrarreforma agraria.

Los números que provee el censo deberían ser una biblia inapealable sobre el tema, mas no lo son. En la Argentina discutir y debatir con datos certeros es una verdadera anomalía. Se dice cualquier cosa y después la propalan como verdad revelada los medios hegemónicos, cuyos dueños son también terratenientes.

Compra-venta de latifundios. La información sobre compra y venta de campos rara vez es noticia. Y si lo es, se presenta como una

noticia empresaria, auspiciosa, que marca el interés en el país. Nunca las noticias de este segmento ponen énfasis en la cantidad de hectáreas que se venden. ¿Por qué? Porque, con un poco de razonamiento, pone en tela de juicio el relato negacionista del latifundio. Visibiliza su existencia.

Tomemos como ejemplo la venta de un latifundio, que nadie denomina como tal: “La familia [Bartolomé] dueña del mayor semillero de soja [don Mario] [...] pagó una cifra millonaria por la compra de 60 000 hectáreas”. La transacción giró alrededor de los 200 millones de dólares, y la tierra se la compró a la australiana Kahlbetzer. Agregó: no es la única transacción en tierras de estas dimensiones en hectáreas, que se hace en el país, Adecoagro le compró 74 000 hectáreas a Pecom Agropecuaria (Pérez Companc). ¿Y esto qué vendría a ser? ¿Un minifundio?

Hasta aquí la noticia pura, impactante, al menos para mí. No solo por la plata invertida, sino por el número de hectáreas de un bien que no se puede fabricar. Esto nos interpela desde distintos ángulos. La primera pregunta es: ¿puede una persona por el solo hecho de tener dinero quedarse con una porción semejante de un bien de uso común como es la tierra, de la cual dependemos todos/as para comer, respirar y beber? ¿Apunta al bien común? Para mí la respuesta es más que obvia: NO.

Que semejante cantidad de tierras pase de manos australianas a argentinas, ¿trae algún beneficio fiscal o social adicional para el país? La verdad, ninguno.

El latifundio es malo *per se*, no importa la nacionalidad del dueño. A la tierra no se la pueden llevar/arrancar como a una industria. Está en la Argentina y de acá no se mueve, porque no camina ni vuela, ¿no? Además no paga impuestos específicos o diferenciados por nacionalidad o tamaño. Solo el inmobiliario rural, que es mínimo. Nuestra oligarquía terrateniente es tan cipaya, que da lo mismo la nacionalidad del propietario.

Ahora bien, si con 75 hectáreas vive una familia, 60 000 hectáreas, ¿es un latifundio o no?

Otro argumento muy exhibido por la derecha es que la herencia

divide el latifundio. Esto es más falso que un dólar amarillo. Se desmiente con solo ver las cifras censales del crecimiento de la media en hectáreas de las explotaciones agropecuarias: pasó de 520 en 2002, a 627,5 hoy. Altísima. Un argumento tan banal no merece mayores demostraciones, excepto para reinstalar el impuesto a la herencia que sacó Martínez de Hoz.

Es más que obvio y visible que el latifundio existe: con solo recorrer la Argentina tierra adentro y preguntar ¿de quién es esta tierra?, nos vamos a encontrar con un reducido número de propietarios, dueños de miles de hectáreas. Después, solo se trata de razonar un poquito con cabeza propia, y no con la prestada por los publicitarios del neoliberalismo, que además son terratenientes.

El rentismo rural. Esa es otra característica dominante de este “piso”. Los dueños de la tierra no la trabajan ellos mismos: son mayoritariamente rentistas. Según datos oficiales de la ex Secretaría de Agricultura (hoy de Bioeconomía), en la Argentina el 69 % de la tierra productiva se alquila. Antes había un chacarero que sembraba, cuidaba los animales, proveía al consumo de cercanía. Bueno, ese tipo de explotación es ya historia: ha desaparecido en manos del rentismo rural, que vino a reemplazar a la chacra mixta. Es un proceso silencioso, sistemático y también invisibilizado. Se cierra la tranquera, se abandonan los corrales, el molino y los alambrados, se pudre el brete y se alquila a quintales fijos. Y la soja lo invade todo.

La Argentina no diferencia entre rentistas y productores genuinos, los trata a todos por igual. Por eso cada vez que se toma una medida fiscal agropecuaria, el relato político dominante pone por delante a esos ya inexistentes protagonistas agrarios, como escudos para argumentar que se está afectando a familias laboriosas. Algunos quedan, pero son una ínfima minoría. En realidad los que hacen agricultura en la Argentina son una gran legión de rentistas y un puñado de *pools* de siembra y megaprodutores. Es el primero de los tres pisos que la componen.

Un poco de historia. La agricultura de tres pisos, y su hijo dilecto el rentismo rural, no son nuevos en la geografía productiva agraria argentina, ni un invento nacido en los 90. Están enraizados en nuestro desarrollo capitalista desde el fondo mismo de la incompleta colonización agraria. Este paradigma hizo eclosión en lo que se conoce como El Grito de Alcorta, que fue básicamente cuando el “piso” de los inquilinos rurales se levantó contra el alto precio de los alquileres de la tierra. El modelo agroexportador argentino estaba basado en la fuerza laboral que aportaban los inmigrantes. La política migratoria consistía en atraerlos para que trabajaran la tierra, pero no se la entregaban en propiedad, ni propendían a que los chacareros arrendatarios se hicieran dueños de ella, como sí sucedió en los Estados Unidos. Esto recién va a pasar en el proceso que tuvo a Juan Perón como protagonista excluyente, que va desde 1943 a 1955, lapso en el cual más de 100 000 chacareros se hicieron propietarios de la tierra. Solo el Banco Nación otorgó más de 50 000 créditos para la compra de campos; hasta entonces la Argentina era un país de arrendatarios rurales. Nadie había hecho tanto antes y nadie hizo tanto después.

Argentina no fue una tierra de oportunidades fáciles ni extendidas para quienes vinieron a hacer “la América”, como lo presenta la historiografía liberal. La mayoría se volvió tal como vino: “Fueron necesarios 58 años, desde 1856 a 1914 y un ingreso de 3 millones de inmigrantes para poder exhibir ante las naciones del mundo, poco después de la conmemoración del centenario, la existencia de 76 212 chacras sobre un territorio de 160 millones de hectáreas cultivables. También sabemos que solo 24 658 propietarios las trabajan personalmente”.⁷

Los números son elocuentes y matan el relato edulcorado escolar de que, al que se bajó de los barcos, acá le fue bien.

⁷ Gastón Gori: *El pan nuestro*, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, 2002, p. 113.

El Grito de Alcorta ejemplifica con nitidez esas condiciones miserables que la oligarquía y los subarrendadores les imponían a sus inquilinos rurales. A tal punto, que había miles de inmigrantes que prefirieron volverse a Europa, aun sabiendo que estaba en guerra, antes que seguir sometidos al yugo terrateniente. El levantamiento agrario lo refleja con claridad: “Se ha producido en el sud de Santa Fe, entre los colonos, un movimiento huelguista, que por el hecho mismo de su notoria justicia es susceptible de perjudicar el crédito de Argentina como país de inmigración. Los huelguistas son los que se encuentran bajo el sistema de colonización feudal, a la rusa, que realizan los propietarios de grandes extensiones dentro del cual no cabe el hermoso concepto americano de colono propietarios, algo más que puro brazo”.⁸

La oligarquía necesitaba como el pan los brazos de la inmigración para poner en valor sus campos aún incultos; tanto para el laboreo como para el tendido del ferrocarril. Por eso, les preocupaba que el mundo conociera las reales condiciones de vida a las que eran sometidos los inmigrantes chacareros. Temían que la Argentina no fuera elegida como destino para emigrar. Pensar que hoy nos quieren reescribir la historia, contándonos que éramos el sexto país más poderoso del planeta. Un disparate tan desopilante y falaz como que la tierra es plana.

¿Y cuál era el sistema de colonización feudal a la rusa, al que hace referencia la revista? No era otro que el de tres pisos: terrateniente, subarrendador y colono arrendatario. El subarriendo fue el gambito que encontró nuestra oligarquía terrateniente para incorporar sus campos a la producción, conservando la propiedad de la tierra; y, obviamente, sin trabajar ellos. Vivían de rentas y mandaban a otros a agarrar la pala. *El arriendo del arriendo* es un invento típicamente argentino. Es la piedra angular del retraso del desarrollo industrial argentino y base del poder terrateniente que se proyecta hasta nuestros días.

8 Revista *Fray Mocho*, julio de 1912, archivo hemeroteca Congreso de la Nación.

Así funcionaba el sistema: el terrateniente alquilaba un latifundio –en *block*– a un subarrendador, y este se ocupaba de conseguir los colonos que lo laborarían, pagarían el canon, etc. Ese era su rol. Por esa tarea parasitaria de intermediación, se quedaba con un diferencial del alquiler, entre lo que le pagaba al terrateniente y lo que le cobraba al colono. Además, la mayoría de las veces brindaba servicios a los propios colonos. Gran parte de los subarrendadores eran cerealistas, entonces les compraban el cereal, les vendían las bolsas de yute y les hacían los fletes con sus propios carros. Otros tenían almacén de ramos generales y les vendían las vituallas. Hay diversas combinaciones, pero todo se hacía sobre “el lomo” de los chacareros arrendatarios, a los que explotaban.

La figura del subarrendador es clave para entender el proceso argentino de colonización agraria y el retraso en nuestra maduración como país industrial. La verdad es que se le ha escabullido a la mayoría de los historiadores, que los invisibiliza, o los confunde con los terratenientes.⁹

Enrique Dickman¹⁰ hace una comparación más que pedagógica, que aporta mucha luz a este debate de por qué la Argentina, habiendo partido en la misma línea de desarrollo que Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda nunca logró alcanzarlos. “Compárense las 66 000 explotaciones agrícolas argentinas del año 1910, cultivadas por arrendatarios en gran parte, con las 6 millones de chacras de los EEUU, de propiedad de los colonos la mayor parte de ellas”.¹¹

9 Quien quiera profundizar en el tema puede consultar Pedro Peretti: *Olvido y falsificación de la historia del Grito de Alcorta*, Rosario, Homo Sapiens, 2020.

10 Enrique Dickmann (1874-1955). Médico, escritor, diputado socialista y chacarero. Nació en Letonia. Fue uno de los fundadores del Partido Socialista en 1896, junto a Juan B. Justo. En 1953 funda el Partido Socialista de la Revolución Nacional, con su hijo Emilio, Sergio Bagú y José Oriente Cavalieri (padre del vitalicio secretario del Sindicato de Comercio), entre otros. Este fue un Partido Socialista aliado al peronismo, que rompió con el gorilismo extremo del viejo tronco socialista, del cual fue por eso expulsado.

11 Enrique Dickmann: *Población e inmigración*, Buenos Aires, Losada, 1946, p. 50.

A partir de distribuir la tierra pública en muchas manos, se generó en Estados Unidos un mercado interno de gran tamaño que los “obligó” a industrializarse, a diferencia de Argentina que la privatizó, concentrando en vez de repartir con equidad.

Esa es “la madre del borrego”: en el uso y tenencia de la tierra está la verdadera explicación del retraso industrial de nuestro país. Ellos crearon millones de *farmers*, que generaban trabajo y demanda, en cambio nosotros generamos una minúscula oligarquía parasitaria, holgazana y antinacional que se dedicaba a tirar manteca al techo en París. Esa es la Argentina potencia de la que nos habla el actual presidente argentino. Un dislate difícil de empardar.

Segundo piso: los contratistas rurales

Este es el único piso que trabaja la tierra, es el que pone los pies en el suelo de verdad. Según la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA),¹² la organización gremial que los nuclea, son alrededor de 12 000 empresas prestadoras de servicios en todo el país, con diversas formas jurídicas. Son los que siembran, cosechan y fumigan el campo que alquila al *pool* el terrateniente o el pequeño propietario. En los contratistas domina una diversidad de situaciones: hay quienes se dedican exclusivamente a brindar este tipo de servicios, hay productores que lo hacen a tiempo completo o parcial; hay quienes también alquilan campo y, de paso, brindan este servicio. Las combinaciones son múltiples. Pero lo central a tener en cuenta es que es un segmento imprescindible, sin el cual hoy no hay agricultura de

12 La FACMA es la gremial que representa al sector de prestadores de servicios rurales en todos los ámbitos. Fue fundada en Casilda (Santa Fe) en 1986, donde tiene su sede. Es una cámara de primer grado, ya que reúne a diferentes asociaciones y cámaras de contratistas de maquinarias agrícolas que existen en el país.

escala en la Argentina. Son los responsables directos de labrar el 70 % de la tierra que se siembra. Cobran por hectárea realizada de trabajo: tanto por sembrar, tanto por trillar. Los contratistas son la variable de ajuste en la agricultura de triple piso. Son el jamón del sándwich entre el dueño de la tierra y el *pool* arrendador. El montoncito que les toca es el más flexible de los tres, y es la primera variable a tocar, a la hora de discutir los costos de la actividad. Los *pools* los hacen competir entre ellos “a cara de perro”, dado el sinnúmero de variantes que existen a la hora de fijar condiciones de trabajo y precio.

Tienen un bajo nivel de sindicalización, a pesar de contar con la FACMA. Son los que arriesgan e invierten todo el tiempo, están siempre endeudados pagando créditos de maquinarias y los únicos que traigan polvo en esta agricultura sin agricultores.

Tercer piso: *pools* y megaprodutores

En este piso está la novedad agrícola que nos trajo la década del 90: una agricultura prescindiendo de la chacra mixta y del agricultor.

Esta forma de agricultura se explica esencialmente, por la incorporación del capital financiero al sector, con el objetivo de capturar una parte de la plusvalía que generó la revolución científico-técnica, con los altos rindes en la agricultura. Los *pools* de siembra son grupos económicos que, sin tener ni un centímetro de tierra, sin una máquina, sin apretar un tornillo, solo con dinero alquilan campos y los hacen sembrar por los contratistas rurales. Invierten en insumos, logística y trabajo, coordinan la operación y administran. Eso les permite quedarse con una parte sustancial de la renta agraria. Es el fin de la agricultura de rostro humano al servicio de la soberanía y seguridad alimentarias. El que produce ya no es el chacarero, ni es parte de la comarca. Esta forma conlleva necesariamente la deslocalización de la unidad productiva y la despersonalización total de la producción agropecuaria, lo cual

impacta fuertemente en el mercado de trabajo del interior rural, así como en el giro de los pequeños comercios que viven del campo. En los pueblos no dejan ni rastro. Es una agricultura tipo minera: extraen y se llevan hasta los suspiros. Solo quedan las lágrimas de los lugareños que ven cómo se resiente su calidad de vida en varios sentidos, no solo el económico.

Todo se organiza alrededor de los mercados, el volumen y la exportación, con los negocios como único y excluyente eje ordenador. Se planifica a partir de allí y no desde las necesidades alimentarias del país. Esta modalidad prescinde del chacarero tradicional y elimina cualquier concepto vinculado con el bien común y la soberanía alimentaria.

¿Cuándo nace? Como mencionamos anteriormente, este modelo agrícola tiene su partida de nacimiento con la introducción de la semilla transgénica, la siembra directa y el glifosato. El combo trajo un incremento exponencial en el rinde de los cultivos. En poco más de una década, se pasó de 25 quintales de soja por hectárea –que en los 80 era el techo y para festejar– a los más de 40 quintales actuales, que por ahora son el piso. Eso, siempre que el clima acompañe. Esta productividad se reflejó en el precio de los alquileres, que pasaron de los 10 o 12 quintales en los años 80, a los actuales 17 o 20 quintales. La soja se transformó en la moneda de transacción comercial que se usa en “el campo”.

Gracias a ese nuevo modelo, sin inmovilizar capital fijo en tierra ni en “fierros”, alquilando miles y miles de hectáreas, aparecieron estos monstruos productivos que desplazaron a los genuinos y auténticos chacareros. Lo que antes generaba arraigo y trabajo ocupando el territorio, hoy es un desierto verde de soja, sin ningún vestigio humano ni animal. Es el des-progreso. Son los dueños del 70 % de la soja que se produce hoy en la Argentina.

Cómo funciona un *pool*. La empresa ADBlick granos es un *pool* de tamaño mediano, con 14 campañas de experiencia agrícola. Opera unas 45 000 hectáreas, tiene un capital de 60 millones de dólares y, en plena sequía de 2023, planeó alquilar 5000 más. Su CEO es José

Demicheli, tan involucrado en la política agraria de la Libertad Avanza que fue el presentador de Fernando Vilella, el ahora ex secretario de Bioeconomía de la Nación.

La planificación agronómica de este *pool* es similar a la de todos: diversificar el riesgo climático sembrando en distintas zonas del país e integración vertical. Eso significa: venta de insumos, acopio, transporte y comercialización propios, y deslocalización del mando empresario (estos son los que fumigan a mansalva donde no viven). En este caso está en San Isidro (provincia de Buenos Aires).

ADBlick maneja más de 100 campos de distintos dueños, divididos en 300 lotes, y recibe dinero de más de 800 inversores. Ha creado un Fondo Común de Inversión Cerrado, ADBlick granos; y el Fondo Común de Inversión Cerrado, ADBlick Granos Plus, que canaliza inversiones del mercado de capitales buscando y ofreciendo oportunidades de negocios.

Otros *pools*. La empresa de siembra MSU Energy, comandada por Manuel Santos de Uribebarrea, es una de las más grandes de la Argentina. Siembra unas 165 000 hectáreas y, según el portal *Bichos de Campo* del 16 de septiembre de 2022, tuvo ganancias extraordinarias de 4400 millones libres de impuestos, con un acopio de 824 000 toneladas de diferentes granos. MSU aplica agricultura digital o de datos y eso ha mejorado sus ingresos, gracias a los satélites que el Estado argentino puso en órbita: los Socom 1b y SAC-C que proveen información al agro.

Pool Vireyes. Vireyes es un *pool* que acaba de ganar el premio a la Excelencia Agropecuaria Galicia, en la categoría “mejor agricultura extensiva”. Son ese tipo de premios que se dan entre ellos, al solo efecto de generar un sentido común positivo en la sociedad acerca de este tipo de agricultura que de positivo no tiene nada. Este *pool* es uno de los primeros en su tipo, fue fundado en 1995, es decir, viene de la época de Menem, Cavallo y Solá, cuando el menemismo reclamaba la desaparición de 200 000 productores y su reemplazo por este tipo de producción en escala. El 100 % de las tierras que laboran no provienen

del desmote, según dice su dueño Carlos Reyes Terrabusi. El 70 % de los campos está en la provincia de Buenos Aires. Y el 30 %, en el sur de Córdoba. ¿Esto le otorga un certificado de benignidad? Para nada. Obvio que siempre es mejor que no se desmote. Pero para nada los hace aceptables, porque desplaza productores, destruye chacras mixtas, sustituye pasturas que también son necesarias para el medioambiente, deslocaliza la producción y no genera más mano de obra, sino menos.

Los *pools* y la productividad. Que los *pools* de siembra son más productivos o trabajan y cuidan mejor la tierra que el chacarero tradicional es una de las mentiras más grandes que impuso el relato sojero concentrado. La alta productividad de la agricultura argentina está dada por el desarrollo técnico-científico alcanzado, producto de la combinación de diversos factores que hemos venido analizando, y no por la presencia de estos grupos financieros que la penetraron, vaciándola de todo contenido. Cualquiera sea la forma jurídica que adquiera el modo de ejercer la agricultura, estos grupos no son responsables de ningún desarrollo productivo exitoso en la historia agraria de la pampa húmeda. Sí tuvieron la virtud, y hay que reconocerla, de captar el clima de negocios que ofrecía la época, y actuaron sin importarles lo que destruían. Supieron ubicarse como intermediarios, entre el suelo y las grandes empresas exportadoras, reemplazando al productor tradicional, como proveedores ocasionales de materias primas exportables. Si el negocio no cierra más, desarman el *pool* en un minuto y se mudan a otras colocaciones financieras. Como no tienen ni una máquina, ni tierra, ni estructuras fijas, si te he visto, no me acuerdo. Son meros inquilinos de un tiempo histórico, sin arraigo ni tradición productiva, que han hecho un daño muy difícil de reparar a todo el interior profundo. No solo desde lo productivo, sino también desde lo social, lo cultural, lo económico y lo ambiental.

Nadie ha podido demostrar que ellos tengan u obtengan una productividad mayor por hectárea que el tradicional chacarero de la

pampa húmeda. Pensar que desde una oficina en Buenos Aires, se pueden cuidar y atender mejor 100 000 o 200 000 hectáreas –que ni saben si están sembradas o no, con todos los procesos productivos tercerizados– que 100 o 200 hectáreas con el dueño y el ingeniero de la cooperativa allí sobre el terreno es cuanto menos un ataque al sentido común. Pura retórica: la gran habilidad del sistema financiero en general y de los *pools* en particular es convencer a buena parte de la clase política, sin distinción de oficialistas u opositores, que sin los *pools* no hay productividad en el campo. En un libro publicado en 2013 que, a pesar de la inflación, tiene toda la actualidad en cuanto a cómo rinde uno u otro esquema productivo, hemos analizado los números de la chacra mixta vs. los *pools*. Y son concluyentes a favor de la chacra mixta.¹³ Solo hay que actualizar los precios por inflación. Aunque muchos están en soja, que es la moneda estable con que se maneja el mundo agrario.

Cuando uno escucha a los voceros de esta agricultura buitre hablar del trabajo en red, de sustentabilidad ambiental, social, productiva, como si fueran una especie de *kibutz* o cooperativa ideal, abierta, no puede menos que sorprenderse del grado de cinismo e impunidad discursiva que tienen. Se autoperciben benefactores de la humanidad, como si no fueran parte de un mundo dominado por el capitalismo salvaje, donde las peores prácticas productivas y de destrucción del medioambiente son la condición indispensable para que el negocio funcione.

La chacra mixta es imbatible como unidad productiva, y el *pool* es solo una ecuación financiera que nada tiene que ver con lo productivo o con la seguridad alimentaria. Es su opuesto, expresa la inseguridad alimentaria.

13 Pedro Peretti: *Chacareros, soja y gobernabilidad. Del Grito de Alcorta a la resolución 125*, Buenos Aires, Ciccus, 2013.

¿Qué es un productor agropecuario?

¿Los *pools* de siembra son productores agropecuarios? ¿Debe tratarse los como tales? Una empresa que no tiene un metro de tierra, ni un mísero tractor, ni aprieta un tornillo, ¿qué es? Para mí no son productores ni agrarios, son meros auxiliares productivos de las grandes corporaciones exportadoras, que no reportan ningún beneficio al país.

En este particular tiempo histórico de la Argentina y el mundo, en el que los alimentos son parte esencial del debate geopolítico, no es un tema menor identificar qué tipo de agricultura quiere y necesita nuestro país y quién es el que la ejecuta no es un tema menor. Definir qué es un productor agropecuario es un debate central para orientar una política pública agraria nacional y popular.

En nuestro país llamamos productor a todo aquel que tiene un pedazo de tierra, cualquiera sea su relación con la actividad o forma en que esté vinculada con ella. Se llama productor al rentista y al que es un chacarero activo. Si alquila la tierra y se la pasa en el bar del pueblo, lo categorizamos productor; si es arrendatario y sufre día y noche con el clima, lo calificamos de productor. Al *pool* también lo calificamos de productor. ¡Y al dueño de un latifundio, que a la vez es propietario de un banco o de una automotriz, ídem! Pero una cosa es plantar soja y otra muy distinta ser chacarero, no es lo mismo ser un hombre “de” campo que “con” campo. Son dos universos totalmente distintos cuyo único punto de contacto es que ambos producen lo mismo. Pero su vinculación con la tierra, el lugar donde residen, el uso de lo público para su vida familiar, cómo se divierten o qué consumen los hace tan diferentes como el dueño de una pyme del conurbano con Paolo Rocca, el dueño de Techint. A esas abismales diferencias la política argentina ni las registra, le da lo mismo. Y digo la política argentina en plural, porque no diferenciar es un mal que aqueja también al campo nacional y popular.

Salvo honrosas excepciones, la política agraria que ejecuta el Estado argentino en sus tres niveles de gobierno no diferencia entre un

contribuyente que tenga 100 000 hectáreas y otro que tenga 10. Cobra la misma tasa por hectárea, la misma retención, o el mismo valor del inmobiliario, cualquiera sea su cantidad o relación con la tierra. NO interesa que se esté en el sofá mirando tele o de *shopping*, o arriba del tractor sudando la gota gorda, o en el microcentro porteño operando un banco: quien tiene un pedazo de tierra “es” productor y el Estado argentino los trata a todos por igual.

Un banquero, cuyo campo representa apenas el 5 % de sus ingresos fiscales declarados: ¿es un productor agropecuario? ¿Está bien eso? ¡No! Está muy mal. La Argentina debe discutir qué es un productor agropecuario y cuál es el sujeto agrario que quiere priorizar para garantizar la soberanía y seguridad alimentarias de la Nación. Porque la agricultura se puede hacer de dos maneras: con o sin productores. Que haya productores, HOY, es una decisión política de la sociedad, porque desde lo productivo está visto que se puede prescindir de ellos. Veamos qué pasa “afuera”.

Europa y Estados Unidos. Durante el año 2013 la Unión Europea debía renovar su Política Agraria Común (PAC). Se discutieron no solo los montos a repartir, sino esencialmente quiénes serían los beneficiarios. Cada país miembro siguió su propio derrotero.

En España, el debate fue intenso para determinar qué era un productor agropecuario. Resultaba una cuestión muy importante tener clara esta definición, para filtrar quién iba a recibir esos apetecibles subsidios y asegurar una correcta distribución de los recursos estatales. Concluyeron que productor agropecuario es quien tiene el 75 % de sus ingresos declarados al fisco provenientes del campo. Te puede gustar más o menos, pero es una definición concreta. Por ejemplo: si sos médico y heredaste o compraste un pedazo de tierra, pero tus ingresos mayoritarios provienen de tu profesión, para el fisco español no sos productor, sos médico. Por más que tengas tierras, no encuadrás en la definición y no podrás acceder a los subsidios de la PAC.

Dicha definición es más que pertinente ya que permite distribuir

los recursos públicos con mayor dosis de justicia y/o priorizando algún interés nacional, determinado previamente como estratégico. Por ejemplo: el arraigo, la elección de un determinado cultivo o propiciar alguna forma de producir. Esta precisión pone justicia y claridad, y abre la ventana (de par en par) a la diferenciación de las políticas públicas, es decir: a la segmentación, una discusión vedada en la Argentina. Una vez enmarcado quiénes son los productores agropecuarios que pueden acceder a los subsidios, estos se pueden asignar con mayor racionalidad. De ese modo no se subsidia a todos por igual. Si sos un pequeño productor es una cosa; si sos un gran productor, es otra. Si estás en zonas inhóspitas, en la alta montaña, percibirás el subsidio completo; si estás en la media montaña, el porcentaje será menor. Y, si estás en el poblado y arrendás tu tierra, no recibís nada, porque no sos productor: sos rentista. Ese es el criterio, en líneas generales y en España.

Los subsidios en Estados Unidos también tienen regulaciones similares. La *Farm Bill* es la ley que contiene la política agraria de los yanquis y se discute desde 1930 cada cinco años en el Congreso. Otorga miles de millones de dólares en subsidios a los productores. Estos no se reparten al voleo o a todos por igual. Si sos productor genuino, hasta un tope, recibís el monto pleno; si no lo sos, cobráis menos. El criterio utilizado en este caso para diferenciar a los productores es por volumen de facturación, pero opera en forma similar al de España: “El plan de administración terminaría con los subsidios a cosechas, a productores con más de 250 000 dólares de ingresos ajustados (AGI, por sus siglas en inglés) que no estén relacionados con el agro, o más de 500 000 dólares de AGI agrícola. Los límites en la actualidad están en 500 000 y 750 000 dólares respectivamente, de los 2 200 000 establecimientos, el USDA estima que 120 000 tienen ventas por más de 500 000 dólares, o sea que se quedan afuera del subsidio”.¹⁴

14 Diario *La Nación* (03.02.2010).

Cuando Donald Trump era presidente anunció un paquete de ayuda adicional de 16 000 millones de dólares a los agricultores americanos. ¿Los repartió al estilo argentino? Es decir: ¿proponía que si tenés campo y sembrás te anotas y lo recibís?, ¿si sos banquero o campesino da igual? ¡NO! Los distribuyó con criterio de segmentación: “Los productores agrícolas y ganaderos serán elegibles para acceder al monto de hasta 125 000 US por productor con un límite general de 250 000 US por persona y por entidad. Dijo el USDA (Secretaría de Agricultura, según sus siglas en inglés) *las únicas personas no elegibles serán aquellos con más de 900 000 US de ingresos de sus actividades fuera de la agricultura*”.¹⁵

El mundo de libertades absolutas donde todos los productores son iguales independientemente de su tamaño y ocupación, sin Estado, con industrialización silvestre y con cero regulaciones no existe más que en la cabeza de los liberales argentinos.

Mencioné la *Farm Bill* o ley agrícola de los Estados Unidos (cada 5 años) y a la PAC de Europa (cada 4 años) que discuten la política agraria en sus respectivos parlamentos. Se discute, ¿se entiende?, ¿se discute! Aquí hace décadas que no se debate la política agraria.

La actividad –además– debe medirse por períodos de cuatro o cinco años, que es lo que dura un ciclo agrícola. No como acá, que sacan una foto de un instante y con eso te argumentan o pelean cualquier cosa, sin tener en cuenta cómo viene la historia productiva. Esto pasó por ejemplo con el gobierno de 2019 a 2023: por un par de meses de mala performance de precios, la Mesa de Enlace se “olvidó” todo lo que ganó en los años anteriores y convocó a paros y movilizaciones. Hay que discutir honestamente, con números y datos reales, puestos en contexto y encima de la mesa, no al tanteo ni por información provista por fundaciones y asociaciones interesadas, con negocios en ese sector.

15 Emiliano Huergo: “Informe bioeconomía”, Canal *Agrositio* (23.04.2020). El destacado es nuestro.

El Estado debe construir su propia base de datos “para no ir al almacén con el libro escrito por el almacenero”.

¿Son imprescindibles los productores agropecuarios? Desde lo estrictamente productivo, son totalmente prescindibles. Los productores genuinos SÍ son imprescindibles desde el punto de vista económico, social, cultural, agroecológico, ambiental, de la seguridad nacional, de la soberanía alimentaria y de la ocupación geopolítica del territorio. Y lo son porque dan vida al interior profundo y hacen girar la rueda virtuosa de la economía, generando arraigo y soberanía. Ahora, lo cierto es que la Argentina entera puede sembrarse y cosecharse sin un solo chacarero. Estamos a un 30 % de que esto se haga realidad, acercándonos aceleradamente a quedarnos sin productores genuinos: ya el 70 % de la tierra se trabaja bajo el sistema de arrendamientos rurales.

El Tejar fue un *pool* de siembra emblemático en nuestro país. Nacido en Saladillo, su fundador fue Oscar Alvarado (1960-2010), pionero de este tipo de engendros agrícolas. Hoy este *pool* está desactivado, pero en su momento de esplendor llegó a trabajar más de 900 000 hectáreas en todo el Mercosur y en Bolivia. En nuestro país sembraba alrededor de 300 000 hectáreas. En su última campaña agrícola, Argentina sembró aproximadamente 36 millones de hectáreas de sus cinco principales cultivos. Eso quiere decir que 36 empresas como el Tejar pueden plantar toda la Argentina.

Aceitera General Deheza (AGD), la empresa de Roberto Daniel Urquía, siembra unas 200 000 hectáreas; MSU de Manuel Santos de Uribe Larrea Balcarce, unas 140 000; Adecoagro, de Mariano Bosch, unas 210 000 hectáreas, por nombrar algunas de las varias que están arriba de las 100 000 hectáreas de laboreo. Esto quiere decir que operativamente 240 empresas, más o menos, están en condiciones de sembrar toda la Argentina, sin un solo chacarero.

Que existan o sobrevivan los chacareros que quedan es una decisión política de la sociedad argentina. No hay agricultura familiar chacarera sin alianza con el Estado y sin políticas públicas diferenciadas.

Este debe ser el garante de su existencia. Ahora, es la sociedad la que debe pujar y decidir quién quiere que produzca los alimentos: si un puñado de megaempresas integradas verticalmente o miles de chacareros, campesinos y agricultores familiares. Esa es la madre de todas las batallas. Esa es una decisión del conjunto de la sociedad, no solo del sector agrario. Por eso hay que urbanizar el debate rural.

Urbanizar el debate rural. ¿Por qué hay que urbanizar el debate rural en nuestro país? Muy sencillo, porque el 92 % de la población argentina vive en ciudades, es decir, una mayor concentración urbana que España, con el 80,5 %, Francia con el 79,5 %, o Alemania, con el 77,5 %.

De la tierra surge el 97 % de los alimentos que consumimos, el aire que respiramos. Y el agua que usamos los 47 millones de argentinos. El medioambiente, el precio de los alimentos –insumo clave en el poder adquisitivo del salario– las migraciones rurales descontroladas son motivos de sobra para que lo urbano deba ocuparse de lo rural. En lo agrario estamos todos/as involucrados. Nos guste o no, dependemos de la tierra, no solo porque desde ahí se sirve nuestra mesa, sino porque esa es también la forma de hacernos de divisas fuertes para aceitar la economía. Pero vivimos en ciudades de espaldas al campo. No debatimos qué hacer con el “campo”, ni vinculamos a la tierra –es decir, al campo– con el precio de los alimentos... Increíble, ¿no?

Urbanizar el debate rural significa que quienes consumen los alimentos opinen sobre quiénes quieren que lo produzcan, cómo y dónde.

Capítulo 3

Terratenientes y glifosato

Vamos a analizar cómo se conectan dos astillas del modelo sojero: terratenientes y glifosato. A simple vista (¡cuidado con la simple vista al mirar lo agrario!) no tendrían mucho que ver, pero lo tienen. La reestructuración productiva de los latifundios ganaderos en la pampa húmeda y la deforestación de nuestros bosques naturales en el NEA-NOA significó incorporar a la agricultura cerca de 17 millones de hectáreas. Donde había pastizales naturales o implantados se sacaron las vacas y se sembró; donde había bosques naturales, se sacaron los árboles y se implantó soja o vacas. Las vacas fueron trasladadas a los humedales o a las zonas deforestadas. Ahí comparten con la soja el uso del suelo. Todo eso se pudo hacer gracias al combo glifosato, siembra directa, semillas transgénicas, que permite sembrar donde no era posible hacerlo con el arado.

Dejar el arado y pasar a la siembra directa significó una verdadera revolución productiva, que permitió expandir el área de siembra. Esto generó tres cuestiones nuevas, entre otras:

- 1) Aumentó la productividad de todos los latifundios de la pampa húmeda, que era muy baja.
- 2) En las zonas deforestadas surgieron nuevos e inmensos latifundios sobre esas tierras vírgenes, que eran propiedad de las provincias.

- 3) Todas esas tierras estaban (casi) limpias de agrotóxicos y a partir de su incorporación al proceso de sojización, fueron rociadas con millones de litros –adicionales– de venenos, junto a las poblaciones que las habitaban.

La presencia del glifosato en toda la geografía agraria argentina es indisimulable, sus residuos aparecen en las aguas, en los peces, en la sangre. Esto es una prueba palmaria del protagonismo que tiene desde hace un par de décadas en la agricultura. Dada su vinculación directa con el cáncer y otras malas yerbas, es a la vez un símbolo muy incómodo para la derecha, que no sabe cómo explicarlo. De cualquier modo, resulta imposible de tapar a esta altura de los tiempos. Y está claro que el modelo sojero tal como lo conocemos hoy, no es viable sin glifosato.

Decíamos “cuidado con la simple vista” para analizar el modelo agrario argentino. Porque el “a simple vista” engaña y mucho. El “campo” es un gran rompecabezas, con piezas ocultas al ojo desprevenido o poco avisado, debido a la gran cantidad de actores intervinientes. La habilidad comunicacional del neoliberalismo agrario para camuflar el monocultivo es proverbial. El eufemismo y la vaguedad (lo veremos más adelante) son herramientas formidables a la hora de encubrir qué pasa, en lugar de informar.

En general, el neoliberalismo te describe y te vende el modelo agrario sojero parcializando y segmentando los datos para que estos nunca se vinculen entre sí y no incriminen al paradigma de la sojización inducida con concentración de tierras y rentas. Siempre lo presentan ante la opinión pública como algo inocuo, que solo derrama beneficios, en donde todos ganamos y no existen contraindicaciones. Te “refriegan” en la cara lo que deja en retenciones, o los números del volumen exportado, pero jamás muestran los costos ocultos, ni miden los daños que causa. Esos datos nunca los informan, ni los relacionan entre sí, ni los entrecruzan. Te muestran lo que les conviene.

El planeta soja atiborra a la opinión pública urbana con grandes volúmenes de información irrelevante, llenos de *fake news* y de medias verdades. El objetivo es que, en el medio de semejante maraña de datos, todos orientados en el mismo sentido, sea imposible seleccionar y atar cabos. Todo está orientado a exhibir al paradigma sojero como el único camino agrícola virtuoso.

El latifundio, el desmonte, la crisis climática, el monocultivo, el glifosato, el cáncer y las malformaciones, las inundaciones, las sequías, los accidentes viales, las migraciones rurales, las urbanizaciones anárquicas de nuestros conurbanos, todos esos graves perjuicios, según los apologistas de la sojización, no son parte ni consecuencia del modelo agrario que tiene a la oleaginosa como centro, ni tienen vinculación alguna con él. Esto sería pura patraña de zurdos kirchneristas y locos ambientalistas, que “odian” al campo. Según los sojeros, estos son hechos autónomos, que no reconocen una causa de origen común. Es como si dentro de cada uno de ellos estuviera la causa que engendra “esas” consecuencias. El modelo sojero no tiene responsabilidad.

Ahora bien, si no amarramos los datos, si no atamos bien los cabos que parecen sueltos, si no los vinculamos entre sí, nunca lograremos armar el complejo *puzzle* que es el modelo agrícola argentino y una vez más estaremos expuestos a que nos vendan gato por liebre.

¡Cómo nos versean!

El relato agrario argentino está lleno de cuentos con los que nos acunan a diario desde hace décadas: el latifundio no existe más, la herencia lo divide, todo el campo es lo mismo, en el campo no hay trabajo en negro. También nos hicieron creer que la sojización fue una libre elección productiva de nuestros chacareros, que es un dulce maná, derramado acá solo por causalidad.

La naciente globalización a partir de la implosión de la URSS nos

asignó el rol de proveedores de forrajes para alimentar cerdos y aves del sudeste asiático, con el objetivo de avituallar el proceso de urbanización chino. El menemismo, sin filtro y sin patria, ejecutó sin piedad ese nuevo rol que nos asignó el mercado. No hubo magia, ni estrategia nacional alguna, solo mercado a mansalva, sin ninguna protección a nuestro mercado interno y a la agricultura de rostro humano, que fue literalmente arrasada. Las condiciones productivas nacionales se decidieron en función de los intereses transnacionales. El capitalismo había alcanzado un grado de maduración muy alto. El complejo científico-técnico que lo sirve había desarrollado el paquete tecnológico de siembra directa, semilla transgénica y glifosato para aplicar a la agricultura. Como vimos, esto logró un aumento extraordinario de los rindes y generó una plusvalía adicional a la renta agraria histórica, que fue cooptada y repartida en proporciones disímiles entre los dueños de la tierra, contratistas rurales, empresas multinacionales y *pools* de siembra. Esto significó el cierre de miles de chacras mixtas. Caído el muro, con China demandando soja a destajo, estaba todo listo para reprimarizar la economía. La Argentina era una fiesta para el complejo sojero transnacional. Los terratenientes argentinos, dueños del suelo sobre el que se siembra la soja, celebraron con champagne esta nueva era.

Sin Junta Nacional de Granos y Carnes, sin Estado, sin controles, con la privatización de los puertos de embarque e Hidrovía S.A. controlando el Paraná, el terreno estaba listo para consumir la conquista de Argentina. Es así cómo corporaciones globalizadas como Monsanto –llamada ahora Bayer, empresa que la ha absorbido– Syngenta, Cargill, Dreyfus, Viterra, Cofco y otras multiplicaron sus utilidades y se quedaron con el control monopólico de la comercialización y exportación de granos. Solo 10 empresas explican el 90 % del comercio de granos.

Las condiciones objetivas y subjetivas estaban maduras y la soja “solo” necesitaba lugar físico para ser plantada, en función de los grandes volúmenes requeridos. Esa es la razón por la que fueron por las tierras

que se usaban para la ganadería, por la chacra mixta y por los bosques nativos. Lo que se denomina eufemísticamente ampliación de la frontera agropecuaria, en realidad es una depredación ambiental criminal.

Con el paquete tecnológico de la agricultura buitre totalmente aceitado, se sembraron miles de hectáreas de tierras vírgenes. Así los bosques se transformaron en soja o vaca, las pasturas en soja. La chacra mixta fue barrida del mapa productivo y el rentismo rural ocupó su lugar. Este paquete volvió muy ricos a sojeros y terratenientes. Es el surgimiento de una nueva burguesía, aliada a la oligarquía tradicional: la sojera. Una fauna ignorante, con aires de genio, depredadora, indolente ante todo lo que no sea su propio beneficio, tan inculta como egoísta.

Se creen los dueños de Argentina y, por ende, están convencidos de que todos/as les debemos algo, nadie sabe bien por qué. Pero se sienten héroes que se sacrifican por nosotros, haciéndose millonarios. ¡Tremendo sacrificio! Encima pretenden que se les rinda pleitesía y que “roguemos” que no se enojen. Menem, Cavallo y Felipe Solá fueron los intérpretes inaugurales de esa etapa que se proyecta con fuerza hasta nuestros días. No olvidar.

Los nuevos latifundios

La introducción de la soja trajo consigo la reconversión a la agricultura intensiva de los viejos latifundios de ganadería extensiva. Es muy importante tener en cuenta esto. Porque hasta la década del 90 del siglo pasado, el debate en relación al latifundio giraba en torno a su baja productividad. Recordemos que estos latifundios eran constantemente cuestionados por ser una gran extensión improductiva. El intento de sancionar el impuesto a la renta normal potencial de la tierra que vimos en la introducción, estaba asociado a esto. El cambio tecnológico le dio un aumento de la productividad –impensado diez años antes– que los hizo explotar de rendimiento y veneno. Hasta la década del 90 era más

negocio tener la tierra para su valoración inmobiliaria o como resguardo de valor, que hacerla producir.

Pero la sojización también parió un fenómeno nuevo: el de los flamantes latifundios que surgieron a partir de la deforestación. Miles de hectáreas depredadas, violadas. En esa violencia el uso intensivo del paquete tecnológico tuvo un rol clave. Deforestación, más glifosato, más paquete tecnológico hicieron papilla hectáreas de los bosques vírgenes, que tanto ayudan a la vida evitando inundaciones y sequías, además de dar cobijo y trabajo a comunidades campesinas y pueblos originarios asentadas por décadas en esos ecosistemas. Nada les importó. Todo cayó bajo las impiadosas cadenas de las topadoras y el fuego. Así cambiaron el destino de uso al suelo. Desalojaron y expulsaron a miles de habitantes del monte y nació la agricultura de los buitres. Un verdadero asesinato del entramado social y productivo del interior profundo. Hoy vemos el resultado del nuevo modelo implantado de desmonte: solo trajo más desocupación, desnutrición infantil, migraciones descontroladas y atropellos diversos, entre otros males. En toda época histórica, latifundio y violencia policial y/o de Gendarmería van de la mano, son siameses. Decía Saramago que “El latifundio es hermano de la Guardia”.

Hay un mito muy arraigado en nuestra cultura: los latifundios se construyeron tras el genocidio roquista. Es como si el proceso de apropiación de la tierra pública hubiera terminado con la mal llamada Conquista del Desierto, y los latifundios no existieran más porque la herencia los dividió. Ambas premisas son aviesas y absolutamente falsas.

Ahora, en este mismo instante, se están cimentando nuevas grandes estancias sobre las tierras deforestadas. Hay una oleada de terratenientes de nuevo cuño, que nacieron con los desmontes. Esa es la partida de nacimiento de los nuevos oligarcas como los Brito, Eurnekián, Macri, Olmedo, Elsztain, por nombrar a algunos. A su vez, gobernadores como Ángel Rozas, Roberto Romero, Juan Manuel Urtubey o Gustavo Sáenz dilapidaron tanta tierra pública como Roca. Así nació esta nueva camada: empresarios multirubro de multicurros, muchos beneficiarios

de las privatizaciones menemistas, que diversificaron sus portafolios de inversiones. Miren de qué “niños” estamos hablando.

El latifundio es una rémora feudal, siempre es negativo cualquiera sea su nacionalidad o su origen. ¿En qué cambia que Eduardo Eurnekián (50 000 hectáreas en el Chaco), Jorge Brito (70 000 en Salta), Eduardo Elsztain (400 000 hectáreas) o Hugo Sigman (alrededor de 100 000) sean argentinos de nacimiento? En nada. Son tan nocivos y depredadores como los Benetton (900 000) y Lewis (15 000). No hace la diferencia, el latifundio es malo *per se*. Hay que visibilizarlo y denunciarlo, ponerle nombre y apellido para su análisis, evitando la vaguedad y el eufemismo. Como lo veremos a continuación con la exposición del abogado ambientalista Ernesto Viale.

La nueva oligarquía terrateniente

Veamos cómo se forman ahora –reitero, ahora– nuevos e inmensos latifundios sobre tierras recientemente deforestadas. Alejandro Peña Braun, el primo de Marcos Peña Braun (jefe de gabinete del gobierno de Macri) deforestó en el norte de Salta (finca Cuchuy) en una zona expresamente prohibida por la ley de bosques. Lo hizo merced a un permiso-prebenda que le dio el gobernador Urtubey. Se trata del mismo gobernador que tenía su provincia arrasada por las inundaciones en el año 2018, y le reclamaba (airadamente) a la Nación 500 millones de pesos (de ese momento) para obras de infraestructura. La mejor obra de infraestructura hubiese sido dejar de desmontar, ¿no? Al mismo tiempo que Salta se inundaba, la zona núcleo de la pampa húmeda tenía la peor sequía de los últimos cincuenta años, con pérdidas estimadas por la Bolsa de Comercio de Rosario en más de 1200 millones de dólares. Esta información, los datos y descripción son de 2018.

Esta “peor sequía”, tal como la describían en 2018, hoy ya es historia. Fue ampliamente superada por la “nueva peor sequía” de la

historia, que es la que vivimos en 2023, con pérdidas catastróficas por más de 20 000 millones de dólares. Y seguramente será superada por otra “peor sequía” que se está incubando en el regazo de la crisis climática. Todo este desastre se empolló a fuerza de desmonte. Amigos, ¿hay dudas de que la crisis climática existe y que sojización, deforestación, terratenientes y glifosato, la “ayudan” mucho? La conexión es directa.

Mientras escribimos y recopilamos los trabajos para este libro, el presidente Javier Milei emitió un DNU y envió al Congreso una Ley Ómnibus que modifica más de 360 leyes vigentes, fruto del consenso democrático de los últimos cincuenta años. Entre ellas están las que contienen modificaciones a dos leyes que son las que específicamente nos interesan para este escrito. La primera es la Ley de Bosques 26 331, sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2007 y reglamentada en el 2009. Cuando se sancionó la ley se venía a un ritmo altísimo de deforestación, con aproximadamente unas 700 000 hectáreas anuales. La ley frenó en parte ese proceso, pero en los tres últimos años volvió a incrementarse la cantidad de hectáreas deforestadas. Apelaron a los incendios intencionales para eludir la ley y atacar a los bosques nativos. Una oportuna intervención del Congreso sancionó la segunda ley que nos interesa, la Ley 26 815, conocida como Ley del Manejo del Fuego, que impide hacer negocios inmobiliarios con esas tierras depredadas exprofeso. Ahora intentan modificar estas leyes para favorecer a personas con nombres y apellidos. Enrique Viale, abogado ambientalista, lo denuncia en la plenaria de comisiones de tratamiento de la Ley Ómnibus: “Eduardo Elsztain, el padrino del presidente (propietario del hotel Libertador, donde estuvo alojado durante meses) es el dueño de CRESUD y el mayor terrateniente de la Argentina. ¿Saben cuánto desmontó? 120 000 hectáreas, 6 veces la ciudad de Buenos Aires. En Los Pozos, Salta, tiene 150 000 hectáreas pedidas más, para seguir desmontando. Si sale esta Ley a la medida de Elsztain, destrozará esas tierras [...] Otro beneficiado es Mauricio Macri. Su finca Yuto ya desmontó

10000 hectáreas, y quiere 6000 más. Y Luis Caputo, el ministro de Economía de la Nación, en el departamento Copos de Santiago del Estero, ya desmontó 500 y quiere 1000 hectáreas más”.¹⁶

La tierra para deforestar la pone la provincia de Salta. El gobernador Gustavo Sáenz sigue con la misma lógica de arrasar con los bosques que sus antecesores, Romero y Urtubey.

¿En qué mejoran la calidad de vida de los pobladores de Salta estos nuevos latifundios? ¿Qué derraman en la comunidad? Solo hambre, violencia y veneno. Deforestar para construir nuevos latifundios, ¿qué progreso implica? Es una política que atrasa doscientos años. Nos retrotrae a la época de la colonia.

Aclaración indispensable

A esta altura es más que pertinente hacer una puntualización. Una cosa es la sojización y otra el cultivo de soja. Son dos cosas muy distintas, que producen efectos económicos, sociales y políticos totalmente opuestos. Aunque ambos tienen a esa noble y milenaria planta como razón de ser y vértice, se trata de dos mundos antagónicos.

No somos enemigos de la soja. Una cosa es la soja sembrada como parte de la diversificación productiva –dentro de la chacra mixta, por ejemplo– y otra, el monocultivo sojero depredador que practica la agricultura buitre y destruye la chacra mixta. Defendemos la soja como cultivo y atacamos al monocultivo sojero, porque es una deformación productiva que engendró el capitalismo neoliberal. Por ejemplo: una cosa es fabricar galletitas y otra tener el monopolio de la producción de

16 Enrique Viale, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial; exposición ante la Cámara de Diputados de la Nación, en el plenario de comisiones, para el tratamiento del DNU y la Ley Ómnibus (15.01.24).

galletitas. Eso no significa estar contra la galletita, sino contra el monopolio de su fabricación. Con la soja pasa lo mismo. Y esto debe quedar muy claro, para evitar chicanas de mala leche.

La agricultura buitre en acción

Según datos del INTA, en la pampa húmeda la agricultura le arrebató a la ganadería unos 10 millones de hectáreas. En esos campos donde antes pastaban vacas ahora hay soja o maíz o trigo, y reciben millones de litros adicionales de agrotóxicos. Si a estos millones de hectáreas sojizadas de la pampa húmeda les sumamos las que aportó la deforestación –con el mismo destino soja–, la cifra es impactante. “En el 2021 se perdieron 205 492 hectáreas de bosques nativos, el 33 % a causa de incendios, en su mayoría intencionales. En el 2020 se perdieron 333 222, el 54 % fueron deforestadas por quemas. Y en el 2022, se deforestaron más de 400 000 hectáreas”.¹⁷

Presten atención a estos datos. Sobre esas tierras se erigen los nuevos latifundios de los que hablábamos antes. Los números en hectáreas son impactantes, y son datos fresquitos, no vienen de la Campaña del Desierto. ¿Se entiende? ¡Hay que pararlos!

Pero, bien: si, a esos datos recientes les sumamos la deforestación entre 1998 a 2022, todo ese volumen de tierras nos da unas 6 500 000 de hectáreas. A lo que hay que agregar los mencionados 10 millones que la soja le arrebató a la ganadería en la pampa húmeda. El número final es de unos 16 500 000 hectáreas que no recibían nada o muy poco de agrotóxicos y ahora absorben millones de litros. Según el notable científico recientemente fallecido Damián Marino: “En los últimos 10 años entraron más de 1000 millones de litros de glifosato. Este número

¹⁷ “¿Qué pasó con la deforestación de bosques nativos durante la gestión de Alberto Fernández?”, *Chequeado* (27.02.23).

pone a Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicida por habitante por año (10 litros por habitante/año)¹⁸.

Esos millones de litros de veneno son los que potencian y sostienen la extraordinaria renta agraria que disfrutaban nuestros terratenientes. Glifosato y terrateniente: conexión directa.

¡Qué detalle “el detalle”!

Un detalle central en el tema glifosato es que los terratenientes y los *pools* de siembra fumigan donde no viven. Ellos viven en las capitales o en grandes ciudades y fumigan en los territorios donde van de vez en cuando. La mayoría ni conoce los campos que alquila y fumiga. No pocos los recorren en avión y ni pisan el suelo. Hay un refrán que pinta con exactitud esta cuestión: “Van al campo a mear y se pegan la vuelta”. Si vivieran ahí, si sus hijos jugaran ahí, si su vida social se desarrollara ahí, seguro no fumigarían con la intensidad y de la forma que lo hacen.

Entre Ríos es una provincia sojizada por donde se la mire, asolada por *pools* y terratenientes, fumigada indiscriminadamente a lo largo y lo ancho de su territorio, sin respetar poblaciones ni escuelas rurales. Tienen el peor resultado –pero el peor-peor–: es la provincia que encabeza el ranking de chicos tratados con cáncer en el Hospital Pediátrico Garrahan (CABA). ¿Se entiende la gravedad de lo que hablamos y la complejidad que tiene el tema? Hay que parar de fumigar, empezando por prohibir las fumigaciones a 500 metros de los poblados y reconvertir esa franja a la agroecología. Ir en tránsito hacia el cambio del modelo agroalimentario. Ese es el camino.

La masividad en el uso del veneno es letal para todos y todas, incluida obviamente la flora y fauna. Y nadie está totalmente a salvo de

18 “Científicos de la UNLP advierten que el glifosato está en todos lados”, *Investiga*, Universidad Nacional La Plata (10.06.2019).

las consecuencias de este combo tecnológico sojero, ni siquiera los ciudadanos adoradores del *smog* que jamás pisan “el campo”. Por eso hay que urbanizar el debate rural.

¿El campo es uno solo?

La sociedad argentina (hay excepciones) habla del campo como algo universal, como si fuera todo lo mismo, pero es exactamente al revés, tal como lo vimos en la introducción. Sin embargo, esa falsa percepción del sector es inducida, no es inocente. Fue construida ex profeso como parte de una política de comunicación muy bien diseñada, con el objetivo de encubrir las aristas más conflictivas del modelo agrario. No tiene nada de error, ni de ingenuidad, ni de descuido casual, todo lo contrario: es una cuidadosa operación destinada a “hacerle la cabeza” a ciudadanos en general y a políticos en particular, acerca de lo acertado del modelo agrario que nos asignó la globalización.

La nebulosa descriptiva y la generalización conceptual sobre “el campo” tienen implícito un profundo sentido estratégico. Y su diseño salió del laboratorio político de la oligarquía terrateniente. Ahí se estudiaron y pergeñaron esas muletillas, tan mentirosas como eficaces, de “todos somos el campo” o “el campo es uno solo”. De este tipo de consignas falaces, profusas e inteligentemente instaladas, se valió la derecha para sumar tras de sí a la pequeña y mediana burguesía rural y urbana durante el conflicto de las retenciones móviles de 2008, lo que derivó en su gran triunfo político.

Los dirigentes del campo nacional y popular (a veces por ignorancia, otras por conveniencia) también fueron cooptados por esta falacia igualitaria, de que todos los productores son iguales, independientemente de la cantidad de hectáreas que posean. Deberían haber confrontado ideológicamente con esa idea “de que todos somos el campo y somos todos iguales” y plantear alternativas, como las *políticas públicas*

diferenciadas. Pero no lo hicieron. ¡Qué más justo y más peronista, que el que más tiene más pague! Es de manual que no se puede tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos. El Estado argentino, desde lo impositivo o crediticio, aplica la misma tasa o el mismo gravamen a un terrateniente de 50 000 hectáreas, a un productor de 50, a un campesino de 5, o a un sin tierra. No hay correspondencia del requerimiento fiscal o del ofrecimiento crediticio ni concordancia con el tamaño. La medida, es decir la Unidad Económica, debería ser un parámetro insustituible para el campo nacional y popular, con el objetivo de gestionar una buena política fiscal o crediticia. Incluir a todos en la misma bolsa es tan injusto como poner a boxear a un peso pesado con un peso mosca. Difícil de explicar, ¿no?

Tampoco (todos, sin diferencias ideológicas) se animan a diferenciar al productor genuino que trabaja realmente en su campo, del rentista o productor de sofá. También los meten a todos en la misma bolsa y les cobran el mismo impuesto. No es lo mismo: el rentista no es productor, por más que tenga campo.

Esto de no diferenciar a los productores es uno de los principales errores políticos que han cometido los sectores populares en la Argentina. Semejante divorcio de la realidad agraria nos ocasionó graves perjuicios electorales y de gobernabilidad. Por eso es tan importante armar bien el rompecabezas agrario y poner cada engranaje en su lugar. Es lógico que la derecha trate a los diferentes como iguales a la hora de cobrar. Pero al campo nacional y popular no se le puede escapar “tremendo detalle”. El debate agrario no puede estar más ausente en los programas del peronismo.

El uso del lenguaje como forma de encubrir

En Argentina se llama productor a todo el que tiene campo. No interesa si es rentista o lo cultiva él mismo, si tiene mucha o poca tierra, si es

argentino residente o extranjero. Se confunde al que planta soja con el chacarero, al chacarero con el *pool*, o con el contratista. Una cosa es plantar soja, otra ser contratista rural y otra muy distinta ser chacarero. No se diferencia ni se define al sujeto agrario. No se protege ni se prioriza a quienes pueden garantizar la soberanía y seguridad alimentarias. Todos en la misma bolsa.

Héctor Huergo¹⁹ –uno de los principales difusores del monocultivo sojero con concentración de tierras y rentas en nuestro país– llama con calculada astucia “chacarero” a todo aquel que planta soja. No discrimina tamaño, ni diversificación, ni relación con la tierra: a todos los nomina como chacareros. Un terrateniente, un *pool*, un contratista rural, él nomina a todos por igual. Sabe bien que está utilizando muy mal el término, pero igual alimenta la confusión y el no diferenciar. ¿Por qué lo hace? Sencillo, busca apropiarse de un término que tiene un amplio prestigio social, por todo lo que significa en cuanto a arraigo, trabajo, esfuerzo y austeridad. Busca la legitimación social de prácticas productivas neoliberales que hacen exactamente lo contrario de lo que hace un chacarero. Denominar chacarero a quien lo viene a sustituir no es ingenuo, ni una metáfora o licencia lingüística, es una calculada operación para hacer desaparecer una forma de producir benéfica que proveía a la soberanía alimentaria, en beneficio de otra que solo busca encarecer los alimentos, exportar lo más que se pueda y concentrar la economía. Es exactamente su contracara.

19 Héctor Huergo es el director del suplemento rural del diario *Clarín*. Ex presidente del INTA en los tiempos de Carlos Menem. Su militancia política estudiantil empezó en el Partido Obrero Trotskista. Fue el principal impulsor de Feriagro, que después devino en Expoagro, la sociedad comercial de *Clarín* y *La Nación* que organiza la feria anual agropecuaria a cielo abierto más grande de Sudamérica. Principal difusor de la sojización en la Argentina y férreo defensor de la concentración económica. Uno de los constructores del relato neoliberal a partir de su muy buena pluma. Lástima que la haya puesto al servicio de los *pools* de siembra, los monopolios, los puertos privados, el glifosato y las compañías exportadoras de granos, una verdadera pena.

Lo narrativo fue una parte esencial para ganar la cabeza de la política y de la sociedad en los momentos de introducción y aceptación del modelo de sojización. Fue un paso decisivo para legitimar la destrucción de la chacra mixta y reemplazarla por la agricultura buitre, de tres pisos. Y lo agitaban a viva voz: para que el país funcionara mejor tenían que desaparecer 200 000 chacareros, Jorge Ingaramo *dixit*.²⁰ Apropiarse del lenguaje es una forma de dominar. Las palabras valen y juegan. El que nombra, domina.

Chacra y chacareros

La chacra es inseparable del chacarero. No existe chacarero sin chacra. Son una unidad inseparable e imposible de analizar dicotómicamente. Una cosa es la chacra y el chacarero y otra la estancia y el estanciero o latifundista. Chacarero es el que tiene chacra mixta, que hoy es una de las formas, no la única, sí la más virtuosa y en vías de desaparecer, de ejercer la actividad agrícola.

La destrucción de las chacras mixtas y la desaparición de chacareros tiene hondas implicancias políticas, en cuanto al precio de los alimentos y su impacto en la gobernabilidad de los gobiernos populares, que por lo general ignoran o subvaloran

En un país con tierra, agua y climas extraordinarios, en un país productor de alimentos, en los últimos dos años del gobierno de Alberto

20 Jorge Ingaramo, economista cordobés, ultraliberal, fue subsecretario de Agricultura Ganadería y Pesca, en la gestión del ingeniero Felipe Solá, durante la presidencia de Carlos Menem, del cual es un confeso admirador y a quien considera el mejor presidente de los últimos cien años. Siendo funcionario, fue quien lanzó en 1991 aquel profético y cumplido deseo: que debían desaparecer 200 000 productores agropecuarios por ineficientes. La FAA de aquel tiempo lo criticó y enfrentó muy duramente, organizó un sinnúmero de protestas y cortes de ruta y realizó un paro agropecuario de quince días de duración en agosto de 1994.

Fernández, el promedio del costo de la lechuga fue un 30 % superior al dólar *blue*. Un disparate inadmisibles,²¹ muy vinculado con la deslocalización geográfica de las producciones de alimentos, que produjo la destrucción de la chacra mixta como proveedora del consumo de cercanía. Esta es la principal causa de que los alimentos deban recorrer miles de kilómetros en camión, hasta llegar a la mesa de los argentinos, con el consiguiente encarecimiento por el costo de logística implicado, asunto este absolutamente invisibilizado en el debate público.

El chacarero tradicional, el “gringo gorra e’trapo”, casi no existe más, es una especie en extinción. A los pocos que quedan hay que preservarlos como a los “guasunchos”. A esta altura de los tiempos el chacarero (como el gaucho) se transformó en un mito urbano, del cual se apropió la oligarquía terrateniente para armar con ese capital simbólico un relato político, que le es muy valioso y extremadamente funcional a sus intereses.

Definición de chacra mixta

A lo largo de todo este trabajo reivindicué la chacra mixta. Pero ¿qué es la chacra mixta? ¿Es un campo de tamaño chico, lleno de soja, con una casa en el medio? ¡No! ¿Es un pequeño campo que cría animales de corral y hace huerta? ¡No! A no confundir rotación de cultivos con chacra mixta, son dos cosas distintas. Veamos: “La chacra mixta es aquella explotación agropecuaria que ronda la Unidad Económica, en más o en menos, que por su tamaño no puede calificarse como estancia, manejada por sus propios dueños con residencia efectiva en el predio o no,

21 Ver Pedro Peretti: “Alimentos, insatisfacción democrática y gobernabilidad”, *Página/12* (03.10.2023).

que combina en proporciones disímiles agricultura con ganadería en cualquier variante agrícola o ganadera”.²²

La chacra mixta es la unidad productiva que surgió a partir de la inconclusa colonización agraria argentina. Y fue la política agraria de Juan Perón la que le dio impulso y la puso en la agenda de la política, en lugar de la estancia oligárquica. Entre 1945 y 1955, el peronismo transformó 50 000 arrendatarios rurales en propietarios. Esa fue la partida de nacimiento de la chacra mixta. Una auténtica y profunda reforma agraria, que hoy el movimiento no solo no reivindica, sino que tampoco recuerda.

Unidad Económica

El concepto de chacra está inexorablemente yuxtapuesto al de Unidad Económica, son siameses. Es la vara teórica que nos permite estimar, dependiendo de la zona y el suelo, cuánta es la tierra necesaria para que una familia tipo viva dignamente. A partir de dicha cuantificación se puede evaluar si es una chacra, un minifundio o una estancia. La Unidad Económica es básicamente una unidad de medida con respaldo técnico-jurídico.

Por lo general, la Unidad Económica deriva en una ley respaldatoria, cuyo objetivo es desalentar la excesiva subdivisión de los predios, transformando en antieconómica la propiedad agraria. Es la búsqueda teórica del justo medio ideal, en hectáreas, de lo que debe ser una explotación agropecuaria, combinando territorio, producción y familia, pensando siempre en el arraigo y el bien común.

Es, además, el centímetro que nos permite ponderar cuán grandes son los grandes y cuán chicos los chicos, cuestión de mucha utilidad a la hora de diseñar una política pública.

22 Pedro Peretti: *La chacra mixta y otras yerbas*, Buenos Aires, Perspectiva Bicentenario, 2014, p. 26.

La indivisibilidad de la chacra es un tema crucial para cualquier política agraria que tenga un ojo puesto en la ocupación geopolítica del territorio y en el arraigo, y el otro en la soberanía y la seguridad alimentarias. Solo la chacra puede proteger ambas cosas, pues ni los latifundios ni los minifundios garantizan que se ocupe el territorio correctamente y que se aporte al bienestar general. Las explotaciones muy pequeñas obstaculizan su correcta utilización productiva y terminan vendiéndose, alimentando el proceso de concentración fundiaria y migraciones rurales.

La unidad productiva ayuda –además– a determinar y a definir el sujeto agrario a proteger y/o priorizar. En Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, la Unidad Económica está protegida por ley. En la provincia de Santa Fe la Ley 9319 la define así: “La Unidad Económica Agraria –UEA– queda definida por aquella superficie mínima que se demuestre a través de un planteo productivo teniendo en cuenta la ubicación de las parcelas en las regiones agroeconómicas fijadas en el Anexo II, las aptitudes y características edafológicas de los suelos, el manejo racional del predio, cuya conformación posibilite la conservación del recurso, el desarrollo de la empresa agraria familiar y un proceso de reinversión para la evolución sustentable de la misma”. Esta ley fue flexibilizada por el “socialismo de mercado” que gobernó la provincia de Santa Fe durante doce años. Y lo hizo para armonizar con los intereses de los grandes sojeros, allanando el camino para que siguiera el proceso de concentración de tierras.

La chacra mixta y el concepto de Unidad Económica están directamente relacionados con la concepción de la política agraria del peronismo. Si bien en las primeras décadas del siglo xx ambos conceptos fueron militados por los socialistas, especialmente por el Dr. Juan B. Justo y por el demoprogresista Dr. Lisandro de la Torre, fue Juan Domingo Perón el que lo llevó a la práctica; su Gobierno las ejecutó, revalorizó y puso en marcha.

Peronismo, chacra mixta y Unidad Económica

La chacra mixta y la Unidad Económica son dos pilares de la política agraria peronista. Ambos fueron parte del anteproyecto de Ley Agraria de 1974 y reflejan el compromiso histórico de Juan D. Perón con estas ideas: “Los jueces, escribanos, martilleros, entidades financieras, intermediarios y oficinas públicas NO aprobarán, intermediarán, financiarán, ni inscribirán, visarán o tomarán razón de actos, operaciones o planes que exterioricen o resulten de una subdivisión de tierra rural, sin que se acompañe un certificado expedido por el respectivo organismo provincial de colonización o catastro, en el que conste que cada una de las fracciones resultante de la subdivisión, no es inferior a una Unidad Económica”.²³

A los conceptos de Unidad Económica y chacra mixta el peronismo los acompañó con el correspondiente financiamiento para que dejaran de ser una elucubración teórica y se hicieran realidad material. El Banco de la Nación otorgaba créditos de fomento para la compra de condominios, a los efectos de facilitar que se conservase la Unidad Económica del predio y siguiera la chacra. Si algún heredero no quería quedarse con ella y vendía su parte, el banco facilitaba la compra a algún otro heredero para que la chacra continuara en funcionamiento. El objetivo era que no se cerrara la tranquera. Porque cuando una chacra se liquida, es un proceso irreversible y su lugar no lo puede reemplazar nadie, no lo sustituye ni un plan social, ni un *pool* de siembra, ni una estancia. Los efectos benéficos que derrama sobre la economía local no se pueden reemplazar con otra forma de ejercer la agricultura ni con política social alguna.

Es importante preservar y fortalecer el concepto de Unidad Económica, hoy en total desuso. Si los gobiernos provinciales, que son

23 Anteproyecto de Ley Agraria 1974, acerca de la indivisibilidad de la Unidad Económica, Capítulo II, artículo 6º, INTA Famailá.

los que mandan sobre el recurso tierra, lo desactivan, lo ningunean o lo tergiversan, transformándolo en un instrumento jurídico inocuo, meramente decorativo, desde los sectores populares debemos aspirar a restaurarlo y dotarlo de su máxima potencia. Además, lo necesitamos como unidad de medida global que ayude a visibilizar la concentración de la tierra. ¿O por qué piensan que los gobiernos amigos del monocultivo de soja lo quieren desactivar? Porque el concepto mismo los incrimina. Si una familia tipo puede vivir dignamente con 75 hectáreas y usted siembra o tiene 300 000 hectáreas, esa comparación genera más conciencia que mil discursos.

En Santa Fe fueron los gobiernos socialistas, en connivencia con un sector del peronismo, los que desactivaron esta norma. El socialismo santafesino debe ser el único partido político del mundo que hizo proselitismo defendiendo un monocultivo. “La soja no es un yuyo, vote Hermes Binner” fue la consigna de campaña de 2011. El peronismo de Reutemann y Perotti es también un peronismo sojero. Gobernaron postrados ante los grandes intereses portuarios y exportadores, que hicieron nido en la vera del Paraná. Les concedieron prebendas impositivas de todo tipo. Lo único que derrama el complejo sojero en la provincia son algunos miles de puestos de trabajo que en nada compensan todo lo que han destruido. Ese modelo en Santa Fe fue un fracaso total: hambre, miseria, concentración económica, narcotráfico, trata de personas, y casi nulo aporte fiscal a las arcas provinciales. La Unidad Económica era para ellos un estorbo.

Es increíble que el peronismo haya abandonado batallar sobre la cuestión agraria y la defensa de las ideas constitutivas de su identidad, y del campo nacional popular. Hay que recuperar ese debate. El peronismo debe rescatar su propia historia. Eso no significa hacernos devotos de la moda nostálgica, todo lo contrario. Se trata de, como dice el querido Jorge Giles, escritor, militante y preso político: “hundir las manos en el barro de la historia, para mostrar dónde está la tierra fértil [...] para mi generación una parte sustancial de nuestras raíces fue la

historización de la política y la politización de la historia, que aprendimos con Jauretche y los revisionistas”.²⁴

Vaguedad y eufemismo

El eufemismo es uno de los instrumentos que los medios de comunicación hegemónicos utilizan para manipular la información. Consiste básicamente en la capacidad de engaño o deformación de la realidad a partir del lenguaje y en su reiteración sistemática sin posibilidad de réplica: “Se acude a él para evadir o evitar hacernos conscientes de la realidad cruda o desagradable y contener a la reacción de las masas”.²⁵

En todo el mundo el eufemismo está más que estudiado, como una deformación aviesa del lenguaje periodístico. Pero en Argentina, su utilización adquiere ribetes escandalosos y, más, en el periodismo agrario. El 90 % de los medios que se ocupan de las cuestiones agropecuarias están cooptados por las ideas neoliberales, sostenidas por las cuentas publicitarias de las megaempresas que le compran y le venden cosas al sector. No vas a escuchar una noticia distinta a la que a ellos les interesa. Y el eufemismo es su principal recurso lingüístico; su rol en ayudarte a vender gato por liebre es protagónico.

La práctica del eufemismo es la manera de dar noticias o hablar de hechos sin demasiadas precisiones. Utilizar metáforas, circunloquios o meras aproximaciones al tema, sin chequear lo que se informa. Cualquier pavada se transforma en un acto heroico, siempre buscando idealizar lo que se quiere proteger. La prioridad siempre es el interés comercial de la empresa que paga. ¿La verdad?: ¡te la debo! Es una forma

24 Conversaciones del autor con Jorge Giles, 15 de febrero de 2024.

25 José Arlex Arias, Polo Democrático Alternativo, Colombia, 2015.

habitual del mal periodismo en general, pero del agropecuario en particular, es desvergonzado.

Se busca encubrir en vez de informar. Por ejemplo, comunican la destrucción de nuestros bosques nativos, no como un desastre ambiental –¡que es lo que es!– sino como una ampliación positiva de la frontera agropecuaria, que va a generar más divisas para el país... ¡jodeme! Con el mismo método se invisibiliza el latifundio, o le dicen rey de la soja a un mega *pool* de siembra, o llaman chacarero a un terrateniente. Romantizan la vida rural al extremo, para ellos allí no existe ni el mal pago a los peones, ni el trabajo en negro o a destajo, por tomar una de las varias aristas conflictivas del sector. Eso te lo informan cambiado, y la ubicación más insignificante de lo que imprimen o comunican.

En cambio, cuando se habla de la chacra mixta o de la agricultura de pequeña escala familiar o campesina, o de la tierra que legítimamente les corresponde a los pueblos originarios, se utiliza su contrario, el *disfemismo*: que es el modo peyorativo de referirse a las cosas, bajándoles la categoría. Es el uso deliberado de términos despectivos o injuriantes. La chacra mixta es ineficiente, es el atraso, tienen que desaparecer 200 000 chacareros, entre otras frases. Siempre se evalúa en forma negativa su comportamiento, responsabilizándola de cualquier cosa. No interesa si es verdad o no, solo importa limarla ante la opinión pública para generar una reacción adversa y que nadie la defienda ni la proteja. Y si de informar un conflicto de tierras se trata, entre pueblos originarios y campesinos contra los apropiadores, ¡ni te digo! Es la disfemia elevada a la máxima potencia.

La información eufemística juega un rol central en la invisibilización del latifundio. Los medios hegemónicos informan sobre los productores agropecuarios como si fueran todos iguales, como *koljoses* socialistas y no unidades territoriales muy diversas. Además, repiten incansablemente una noticia falsa o deformada, hasta transformarla en certeza solo porque la pasan muchas veces al día TN, *La Nación* o *Clarín*. No es error, no es pereza, no es economía de tiempo televisivo,

nada de eso: es una política diseñada ex profeso para malinformar a la población, financiada por las cuentas publicitarias de las grandes compañías que operan en el sector, para su exclusivo beneficio.

Manipulación

La fusión de eufemismo y disfemismo es al periodismo lo que el glifosato es al medioambiente: un veneno. Es una manera muy eficaz de vehiculizar la manipulación social y electoral, especialmente en el mundo rural, donde campean la despolitización y el monopolio mediático. En general, los ciudadanos trabajan poco de ciudadanos y no exigen demasiadas precisiones a los gobernantes sobre las políticas que instrumentan. Dice el escritor vasco don Pío Baroja (1872-1956): “A una colectividad se la engaña siempre mejor que a un hombre”. Algo de eso pasa, ¿no? La manipulación de las masas no es flor solo de este tiempo. Nada nuevo hay bajo el sol. Desandar el camino del engaño colectivo es muy difícil: “Está comprobado que es más fácil engañar a la gente, que convencerla que ha sido engañada” (Mark Twain).

Una verdad construida a base de eufemismo y disfemia es el mejor método para manipular a las sociedades. Es lo que sucede con la sociedad argentina y la sojización. Esta ha sido manipulada de tal manera, le han inyectado un sentido común agrario tan deformado como eficaz, al punto que un ciudadano con una maceta de tierra se autopercebe terrateniente. Se utilizan dosis de información tan parcializada, mordaz y reiterada, que es muy difícil convencerlos de la verdad, aunque la estén tocando.

¿Qué pasaría si a la población urbana y rural le contasen la película completa de la sojización, sin eufemismos ni vaguedad? ¿Seguiría el modelo o sería el principio del fin? Eufemismo y vaguedad son a la sojización, tan importantes como la semilla de la soja o la máquina para sembrarla. El día que se corra el cendal, nos daremos cuenta del desbarajuste que trae el monocultivo. Esperemos que no sea tarde. Venden

como ideal un modelo que tiene más contraindicaciones que fumar. Por eso es tan importante para “aclarar los tantos” urbanizar el debate rural.

Conocimientos, precisión y política

El Dr. Juan B. Justo²⁶ se quejaba de la vaguedad de los políticos argentinos. En política todo debe mensurarse, medirse y pesarse. No se puede gobernar “a ojo” si se quiere actuar bien. Y eso significa, esencialmente, en favor del pueblo. Es decir, cuidar la salud, la alimentación y el bienestar general de todos y no de un minúsculo grupo de privilegiados. Ponerle precisiones al discurso político y que después este se corresponda con la práctica fue una preocupación constante del Dr. Justo. Él decía: “Un partido puede ser tan bueno como infecundo en la vaguedad de sus intervenciones”. Perón, que tomó muchos conceptos del socialismo, sostenía que: “Los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores”. Nada de generalizaciones sin responsables, control y precisión para una buena gestión de lo público.

Los dos tenían concepciones rigurosas, lejos de toda vaguedad o eufemismo. Hay que ser serios, evitar la demagogia fácil, para poder mensurar, medir y controlar todo. Si se es gobierno, es básico. Hoy se ha perdido la brújula, este liberalismo “a la violeta” que gobierna ha roto todos los instrumentos de medición de la gestión y de la argumentación política. Hoy se tira cualquier número y/o dato sin ninguna seriedad ni fundamento. Todo es un disparate. Y en este tiempo histórico es

26 Juan B. Justo (1865-1928), médico-cirujano eminente, recibido con medalla de oro. Realizó grandes aportes a la medicina, entre ellos todo lo vinculado con la asepsia en la cirugía. Junto a Lisandro de la Torre, fue de los primeros en enfrentar y alertar sobre el carácter negativo del latifundio y proponer una reforma agraria en la Argentina. Fundador del Partido Socialista y del periódico *La Vanguardia*, fue diputado nacional y senador. Primer traductor de *El Capital*, de Karl Marx, al castellano, con prólogo de Federico Engels. Casi nada, ¿no?

Cristina Fernández de Kirchner quien recoge el guante del Dr. Justo y reclama constantemente debatir con datos y cifras.

Perón, Néstor, Cristina, Lisandro de la Torre²⁷ o Juan B. Justo, por citar algunos, fueron liderazgos absolutamente disruptivos. Algunos fueron gobierno y otros no, pero todos apelaron a la verdad y seriedad en el debate. Conocían el país, su territorio y las sociedades que gobernaron o aspiraron a gobernar. Y lo hicieron o lo pensaron con el ojo siempre puesto en el bienestar general. En ese sentido, no se permitían malinformar o decir una cosa por otra. Las suyas eran sociedades muy exigentes en cuanto a conocer la verdad de los hechos, no como ahora que se puede decir cualquier cosa en el debate público, sin tener que probar nada, da todo lo mismo. Es el tiempo del chisme de barrio elevado a la categoría de verdad oficial.

27 Lisandro de la Torre (1868-1939), diputado y senador nacional, dos veces candidato a presidente de Argentina. Participó de la Revolución del 90, en la revuelta radical de 1893 y encabezó el asalto a la jefatura de Policía de Rosario. De allí marchó a la ciudad de Santa Fe, donde tomó la casa de gobierno y fue proclamado gobernador el 30 de junio de 1893, cargo en el que duró tres semanas. Se batió a duelo con Hipólito Yrigoyen, de quien era acérrimo enemigo. En 1902 fundó su propio partido, La Liga del Sur, y en 1914, el Partido Demócrata Progresista. Este, tras su muerte, participó de todos los contubernios golpistas y antidemocráticos que existieron en el país, mancillando innecesariamente el nombre de su fundador. Hoy es un partido casi inexistente, vinculado a la peor derecha nativa. Lisandro fue un gran defensor de la reforma agraria y de la chacra mixta, que él llamaba industrial. Promotor de la creación de la Marina Mercante Nacional, del proteccionismo industrial y de gravar la riqueza y no el consumo. Fue quien denunció a los gobiernos conservadores por su connivencia con los monopolios ingleses, por lo cual sufrió un atentado que le costó la vida a su discípulo, el senador Enzo Bordabehere.



Capítulo 4

Unidad de medida

Cómo medir el modelo agrícola

El modelo agrario argentino se mide y analiza bajo los parámetros teóricos con que nos ha colonizado el neoliberalismo. El campo nacional y popular no ha logrado armar un método propio, genuinamente nacional, para hacerlo. Creo que es hora de que nos liberemos de ese yugo teórico impuesto por la derecha, de examinar la realidad agropecuaria con los criterios ideológicos que nos proveen ellos mismos.

Debemos pensar y crear un método de análisis serio y original, que combine lo agrario con la realidad del país y las necesidades de nuestro pueblo. Eso es: una unidad de medida propia y nueva. Hay que dejar de lado las sugerencias interesadas de terratenientes, exportadoras de granos y vendedoras de insumos, que solo quieren rapiñar nuestra producción para su propio beneficio. ¡Basta de seguir sus instrucciones!

La única vara que se aplica para examinar al modelo agrario argentino es la del volumen, a partir del monocultivo y para la exportación; todo pasa por ahí. No hay otro indicador a ponderar a la hora de calificar su funcionamiento. Si una campaña agrícola es buena o mala, tiene en la cantidad cosechada el único argumento para calificarla. Esa es la trampa cazabobos del debate agrario, que no pudimos evitar.

La derecha muestra el aumento de la producción de soja y maíz (las dos caras granarias del mismo modelo) y nosotros contestamos

que esos números son gracias a lo amigable de nuestras decisiones. Las políticas agrarias de los gobiernos populares (salvo honrosas excepciones) son iguales a las de los gobiernos antipopulares. El mejor ejemplo: Alberto Fernández.

Entramos solos a ese corral, así funciona este capítulo clave de la batalla económico-cultural con la derecha agraria.

La mejor cosecha de la historia argentina fue la del 2018/2019, cuando se recolectaron 140,8 millones de toneladas de los cinco principales cultivos, según datos de la Bolsa de Cereales de Rosario. Esa es la referencia que toma el análisis de la derecha, lo único que le interesa. Y, a partir de ese número como valor absoluto, hacen girar todo su discurso. No importa si ese volumen es con o sin productores (se puede hacer de las dos maneras), si se consigue arrasando bosques o si la producción es amigable con el medioambiente. ¡Nada! Solo el volumen.

No les preocupa si el lugar donde se siembra es apto, o si lo que se hace tiene razonabilidad logística.

Tomemos, por ejemplo, la soja y el maíz en el NEA-NOA: allí se deforestaron miles de hectáreas y luego se sembró. Pero ese cereal después hay que transportarlo, ya que está a 1200 km de los puertos. En esa instancia se necesitan 400 000 viajes de camión a Rosario para comercializarlo. Ese flete kilométrico tiene innumerables costos ocultos, como rotura de rutas, puentes, accidentes viales, migraciones, emisión de gases de efecto invernadero, entre otros. Un verdadero dislate logístico, que paga la comunidad en su conjunto, no solo los sojeros. Pero nada de eso está sobre la mesa a la hora del balance final.

Tampoco se analiza si ese tonelaje es de monocultivo, o si lo que se cosecha va para la mesa o para exportar, y en qué proporciones. Nada, al volumen cosechado no se le pregunta nada y se le perdona todo. Solo interesa que haya mucho y se pueda exportar sin regulaciones, y con el menor costo impositivo posible.

Nosotros pensamos exactamente al revés, que al volumen hay que interrogarlo fuertemente, medirlo con otros parámetros, para lo cual

hay preguntarle todo, expresarlo de datos útiles que ayuden a entender, no a encubrir. Hay que indagar sobre el uso y tenencia de la tierra, dónde se siembra, preguntarnos cuántos productores genuinos participan, interrogar sobre la deforestación y la logística. Tampoco son datos menores si se planta para la exportación o para el mercado interno, si se desplazan otros cultivos, si es sobre explotaciones mixtas o no. Cómo se construye el volumen de cosecha de un país no es un dato neutro o sin importancia, tiene un altísimo significado: económico, cultural, social y político.

Método propio

El campo nacional y popular debe desarrollar su propia unidad de medida del modelo agrario, que fije las prioridades y adjudique valores de acuerdo con la soberanía y seguridad alimentarias de la nación, y no con los balances de terratenientes y transnacionales. El método que desarrollemos debe dar valor y precio a la agricultura hecha por chacareros, campesinos e indígenas, al arraigo, a la diversidad productiva, a lo ambiental, a la ocupación geopolítica del territorio, a la ruralidad y al destino de lo que se produce. Hay que clasificar la campaña agrícola de acuerdo a estos puntos. ¿Cómo puede ser que nunca merezcan consideración estos índices? Todo “eso” debe meterse en la coctelera y sacar una vara de medida propia, original, sin copia, que esté al servicio de nuestro pueblo. Es con ese metro con el que debemos evaluar a la actividad agropecuaria, no con el de ellos.

Para nosotros la “opinión” del mercado no puede ser absoluta ni sagrada. No es lo mismo un volumen orientado a proveer y garantizar la soberanía y seguridad alimentarias de la población, que otro que le sea indiferente y solo piense en la ecuación monocultivo-volumen-exportación. En 2023, la soja significó el 47 % del área de siembra; el maíz, el 25 %, y el trigo, el 18 %. No es lo mismo un volumen hecho

sobre “esa” composición del área sembrada, que otro donde una parte de la tierra esté destinada a la ganadería y haya diversidad productiva, no solo soja y maíz. Y tampoco vale lo mismo que esa tierra sea cultivada por agricultores de rostro humano, a que ese volumen de 140 millones de toneladas sea hecho por un par de miles de empresas integradas verticalmente.

Cuando se compara la producción agropecuaria y los tonelajes de exportación con otros países, el criterio es igual. Se discute el ranking con las cantidades a la vista, sin ponderar otras variables. Nada más absurdo. Por ejemplo, se dice sin más consideración, que Uruguay nos ganó exportando más carne, o que Brasil nos ganó exportando más soja. No les interesa si Brasil deforestó medio Amazonas para sembrar soja, ni la extensión territorial, ni lo que come su población, ni si se restringen las exportaciones de carne para que la gente pueda comer. Es un ranking tan estúpido, que parece mentira que se lo tome en serio. Insisto: para la derecha el volumen es un valor absoluto que lo explica todo *per se*, en cualquier situación y realidad. Nada más falso.

El volumen de monocultivo sojero es a la agricultura extractiva buitre lo que la chacra mixta y el arraigo son a la soberanía y a la seguridad alimentarias. Son dos paradigmas agrarios antagónicos, que se corresponden con dos modelos de sociedad distintos. Uno plantea y trabaja para que todos coman, y exportar lo que sobra; y el otro plantea que se exporte todo, y que adentro se coma lo menos posible. Y eso exige medir de manera distinta. Por eso el campo nacional y popular debe desarrollar su propia unidad de medida para abonar un discurso político autónomo y archivar definitivamente el que nos “presta” la derecha.

La dictadura del análisis

Toda gira en torno al dios volumen, a partir del monocultivo exportador. Es una extraña dictadura de análisis, que demuestra hasta qué

punto el neoliberalismo nos inculcó un sentido común productivo, de acuerdo con sus intereses corporativos y ajeno a las prioridades de nuestro pueblo. Cómo puede ser que una economía como la nuestra, que además de exportar soja, maíz, trigo y todos sus derivados, exporta TODO lo que come (carne –todas–, ajo, cebolla, maní, uva, azúcar, cerezas, peras, manzanas, yerba mate, miel, arándanos, pimientos, tomates, papa) no preste atención a este detalle clave? Y que se desinterese de todo lo que implica, en cuanto a precios de los alimentos, salarios, tamaño de explotación, logística, entre otros temas. Esta situación muestra hasta qué punto miramos la realidad con ojos de la derecha.

La unidireccionalidad del análisis es total y busca obsesivamente:

- a) Subestimar a las otras producciones para ampliar las áreas de siembra del monocultivo e incrementar los volúmenes.
- b) Apuntar a reducir el consumo interno para ampliar los saldos exportables. Esto se ve claro en trigo y carnes.
- c) Reclamar que los precios internos estén al nivel internacional. Para ellos, que el pueblo coma es apenas un detalle.
- d) Y exigir que no exista ninguna regulación en el comercio exterior ni en el interior.

El campo nacional y popular no puede mirar a través de esa lente

Todo el andamiaje comunicacional y el debate teórico que prohija el neoliberalismo agrario, sostenido sobre los parámetros volumétricos tiene el objetivo de mostrar que lo único viable para la Argentina es sembrar mucha soja o maíz, y exportar. Se trata de una auténtica dictadura de agenda que, como toda dictadura, es muy agresiva con quienes piensan distinto, que son descalificados, estigmatizados y reprimidos con virulencia. Llegó la hora de que el peronismo dé batalla por otro modelo de producción de alimentos, vinculado con su propia historia.

Volumen y teoría del derrame

La teoría del derrame está fundada en que la riqueza generada en abundancia termina por derramar bienestar al conjunto de la sociedad. Esto no es solo falso, sino también repugnante. El volumen y la exportación son la columna vertebral de la teoría del derrame. Tomemos por ejemplo el año 2022, durante la gestión del presidente Alberto Fernández. Según la Bolsa de Cereales de Rosario, ese año tuvo un récord histórico de exportaciones: 88 268 millones de dólares. El máximo valor nominal de exportaciones de bienes de la historia argentina. ¿Qué tal? ¡Pavada de récord! El agro aportó 55 516 millones: el 63 % del comercio exterior argentino. Si la teoría del derrame a partir del volumen fuera cierta, debería haberse verificado en la práctica. O sea, a más producción y exportación, menos pobreza y mayor bienestar general. Bueno, sucedió exactamente lo contrario: 2022, el año de exportaciones históricas y cosechas voluminosas, cerró con un millón de nuevos pobres. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC informó que ese año terminó con una pobreza del 39,25 %. Para la franja etaria de chicos hasta 14 años, el índice trepaba a un escandaloso 54,2 %. Más se exporta y más se produce, más pobres hay. Una prueba irrefutable de la falacia del relato neoliberal. Volumen sin distribución es como comer sopa con palito.

La concentración económica, la depredación ambiental y los monopolios no derraman nada, solo generan más pobreza. Por eso hay que interrogar a los volúmenes de producción: sin preguntarnos qué producimos, para quién, cuánto, dónde, cómo, es imposible entender qué pasa en nuestro país.

El discurso del volumen como factor único y excluyente está íntimamente asociado a los *pools* de siembra y megaprodutores, que entran al negocio agrario sin compromiso social y en busca de la rentabilidad fácil a costa de los bienes ambientales y de pulverizar la política de arraigo. La agricultura buitre que estos *pools* practican carece de pertenencia territorial, y su única vinculación con la tierra es la de

pagar un alquiler por su uso. La pueden usar mal o bien. Ellos pagan, siembran y arrasan con todo, sin dejar un peso en los pueblos. Si el negocio no les resulta, se van. Y “si te he visto, no me acuerdo”. En cambio, el chacarero genuino, el campesino y el indígena están arraigados a la tierra, la cuidan como lo que es: una madre que nos da vida.

Sentido común productivo con orientación social

Nuestra obligación es dar un debate para crear otro sentido común productivo, pero con orientación social. Para eso, hay que empezar a ponderar y medir la agricultura con otros parámetros. El diseño de nuestra política agraria y las medidas que proponemos en este trabajo tienen que ver con eso, ¿quién hace esta política?, ¿a quién va dirigida?, ¿quién la conduce? Para este escriba no hay duda: es el Estado en pleno uso de sus facultades constitucionales quien debe conducir la política agraria. En nuestro esquema no hay lugar para el libre mercado.

El primer gran triunfo cultural de la derecha fue invisibilizar el latifundio. El segundo es el de inyectarnos un sentido común productivo agrario desprovisto de valores éticos e ideológicos. Esta batalla, claramente, la estamos perdiendo. Una mayoría importante de nuestro pueblo cree que el monocultivo de soja es el único camino virtuoso en materia agrícola, y que es “todo lo que está bien”. Otra parte no menor cree que no hay alternativa, que este es el único camino y no se puede salir de esta huella. Sin embargo, hay un montón de variantes al sendero que nos propone el neoliberalismo agrario, algunas las exponemos en este libro.

Es ineludible crear y militar otro sentido común productivo, que tenga orientación social y nos permita debatir y resolver correctamente qué tipo de agricultura queremos. Hay que definirse, no se puede estar con un pie en cada bote. Resuelta esta contradicción, la que le sigue no es menor: ¿qué cualidades debe tener el funcionario que la va a ejecutar? O la dirigen funcionarios sumisos, con miedo al *establishment*, o militantes

capacitados, con sentido de su deber histórico. No hay magia ni mucho que inventar, solo elegir bien a quién la va a ejecutar. Porque la mejor idea del mundo, mal ejecutada, resulta un fracaso del cual es muy difícil volver. Empecemos por medir distinto, para discutir distinto y proponer distinto, lo que nos hará gestionar mejor. Es con militantes comprometidos, no con tecnócratas temerosos al servicio de las corporaciones.

Hay que planificar la política agraria, este es un dato estratégico clave, para lo cual tener una medida adecuada no es un tema menor. La agricultura sin planificación es como la navegación sin brújula. Una correcta vara de medida nos va a permitir combinar en dosis adecuadas volumen y producción, consumo interno, ambiente, arraigo y exportación. Es por ahí. Ya lo hicimos. Se llama peronismo.

Cómo medir

Una política pública agraria debe medirse en su integralidad, desde la tierra hasta cómo se carga la producción en los barcos o se pone en la góndola. No se puede medir por segmentos, es un todo.

Ahora, para analizarla correctamente, hay que disponer de datos y números ciertos, no manipulados. Por eso el Estado debe recuperar su propio sistema estadístico y concentrarlo en una sola repartición, y no dejarlo desperdigado por distintas oficinas públicas. Hoy no lo tiene. Lo cedió, con la excusa de reducir el gasto público. Ahora nos proveen los datos para hacer las estimaciones de cosechas las Bolsas de Cereales (Rosario, Buenos Aires), que es como tratar de acceder al paraíso con la guía del diablo.

Por otra parte, la vara de medida hay que colocarla desde una punta a la otra de la agricultura y la ganadería. Partir de quién es el dueño del suelo y cómo se lo trata, si hablamos de un latifundio, de una chacra mixta, de campesinos o pueblos originarios, qué se siembra, cómo se siembra, y a quién va dirigido lo que se produce. Hay que agregar cómo

se comercializa, distribuye y transporta (ferrocarriles, puertos, ríos), a quiénes se les vende y quién exporta. Asimismo, considerar qué regulaciones se imponen, cómo se ocupa el territorio, cuánto arraigo genera. Y, por supuesto, no olvidar la cuestión ambiental y la producción agroecológica. Son todos ítems cruciales a la hora de medir y evaluar el modelo. Hay que puntuar el orden de mérito agrícola de otra manera y, por sobre todas las cosas, hay que planificar. Sin planificación no hay política pública eficiente a favor del interés nacional.

Una política pública es todo lo que el Estado hace interviniendo directamente, pero incluye todo lo que deja hacer en forma expresa o implícita. Y también, cuando mira para otro lado. ¡Cuidado con esto! Si el Estado se hace el distraído y deja competir a megaprodutores con pequeños chacareros en un pie de igualdad y no discrimina positivamente en favor del más chico o el más débil, eso también es una política pública.

Las políticas públicas segmentadas o diferenciadas son las herramientas adecuadas para corregir esas asimetrías. No hay agricultura familiar, chacarera, campesina e indígena sin una alianza con el Estado. Lo que hace y lo que no hace o deja hacer un Estado es siempre una política pública y debe ser analizada como un todo.

Aclaración necesaria

Es importante aclarar que no subestimamos ni desestimamos el volumen. Todo lo contrario: nosotros lo interrogamos, que es bien otra cosa. Creemos que debemos “hacerlo” de otra manera. Nunca falta el mal intencionado que interpreta que no damos importancia a la eficiencia en la productividad, o a la necesidad de exportar más. Nadie siembra para cosechar poco, todos lo hacemos con la expectativa de lograr el máximo posible. No hay que confundir buscar la máxima eficiencia en la productividad de los cultivos, con el volumen que genera el monocultivo orientado a la exportación neta.

El rinde por hectárea es lo que determina la productividad. Y la suma de todas las hectáreas del mismo cultivo constituye su volumen. La mayor o menor productividad de un establecimiento es consecuencia de la eficiencia en el manejo de cada hectárea y la combinación armoniosa de los distintos cultivos. Es de puro sentido común que un campesino o chacarero de 50 hectáreas, al conocer cada milímetro de su campo, va a ser más eficiente a la hora de obtener mayor productividad a su tierra. Y la va a cuidar mucho mejor que un *pool*, que trabaja 100 000 hectáreas, terceriza todas las labores y ni sabe dónde está el campo.

Es la explotación familiar sin duda, el tamaño ideal para hacer agricultura de ambiente y precisión y, desde allí, aportar al volumen. Muchos que produzcan mucho y diversificado: ese es el objetivo. Y no, pocos que produzcan mucho del mismo cultivo. Por eso decimos que al volumen no lo subestimamos ni lo subalternizamos: queremos resignificarlo, ponerlo en otra dimensión. No todo volumen representa lo mismo, ni es positivo para la comunidad.

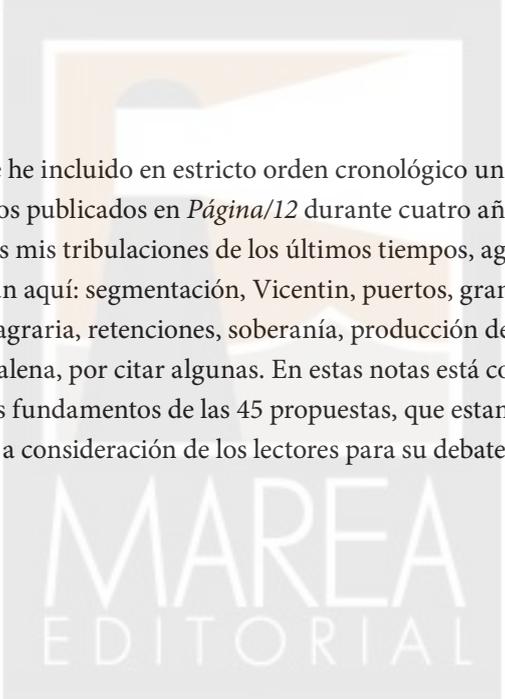
El desafío es sacudirse la modorra de décadas, dejar de aceptar a libro cerrado las teorías del neoliberalismo y tomar como propias sus directivas. Hay que poner lo agrario en el centro del debate. No tener miedo a discutir, proponer, arriesgarnos a equivocarnos. Lo que no podemos hacer es seguir ninguneando el tema o dejarlo en manos de los que nos venden y compran, sin importar las consecuencias de lo que hacen. Para lo cual es imperioso rescatar la rica historia agraria que tiene el peronismo.

El desafío es urbanizar el debate rural y crear un nuevo sentido común productivo con orientación social, que reconozca que no todo el campo es lo mismo, e incorpore definitivamente en su accionar la segmentación de las políticas públicas. Y esto requiere, como complemento indispensable, una nueva vara de medida del sector, que valore de acuerdo a nuestros intereses. Esto demandará un importante ejercicio de creatividad nacional y popular. Es en ese sentido va nuestra propuesta.

SEGUNDA PARTE

El campo al día
2020-2024

MAREA
EDITORIAL



En esta parte he incluido en estricto orden cronológico una selección de los artículos publicados en *Página/12* durante cuatro años, de 2020 a 2024. Todas mis tribulaciones de los últimos tiempos, agrarias y de las otras, están aquí: segmentación, Vicentin, puertos, granjas chinas, colonización agraria, retenciones, soberanía, producción de alimentos, Canal Magdalena, por citar algunas. En estas notas está contenida la mayoría de los fundamentos de las 45 propuestas, que estamos poniendo a consideración de los lectores para su debate.

Segmentación y puertos

El debate político que se generó en la legislatura bonaerense a partir del envío del gobernador Axel Kicillof de la Ley Impositiva trajo novedades muy auspiciosas para el debate político en general y agrario en particular. Puso sobre el tapete dos cuestiones centrales que estaban totalmente invisibilizadas, como son la segmentación impositiva y el tema de los puertos. En este caso nos vamos a ocupar de los puertos. La eficiente ministra del Gobierno, Teresa García, se quejó amargamente de que Juntos por el Cambio introdujo bajas en las tasas portuarias que cobra la provincia, en beneficio de grupos ultraconcentrados. Tiene razón. Se redujo el canon por tonelada cargada (léase: soja, maíz, girasol, trigo, etc.) de 93 a 46,5 pesos por tonelada descargada (léase: fertilizantes, glifosato, urea, etc.) de 273 a 139 pesos y por cargas removidas de 46 a 23 pesos. Bajas más que ostensibles, sin discriminar mercaderías de ningún tipo, porque una cosa es bajar o subir medicamentos y otra chuchería y/o accesorios para la sojización. Buenos Aires tiene más de 1500 km de costas y 12 puertos públicos. Según la ministra estos puertos tributan nada, todo queda en las arcas de misteriosos entes con fachadas público-privado, donde lo público nunca cobra ni gana y lo privado nunca paga ni pierde.

Santa Fe padece de un problema similar. Tiene 52 puertos privados en una franja costera de unos 100 km a la vera del Paraná que bordea Rosario, y allí facturan la friolera de entre 22 000 y 25 000 millones de dólares/año. Esa orla de ribera es tierra de nadie o mejor dicho solo de ellos. Cualquier ciudadano santafesino que quiera poner un kiosco debe pagar el 2,7 % de Ingresos Brutos; en cambio Cargill, Vicentin, Dreyfus etc., solo el 0,50 %. Según el diputado y periodista Carlos del Frade, las 18 empresas exportadoras más grandes de Santa Fe venden juntas el triple del presupuesto provincial de 2020; y pagan solo un tercio de Ingresos Brutos. Pero aparte de no tributar lo que corresponde consiguen que gobiernos dóciles le carguen al conjunto de la sociedad el pago de las obras de infraestructura que necesitan para mejorar la operatividad de sus fondeaderos. El 23 de septiembre de 2018 el ex ministro de Obras Públicas, Guillermo Dietrich, anunció 10 000 millones de pesos en obras para mejorar los accesos viales de los camiones a “sus puertos”. O sea, no pagan ni los impuestos, ni las tasas que deberían pagar y encima las obras para mejorar sus balances a partir de la optimización de sus instalaciones portuarias se las pagamos entre todos. Eso sí que es el colmo.

Para cobrarles a estos monstruos económicos lo que corresponde es fundamental una acción común entre la Nación y las provincias, aunque la competencia sea provincial. ¿Por qué? Sencillo y elemental. Si la Nación no interviene fijando el precio de los granos, estas multinacionales exportadoras terminan descargando el tributo provincial en los chacareros, que no son formadores de precios. ¿Cómo se hace? Fácil, pero difícil. El Parlamento nacional debe sancionar una ley de precio mínimo, sostén, obligatorio y en origen para los cereales que garantice que sea el precio internacional menos retenciones lo que efectivamente cobre el productor. Nunca o casi nunca sucede eso. Existe una doble retención (de hecho, es ilegal) que practican las exportadoras por su cuenta, que lo pueden hacer debido a la alta cartelización que tienen. Pagan lo que se les antoja, no lo que corresponde. Si el Estado no interviene regulando y controlando, el cartel cerealero está de fiesta.

¿Por qué la Mesa de Enlace no reclama por un precio y peso justo de los granos exportables argentinos y el periodismo especializado no visibiliza estas inequidades tributarias y de fiscalización? Muy sencillo, ambos son amamantados con los derrames de los mismos balances. Esto explica por qué no van gremialmente contra los exportadores y van contra el Estado. Ahora, si el Estado está en manos de complacientes con el “mercado”, son todos elogios para quienes lo conducen. En cambio, si está en manos de “populistas”, suena fuerte el escarmiento mediático.

Si queremos cobrarles a estos monstruos y que lo sufragan efectivamente ellos –y esto sí es clave comprenderlo–, necesitamos de medidas complementarias: precio mínimo, sostén obligatorio y en origen, para que no trasladen la imposición y lo paguen las exportadoras; prohibir la venta directa de granos, todo debe pasar por los acopios locales, sean cooperativas o privados; poner balanzas públicas 50 metros antes de los ingresos a todos los puertos, y operarlas con la máxima garantía de que ningún balancero se duerma justo en el “momento oportuno”. Parece mucho, pero no lo es. Más complejo fue estatizar YPF, las AFJP, o poner el ARSAT en órbita y lo hicimos. Cómo no vamos poder hacer “esto”, que está directamente relacionado con la lucha contra el hambre. Los recursos que necesitamos están allí, camuflados por los vivos de siempre a su entero beneficio.

Página/12, 13 de enero de 2020.

Pandemia y latifundio

A la zona geográfica denominada AMBA le corresponde el 3 % del territorio argentino, reúne el 36 % de la población y es el epicentro de la pandemia donde se producen alrededor del 60 % de los casos de coronavirus. El último censo agropecuario (2018) determinó que, desde 2002 a 2018, desaparecieron 82 652 explotaciones agropecuarias. Si le

sumamos las que quebraron durante la década del 90, que fueron 103 000, nos va a dar que en los últimos 30 años se nos esfumaron casi 200 000 chacras mixtas. Esto significó la pérdida de más de 900 000 puestos de trabajo en el sector rural. En el censo de 1988 la media promedio del tamaño de la explotaciones –que ya era altísima– pasó de 421 hectáreas a las actuales 826 hectáreas, un aumento del 96 %.

Argentina figura entre los 10 países que más deforestaron en el mundo. Un triste y peligroso *top ten* de depredadores ambientales, a los que Greenpeace acaba de ponerles nombre y apellido. En las últimas décadas perdimos casi 3 millones de hectáreas de bosques nativos y expulsamos a miles y miles de campesinos. Pregunta: ¿dónde se imaginan ustedes que fueron a vivir todos esos compatriotas expulsados del “campo”? A la Luna, seguro que no. Terminaron en los grandes centros urbanos como el AMBA, Rosario o Resistencia, un proceso que continúa con pandemia y todo.

¿Cuál es el hilo que conecta la gran concentración humana que se da en el AMBA con las pérdidas de explotaciones agropecuarias, la deforestación, la expulsión de campesinos, el hambre de nuestras comunidades originarias, la pérdida de empleos rurales, la fantasmización de los pueblos del interior, las migraciones rurales, el precio de los alimentos, el cáncer, y el latifundio? La conexión es el modelo de desarrollo productivo que instaló el neoliberalismo en nuestro país y que nosotros denominamos de *monocultivo inducido con concentración de tierra y rentas*. Esa es la causa, todo lo descripto son consecuencias. Allí está la madre del borrego.

Nunca ponen en el “debe” del modelo agrario a los conurbanos donde crece la pandemia, engordada a partir del monocultivo, el cáncer por glifosato, las inundaciones o el cambio climático. Nos impusieron una única unidad de medida sobre cómo calibrar el éxito o el fracaso de la política agraria, que es el volumen de lo cosechado, con destino a la exportación y, como derivación benéfica de este, lo que nos deja en la cuenta de las retenciones. Nos vendieron un modelo que,

según la visión neoliberal, carece de contraindicaciones. Pero los desastres están a la vista.

Esto nos sucede porque, para analizar lo agrario, utilizamos el mismo instrumental de medición que nos provee el neoliberalismo al que tanto criticamos. Es un caso típico de pereza teórica. Si nos guiamos por el GPS del enemigo nunca vamos a discutir seriamente un nuevo sentido común productivo con orientación social.

Por eso tomamos las consecuencias como causas y nos equivocamos. Desde hace décadas que ni nos acordamos del latifundio y la ocupación geopolítica del territorio nacional, el precio de los alimentos nos parece que lo pone el cielo. Parafraseando a Jauretche, analizamos lo agrario con el libro escrito por latifundistas, monopolios y supermercados. Con esos consejos nunca vamos a cambiar nada.

El gran acierto comunicacional de la derecha es que todas esas consecuencias del modelo de desarrollo agrario se traten como si no tuvieran nada que ver una con la otra y todas con él. Así la deforestación parece que “solo” es un asunto ambiental, desunida del latifundio, las urbanizaciones descontroladas, las inundaciones o la sojización, y de esa forma sucesivamente. Pero son todas cuentas del mismo rosario.

Nos impusieron como sentido común productivo que somos excelentes productores agrarios de un modelo extractivista que no tiene contraindicaciones. Pero la pandemia nos mostró una de sus peores caras, las villas de emergencia.

La excelencia del modelo agrario es una gran mentira que se edificó sobre la pereza teórica del campo nacional y popular. Fuimos muy indolentes. Aunque algo está cambiando. No es fácil, ni sencillo, tampoco es mágico. Lleva tiempo resolverlo. Alguna vez hay que empezar, y lo estamos haciendo. La segmentación de retenciones, el debate nacional por el impuesto a la riqueza, el proyecto de adicional inmobiliario rural provincial al latifundio, del diputado santafesino Leandro Busatto, el gravamen a las grandes explotaciones agrarias, del intendente Francisco Echarren de Castelli son solo algunas de las varias iniciativas que

marcan que otros aires comienzan a soplar. Bienvenido el debate, nos asiste la razón. Pero: “Razón sin fuerza es como un tractor sin motor”.

Página/12, 27 de mayo de 2020.

Vicentin: la lucha continúa

Cuando el 5 de junio a las 17 horas el presidente Alberto Fernández anunció la intervención y posterior expropiación de Vicentin, lo hizo con el mejor argumento que puede esgrimir un gobierno que se precie de nacional y popular en estos temas. Defender las fuentes de trabajo rescatando una compañía quebrada para recrear una empresa pública que sea referente del comercio exportador de granos y ayude a la soberanía y seguridad alimentarias de la Nación. Irreprochable desde todo punto de vista.

Un proyecto que tenía y sigue teniendo toda la legitimidad política, jurídica y económica. La senadora Anabel Fernández Sagasti sabía muy bien sobre qué legislaba: una Vicentin pública en tándem con YPF Agro era un punto de partida extraordinario para empezar a discutir muchas cosas en este país que la derecha intenta invisibilizar. Ejemplo: pesar bien las exportaciones, el importe de transferencias de las mismas, fletes, coste de los alimentos en el mercado interno, entre otros asuntos. Una empresa testigo nos permitiría monitorear estas dos variantes esenciales para el proyecto popular como son el precio de los alimentos y los ingresos fiscales para financiarse.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) o lo que sea, necesitan de plata para poder realizarse, es decir, recursos fiscales. Si la ayuda es solo monetaria y no controlamos el costo de los alimentos y desmonopolizamos su producción, nos vamos a encontrar que todo lo que monetizamos en los bolsillos por ayuda social lo terminan chupando los balances de los súper y monopolios alimenticios vía inflación.

Estimaciones privadas indican que, de los 3800 barcos graneleros (el *bulk carrier* más chico carga entre 30 000 y 45 000 toneladas) que se cargaron en el puerto de Rosario en 2018, se evaporaron 380, o sea el 10 %, solo por no pesar bien las exportaciones. Esto, a precios de la época, significó que dejaron de ingresar divisas por 1900 millones de dólares y no se pudieron cobrar retenciones por 740 millones de dólares (en ese entonces se pagaba 4 dólares por dólar exportado). Esto por pesar con el sistema *draft-survey* (a “ojo”), además de los otros ítems evasores como son la subfacturación y las triangulaciones.

Allí están los recursos fiscales que nos faltan. No necesitamos que la cadena agroindustrial “le haga la cabeza” a nuestros funcionarios para “venderles” que podemos exportar por 100 000 millones de dólares. Puro y viejo cuento que solo sirve para justificar la depredación de lo poco humano que queda en pie en nuestra ruralidad. Nos damos por hechos con que pesen bien lo que exportan y paguen los impuestos que corresponden: con eso solo alcanza y sobra. Por eso no quieren empresas testigo, ni políticos progresistas que husmeen sus cuentas.

El principio de acuerdo que, según trascendió, arribó a la provincia de Santa Fe con Vicentin SAIC es exactamente lo contrario al objetivo primigenio que fijó nuestro presidente. Se nota mucho la mano de los sectores ruralistas anti-Estado, que encabeza el ministro Daniel Costamagna. Este activo militante de la candidatura de Mauricio Macri fue el primer impugnador del proyecto original. Nuestro presidente deberá seguir esperando la propuesta superadora, sin duda esta no lo es.

La Argentina no puede capitalizar sus acreencias en un fideicomiso como el que propicia el juez Lorenzini, que terminará devolviendo una empresa saneada a sus vaciadores y que es –además– una pantalla para el arribo de otros grandes jugadores del mundillo hiperconcentrado de la exportación granarí, donde el 9 % del mercado de Vicentin es un verdadero *bocato di cardinale*. No dejemos que nos arrullen con cuentos. Ahora, debemos desarrollar el fideicomiso de YPF Agro, quedarnos con el puerto de Vicentin, el frigorífico FRIAR y la aceitera. Ya

los pagamos. La plata que íbamos a poner en la expropiación coloquémosla en la refundación de la Flota Mercante Nacional.

No vamos a arriar la bandera de la soberanía y la seguridad alimentarias de nuestro pueblo ni la de empresa testigo, pero debemos convenir que necesitamos toda la fuerza junta para cinchar contra la derecha, porque diálogo sin lucha es como querer quitarle la pelota a Messi hablándole al oído.

Página/12, 21 de julio de 2020.

Los cerdos, ¿un negocio chino?

Estoy de acuerdo con que suscribamos un convenio con la República Popular China para exportarle carne de cerdo. También en que aumentemos la cantidad de madres en gestación para abastecer dicho convenio. Pero no estoy de acuerdo para nada en que lo hagamos en 25 megagranjas de 12 500 madres cada una, localizadas en el NEA y el NOA. Eso representa 312 000 nuevas madres. Un negocio para muy pocos, y todos grandes.

En cambio, estaría muy de acuerdo en poner 2000 chacras mixtas, de 200 madres cada una, diseminadas a lo largo y el ancho del territorio nacional. Eso daría 400 000 madres. Es un proyecto más grande en volumen, más sustentable desde lo ambiental, que genera arraigo (del bueno). Es una idea más aconsejable desde lo político para un gobierno popular como el nuestro.

Además, todos los insumos para hacer las granjas son en pesos, con lo cual lo podemos resolver perfectamente con el sistema financiero local, sin recurrir al endeudamiento externo. Nuestra producción debe combinar tamaño de la explotación, volumen con medioambiente, población (arraigo) y distribución de renta y riquezas. Hay que consultar al INTA, que sabe –y mucho– de esto.

Hoy la producción agropecuaria en general y el cerdo en particular se puede hacer con productores o sin ellos. Que haya chacareros en el ejercicio profesional de la actividad agrícola es una decisión política del Estado. Pues el volumen productivo se consigue igual sin ellos. Se puede sembrar toda la soja, el maíz y el trigo, criar todas las vacas o atender todos los cerdos sin un solo chacarero.

Los productores somos necesarios desde el punto de vista social, político, económico, cultural, geopolítico, pero no productivo. El capitalismo, a partir del desarrollo científico-técnico, resolvió la cuestión de la productividad sin depender del chacarero. Eso es así. Pruebas sobran y están a la vista. Por eso decimos que no hay agricultura familiar chacarera sin una alianza con el Estado y la sociedad. Esta debe decidir quién quiere que le produzca los alimentos, si miles de productores o un puñado de megaempresas concentradas e integradas verticalmente.

Esa es la madre de todas las batallas. La decisión es política, no productiva. Más campo trabaja y produce José Estanciero, menos lo hace Pepe Chacarero. La tierra es un bien finito, hay la que hay y no se puede fabricar más, por lo cual no se puede tratar como iguales a lo que son estructuralmente distintos. Por eso, si el Estado popular no actúa a favor de la agricultura de rostro humano, ni el Chapulín Colorado la salva de su desaparición.

Este megaproyecto de cerdos es desaconsejable desde todo punto de vista. Solo apunta a resolver las cuestiones de flete de maíz y soja de los grandísimos (son más que grandes) terratenientes que se quedaron con las tierras de los desmontes del área geográfica del Plan Belgrano, y deben traer sus productos a los puertos del Paraná. Son 8 millones de toneladas de maíz, o sea, 266 666 viajes de camión de 1000 km promedio, un costo altísimo en fletes. Tremenda irracionalidad: desmontaron bosques naturales para sembrar soja, expulsaron campesinos y pueblos originarios, incrementaron las inundaciones y el cambio climático y ahora nos encajan estas megagranjas porcinas y nos hablan de eficiencia. Es demasiado.

Por último, no es cierto que los estados provinciales estén en condiciones de controlar estos emprendimientos gigantes con gran capacidad de *lobby* y con todas las chances de seguir escalando en tamaño. Esto pone en serio riesgo al 65 % de los productores porcinos, que son pequeños y medianos. Debemos firmar el acuerdo con China, pero hacerlo al uso nuestro, con productores de rostro humano adentro, y como protagonistas. No hay eficiencia porcina sin chancheros de carne y hueso.

Página/12, 12 de agosto de 2020.

Falta un instituto de colonización agraria

La concentración de tierras en Argentina es bestial. Y la necesidad de tierras para hábitat y producción de alimentos es insoslayable. Es necesario un instrumento de intervención del Estado en el mercado de tierras que las distribuya y garantice la seguridad y soberanía alimentarias.

El 29 de octubre fue un día aciago para los que queremos una Argentina para todos, pero de los momentos difíciles hay que sacar conclusiones. Los casos Guernica y Etchevehere²⁸ ponen sobre el tapete las dos puntas de un tema que no podemos seguir soslayando un minuto más en el debate público, como es el uso y tenencia de la tierra, sea rural o urbana.

Según el censo agrario de 2018, solo el 0,06 % de la población de Santa Fe es dueña del 60 % de la tierra productiva de esa provincia, y apenas 5678 personas que representan el 2,49 % del total de los

28 El 29 de octubre de 2020 dos mil familias que habían tomado tierras en Guernica (provincia de Buenos Aires) fueron desalojadas por la policía. El caso Etchevehere se desató al hacerse público el conflicto que los tres varones de la familia y su madre sostienen con Dolores, la única hija mujer por la herencia familiar.

propietarios son dueños de 80 280 797 hectáreas de todas las tierras del país. Como vemos, la concentración de tierras es impactante y bestial.

Para este escriba, la existencia de tierras fiscales no es más que un mito urbano, y la que existe no mueve el amperímetro en cuanto a la cantidad. El gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina es invisibilizar el latifundio como si fuera algo inocuo y normal, cuando es una verdadera rémora feudal. El monocultivo de soja con concentración de tierras y rentas es un expulsor neto de productores y destructor de mano de obra asalariada. Por eso la Argentina, a pesar de ser definida como un país agropecuario, es uno de los tres más urbanizados del mundo.

Para empezar a revertir esta insostenible situación, el Estado debe crear algún instrumento de intervención pública en el mercado de la tierra que, sin expropiar (palabra prohibida en la Argentina de hoy), le permita comprar, parcelar y entregar tierra urbana y rural.

Esto no es nuevo en la historia argentina, ya en 1940 se creó el Consejo Agrario Nacional, disuelto por la dictadura en 1980, que cumplía esas funciones. Nuestros vecinos uruguayos tienen el Instituto Nacional de Colonización Rural, creado en 1948 y en perfecto funcionamiento hasta nuestros días. Este maneja hoy unas 650 000 hectáreas en el país vecino, compra tierras y las distribuye entre pequeños productores, peones rurales, pastajeros.

Con la característica –no menor– de que la entrega de tierras se hace merced a un sistema de arrendamiento perpetuo que pueden heredar de padres a hijos. El objetivo del mismo es que el beneficiario no pueda enajenar la tierra, ni transformarla en un negocio inmobiliario. Esto es clave. La tierra es un bien finito, hay la que hay, no se puede fabricar más, por eso hay que administrarla y distribuirla con equidad.

La Argentina debe recrear por ley un Instituto Autárquico de Tierras (el nombre no interesa, sí la función) con el fondeo de un porcentaje fijo de las retenciones e incorporar todas las tierras fiscales que existan. Este deberá encargarse –sin expropiar– de comprar, parcelar

y entregar tierras con el fin de garantizar la soberanía y seguridad alimentarias de la Nación y el hábitat de sus habitantes. Nadie debería poder acceder a más de una Unidad Económica, ni enajenar ni subarrendar lo recibido.

La clave de este tipo de instrumento está en su grado de capitalización, la obligación de su ejecución presupuestaria y la transparencia con que procede. Sin recursos, se transforma en un ente meramente decorativo, que solo sirve para tranquilizar conciencias.

Y a nosotros no nos interesa salvar las formas, sino resolver el problema.

No tengo dudas que, dadas las actuales circunstancias del país, es el instrumento más apto para generar nuevos productores agropecuarios, reconvertir a las franjas periurbanas a la agroecología, propiciar el consumo de cercanía y generar arraigo en el interior profundo, mitigando las migraciones rurales descontroladas... ¡Si se pudo, se puede!

Página/12, 15 de noviembre de 2020.

Reflexiones sobre el paro

El Gobierno nacional suspendió por sesenta días las exportaciones de maíz para que el remanente pueda empalmar con la nueva cosecha y no falte materia prima. A la par, se abrió una negociación. El maíz se puede seguir vendiendo en el mercado interno, no bajó de precio y sigue estando muy demandado. Es decir, a los productores genuinos la medida no los afectó en nada. La Mesa de Enlace, que dice representar los intereses del sector productor, decretó un paro. ¿Por qué y para qué lo hizo? ¿Es tan mala la situación del sector?

Veamos: durante la pandemia el sector agropecuario fue declarado como “sector esencial”, merced a lo cual pudo seguir sembrando, cosechando, transportando, almacenando, vendiendo y exportando con total normalidad. Cerró un año magnífico. Tal es así que el presidente

de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, uno de los convocantes al paro, reconoció que el sector redondeó una ganancia del 30 % en dólares. ¡Sí!, leyeron bien. “¿Es eso un pecado?”, se preguntó con desfachatez. Con el 40 % de la población debajo de la línea de pobreza y esa rentabilidad, el pecado es que tenga el tupé de decretar un paro. El lector se interrogará sobre si las retenciones del maíz están muy altas. Solo tributan el 12 % en concepto de derechos de exportación. En el paro de 2008 estaban en el 24.5 %.

Tratando de buscar una explicación al paro, se me ocurre que el sector quizás se siente desatendido por el Gobierno. Pero, ¡para nada! Acaba de consumarse la más extraordinaria política pública de segmentación de retenciones, largamente exigida por la FAA, la misma entidad que decretó el paro. Se le devolvieron 6242 millones de pesos a 33 088 pequeños y medianos productores de soja de todo el país. Solo Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof lo habían hecho en 2015. ¡Pavada de política pública! Aclaración más que pertinente: todo el que siembra soja, siembra maíz. Y además se le sacaron –sí, sí: le sacó– retenciones a cerca de 40 cultivos de las economías regionales. Es decir, las puso en cero.

Repasemos: ganaron plata como nunca, les devolvieron y les sacaron retenciones, nunca estuvieron con las tranqueras cerradas, tienen derechos de exportación medidos en términos históricos más que bajos, la disposición regulatoria que tomó el Gobierno no los afecta directamente y además es temporal, y son atendidos por el ministro cuantas veces llaman. ¿Qué quieren? Tumbar al Gobierno, eso quieren. Hay que decirlo.

El paro es estrictamente político porque, como vimos, no existe ninguna razón de peso gremial para decretarlo. Por otra parte, es el segundo que le hacen en menos de un año al gobierno del Frente de Todos. La Mesa de Enlace modelo 2021 nada tiene que ver en cuanto a representatividad sectorial con la de 2008. Esta es una mera y devaluada línea interna de Cambiemos, conducida por la inefable Dra.

Elisa Carrió, carente de la más mínima visión integral y condoliente de lo que les sucede al país y al mundo. Todo le resbala. A esta Mesa de Enlace solo le preocupa cambiar su 4x4 y entorpecer la labor del Frente de Todos.

No reconocen el resultado electoral. El gobierno de Alberto y CFK es el único caso en la historia argentina que, 17 días antes de asumir, a la vera de las rutas, estos mismos sectores le hicieron una protesta. Son golpistas, odian al kirchnerismo, no al peronismo. Con el peronismo de Schiaretti, Duhalde, Urtubey se llevan muy bien. Ahora, lo que no me puedo explicar es por qué el Gobierno no se defiende. Eso sí que no lo sé, ni lo entiendo.

Página/12, 17 de enero de 2021.

Las trampas de la Mesa del Maíz

El objetivo es confundir a la opinión pública para que el negocio de la exportación de maíz sin procesar siga sin ningún tipo de control ni regulación.

Vamos a tratar de desenmascarar las artimañas comunicacionales que pergeñó la Mesa del Maíz con el objetivo de confundir a la opinión pública para que el negocio de la exportación de maíz sin procesar siga sin ningún tipo de control ni regulación.

Una cantidad de cámaras patronales, que representan al gremialismo del volumen sin rostro, han firmado un acta-acuerdo para proponerle al Gobierno más de lo mismo. En el primer punto del escrito se vanaglorian de una verdad de perogrullo: que no va a faltar maíz en el mercado interno. ¡Vaya novedad! Como si esto fuera un logro que merece destacarse en un país que produce 50 millones de toneladas y consume solo entre 13 y 14 millones.

Los puntos del conflicto no están ahí. Se encuentra en lo siguiente:

1. Que blanqueen “todo” el maíz, no una parte.
2. A qué precio van a abastecer al mercado interno de ese insumo básico difundido para la producción de alimentos. Ese es el asunto a resolver; no la oferta.

Para confundir, publican números (propios) de la baja incidencia de los granos en el producto final en góndola. Esas cifras las provee la Sociedad Rural y son risibles por lo fulleras. Dicen, por ejemplo, que en el pollo solo incide en un 21 %, en la leche un 8 %, en el asado un 7 %, y en el pechito de cerdo un 10 %.

Primera trampa: cuando estamos discutiendo la incidencia del precio internacional de los *commodities* en los alimentos, es *maíz más soja*. Ya que la alimentación animal en confinamiento es balanceada y depende de estos dos insumos en distintas proporciones. Cuando se dice que importamos inflación, es por los dos: por el maíz y la soja.

Segunda trampa: cuando alguien lleva una vaca al mercado, no la vende por partes. No vende solo el asado, vende el novillito entero. Y el carnicero compra la media res entera. Cómo llegan a ese 7 % en el precio final sumando maíz y soja es un enigma. Es un dibujo ese número.

Tomemos el caso del cerdo: la Sociedad Rural dice que el maíz solo incide en el pechito el 10 %. Según datos que provee el INTA Marcos Juárez, el 65 % del costo total del cerdo es la alimentación, y esa alimentación se compone de 68 % de maíz y 29 % de soja (*expeller*). Cómo llegan a ese 10 % es un misterio.

Tampoco es válida la propuesta de hacer competir con instrumentos financieros o en los mercados de futuros a los demandantes del grano interno con los exportadores. Eso es dolarizar el precio en forma plena. ¿Quién le va a vender al mercado interno si no paga igual que la exportación? ¡Nadie! Hay que desacoplar, pero con segmentación.

Es urgente que el Gobierno urbanice este debate, lo saque del gueto rural y lo comunique debidamente. La sociedad debe saber cómo se construyen los precios de los alimentos. Necesitamos rehacer la vieja

Dirección de Economía Rural y Estadísticas para que provea de datos propios al Estado.

No podemos seguir discutiendo con los “números prestados” de la Bolsa de Comercio o de las entidades agrarias. El grado de concentración de productores maiceros es altísimo y el pueblo debe saberlo. Son datos tan ocultos como obscenos.

No se puede tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos. Por eso hay que segmentar por cantidad de hectáreas, tal como se hizo recientemente con los pequeños productores de soja. Una política pública virtuosa más que justa desde lo fiscal y con mucha implicancia social.

Página/12, 29 de enero de 2021.

De carne somos...

El presidente expresó lo que es el centro del debate político que enfrenta al campo nacional y popular con la oligarquía terrateniente argentina. Desde el 28 de mayo de 1946, cuando Perón creó el IAPI, se discute lo mismo, que “Los productores de alimentos entiendan que no pueden cobrar el mismo precio que exportan”. La política histórica del neoliberalismo fue bajar el consumo para que crecieran los saldos exportables, y que el Estado no regulara nada. Ese es el mundo ideal de la derecha y el infierno de los gobiernos populares. Parte de esto sucedió en 2020 porque fue el año de menor consumo del último siglo y de mayor volumen de carne vacuna exportada en décadas: llegamos a las 917 200 toneladas, de cada 10 kilos de carne exportada, 7 fueron a China.

La carne vacuna en la Argentina es antes que nada un dato cultural a diferencia de las otras carnes. La incidencia del maíz más soja en su costo de producción también es diferente. Los novillos para faena

solo consumen balanceado los últimos cien días de engorde, el resto de los kilos se “hacen” con pastizales. En cambio, el cerdo o el pollo, desde el minuto cero, comen balanceado. Por eso es que se debe mirar con otra óptica lo que sucede en este mercado.

El Gobierno debería controlar más a supermercados y frigoríficos. Impedir, por ejemplo, que Coto o La Anónima estén “integrados verticalmente” como lo están. Son dueños de la vaca, el *feedlot*, el frigorífico consumidor, el frigorífico exportador y la venta minorista en la góndola. Que te pongan el mismo precio interno que el de la exportación es solo una decisión política de los accionistas. Entendí bien, dije decisión política. Acá hay que analizar seriamente: prohibir a los supermercados vender carnes frescas (cualquiera), todo debe pasar por las carnicerías. Sería conveniente fortalecer los mercados de referencia, como el de Liniers y el de Rosario (al que lo tienen contra las cuerdas) y crear al menos cuatro más en el NEA, NOA, Córdoba y la Patagonia. También prohibir la venta directa del productor-engordador al frigorífico o, al menos, un 50 % de la hacienda de faena debería pasar bajo martillo físico o televisado.

La inefable Mesa de Enlace sostiene que el aumento del precio de la carne no es por el aumento del maíz, sino por los impuestos. Veamos: la carne en el último año aumentó un 75 %, la inflación fue del 36,1 %. No creció la presión fiscal en 2020, solo hubo una actualización de los DEX a partir de la sanción de la Ley de Solidaridad Fiscal. Las tarifas estuvieron congeladas, el salario mínimo y vital aumentó 33 %, el gasoil 25 % aproximadamente, y las minidevaluaciones del Banco Central siguieron la inflación. ¿Y entonces por qué subió la carne como subió? Una (solo una) de las explicaciones es el aumento del maíz, que fue de un 94 % en el año, y el de la soja, un 40 % en dólares. Este fuerte aumento de los *commodities* incide, más que claro que incide, pero en la carne vacuna no tanto como en las otras carnes, donde su impacto es mucho mayor. Acá hay puja distributiva pura y dura y el Gobierno debe intervenir.

Ahora bien, el maíz necesita un tratamiento especial, ya que es un insumo básico difundido de la alimentación animal que termina

en la mesa de los argentinos y el presidente dijo que: “El Estado tiene solo dos herramientas, subir las retenciones o poner cupos”. Tiene más, hay que imaginar cosas. Hay que desacoplar –sin dudas–, pero sería un error político fatal que ponga a todos los productores de maíz en la misma bolsa. Tenemos la exitosa experiencia del año pasado, cuando el Gobierno devolvió retenciones a 35 000 pequeños productores de soja con un sistema segmentado novedoso, justo y eficiente. Hay que desacoplar, pero segmentando. Y en el maíz hay que bajar la escala a las 200 hectáreas. No diferenciar a los productores maiceros por tamaño sería un error político fatal con consecuencias electorales.

El Gobierno tiene otro instrumento de gran importancia para hacer valer en la discusión por el precio de los alimentos con las exportadoras de maíz y soja, que debe usarlo en plenitud y con rigor. Poner la lucha contra el contrabando arriba de la mesa de negociación. Se viene la licitación de la Hidrovía y la caducidad de la concesión de varios puertos. Dos temas que, al principal segmento comercial (sospechado de evasión y contrabando) que maneja la exportación de maíz y la soja le interesa de “sobremanera”. Controlando “eso”, no necesitaría mover ningún DEX.

El presidente, al igual que Cecilia Todesca Bocco, pusieron mucho énfasis en que el diálogo con el sector está abierto, que hay mesas por productos, y que espera que estas les aporten una solución que contemple la mesa de los argentinos. Es “difícil que el chanchito chifle”. No obstante, tengamos fe. Pero sepamos que: razón sin fuerza es como un tractor sin motor.

Página/12, 8 de febrero de 2021.

¿Por qué atacan a las retenciones?

Una serie de *fake news* recorre los grupos de WhatsApp generando dudas y desinformación sobre el origen, función y legitimidad de las

retenciones. Estas no son más que un instrumento de política económica, ni más ni menos que eso. Son un medio, no un fin en sí mismo. Coadyuvan al objetivo final de una determinada política económica que, en el caso de los gobiernos populares, es procurar el bienestar de todos/as, protegiendo a pequeños chacareros y mejorando el acceso a los alimentos de los sectores populares. Sirven más que bien si se las aplica bien a los dos objetivos, aunque la experiencia aconseja no enamorarse de los instrumentos de política económica. Es como si uno juntara frutas con una escalera, se deslumbrase con la escalera y se olvidara de la fruta.

La derecha tuvo la habilidad política y comunicacional de poner a las retenciones a la altura de un verdadero fetiche ideológico y convertirlas en un objeto de culto *per se*. Esto le permitió cavar en torno a ella una trinchera más que eficaz para enfrentar y hostigar a los gobiernos populares y sumar tras de sí a toda la pequeña y mediana burguesía rural.

¿Para qué sirven? Se las puede usar para variados fines. Entre otros: para desacoplar los precios internacionales de los nacionales, evitando “importar” inflación; o para fortalecer a un determinado sujeto productivo, como los pequeños productores, frente a los grandes terratenientes. O simplemente para mejorar las cuentas fiscales, aumentando la recaudación sin otro tipo de consideración o intencionalidad.

También podrían usarse (si bien en nuestro país aún no nos “animamos” a tener esa mirada) para diferenciar positivamente una forma de uso del suelo. Por ejemplo, reducir la gabela al que tiene una chacra mixta o hace agroecología. Son más que flexibles, se la pueden usar solas o en combinación. Así sucede con los “cupos de exportación”, el control de precios o las juntas reguladoras. Y no son, necesariamente, de uso continuo, sino cuando se las requiere.

Como todo instrumento, depende exclusivamente de quién lo use y con qué objetivo. Es como un cuchillo: puede servir para el noble fin de comer un asado o para atacar a alguien.

¿Cómo se aplican? Esto es muy importante. Se las puede emplear

de dos maneras: en forma “plana”, eso significa poner a todos los productores en la misma bolsa y cobrarle una tasa fija, cualquiera sea el tamaño y volumen de su explotación; o en forma segmentada. Se la puede usar de forma móvil o fija. Su ductilidad es muy alta a la hora de aplicarla, por eso en más de 80 países en el mundo la utilizan de distintas formas. Es un instrumento que no envejece.

Su ausencia o presencia en el escenario económico no es garantía de bienestar general. Por ejemplo, durante el gobierno de Carlos Menem, hubo retenciones cero, y se desarticuló todo el cerco jurídico estatal de protección de pequeños productores y consumidores. En ese mismo período, desaparecieron 103 000 explotaciones agropecuarias (todas mixtas), se pulverizaron 900 000 puestos de trabajos, 600 pueblos rurales quedaron al borde de su desaparición y se hipotecaron (¡vaya dato!) 12 000 000 de hectáreas, solo en el Banco Nación. Todo sin retenciones.

En el periodo siguiente con Néstor y CFK, con retenciones, no se fundió ni se remató a nadie y se levantaron todas las hipotecas. Lo que importa es el objetivo final, no el instrumento. Todo depende quién lo maneje y en función de qué. Un gobierno que se precie de popular no puede tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos. No puede aplicar la misma retención a un productor de 50 hectáreas, que a otro de 500, o a otro de 50 000. Son todos sujetos de distinto tamaño que deben tratarse en forma disímil. Más progresista es un gobierno cuando más discrimina a sus productores por el tamaño de sus campos.

Página/12, 17 de febrero de 2021.

La Argentina sangra por la Hidrovía S.A.

Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, tal es el título del excelente libro que publicó Luciano Orellano, donde sitúa el debate de

la Hidrovía en el contexto de la lucha por la soberanía del río Paraná. Y lo enmarca dentro de la unidad geográfica que lo contiene: nos referimos a la Cuenca del Plata. Esta será clave en la economía agraria de la década que viene. Son 3 500 000 km² donde se siembra y despacha la soja y el maíz de parte de Bolivia y Brasil, más Paraguay, Uruguay y Argentina. Cinco mil barcos ingresaron en 2019 en esa cuenca y 2632 arribaron al polo exportador rosarino, desde donde partió el 75 % de nuestras exportaciones. Casi todos, con el mismo destino: el sudeste asiático. Dos de cada tres barcos que salen de nuestro país van a China. Ese destino, desde la década del 90 para acá, modeló a la Argentina agraria.

En 1996, China producía y consumía 15 millones de toneladas de soja por año. En 2021 produce las mismas toneladas, pero consume alrededor de 115 millones. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) predijo que, para 2030, China va a necesitar 140 millones de toneladas. Según los especialistas, los rindes agrícolas podrían aumentar a un ritmo del 1 o 2 % por año. Y las necesidades asiáticas necesitan un crecimiento del 3,5 % por año para estar satisfechas.

Esta demanda *a priori* es una buena noticia para la economía argentina, pero plantea serios dilemas que hay que empezar a prever, ya que presionará fuertemente al interior de nuestro país en dos direcciones. La primera es la cuestión ambiental, puesto que los pedidos de soja van a empujar la ampliación de la frontera agropecuaria, y esto incrementará la coacción sobre nuestros bosques nativos. Tierra hay la que hay, no se puede fabricar más. La Argentina (sensata) no resiste un metro más de soja ni un centímetro menos de bosque.

La otra tensión va a ser, sin duda, sobre los precios internos de los alimentos de consumo masivo. Hoy, a partir del proceso de urbanización que impulsaron desde la década del 90, los chinos elevaron los niveles de consumo de proteínas de origen animal en cerca de 50 kg per cápita. Y eso hay que sostenerlo, para lo cual hay que

alimentar a esos cerdos y esas aves, y eso se hace con maíz y derivados de la soja.

La Cuenca del Plata será –sin duda– uno de los lugares donde vendrán a buscar ese y otros abastos. El trigo –también– es un cereal históricamente de alta demanda. A dos meses de la última cosecha, ya está comprometido con la exportación el 90 % de lo cosechado. Y los molinos, ¿con qué materia prima y a qué precio van a atender el mercado interno? Conflictos en puerta.

Estas demandas externas van a menear el mercado interno por la próxima década, para lo cual hay que administrar correctamente esta tensión y hacer la faena con antelación y talento. Esto es clave para resolver el problema inflacionario y mejorar la calidad de vida de los sectores populares. Más allá de la coyuntura, la Argentina debe encontrar algún mecanismo permanente, inteligente y creativo de intervención y regulación de su mercado granario. Necesitamos salirnos de esta lógica de exportar sin industrializar y empezar a construir otro modelo de producción de alimentos para humanos.

Esta reconversión debe hacerse con la inclusión de pequeños productores y pymes, hay que evitar reproducir el actual modelo de integración vertical monopólica de la producción de alimentos. Cambiar esto no es soplar y hacer botellas, pero hay que empezar, porque el actual “modelo” es desaconsejable desde todo punto de vista.

La demanda china es una gran oportunidad para generar ARRAIGO y desarrollo rural en el interior profundo, pero hay que aprovecharla con sabiduría. Un gobierno popular solo puede pactar transitoriamente con los monopolios, no puede pensar y/o apoyar su política de alimentos en una alianza permanente o negociando “solo” con ellos. Sería un error fatal. Por eso son tan importantes las elecciones, para reunir fuerza con votos, ya que razón sin fuerza es como un tractor sin motor. Está, pero no te lleva a ningún lado.

Página/12, 11 de marzo de 2021.

Campo y automotrices no son lo mismo

La quita de retenciones a las exportaciones industriales es un incentivo no equiparable a su aplicación a las exportaciones de granos. ¿Se cree que así se fomenta la industrialización del agro? La cuestión es otra: de qué modo hacer ese proceso de transformación de la producción.

Roberto Arias, el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, dijo: “[...] tenemos el desafío enorme de industrializar todos los productos del agro”, objetivo que compartimos y militamos denodadamente. La cuestión es cómo y con quién lo hacemos. Pues se puede hacer de dos maneras: con productores, pymes y despliegue territorial, o con megaempresas integradas verticalmente. Esa es la clave entre ser un país o ser una factoría.

Sindicatos, empresas y gobierno llegaron a un acuerdo en el sector automotor, a partir de concertar que el incremental de las exportaciones pagaría cero de derechos de exportación (DEX). Los monopolios exportadores de granos y alimentos nucleados en la cadena agroindustrial pretenden replicarlo, aunque son sectores radicalmente distintos.

El complejo automotor está compuesto por un puñado de empresas transnacionales. El objetivo central del Estado allí, aparte de lo fiscal, es la preservación de la fuente de trabajo y su ampliación a partir de la incorporación de mayores componentes nacionales en el producto final. Pero en el sector agrario es otra cosa, no hay cadena internacional de valor donde insertarse: aquí todo es producción local. Y ese “cero retenciones” en el incremental de exportaciones en empresas monopólicas e integradas verticalmente es letal para pymes y productores. Monopolios integrados verticalmente en el rubro alimenticio desestabilizan la gobernabilidad democrática, no bajan los precios y expulsan productores. ¡Por favor, no subestimen esto! Hay que entender el país que se gobierna.

Coincidimos con el secretario, en cuanto a que los DEX no sirven para todo y son solo “un instrumento” de política económica, del cual

no hay que enamorarse. Pero es también peligroso replicarlo como copia de un sector a otro.

La segmentación de retenciones tiene por objetivo proteger al más débil, no al más poderoso. En el caso de las aceiteras, favorecerlas con un diferencial es proteger al león frente al cervato. No es cierto que el complejo aceitero haya prosperado por los 3 puntos de diferencial que había a su favor en 2015. Se hubieran desarrollado igual, porque el verdadero diferencial que tienen estos colosos en nuestro país son las tierras, el Paraná y el recurso humano. Esos 3 puntos que obtuvieron saben más a concesión excesiva de los 90 que a una promoción industrialista seria. Detalle no menor: sí les sirvieron para competir deslealmente con productores (pequeños y medianos) por la tierra para sembrar.

Veamos: una década atrás, recibimos múltiples denuncias acerca de que pequeños chacareros arrendatarios eran desplazados por una gran exportadora nacional (no era la única) que pagaba varios quintales arriba de los precios del mercado. Dicha empresa es nacional y posee 40 acopios primarios en el interior, la concesión de una línea de ferrocarril (NCA), dos puertos, varias aceiteras y una planta de biodiésel. Y encima le daban tres puntos menos (diferencial) de retenciones en el producto final. Tal diferencial los usaba para arrendar campos, bajando costos y asegurándose la materia prima. Competencia totalmente desleal: integración vertical, concentración económica, desplazamiento de productores, sojización, migraciones rurales. Todo lo que NO hay que hacer en materia de desarrollo agrario está allí. Cuéntenlo como quieran, pero esta es la realidad y no es un caso aislado: es la norma en el sector.

El modelo de industrialización debe ser a partir del interés nacional y no del de las corporaciones. A la hora de aplicar los DEX con el objetivo de generar trabajo y exportaciones, hay que ponderar otras cuestiones además del volumen. Se debe considerar el abasto del mercado interno, la ocupación geopolítica del territorio (arraigo), el medioambiente, los productores y el tamaño de las empresas. La tierra

y sus derivados (los alimentos), no son fierros o aluminio: son productos estratégicos para la supervivencia.

El Consejo Agroindustrial Argentino quiere usufructuar en beneficio propio el acuerdo de la industria automotriz. Por eso el plan que le presentó al Gobierno reclama estabilidad fiscal por diez años para las nuevas exportaciones de alimentos. Un verdadero disparate fiscal, político y ambiental que atenta contra la seguridad alimentaria y la democracia. Es darle la llave del país a un grupo de monopolios extranjeros asociados a la burguesía intermediaria (no confundir con la nacional) para que nos saqueen *a piacere*.

Página/12, 25 de marzo de 2021.

El vínculo entre pobreza, empleo y política agraria

Con el 42 % de pobreza, para un gobierno que se precie de nacional y popular, el objetivo no puede ser otro que generar trabajo y “del bueno”. Y, en el mientras tanto, atender la situación social. Para revertir estos niveles de penuria es necesario, como dice el ministro de Trabajo, Claudio Moroni: “Aplicar un modelo que genere empleo en todo el país”. Y completa el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico “la economía argentina tiene que crecer de abajo”.

Esto debería ser así, pero no lo es. La “logia primarizante” que domina las exportaciones argentinas hace exactamente lo contrario. Su único objetivo es transformar el volumen a secas en el valor absoluto de sus prácticas exportadoras. Nada de lo que pueda agregar al volumen trabajo les interesa.

Para un gobierno popular, es la receta contraindicada: es muy mal negocio asentar la política agraria y de alimentos pactando con monopolios que, por su propia naturaleza, carecen de una mirada social inclusiva. El camino es otro: es con pymes, trabajadores y pequeños y

medianos productores, como lo expresa el Encuentro del Trabajo y la Producción que lideran Hugo Yasky y Héctor Amichetti.

Tomemos, por ejemplo, la cadena cárnica, tal vez uno de los segmentos concentrados que más influye en los índices de inflación, y con el cual el Gobierno acordó una política de precios internos y de exportaciones que, por supuesto –como lo hace siempre–, dicho sector ya incumplió a poco de andar. Los frigoríficos, todos integrados verticalmente, no solo son grupos monopólicos que agreden el salario, sino que además podrían generar mucho más empleo formal y no lo hacen, porque solo se les interesa la ganancia fácil.

Caso 1: Walter Correa, el secretario general del Sindicato de Curtidores (Fatica), está reclamando la derogación del decreto 549/2020, que permite a los frigoríficos la exportación de cueros crudos (sin elaborar). Como si esto fuera poco, les bajaron del 15 al 4,5 % los aranceles que incentivaban la industrialización local. Según Fatica, fue a causa del intenso *lobby* de la industria frigorífica que, además de aumentar los precios de la carne al consumidor, también reprimitiza la economía. Un dislate que no hemos heredado del macrismo: es todo nuestro.

Caso 2: Nada más nacional y popular que el rioplatense choripán: carne de cerdo (que también solemos importar) embutida en una tripa. La tripa que se usa es de novillo o sintética y su elaboración demanda gran cantidad de mano de obra. Según la Secretaría de Industria, en 2020, importamos más de 20 millones de dólares en tripas. Se sigue así con la política de “compre extranjero” del macrismo. En el mismo año se faenaron 14 millones de cabezas bovinas, la cifra más alta desde 2009, y récord de exportaciones. También fue el año de menor consumo de carne per cápita desde 1920 (49,7 kg/año). Cada novillo que se faena tiene 23 metros de tripa aproximadamente. Lo que indica que tenemos disponible 322 millones de metros de tripa para embutir chorizos. Se puede proveer de tripas a “media humanidad” y, sin embargo, la importamos.

Caso 3: La Argentina tiene habilitada la exportación de “animales

en pie”. Esta es una herencia neta del macrismo y representa el sumun de la primarización de la economía agraria. Fue una iniciativa militada por Luis María Etchevehere y simboliza volver a la Argentina colonial. No es una metáfora: es literal. Hoy esta exportación no es significativa en números, pero es una ventana que el gobierno popular debe cerrar ya, porque se puede abrir en cualquier momento. Y es una pésima señal del rumbo que nos interesa tomar como país, a la hora de exportar con valor agregado.

La generación de empleo debe ser una obsesión de cualquier gobierno, y más para el nuestro. Además de ser la única forma de salir de la pobreza, es un punto angular para la supervivencia electoral del campo nacional y popular. Y es “por abajo”, como dice Enrique Martínez. Para semejante desafío, no se puede confiar en los monopolios. Estos se referencian en la Cadena Agroindustrial Argentina, que encarna un modelo que prescindie del mercado interno y del mejoramiento salarial como forma de progreso social. Es un paradigma que solo busca exportar, bajando salarios y consumo interno, y pagando menos impuestos. Así, lo único que va a crecer es la miseria.

Página/12, 6 de abril de 2021.

Doble retención

El contador público Horacio Salaverri, presidente de la poderosa Carbap, la organización gremial ruralista que representa a los estancieros (dije estancieros, no chacareros) de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, acaba de denunciar que las transnacionales exportadoras de granos realizan una doble e indebida retención al precio final de los granos que deberían pagar a los productores. “Se están observando diferencias sustanciales entre los valores de los granos publicados por el Ministerio de Agricultura de la Nación y los que figuran en pizarra. Pasa que, en soja, girasol y trigo, siempre es menor el precio que pagan a

los productores del que dice el Ministerio que debe valer la mercadería. ¿Es una cuestión comercial?”

En buen romance, esto significa que los productores agropecuarios no reciben el precio internacional menos retenciones como les correspondería. Estos cobran precio internacional menos una primera retención que es de ley, y una segunda que practican por su cuenta los monopolios exportadores para su entero beneficio. Esto lo pueden realizar por el carácter cartelizado que tiene la exportación de granos y la ausencia de una correcta regulación estatal. De esta retención indebida, la Mesa de Enlace no se queja, a excepción de Salaverri. Solo le parece mal lo que cobra legalmente el Estado.

El Estado nacional, merced a la Ley 21 453, fija e informa diariamente los precios de una lista preestablecida de granos exportables a los que hay que aplicarle los derechos de exportación. Este precio es orientativo y está tomado, descontando fletes, sobre la base de la información suministrada por diversos agentes económicos y *traders* del sector. Son precios lógicos, razonables y fundados, publicados a los efectos fiscales y con el objetivo de evitar las triangulaciones a las que son tan afectos estos pulpos multinacionales.

Es a la diferencia entre este precio, que publica el Ministerio, y lo que efectivamente pagan las exportadoras a lo que se refiere la denuncia del contador Salaverri. La acusación es muy importante porque es mucha plata que, en vez de ir al bolsillo de los productores y a la cuenta fiscal del Estado, va a las cuentas de Cargill y demás exportadoras. Esta segunda retención es una presión adicional sobre el dólar billete y casi seguro que su destino final es algún paraíso fiscal. Estas empresas son las mismas que usan el río Paraná (Hidroavía) para despachar sus exportaciones. ¿Se dan cuenta por qué no quieren ningún tipo de control ni regulaciones?

El contador Salaverri estuvo muy bien en hacer público este tipo de abuso de posición dominante, pero se abstiene de pedir la intervención del Estado, que es lo que amerita la situación, porque es un liberal a

ultranza. Pero, nobleza obliga, hay que reconocerlo: es el único gremialista agrario que denuncia esta situación, mientras el resto duerme plácido la siesta a la sombra de la comodidad neoliberal.

Ahora, ¿por qué nunca son hostigadas gremialmente estas compañías, o no son tapa de diarios estas denuncias? Muy sencillo, tienen un sólido maridaje con los medios hegemónicos a través de sus voluminosas cuentas publicitarias, así como una mancomunidad de intereses con la dirigencia agraria en general a través del esponsoreo de exposiciones, eventos técnicos y regalías interesadas a las organizaciones rurales que condicionan todo el accionar gremial. De allí que sea tan valioso lo que denunció Salaverri.

Página/12, 14 de abril de 2021.

Megaexportadoras vs. peones rurales

Hace pocos días se desarrolló un conflicto gremial entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la empresa exportadora Cargill, en la localidad de 30 de Agosto, partido de Trenque Lauquen. Una comunidad de 4777 habitantes, que está a 525 km del puerto de San Martín (pegado a Rosario) y a 296 km de Bahía Blanca, donde la empresa en conflicto tiene dos terminales exportadoras. Cargill tiene más de 50 plantas de acopios diseminadas en el interior del país, que abastecen en forma directa sus 5 terminales portuarias, situación que se repite con otras exportadoras, como AGD, con 40 plantas. Como vemos, está presente en todos los eslabones de la cadena comercializadora sojera-maicera. No más que 7 u 8 cerealeras monopolizan el negocio y todas usufructuarias de la “Hidrovia”.

No fue este el único conflicto gremial de su tipo entre UATRE y los dadores de carga, se repiten a lo largo y ancho del país. Las exportadoras nunca quieren reconocer los derechos laborales. Esto nos permite

sacar valiosas conclusiones sobre cómo el modelo agroexportador se vincula con el territorio y la forma que pergeñó para recolectar el cereal en el interior profundo, prescindiendo de los comercios y la mano de obra local. Las exportadoras vienen por todo: silobolsa, venta directa del productor al exportador, trabajo en negro y desplazamiento de cooperativas y cerealistas lugareños y de la UATRE, ese es el modelo de saqueo que instalaron para recolectar la soja para exportar.

La silobolsa es una creación del genio inventivo argentino que cambió radicalmente la forma de comercializar el cereal. Ya no se necesitan costosas instalaciones fijas de silos para almacenar las cosechas. El “chorizo” permite a productores y acopiadores una forma móvil, sencilla y práctica de conservar los granos. También facilita la evasión fiscal.

Pero el interrogante que subyace es: ¿qué hace Cargill acopiando como minorista en 30 de Agosto? ¿Cómo puede ser que se le permita a una empresa exportadora estar presente en “todos” los eslabones de la cadena productiva, con una posición dominante en el mercado? Estas transnacionales fungen de productores, acopiadores, refinadoras y exportadoras, ya sea de productos elaborados o sin elaborar, en forma legal o ilegal las hacen todas. La cadena agroalimentaria argentina no tiene desorden, tiene monopolios. ¿Por qué les consentimos este tipo de prácticas? No lo sé. La única respuesta que se me ocurre es que, a causa de la tremenda derrota cultural que nos infligió el neoliberalismo en los 90, nos instalaron como único sentido común productivo posible el del monocultivo de soja y todo lo adyacente a él. Ya es hora de que lo revisemos.

En el conflicto de 30 de Agosto se expresa con toda magnitud el carácter extendido y monopolístico de la exportación de granos. Allí vemos un gran pulpo multinacional compitiendo deslealmente con acopios locales, precarizando el trabajo rural y propiciando la venta directa del productor al exportador, devastando a los pequeños pueblos a los que ya no les dejan nada de lo que producen. Todo el sistema está preparado para la expoliación del interior profundo.

Argentina tiene que tomar –entre otras– dos resoluciones claves en su comercio mayorista de granos. La primera: prohibir las ventas directas del productor a las compañías agroexportadoras, ya que eso genera lisa y llanamente una competencia desleal que desplaza cooperativas y acopios locales. Y la otra resolución: es pesar, ¡sí, pesar las exportaciones! ¿Quién controla el cereal que Cargill cargó en 30 de Agosto y envió a su propio puerto? Nadie, solo ellos. ¿Por qué creen que se molestan tanto cuando se los quiere controlar o regular y se ponen como locos?

Página/12, 28 de abril de 2021.

Los defensores de la ilegalidad

Frente a las denuncias de maniobras de triangulación en las exportaciones de carnes, la primera que reaccionó frente a estas decisiones gubernamentales para combatir la evasión fiscal y el comercio ilegal de la carne fue la Mesa de Enlace, devenida en colateral agraria de Juntos por el Cambio. Carente de cualquier prurito ético, no trepidó en defender las ilegales prácticas de contrabando y a empresarios mafiosos con tal de atacar al Gobierno. Primero fue Vicentin, y ahora lo repite con los exportadores truchos.

Comienza su declaración tergiversando y manipulando las resoluciones oficiales. Manifiesta su “más absoluto rechazo a la reinstalación del registro de exportaciones”. Y afirma su “convencimiento de que imponer límites o cuotas a la exportación de carne, los impactos serían desastrosos para la Nación”.

Sin embargo, ni remotamente las resoluciones se refieren a poner retenciones, cuotas o cupos de exportación. Solo se oponen por razones políticas.

Sigue la declaración de la Mesa, adjudicando al Gobierno “una visión según la cual la suba generalizada de precio responde a la tensión

en el mercado de alimentos entre el mercado interno y de exportación”. Esto es como querer tapar el sol con la mano. Ya hemos visto y certificado por organismos internacionales como la FAO, que la suba de precios de los alimentos es una realidad en el mundo entero. El precio de la carne está en el segundo punto más alto desde la década del 60. La imparable demanda china y el bajo consumo interno –hoy estamos en 49,20 kg per cápita al año, el más bajo desde 1920– explican por sí solos este fenómeno, que únicamente la irracionalidad de los “enlazados” con el capital concentrado puede negar.

Los aumentos al consumidor casi duplican la inflación. Durante todo 2020 la carne aumentó un 75 % y la inflación fue de un 36,1 %. La Mesa de Enlace concluye con una receta hartamente conocida y probada: “Es el exceso de emisión monetaria como consecuencia de un gasto público galopante y de baja calidad, producto de un Estado sobredimensionado e ineficaz” lo que explicaría, según su vetusto criterio, la inflación.

Todo el manual de neoliberalismo extremo resumido en este párrafo. En plena pandemia no hay gobierno en el mundo que no haya recurrido a la emisión monetaria y al aumento del gasto público para evitar el colapso social y la quiebra masiva de empresas. Solo un grupo de neoliberales extremos como ellos, que piensan que el mundo es solo para ellos, puede plantear semejantes desatinos económicos.

La pandemia revalorizó el ya de por sí imprescindible rol del Estado. Lo que Argentina necesita es más Estado y más contención a sus trabajadores formales e informales y a sus empresas. No menos Estado, como plantea la Mesa de Enlace. La inflación reconoce otras causas: es esencialmente puja distributiva. Y los monopolios agroalimentarios son los principales responsables.

Controlar el gasto público en plena pandemia es como reanimar un ahogado ofreciéndole agua. Un verdadero disparate, desde todo punto de vista, tanto el conceptual como el humano, ¿acaso pretenden que no haya IFE, ATP, AUH, o ayuda excepcional a los afectados por la pandemia? Sería bueno que expliquen cuál es ese modelo de país

que quieren. Porque ese país sin controles, regulaciones ni Estado, solo existe en su imaginación.

Página/12, 2 de mayo de 2021.

Ganadería: la ineficiencia privada

La derecha neoliberal con base agraria no se cansa de repetir la re-manida muletilla descalificatoria sobre la ineficiencia del Estado y la inutilidad de la política y los políticos. ¡Todo lo que “ellos” podrían hacer, si el Estado, los políticos y las “odiosas” regulaciones gubernamentales no existieran! Asunto tan improbable como la existencia de perros verdes. Atribuyen a la política y al Estado todos los males existentes y por existir. Los ofusca “tan solo” que el Gobierno les pregunte “algo” para mejorar la recaudación fiscal o que intervenga mínimamente con el objetivo de garantizar alimentos accesibles para los sectores populares. Eso solo ya es para ellos una intervención intolerable, rayana con el comunismo. Por ende, la deriva de la acción del Estado en materia de políticas sociales, como la AUH o los planes para los sectores más vulnerables, merecen todo su repudio y las interpretan a modo de un despilfarro inadmisibles.

Ahora: ni se inmutan cuando se fugan un crédito completo del FMI, o ante estafas descomunales como las del Correo Argentino, los peajes o los parques eólicos. Esos “detalles” no cuentan, todos los males tienen que ver con “un gasto público galopante y de baja calidad, producto de un Estado sobredimensionado e ineficaz”, según dice la infame Mesa de Enlace, conspicua vocera de estas ideas ultramontanas.

Pero... ellos, ¿qué tan eficientes son como para pontificar sobre la eficiencia ajena? Veamos: “Soja 1300 millones de dólares tirados en el campo”, titula *Perfil*, y también lo reproduce el periódico conservador *La Nación*. Tamaña pérdida es por la falta de una correcta regulación

de las cosechadoras. Según un estudio del INTA, por no calibrar bien las máquinas, se pierden 142 kg/hectárea. El nivel promedio de pérdidas representa alrededor de 2,37 millones de toneladas. No es “moco de pavo”.

El INTA plantea reducir un 20 % los valores actuales de pérdidas con el objetivo de aumentar los saldos exportables del país en 258 millones de dólares. El “ineficiente Estado”, es decir el INTA, está organizando jornadas de capacitación para los eficientes sojeros con el objetivo que aprendan a controlar y regular sus máquinas; a los efectos de que no pierdan plata ni los productores, ni el Estado, ni los contratistas, quién diría, ¿no?

Pero uno de los sectores más ineficientes del “campo argentino” es la ganadería, cuya representación gremial es ejercida por la Sociedad Rural Argentina, la que más clama y despotrica contra la inutilidad del Estado. La bajísima tasa de nacimientos y destetes de nuestros rodeos es el mejor ejemplo de lo que digo. El destete hoy no supera el 60 % y es un indicador de la pobre *performance* al respecto. Esto significa que, de cada 100 vacas, solo 60 terneros llegan a ser faenados. Según lo que publicó el ingeniero Juan Carlos Aba, veterinario y vicepresidente de CAPROVE, en la *Revista MDA*, la Argentina produce 56 kg de carne bovina, mientras que Australia produce 76 y los Estados Unidos 127 por animal. Este es otro indicador de la baja productividad relacionada –en este caso– con el peso mínimo de faena.

Los técnicos nos dicen que faltan alrededor 2 millones de terneros adicionales para abastecer correctamente el mercado interno y seguir exportando. Actualmente, se producen alrededor de 14 millones, que se corresponden con el 61 % del destete que señalamos. Tenemos 23 millones de vacas de cría en los campos. Con solo mejorar un 10 % los índices de preñez y llevarlos del 61 al 71 %, tendríamos un adicional por productividad de 2 300 000 terneros, lo que está faltando para atender los dos frentes, el interno y externo.

Ahora bien, que las vacas no se preñen adecuadamente o que las

máquinas no se regulen como corresponde son casos de ineficiencia de índole solo privada, que no podemos achacársela al Estado ni a la política, como de modo habitual surge del discurso de este sector. Tan acostumbrados están ellos a reclamar eficiencia en los otros, o reglas claras y después evadirlas, o a exigir honorabilidad y comerciar en negro. En fin, es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Un poco de humildad y humanidad sectorial no vendría nada mal en estos momentos tan difíciles que nos tocan vivir.

Página/12, 18 de mayo de 2021.

Pandora Papers, evasión y agro: pesar y medir

El agro aportó el 69,3 % de las exportaciones totales de 2020. Según CIARA, en lo que va de 2021, las ventas al exterior del complejo agroindustrial suman unos 25 670 millones de dólares. De las 500 principales empresas exportadoras, 336 son de base agraria. El 90 % de los granos que este año se despacharon al exterior –cuyo volumen total asciende a 74 millones de toneladas– fue realizado por apenas 10 empresas. El complejo sojero encabeza, lejos, el ranking. Le siguen el maíz y el trigo. Esto es concentración a lo bestia... y no es “joda”. La AFIP localizó 600 000 cuentas de argentinos en el exterior. Somos el tercer país con más evasores en las cuentas de los Pandora Papers, y también tuvimos una actuación destacadísima en los Panamá Papers. Son datos que deberían cruzarse. Si el sector agroindustrial es el que más divisas del exterior trae y carece de control, no es difícil colegir que dicho sector aportó el mayor número de evasores.

La Argentina no pesa sus exportaciones ni importaciones. Tampoco controla adecuadamente el transporte interno de carga (Cartas de Porte). Cientos de camiones contrabandean soja y maíz contra flete, con destino final en los países limítrofes. Estos granos luego son

reingresados y blanqueados en los puertos locales. Un grupo de ingenieros notables, capacitados y patriotas, revisó 8 millones de Cartas de Porte emitidas durante 2020, y únicamente de los cinco principales cultivos. Encontró inconsistencias fiscales en alrededor del 40 % de lo transportado: el tonelaje cargado en el campo no coincide con el que finalmente se declara como exportado. Solo aquí hay alrededor de 2000 millones de dólares de evasión al fisco. Tampoco pesamos el oro, la carne, el litio, entre otros. Nuestro sistema exportador pesa a su gusto y le “canta” al Estado lo que le parece: ¡es el autoservicio del pesaje! Esto es así, aunque parezca imposible de creer.

Es urgente la creación de una Agencia Estatal de Control de Cargas, autárquica, que pese y cruce información con AFIP, aduana y organismos antilavado. Pero no alcanza solo con pesar: esta agencia debe concentrar todas las funciones y organismos dispersos que existen actualmente en la órbita del Estado. Es indispensable que cuente con control social y amplias facultades operativas. Sin embargo, sería un grave error crear un nuevo organismo con los mismos vicios y los mismos protagonistas que nada han visto hasta hoy. Se deben transparentar e independizar los procesos al máximo posible. Habría que digitalizar toda la información en tiempo real. Los objetos hablan por sí mismos y se confrontan entre sí, solos. Sensores que reconocen distintas magnitudes, peso, volumen, distancia, velocidad, desplazamiento –todo subido a la nube de la AFIP– estimando, combinando y cruzando datos en tiempo real. Salvando las distancias, sería una especie de fotomulta, pero a escala nacional: inexpugnable e inapelable. Es un procedimiento ya probado y usado en distintos países del mundo, que permite el seguimiento de la carga y sus variaciones en todo el trayecto, sea camión, barcaza, ferrocarril o buque. Los medios ya existen en el país, no hay que importar nada, el recurso humano también está disponible, y es íntegramente nacional y popular. El Frente de Todos lo tiene. Solo hace falta confiar en nuestra gente.

Hay que pesar los monopolios y medir los latifundios. No son necesarios más beneficios, prebendas o incentivos fiscales a quienes no

pesan y evaden. Solo hace falta armonizar patrióticamente pesos y medidas. No es una revolución, ni el remedio para todos nuestros males. Pero, sin duda, es un buen punto de partida. No expropiamos, ni estatizamos: es una medida casi naif, de mínimo control, ¡para dejar de ser bobos! Eso sí, el requisito *sine qua non* para que sea exitosa es que sea bien aplicada. Esto requiere terminar con los burócratas formateados en universidades extranjeras y darles lugar a servidores públicos comprometidos con la causa nacional y popular. Necesitamos funcionarios que funcionen, o se busquen otro laburo.

No es magia.

Página/12, 1º de octubre de 2021.

Razones y sinrazones del aumento de la carne

La primera razón es que no tenemos la carne suficiente para satisfacer la demanda del consumo interno y la de la exportación. Un kilo de entrecot vale en París 33 euros (3743 pesos); y un kilo de lomo, 40 euros (4537 pesos). Ante la opción de exportar con esos valores de referencia, quedan pocas dudas de hacia dónde orientan sus ventas frigoríficos y supermercados. Empujada, además por la “aspiradora” China, la exportación se lleva todo lo que le pongan arriba del mostrador.

El economista Jorge Fonseca –catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Internacional Progresista– señala que según los índices FAO, hoy el precio de la carne es un 22,1 % más alto que en octubre de 2020. En EE.UU., la carne aumentó un 14 % entre enero y septiembre; en España, un 20 %.

Los supermercados, que no agregan valor sino solo precio, tienen una posición dominante en el mercado local: están en toda la línea de la cadena. Coto o La Anónima suman frigoríficos exportadores a su logística integrada verticalmente. Esto les permite elegir dónde vender:

si a la exportación o al consumo local. Hay que prohibir a los supermercados vender carne fresca en las góndolas. Todo debe pasar por las carnicerías, que están orientadas solo al abasto interno. También debería prohibirse la venta directa de los productores a los frigoríficos: todo debe pasar por mercados públicos de referencia. No puede haber un único Mercado de Liniers, hay que crear nuevos mercados en Córdoba, el NEA, el NOA y la Patagonia.

Precios internacionales por las nubes, falta de producción, monopolios con un pie en el mercado interno y otro en la exportación, aumento de la demanda interna por estacionalidad –a pesar de los salarios deprimidos– un Estado sin capacidad de administrar el conflicto por ausencia de instrumentos reguladores (qué falta nos hubiera hecho Vicentin con su frigorífico Friar). Todo eso es un combo perfecto para que los monopolios cárnicos se desentiendan del mercado interno, se llenen de plata exportando y que el Gobierno pague el costo político de los aumentos.

La carne es un “bien cultural”, como muy bien lo definió el ministro Domínguez. Por eso, la mesa de los argentinos debe estar correctamente provista y a precios accesibles. Todo precio es político.

A ojo de buen cubero, hoy estarían faltando alrededor de 2300000 terneros para llegar a las 5000000 de toneladas necesarias a fin de cubrir ambos frentes. Esto significa que debemos mejorar un 10 % nuestros índices de destete ¿Se puede lograr? Sin duda, pero no es mágico: hace falta elaborar un plan y sostenerlo en el tiempo. La ganadería no es una cuestión ideológica: es biológica. No hay una vaca del Frente de Todos que alumbré terneros listos para faenar, ni una vaca de derecha que dé cuatro crías al año: todas tienen uno. Y se necesitan 290 días de gestación, un año de recría y otro de engorde. El ciclo ganadero es de 4 años, gobierne Fidel o Milei. Y las vacas deben estar correctamente alimentadas para que se preñen. Acá la responsabilidad del sector privado es indubitable e indelegable.

El Gobierno tendrá la tarea de hacer un inventario preciso de la cantidad de vacas madres, posibilidad de destete, capacidad de engorde y, a partir de esos números, trazar un plan de cuánta carne se necesita

para el consumo interno. Lo que sobre se podrá exportar. En La Pampa, el ministro Domínguez expresó la hoja de ruta oficial: armonizar consumo interno, exportación y precio. Es menester que lo vuelva a re-frendar en los próximos días. Cuando en 2020 la exportación tocó el 30 % de la producción, comenzó una disparada de precios que sigue de alguna manera hasta hoy. Si no se aumenta la oferta, no se pueden liberar totalmente las ventas externas. Sería políticamente suicida y sin duda afectaría la gobernabilidad.

¿Cuánto tiene que ver el aumento del precio de la carne con la pérdida de votos del Frente de Todos? Mucho. El propio Gobierno tiene su cuota de responsabilidad por la falta de tino a la hora de asumir el conflicto por el valor de los alimentos. Reaccionó tarde: de octubre a octubre, la carne aumentó 20 puntos más que la inflación. Se embarulló en un debate con la Mesa de Enlace, que solo sirvió para perder tiempo y votos. El Gobierno deberá entender que el camino para mejorar el acceso del pueblo a los alimentos no es pactando con los monopolios. Y que la agricultura familiar debe ser protagonista.

La Ley de Promoción de la Agroindustria, que se acaba de mandar al Congreso, es lo inverso de lo que debe hacerse para abaratar los alimentos. Significa concentrar aún más la exportación de materias primas industrializadas en las cercanías de los puertos. Ninguna empresa va a radicarse en el interior profundo. Una pregunta elemental: con los precios internacionales que vimos ¿quién le va a vender al mercado interno y a qué precio? ¿La Argentina no tiene posibilidad de controlar eficientemente a las grandes transnacionales, ni siquiera pesamos lo que exportan! Esa ley es un tiro en el pie a la gobernabilidad. El precio de los alimentos es un instrumento fundamental y conocido en la desestabilización de los gobiernos populares. Encima les concedemos prerrogativas impositivas. Es con menos concentración, no con más. Es pesando y midiendo monopolios y latifundios. Fácil pero difícil.

Página/12, 22 de noviembre de 2021.

¿Cómo se mide el modelo agrícola?

El gobierno de Santa Fe acaba de decretar la emergencia agropecuaria por sequía. En 2019 lo hizo por inundaciones: los periódicos informaban que el norte provincial (zona súper deforestada) era un mar.

Inundaciones y sequías son ciclos cada vez más recurrentes e intensos. Casi siempre se toman como castigos bíblicos y no se analizan como lo que son: consecuencias –no causas– del modelo productivo agrario que padece la Argentina. Dije bien, padece. Y lo digo porque la principal característica de la depredación ambiental (que se hace en nombre de la producción y tiene por objetivo el volumen) se produce en áreas geográficas determinadas, pero sus efectos son universales. Esto ya debería ser comprendido por los ciudadanos, que se derriten como chicharras. Calor, deforestaciones, inundaciones, volúmenes productivos, migraciones, cáncer, precios de los alimentos, irracionalidad logística, accidentes viales, la soberanía del Paraná, los puertos privados son todos rayos de la misma rueda. El responsable de estas y otras calamidades no es otro que el modelo agrícola al que adscribió la Argentina a partir de la década del 90, y que hemos denominado monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y rentas.

El gran logro comunicacional de la derecha neoliberal agraria es presentar “ese” modelo productivo como ultraexitoso y sin contraindicaciones. Asimismo, afirma que los “problemones” que genera no son su responsabilidad. Nunca se vincula el uso y tenencia de la tierra con los desastres que crea el monocultivo y son astillas del mismo palo. Solo se valoran y tienen padre las retenciones, las contrariedades son guachas. Dicho sea de paso, los sojeros se pasan todo el tiempo facturando al conjunto de la sociedad su contribución impositiva. Que solo se mire la cuenta fiscal que produce la oleaginosa y nunca lo que destruye, para llegar a ese número, es un gran triunfo cultural de la derecha.

Ahora bien, ¿cómo se mide un “modelo” agrícola? El neoliberalismo agrario tiene diseñado y muy bien comunicado un conjunto de

parámetros teóricos basado exclusivamente en el volumen productivo, sin rostro humano. Modelo al que el campo nacional y popular, ya sea por pereza intelectual o por desidia política, ha hecho propio a la hora de analizar el sector. Al neoliberalismo agrario no le interesa el productor, ni el tamaño de las explotaciones, solo le preocupa el volumen, todo lo mide a partir de él; para la derecha es un valor absoluto.

Al volumen hay que interrogarlo, no podemos admitirlo como única fórmula de la “felicidad agraria”. No es lo mismo un volumen hecho por miles de agricultores de carne y hueso, que por un puñado de megapresas integradas verticalmente. No es lo mismo un volumen diversificado en productos, que uno hecho por un solo cultivo; no es lo mismo un volumen conquistado sobre tierra deforestada que sobre planicies aptas; no es lo mismo un volumen industrializado que a granel. A la medición del modelo, hay que incorporar el daño ecológico, el impacto en la salud pública o los gastos innecesarios que ocasiona en logística. También debe ponderarse la contribución que hace a la soberanía y seguridad alimentarias de la Nación. Un modelo de medición agraria al servicio del campo nacional y popular debe integrar todos esos ítems, más el de sentido común productivo, con orientación social. Este se construye a partir de combinar volumen, diversificación y rostro humano, con medioambiente y sociedad. Son cuestiones que la derecha jamás mide ni pondera.

Cuando nos dicen que el kirchnerismo no entiende el campo, lo que en realidad significa es que medimos (o lo intentamos) con otra vara y aspiramos a otros resultados. No calculamos con la lógica económica de una burguesía intermediaria (no confundir con nacional) compuesta por megaprodutores, importadoras de insumos y exportadoras a los que solo importan sus balances. Nosotros medimos la agricultura con un metro donde entra la gente de a pie, la que consume.

Debemos dejar de evaluar la agricultura con la vara prestada por la derecha y desarrollar nuestros propios instrumentos de análisis. Se trata de un esfuerzo teórico urgente e imprescindible de hacer. Y debe ser: “ni copia ni calco, sino creación heroica”.

Esta lucha es parte central de la batalla cultural. Y es teórica y práctica: no se cambia un modelo productivo de la noche a la mañana, ni dictando una ley. No solo es “ganar la cabeza” del pueblo, sino enseñar a los productores a sembrar de otra manera; y a nuestros dirigentes, a que banquen y no se dejen seducir por la derecha agraria. La agricultura, es decir los alimentos, cómo se hace y quién la hace es una cuestión ideológica y no podemos dejar que la derecha la mida y nos la cuente como a ellos les conviene. Hay que urbanizar el debate rural e incorporarlo a la lucha política.

Página/12, 21 de enero de 2022.

China: déficit y registración

Cuando el ex presidente Mauricio Macri emprendió su viaje a China, en mayo de 2017, llevaba dos objetivos centrales. Uno era hacer negocios (para él y sus amigos) y el otro, reducir el déficit crónico de la relación comercial. China es el país con el cual tenemos el mayor rojo: vendemos materias primas sin industrializar y compramos lo industrializado. Un auténtico negocio “chino”, heredado y defendido por la Logia Argentina Primarizante (LOPA), que encabeza el monocultivo sojero, principal beneficiario de este intercambio desigual, que Macri quería incrementar. La periodista Marcela Pagano, que cubrió aquella gira presidencial, nos dice que “según el INDEC, en 2016 el déficit comercial alcanzado por Argentina con China fue de 5951 millones de dólares. Pero, para el organismo de estadísticas chino, ese déficit fue de menos de la mitad, de apenas 2084 millones”. Una diferencia mayúscula, de 3867 millones, ¡no le erraron por dos pesos! “Un agujero negro de 4000 millones sin declarar”, titulaba otro medio capitalino. Los “eficientes” CEOs de la exportación “cantan” al Estado el número que quieren.

Las principales diferencias provenían de los rubros de maquinarias,

equipos, material eléctrico, semillas y frutos oleaginosos. “La inconsistencia sobre este último rubro (soja-maíz) es la que mayores dolores de cabeza le generaría a la comitiva oficial”. Los funcionarios macristas no se explican de dónde surgen las diferencias que, por otra parte, también aparecen en el intercambio de estadísticas con otros países, no solo China. La fiesta es global, según parece.

Tratemos de ayudar a comprender la situación. Lo primero es saber que los puertos privados son verdaderos enclaves coloniales donde no hay más ley que la de sus dueños. Por allí entra y sale todo lo que los concesionarios permitan, en forma expresa o mirando para otro lado. Al Estado le cuentan lo que quieren ellos y el Estado: bien, gracias.

Además, Macri cambió a favor de las empresas toda la normativa con que se realiza el comercio exterior. Entre esos cambios está la forma de pesaje de los barcos. En octubre de 2017, Macri modificó la Resolución General 4138-E de agosto de 1990, sobre determinación de peso por el sistema de control de calado y sondaje de tanques (*draft-survey*). Las empresas (dueñas de los puertos) tienen la opción de pesar por este sistema, o por el de balanzas: los dos son exactos, depende de quién los maneje. Allí está el detalle de esta historia.

Entre los cambios que dispuso el inefable Mauricio a favor de las megacorporaciones, está el margen de error del pesaje por el sistema *draft-survey*. Históricamente este osciló entre el 1 y el 1,5 %. Él lo llevó al 4. En épocas en que el desarrollo científico-técnico permite una precisión fenomenal, el “ingeniero” va para atrás: es como si, en lugar de la computadora, volviéramos al ábaco. Según un especialista consultado para esta nota “entre jugar con esa deficiencia de pesaje y alterar el registro de pesos totales con lastre, agua y combustible, hace que perdamos de vista el 10 % de cada barco”.

En los puertos de Rosario entran alrededor de 4000 barcos al año (cuando el río lo permite). Son barcos denominados *bulk carrier*, que oscilan entre 35 000 y 60 000 toneladas. Tomando el porcentaje señalado por el especialista, quiere decir que 400 barcos de como

mínimo 35 000 toneladas, no es que paguen menos impuestos, sino que directamente se evaporan de la contabilidad oficial. ¿No estará allí una de las razones de la diferencia de registración entre Argentina y China?

Más que oportuno este viaje de Alberto Fernández al gigante asiático. Aparte de los acuerdos que se firmen, será muy importante cotejar los números que traiga la comitiva presidencial, con los que tiene el Estado argentino. Según Miguel Pesce, presidente del Banco Central, el rojo comercial trepó a los 7000 millones de dólares. Una cifra escalofriante sobre la que, de ser real, hay que operar inmediatamente. Real debe ser, a lo que me refiero es a que la registración sea consistente con el monto genuino de la venta física.

Martín Guzmán dijo que el acuerdo con el FMI no se va a solventar aumentando los impuestos: se va a ir contra la evasión y el lavado de dinero. Es por acá, ministro.

Pesar y medir todo nuestro comercio exterior (me refiero a todo-todo, lo que entra y lo que sale). Eso no es injerencia del Estado en la economía, es simple y mero control para poder cobrar lo que corresponde, es una cuestión a-ideológica. No robar en el peso y las medidas es, además, virtud de buena ciudadanía. Virtud que parece en extinción entre los ejecutivos de las multinacionales granarias globales.

Página/12, 2 de febrero de 2022.

Resignificar las juntas reguladoras de precios

Argentina debe cambiar su forma de producir, distribuir y comercializar alimentos. Debe abandonar el modelo de agriculturización permanente con concentración de tierras y rentas y volver a la agricultura de rostro humano, con chacra mixta, producción y consumo de cercanía. Esto no es fácil ni se hace de un día para el otro. No alcanza con un zoom o

con dictar una ley. Hay tiempos biológicos, políticos y económicos que es imposible soslayar, e indican que este proceso insume al menos una década. El mismo lapso de tiempo que llevó imponer la sojización.

Este paradigma depredador no vino solo: trajo un paquete tecnológico, que incluyó destrucción del bosque nativo, la chacra mixta y el ferrocarril, privatización de puertos, pérdida de soberanía del Paraná y liquidación de nuestra Flota Mercante. Carlos Menem, Domingo Cavallo y Felipe Solá “lo hicieron”, con el acompañamiento del PJ, partido del ajuste en los 90. Hay que salir de ese modelo perverso. Ese es el origen del chantaje especulativo que sufren el pueblo y el gobierno argentinos; es la causa del porqué, siendo productores de alimentos, pagamos lo que pagamos por ellos. Debemos saberlo porque, si no, creemos que el chino de la vuelta es el responsable de los precios.

Esto cambia cuando se decide cambiar. En ese instante empieza otra historia. Es una decisión política. Pero el hambre no espera. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Lo primero es restaurar los controles del Estado. Un Estado que no pesa ni mide es un Estado bobo, construido a propósito. Mirar para otro lado es una política pública no escrita de la economía argentina. Los grupos agroexportadores, que no son más de 10, no solo tienen una posición monopólica en todos los eslabones de la cadena, sino que además son los dueños de los puertos y del río, y exportan lo que comemos. Ellos son el problema (letal) para la mesa de los argentinos, no la solución. Nuestro Gobierno ya debería haberlo aprendido. La solución no es dictar o anunciar una norma “más”, sino hacer cumplir las normas, ¿se entiende?

Hoy la Argentina necesita juntas reguladoras por producto. No confundir con las Mesas de las Cadenas Productivas, que milita entusiastamente la oligarquía. La diferencia es sustancial. En la discusión de las cadenas solo se ve el producto: trigo, soja, maíz. Nunca a quiénes lo producen y, menos, la concentración intrínseca de cada producto, y el uso y tenencia de la tierra donde se implanta. Nunca se ve el rostro de productores o consumidores, ni se los mensura. Es para defender

esa concepción depredadora de la agricultura sin agricultores, que los megaprodutores y exportadoras crearon un gremialismo específico de productos: Acsoja, Argentrigo, Maizar. Estos solo defienden el cultivo y su volumen, sin importar cuántos productores lo hacen, ni el costo para los consumidores. En las cadenas el Estado es un simple canchero; en las juntas reguladoras, es el árbitro en el combate por los precios.

Las juntas reguladoras fueron una creación de los conservadores, y antecedentes inmediatos de las leyes que crearon la Junta Nacional de Granos y la de Carnes (1932). “En 1938 ya hay 17 comisiones que se hacen cargo de las diferentes actividades: aceite, lácteos, extracto de quebracho, de producto alimenticios, de abaratamiento del costo de los alimentos, de tierras, de fauna americana, de fomento del caballo de guerra, de bosques, etc.”.²⁹

La oligarquía creó las juntas reguladoras para descargar el peso de la crisis del 30 sobre el pueblo. Nosotros debemos resignificarlas. Son instrumentos de política pública, que deben ser correctamente utilizados, y no un fin en sí mismo. El fideicomiso es el complemento ideal de esta acción reguladora, porque permite encapsular los fondos para fines específicos y que no se puedan utilizar en otra cosa. Debemos crear juntas reguladoras para cada producto de uso masivo, con su respectivo fideicomiso, y repasar el tema de retenciones para capitalizarlos. Por ejemplo, el caso del maní, cultivo ultra rentable que exporta el 90 % de la producción, al que inexplicablemente se le bajaron las retenciones. O la leche en polvo, que está en sus máximos precios internacionales, y de la que debería tomarse un porcentaje para abaratar la leche fluida.

Las juntas reguladoras que proponemos tendrían que actuar como contralor activo, estratégico, permanente y específico de precios, analizando los diferentes actores productivos y los volúmenes. Sus funciones deberían incluir la obligatoriedad de socializar la información, especialmente cantidad y tamaño de los productores, red de comercialización

29 Ana V. Persello, Universidad Nacional de Rosario.

y distribución, kilómetros recorridos de los productos para llegar a la mesa y costos ocultos. Sería tan pedagógico como eficaz en el debate y la acción de la lucha inflacionaria.

Es imprescindible urbanizar el debate rural y dotarlo de información veraz. Cruzar y difundir datos duros (quién produce y cuánto de qué cosa) es clave. Hoy se debate con esa información dispersa y difusa. Pretender actuar sobre los precios sin números reales del sector agrario, sin información veraz de los niveles de concentración, sin analizar la irracionalidad logística, es como ir “al almacén a comprar con el libro escrito por el almacenero”.

Es con más tambos, más chacra mixta, más producción de cercanía, con acceso a la tierra, como derrotaremos la inflación. Es una cuestión de decisión política. Si se pudo, se puede. Ahora: si el amigo lector piensa que el posibilismo es transformador, esto está contraindicado.

Página/12, 29 de marzo de 2022.

Trigo HB4: Estado o Monsanto, esa es la cuestión

Parto de la base que ni el Conicet, ni la Universidad del Litoral, ni el Senasa, ni la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), ni la Dirección Nacional de Mercados Agropecuarios, que aprobaron el uso del trigo HB4, quieren perjudicar la salud de la población. Cuestión que extendiendo a los gobiernos de: Brasil, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, entre otros.

Este evento biotecnológico nació gracias a la virtuosa política en ciencia y técnica que desarrolló el gobierno de Néstor y CFK, que incluyó entre otras cosas la creación de un ministerio específico, el aumento por “cuatro” del presupuesto del área en dólares, el programa Raíces y un largo etcétera. Este trigo es hijo de esa política.

El descubrimiento y la patente son enteramente estatales: sí, 100 %

estatales. Sus creadores y dueños de la patente son la Universidad del Litoral (pública) y el Conicet. El hallazgo fue una proeza científica de la doctora Raquel Chan y su equipo. Todos funcionarios públicos, con sueldos abonados en su totalidad por el Estado argentino. La Dra. Chan es una funcionaria del vilipendiado Estado, denostado por la mayoría de los que se van a beneficiar con el uso de este trigo. El mismo Estado que pone satélites en órbita. ¿Qué tal? No fue creación de una institución privada: es fruto del trabajo científico y técnico nacional, “amo” absoluto de la patente. ¿Será por eso que molesta tanto a algunos? Bioceres es la licenciataria de la tecnología, no la descubridora ni la dueña. Y deberá pagar al Conicet y a la Universidad del Litoral una regalía sobre la venta de la semilla que haga la licenciataria o un tercero, cualquiera sea el lugar del mundo en el que se siembre, aunque transfiera la licencia.

En Argentina había 63 eventos transgénicos aprobados, todos de Monsanto y Syngenta, antes que los HB4. Ahora suman 65. Es decir, que solo tres escapan al dominio monopólico de las transnacionales: estos dos HB4 –uno en trigo, otro en soja– y uno en la papa. Esta última patente también es del Conicet, pero con Tecnoplast. ¿Por qué tanta tirria con estos descubrimientos? Si fuera el primero, quizás se entendería. O si hubiese una decisión de prohibir los transgénicos en el mundo en un futuro cercano, también. Pero nada de eso parece que vaya a ocurrir en las próximas décadas.

Si hay 63 patentes transgénicas en Argentina, todas anteriores a esta y todas de Monsanto y Syngenta, pregunto: ¿justo a estos dos eventos íntegramente nacionales y estatales –que cumplieron todos los protocolos de seguridad y pasaron exitosamente todas las oposiciones que les pusieron sus agresivas competidoras, en un proceso costoso y complejo que lleva años de estudio– les vamos a negar la aprobación? No parece razonable desde ningún punto de vista. Entonces: ¿qué hacemos con las otras 63 patentes ya autorizadas, que operan, no desde ayer, sino desde hace 20 años?, ¿las vamos a prohibir también?, ¿van a dejar de sembrarse? Obviamente, no. O sea que nosotros tumbamos nuestras

patentes, propiedad de todo el pueblo argentino, y dejamos funcionar las de las multinacionales. Algo está mal, ¿no? O caen todas, o ninguna.

Es muy útil ver quiénes se oponen a esta patente. Empecemos con Monsanto y Syngenta, sus razones son más que obvias. Pero además miren qué “niños” tiran para el mismo lado: Macri y Etchevehere, que se negaron sistemáticamente a aprobar la licencia del HB4 durante los años en los que fueron gobierno. Sigamos: todo el PRO, la Mesa de Enlace, la ultraconservadora Federación Gremial de Acopiadores, Argentrigo (la cadena del cultivo, integrada por los grandes productores) y CIARA-CEC, la cámara de las exportadoras de granos y aceites del país, dueñas del 80 % de las exportaciones y de los puertos privados.

Está claro a quiénes no les gusta que el Estado haga ciencia y no les regale las investigaciones a privados. Ahora bien, hay 65 patentes en el país, se siembran transgénicos hasta en las banquinas. Justo se atacan estas patentes estatales. Raro, ¿no?

¿Por qué el Conicet licenció su patente? Porque hace falta espalda financiera para llevar adelante todos los requerimientos y pruebas que exigen los protocolos nacionales e internacionales para su aprobación. Se necesitan campos para hacer los ensayos, profesionales que los controlen, silos y plantas de almacenaje para su acopio, etc. y poder escalar en la producción. El Estado no está ni estaba en condiciones de llevar adelante esa tarea.

¿Por qué se eligió a Bioceres? Porque es una compañía mediana, enteramente nacional, compuesta mayoritariamente por productores y cooperativas, muy atomizada, con más de 300 dueños y que además cotiza en bolsa. Es falso que Grobocopatel o Sigman controlen la compañía, aunque sean socios. Es muy importante, insistimos: Bioceres NO es dueño de la patente ni descubrió el gen resistente a la sequía, como aviesamente se suele informar.

Estoy convencido –y lo milito todos los días– de que la Argentina no resiste un centímetro más de soja ni uno menos de bosque, que hay que parar con las fumigaciones indiscriminadas, que hay que volver al consumo

de cercanía y promover fuertemente la agroecología. Pero esta patente no está contraindicada para ninguno de estos objetivos. El hecho de que sea resistente a la sequía no significa que deban usarse sí o sí agrotóxicos. El HB4 NO es resistente al glifosato, no exige más ni menos herbicidas que el trigo común, e irá segregado de este, para respetar al consumidor que no lo prefiera. La segregación exige inversiones que Cargill, Dreyfus y acopiadores no quieren hacer porque se la quieren seguir llevando con la pala.

El modelo de producción de alimentos de un país no se cambia dictando una ley o haciendo un zoom: lleva por lo menos una década, es el tiempo que le llevó a la sojización imponerse sobre la chacra mixta. Tampoco se hace bajando una palanca o apretando un botón, durante largo tiempo deberán convivir los dos modelos. Pero se empieza a cambiar cuando se toma la decisión política de hacerlo. Entonces hay que tratar de que el modelo que se va lo haga haciendo el menor daño posible. Y el que entra lo haga con todo el vigor. Hay que exigirle al Gobierno nacional que apoye la agroecología, no que deje de hacer ciencia.

El campo nacional y popular, la agricultura familiar, campesina e indígena deben armonizar sus saberes ancestrales con los científicos. El nuevo paradigma productivo debe democratizar y expandir la información que proveen los satélites agrarios que pusimos en órbita. También, integrar la biotecnología, para hacer plantas resistentes a sequías o plagas que no necesiten más fertilizantes o tóxicos. No es volver al caballo o al carro, solo para regocijo visual de ciudadanos, sino desmonopolizar la producción y democratizar el uso y tenencia de tierra, conservando volúmenes productivos con rostro humano.

La reconversión hacia la agroecología la hace el Estado para el bien común, o la va hacer el mercado, de la mano y para beneficio de los mismos de siempre. La ciencia, quién la hace y para qué sirve es parte de este debate, al que hay que entrarle sin prejuicios ni anteojeras. Estado o Monsanto, esa es la cuestión.

Página/12, 19 de mayo de 2022.

Nacionalizar el Paraná

Hay que nacionalizar el Paraná por DNU, y luego enviarlo al Congreso para su ratificación. La estabilidad democrática y la gobernabilidad de nuestra patria así lo requieren en forma perentoria, y ningún tratado firmado por la Argentina lo impide.

Las cerealeras exportadoras son las principales usuarias de nuestro canal troncal de navegación, mal llamado Hidrovía. Ellas literalmente fijan el tipo de cambio en nuestro país y, en conjunto con los puertos privados, son la principal fuente de extorsiones y chantajes a los que es sometido nuestro Gobierno. Ni unas ni otros deben ser privados. No solo por una cuestión económica, sino esencialmente política.

El Estado puede y debe usar las tarifas de peaje del río como un instrumento de negociación. Dado que los *pools* sojeros y sus comitentes, los monopolios exportadores, son reticentes a liquidar la soja en tiempo y forma –con el argumento de que es propiedad privada–, si para exportarla quieren usufructuar el Paraná –que es un bien de las y los argentinos–, deberán pagar una tarifa que se actualizará automáticamente en función del tiempo transcurrido: más rápido liquidan, más baja será la tarifa.

Un Estado democrático tiene la responsabilidad de preservar para sí cuestiones e instrumentos que son vitales y estratégicos para su gobernanza y que, en manos de compañías con capacidad de *lobby*, asfixian a los gobiernos populares. En los 90, la Argentina se desprendió de sus puertos, de su Flota Mercante, de sus ferrocarriles, de la Junta Nacional de Granos y la de Carnes, de silos, del Paraná, etc. Como única compensación por semejante despojo, recibió una enorme vulnerabilidad política y económica, que redujo drásticamente su capacidad de negociación, control y regulación.

El desmesurado aumento de los alimentos y la no liquidación de divisas son la consecuencia natural de aquellas decisiones privatizadoras.

La actual recuperación del Paraná por parte del Estado no fue

producto de una lucha, como sí lo fue la nacionalización del Canal de Suez, concretada por Gamal Abdel Nasser, en 1956, en un acto de soberanía frente a Gran Bretaña, Francia e Israel, que impedían la construcción de la represa de Asuán. Tampoco es similar a la lucha del pueblo panameño, encabezada por el general Omar Torrijos, que puso fin al control de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá. El tratado Torrijos-Carter, firmado en 1977, fue ratificado por una consulta popular, que obtuvo el 67 % de aprobación. En ambos casos, el cobro del peaje reporta ingresos fiscales muy significativos para ambas naciones: U\$ 4200 millones para Panamá y U\$ 6300 millones para Egipto, en 2021.

Aunque el Paraná no es un canal, a efectos de tráfico de mercaderías, opera en la misma dimensión económica y política que los canales mencionados. La disputa por el control de su navegabilidad también conoció conflictos bélicos, como la Vuelta de Obligado (20 de noviembre de 1845, donde perdimos) y Punta Quebracho (4 de junio de 1846, donde ganamos). Justamente en este último punto, donde tuvo lugar la batalla que marcó el fin del bloqueo anglo-francés a los principales puertos de la Confederación Argentina se encuentran la planta y el puerto privados de Cargill. Ironías de la historia.

El Paraná surca la cuenca del Plata, una región que cubre 3 millones de kilómetros cuadrados y recorre cinco países. Es una vía de excepcional importancia geopolítica, por donde circula la mayoría del comercio de granos y sus derivados que se producen en esa vastedad geográfica, con destino esencialmente al sudeste asiático. Este volumen comercial descomunal está todo en manos de compañías monopólicas.

Las tarifas fueron un modelador de la configuración nacional desde siempre, y especialmente a partir de la concesión de los ferrocarriles a los ingleses, que las usaron como forma de desalentar la industrialización de nuestro país. Ejemplo de ello es lo ocurrido con los molinos harineros en la Colonia de Esperanza, donde los ingleses ahogaron la industrialización del trigo, cobrando una tarifa mucho más cara a la

harina que a los granos en bruto, que ellos industrializaban en su país. Igual sucede con la mayoría del trigo que exportamos a Brasil.

El vencimiento de la concesión del dragado y balizamiento del canal troncal puso en nuestras manos instrumentos de gran importancia política: el cobro de la tarifa y la posibilidad de crear una empresa pública que lo haga. Dicha empresa debería estar en la órbita del Ministerio de Defensa y brindar sus servicios a la Administración General de Puertos, que está haciendo una excelente labor en la gestión y cobro del peaje. Demuestra así, en los hechos, que privatizar no es necesario ni conveniente.

El fin de la concesión brinda una oportunidad excepcional para fortalecer nuestra democracia, controlar el contrabando, mejorar las cuentas fiscales, y fortalecer nuestra posición negociadora frente a las grandes usuarias. Parafraseando a Perón, cuando negociaba el precio de los ingleses: ellos tienen la soja y nosotros tenemos la vía por donde sacarla. O nos ponemos de acuerdo en función del bien común, o quedamos rehenes en perjuicio de todos.

Página/12, 1º de agosto de 2022.

Retenciones: un debate clave

Recientemente, voceros de la derecha neoliberal agraria salieron a explicar lo beneficioso que sería para todos los argentinos eliminar los Derechos de Exportación (DEX). La Fundación Producir Conservando, uno de sus voceros más connotados, estima que así podríamos llegar en el 2029/30 a los 165 000 millones de toneladas. Esto traería un aumento adicional de las exportaciones, que estiman en 18 mil millones de dólares, que nos permitiría, según esta Fundación, superar el actual “estancamiento productivo” de 130 millones de toneladas. ¡Ni que tuvieran la bola de cristal de los mercados para hacer semejantes predicciones!

Para el neoliberalismo, el único parámetro válido de medición del modelo agrícola es el volumen; para nosotros, al volumen hay que interrogarlo desde distintos costados. Para ellos es igual un volumen producido por 1000 empresas concentradas e integradas verticalmente, que por 500 000 chacareros. Les da lo mismo deforestar, fumigar pueblos y escuelas, con tal de sembrar un poco más. Todo en aras del volumen a secas. Nosotros queremos volumen, pero con productores, al servicio de la soberanía y seguridad alimentarias. ¡Aspiramos a construir una nación, no una factoría!

Hoy, la innovación científica y técnica permite que la agricultura prescindiera del chacarero tradicional. Que haya agricultores es una decisión política de la sociedad acerca de quién quiere que produzca los alimentos: un millón de agricultores genuinos o un par de miles de empresas concentradas e integradas verticalmente. Esa es la madre de todas las batallas. Para fortalecer al pequeño productor genuino frente a las corporaciones y *pools* de siembra, las retenciones son un instrumento clave. Además, son una herramienta de política económica multipropósito: pueden servir para desacoplar precios y para recaudar.

Analizar las retenciones con independencia del contexto, como un fin en sí mismo, es una trampa discursiva de la derecha. Deben analizarse en función del modelo de país que se desea. Sin retenciones en los 90 desaparecieron 103 000 chacareros y se hipotecaron 13 millones de hectáreas solo en el Banco Nación. Y con retenciones, a partir del 2003, no se le remató el campo a nadie.

Los que predicán la supresión de retenciones se asientan en dos pilares falsos:

A) Aumento del área sembrada.

B) Incorporación de tecnología. Nada les importa la soberanía y seguridad alimentarias, la ocupación geopolítica del territorio, el arraigo, la diversificación productiva, la chacra mixta, el precio de los alimentos, el medioambiente, la racionalidad logística. Ninguno de esos parámetros, donde las retenciones pueden tener un rol relevante,

son considerados en el análisis; solo les interesan el volumen y las utilidades.

Bien, ellos dicen que aspiran a llegar a las 165 millones de toneladas, para lo cual tenemos que sembrar 42 500 000 hectáreas. Dado que hoy se siembran 38 000 000 de los cinco principales cultivos, deberíamos agregar 4 500 000 hectáreas para llegar a lo que plantea Producir Conservando. La pregunta es ¿dónde se va a sembrar? Porque tierra hay la que hay, es un bien finito, no se puede comprar una máquina que la fabrique. Para eso se usa el eufemismo “ampliación de la frontera agropecuaria”. Pero su verdadero nombre es “depredación ambiental extrema”. La respuesta acerca de dónde van a sacar la tierra que necesitan incorporar es fácil: van por los pocos bosques naturales que aún quedan. La Argentina, según la FAO, es una de las diez naciones que más deforestan en el mundo. Lo hace a un ritmo de 300 000 hectáreas anuales, más o menos lo que requiere “La Fundación” para llegar a los 42,5 millones de hectáreas sembradas. Acá no entiende el que no quiere, especialmente, la porción del Frente de Todos que está enamorada del productivismo agrícola exportador. La Mesa de Enlace, los economistas ortodoxos, los gobernadores que predicán a coro “que hay que sacar las retenciones y producir más” deben decir cómo y dónde sembrar para producir más. Hablen claro, digan “dónde” y “cómo”, sin eufemismos ni verso. Veremos cuánta licencia social tienen esas ideas.

El otro argumento es el de la aplicación de tecnología a la siembra. Se han cansado de escribir que la agricultura de la Argentina era la más avanzada del mundo, que nuestra industria metalmecánica era de punta. Basta con recorrer los suplementos rurales de los medios hegemónicos para advertir la catarata de elogios que les dedican a nuestros sojeros. Resulta que ahora estamos atrasados en aplicar tecnología. ¿Qué lo impide? Según ellos, las retenciones. Entonces, ¿cómo llegamos a ser los mejores y más eficientes del mundo, con retenciones? Dicen que hay que sacarlas para llegar al lugar donde decían que estábamos.

¿En qué quedamos? Por otra parte: ¿dónde está esa semilla bomba que va duplicar los rindes promedio, o ese fertilizante explosivo que va dar esos rindes extraordinarios por encima de los que tenemos hoy? ¿Por qué hay que sacar las retenciones para acceder a ellos?

Lo que en realidad buscan con esa modernización antiestatista es una nueva ley de semilla que elimine el uso propio y le pague a Monsanto regalías extendidas. Son meros defensores de compañías extranjeras, a las que les importa un bledo el país. Por eso defienden el volumen a ultranza sin importar quién lo hace.

Si hoy se sacaran las retenciones, no quedaría en pie un solo pequeño y mediano productor, de los pocos que sobreviven.

Hay más o menos 60 000 productores que siembran soja. El 12 % (7200) de ellos producen el 62 % de la soja. Como vemos, la concentración es inmensa. La soja paga un 33 % de retenciones; si se las sacara, ese 12 % más concentrado tendría un 33 % más de liquidez. Sin duda, con ese “líquido”, iría por las tierras que trabajan los otros 52 800 productores, con lo cual el peligro de la concentración sería total. Por eso es tan importante segmentar y tener un Estado presente. Si queremos agricultura de rostro humano, se deben mantener las retenciones y segmentar de acuerdo al tamaño de las explotaciones. El tamaño define, el que más tiene más paga.

Página/12, 20 de agosto de 2022.

La soberanía es el tema

Hace pocos días, en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, frente a más de 60 000 compañeros/as que la escuchaban como en misa –este escriba, entre ellos– la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mostró un gráfico con la participación de los trabajadores en el PBI. Los tres puntos más altos coinciden con tres gobiernos peronistas.

Sin embargo, la causalidad de “tal desatino populista” no está dada por su condición de peronistas, aunque sin duda lo son. Menem lo fue y Alberto lo es o dice serlo (eso corre por cuenta de quien lea estas líneas), pero no tienen esa performance en la distribución de la riqueza. Aunque aquellos tres momentos históricos corresponden a mundos disímiles, tienen en común su “alta dosis de soberanía nacional” a la hora de tomar las decisiones.

La consigna fundante del primer peronismo –Braden o Perón– ya emana soberanía desde su raíz. Es el primer pico del gráfico.

El segundo pico es del período 1974/75: la imagen de Osvaldo Dorticós Torrado, presidente de Cuba, y Salvador Allende, como invitados de honor en la asunción de Héctor J. Cámpora es más que elocuente. A esto se suma la gira comercial del ministro Gelbard por los países de Europa del Este y Cuba, la nacionalización del comercio exterior, de las bocas de expendio de combustible o la Ley de Contrato de Trabajo; solo algunos de los hechos soberanistas.

El tercer pico corresponde al segundo gobierno de Cristina. En los años del kirchnerismo sobresalen el pago al FMI, el No al ALCA, la estatización de los Fondos de Pensión, de Aerolíneas Argentinas e YPF, la política de ciencia y técnica, la negociación con los buitres, entre otras. Los muchos ejemplos notables demuestran en forma contundente aquella densidad soberana a la hora de tomar decisiones. A mayores momentos de autonomía, mayor bienestar de nuestro pueblo. Es una regla “casi” matemática de la política nativa: cada vez que se toma un avión para ir a “conversar” con el FMI o el Banco Mundial, quedan en Migraciones jirones de calidad de vida de nuestra gente.

Los tres picos señalados tuvieron un denominador común: políticas públicas de intervención y control estatal en la producción y precio de los alimentos. El dato es elocuente: la relación entre el valor de los alimentos y el salario tiene un impacto directo en la calidad de vida.

Pero los alimentos no nacen en la góndola, sino en algo que se llama campo, tierra o suelo agrícola (todos sinónimos) y que está cada

año más concentrado. Hoy el mercado maneja la política agropecuaria. La Argentina, su pueblo de a pie, necesita una política agraria al servicio de la soberanía y seguridad alimentarias de la nación, necesita productores, no financistas; necesita administrar las tensiones entre consumo y exportación. Que conduzca la política, y no el mercado, es esencial para lograr “esas” participaciones notables de los trabajadores en el PBI.

La política debe decidir, ¡sí, decidir!, cuál es la estrategia agraria que más conviene al conjunto de los compatriotas. Para que los grandes grupos económicos y terratenientes no nos chantajeen, como lo hacen constantemente, con el valor del dólar o con el precio de los alimentos, variables que manejan en forma monopólica y siempre contra los pueblos y los gobiernos populares.

Para que la política recupere el control del sector, la primera clave es urbanizar el debate agrario, masificarlo, sacarlo del gueto de los poderosos y hacerlo inteligible para nuestro pueblo. La orientación general de la cuestión rural debe fijarla la política, no los mercados. Sin esta definición soberana no hay política agraria autónoma posible. Y sin política agraria autónoma, no hay precios accesibles para los alimentos de consumo masivo.

Cada concesión al libre mercado agrario es un achicamiento de los salarios de los trabajadores. Otra regla de oro de la historia argentina: a menos intervención estatal, menos poder adquisitivo.

Los tres momentos que destacó CFK en La Plata coincidieron con políticas de alta intervención en los mercados y control de precios de los alimentos, lo cual redundó en un notorio mejoramiento en la calidad de vida de nuestra gente.

No hay justicia social posible sin soberanía. Por eso es indispensable nacionalizar el Paraná, crear un organismo público que intervenga en el comercio exterior de granos, una ley de arrendamiento y aparcería rurales, y un instituto de colonización agraria. Empoderar a YPF Agro para que participe en la concesión de los silos de Quequén

(ya finalizada) y que el PEN apoye decididamente la acción del Banco Nación (*cramdown* mediante) para que Vicentin pase a manos de una empresa mixta de alimentos. Litio, Vaca Muerta, puertos: son puntos esenciales de una política agraria al servicio del pueblo, que tiene en la autonomía política el prerrequisito excluyente para su consumación.

En la cuestión agraria necesitamos un Estado enfocado al bien común, que recupere la centralidad del control y la orientación. Sin Estado no hay soberanía alimentaria. Y sin triunfo electoral no hay forma de conducir al Estado en beneficio de las mayorías.

Un programa agrario, que actúe de brújula al servicio de la felicidad del pueblo, debe incluir prioritariamente la satisfacción de sus requerimientos alimentarios, es decir: desayuno, almuerzo y cena. Ahí empieza todo. Es lo que primero hay que garantizar, y no lo hemos hecho. El hambre nubla la razón y envilece los sentimientos; matar el hambre hace que crezcan personas sanas, fuertes y libres. Es la razón de ser de los gobiernos populares. Y para eso es imprescindible que la soberanía, en su más amplia y genuina acepción, sea una realidad palpable. Sin soberanía hay hambre. Con soberanía, pleno bienestar. Es lo que dicen los números y la historia.

Página/12, 26 de noviembre de 2022.

Atando cabos

Una comitiva argentina, encabezada por el licenciado Jorge Neme, busca cerrar convenios de cooperación económica con el reino de Arabia Saudita. En ellos, este se compromete a financiar inversiones de largo plazo (25 a 30 años) con el objetivo de incorporar el riego en zonas desérticas y favorecer las exportaciones de alimentos. Hasta ahí, una iniciativa más que loable para zonas que no se podrían desarrollar sin la intervención del Estado. Nada que objetar. Pero tratándose de recursos

escasos y finitos como son el agua y la tierra, de fuerte impacto en el ambiente y la soberanía alimentaria, la necesidad de precisiones es insoslayable. Y, en el anuncio, no abundan. Hay sobreentendidos que no son inocentes ni inocuos. Dice el funcionario que “El gobierno nacional tiene la decisión de fortalecer la presencia de las provincias (dueñas del recurso suelo) acompañando a los productores (¿quiénes serían?), asegurando la ejecución de las obras hídricas”.

En iniciativas como esta, un gobierno nacional y popular que pretende representar los intereses del pueblo debe hacerse algunas preguntas que no son menores, ni secundarias, ni ideologizadas, sino del más puro sentido común:

- 1) ¿A quién pertenecen las tierras que se van a regar?
- 2) ¿A qué tipo de productores va a beneficiar y/o interesar? ¿Quiénes las van a laborar?
- 3) ¿A qué se refiere el funcionario cuando dice “productores”? Porque productor es tanto Adecoagro, que siembra 380 000 hectáreas, como Juan Chacarero que cultiva 50, o José Hortelano que planta tomate en una hectárea alquilada. Ese concepto necesita precisión. Y este no es un detalle sin importancia: es EL detalle. ¿Cuál va ser el tamaño de las explotaciones agropecuarias que surjan del regadío? No es lo mismo que la tierra se la quede un puñado de megamillonarios, o que sean miles de productores genuinos, produciendo para el mercado interno y que el remanente se exporte.
- 4) ¿Habrás tope a la cantidad de hectáreas por beneficiario? ¿Cuál será? ¿Se tendrá en cuenta el tamaño de la Unidad Económica para el límite, o solo la capacidad adquisitiva del interesado? Traducido: ¿serán agricultores de rostro humano al frente de chacras y quintas? ¿O la tierra regada irá para los mismos terratenientes de siempre, los Sigman, Brito o Bartolomé, por citar algunos de los pocos que tienen o superan las 100 000 hectáreas?

Esta discusión sobre los qué y los cómo de la agricultura tiene que ver con todo: con el precio de los alimentos, con el arraigo, con la soberanía y seguridad alimentarias, con el federalismo, con el medioambiente, etc. Y hay que darla ANTES de que se creen los monopolios y latifundios que DESPUÉS nos hacen la vida un infierno.

Quién produce los alimentos y cómo se producen es la madre de todas las batallas. No es lo mismo un puñado de megaempresas concentradas e integradas verticalmente, que miles de chacareros sembrando y cosechando. Si la tierra que se va a regar no contempla este “detalle” volvemos a tropezar (como tantas veces) con la misma piedra del neoliberalismo: la de creer que, por sí solo, el volumen producido genera bienestar. El 2022 es el mejor ejemplo de los límites y deficiencias del modelo agroexportador de volumen sin distribución. Tuvimos récord de exportaciones, superando los USD 100 000 millones, mientras los salarios no cubren las necesidades básicas, tenemos 40 % de pobreza y 8 % de indigencia. Parece mentira que aún no hayamos aprendido que desarrollo no significa automáticamente bienestar.

En la política agropecuaria hay que atar cabos, si no es muy difícil comprender la madeja de intereses que se coaligan y camuflan. Latifundio, sequía, inundaciones, deforestación, cáncer, precios de los alimentos, irracionalidad logística, quién hace las labores agrícolas: son todos rayos de la misma rueda, que es el modelo productivo existente. Lo definimos como monocultivo inducido con concentración de tierras y rentas, sin rostro humano y orientado a hacer volúmenes no de alimentos sino de forrajes, para alimentar cerdos y aves del sudeste asiático. Modelo al que la Argentina adhirió, sin chistar, en los 90 y sigue incólume hasta hoy. Por eso es indispensable precisar los conceptos. Y alinear proyectos, objetivos, beneficiarios y protagonistas.

La Argentina tiene que discutir quién quiere que le provea los alimentos: si miles de pequeños y medianos chacareros, produciendo en cercanía y generando bienestar colectivo o un par de cientos de corporaciones solo preocupadas por sus balances. Se puede hacer de las

dos maneras, la cuestión es política. Por eso es imperioso urbanizar el debate rural. Todos/as debemos opinar, ya que nuestro bienestar depende de la tierra y el agua. De ahí vienen los alimentos, no de la góndola.

Si regamos tierras y asumimos compromisos con el exterior, es imprescindible que esos acuerdos sean para el bien común y no para los “cuatro vivos” de siempre. Hay que rediscutir el modelo de producción de alimentos y el uso y tenencia de la tierra. Y si es con riego, con mayor razón aún. El debate debe ser claro, preciso y los compromisos resultantes, establecidos por escrito (ley). Todo lo sobreentendido, después es mal entendido y aprovechado por las corporaciones.

La única forma de garantizar la supervivencia de pequeños y medianos productores y que estén incluidos en un proyecto es merced a una decisión política de Estado. Sin Estado, no hay agricultura familiar posible. Un Gobierno como el nuestro no puede estar cooptado por el neoliberalismo agrario, al que solo le preocupa el volumen sin gente y con bajos salarios.

Debemos atar cabos para entender que, cuando reguemos la tierra, debemos regarla para todos/as y no en beneficio de una minoría de poderosos amigos del poder.

Página/12, 22 de enero de 2023.

Sequía: ¿a quién ayudar?

La sequía pegó y pega muy fuerte. Según informes especializados, es la más prolongada en la historia de nuestro país. Las lluvias recientes trajeron cierto alivio, pero el daño hecho es irreversible. En el trigo ya pueden ponderarse las pérdidas: fue la peor cosecha de los últimos siete años. En el maíz, soja y demás cultivos es un final cuantitativo aún abierto. La ganadería no le fue a la zaga en cuanto al perjuicio, hubo

mortandad de animales y liquidación de existencias. Con las lluvias crece el pasto y viene una natural retracción de la oferta vacuna. Esto ya impactó en los precios del mostrador. La hacienda en pie tuvo aumentos del orden del 40 %. Hay que puntualizar que esta sequía se da en un contexto donde “el campo” tuvo sus mejores años en décadas; tal como lo demuestran los índices de compra de maquinarias y camionetas.

Cuando se analiza la emergencia climática hay dos cuestiones que no pueden obviarse:

a) La falta de lluvia no es una maldición bíblica, es una resultante de la deforestación que se hace para sembrar o poner ganado. Si se deforesta, hay sequía y/o inundaciones: es una consecuencia directa de nuestro modelo agropecuario. Argentina es uno de los países que más deforesta en el mundo. La depredación ambiental tiene como característica que su accionar es local, pero sus efectos son globales. Se talan bosques en el NEA y en el NOA y lo sufrimos todos/as. Quienes deforestan³⁰ no deberían acceder a ningún tipo de beneficios del Estado. Estos depredadores son defendidos por las sociedades rurales, en especial las de Salta y Tucumán.

b) Después de cada desastre climático, se produce un agudo proceso de concentración económico-productiva. El productor más grande, que tiene espalda para bancar, sale más grande; y el más chico quiebra o se va de la actividad. Por eso necesitamos una intervención inteligente del Estado, orientada a fortalecer al pequeño y no a “todos por igual”, como pretende la Mesa de Enlace, a partir de un universalismo tramposo.

Tanto a nivel nacional (Ley 26 509), como a nivel provincial (Ley 11 297 de Santa Fe, o Ley 10 390 de la provincia de Buenos Aires), existen legislaciones que regulan y prevén cómo, cuándo y dónde debe declararse la emergencia y/o desastre agropecuario, a partir de lo cual el Estado está habilitado a concurrir en ayuda de los productores afectados. Toda

30 Ver el listado publicado por Greenpeace. Disponible en bit.ly/4cLZCh1

la legislación habla de productores en general, pero no determina qué se entiende por productor. Tremendo “detalle”: EL detalle. Se debe definir con precisión quién es el sujeto agrario al que queremos proteger y promover. En esa definición el tamaño es el factor clave. Es en este nivel de imprecisión por donde se nos escabulle el latifundio. Es más que obvio que no son iguales ni se les puede ayudar a todos. Hay que diferenciar: no se debe tratar como iguales a los que son estructuralmente diferentes.

Esa nebulosa legislativa, idea de la que hablaba Scalabrini Ortiz, permite que se cuelen las asimetrías más injustas, y transforma en inocuos los fondos asignados para financiar emergencias y/o desastres agropecuarios. El tema es definir con claridad a quién ayudar, y salir de ese “socialismo de mercado” de que “el campo somos todos”. A quién va la plata es una decisión política. Y el gran productor no lo necesita ni merece.

Además del tamaño, otra cuestión fundamental es NO confundir rentista rural con productor genuino. El rentista NO es productor. El rentismo es lo que predomina en cuanto a la forma contractual con que se encara la producción agraria. Según Matías Lestani, ex vice ministro de Agricultura (gestión Domínguez) y asesor técnico de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), el 70 % de la producción se hace sobre tierras alquiladas. Es decir, no la trabajan sus dueños, aunque funjan de chacareros. La Argentina padece (¡sí, padece!) una agricultura de tres pisos: dueño de la tierra, contratista y *pool* o megaprodutor. Esta estructura nociva genera desarraigo, abandono rural y concentración de tierras y rentas. No se puede tratar como iguales a productores de sofá, que a productores genuinos. No es política pública virtuosa la que mide con la misma vara al que trabaja que al que no. Los rentistas agrarios no trabajan. ¡Cómo puede ser que no se distinga al que arriesga, del que espera sentado la renta! Imposible de explicar seriamente.

Un gobierno que se precie de nacional y popular debe tener muy en cuenta estos criterios de selección en la ayuda con dineros públicos. Y defender al auténtico productor, que no siempre es el dueño de la

tierra. Los movimientos populares deben desterrar de su política agraria la falsa universalidad, que pregona la Mesa de Enlace, con la que pretende cogobernar. No se puede hablar alegremente de “el campo” y de “productores en general”, hay que saber diferenciar para poder ser justos: eso se llama DISCRIMINACIÓN POSITIVA.

La ayuda debe dirigirse a los pequeños y medianos productores “genuinos”. Allí deben ponerse los recursos, para que la tierra no se siga concentrando. Si la apuesta es por una agricultura de rostro humano, diversificada, que genere arraigo, con más y menos productores, el camino es la segmentación de las políticas públicas. Un gobierno es más progresista cuanto más diferencie a sus productores por la magnitud de sus explotaciones.

Página/12, 28 de enero de 2023.

¡Si se pudo, se puede!

Según el último censo agrario (2018), solo 863 unidades productivas concentran 34 200 000 hectáreas. Es una superficie equivalente a la provincia de Buenos Aires y a dos Tucumán juntas, en las que sumadas viven más de 20 millones de personas. Algo más de 800 personas son dueños de la plataforma donde se producen los alimentos para 47 millones de argentinas y argentinos. Impactante, ¿verdad? ¿Es razonable que un bien tan escaso como la tierra, que no se fabrica y de la que dependemos todas las personas, esté en tan poquitas manos? La respuesta parece obvia.

Ahora: ¿qué hacemos? Y ¿cómo lo hacemos? Esto ya merece un debate más profundo y, lo que es peor, ausente.

Para empezar, el campo nacional y popular debe dejar de ignorar este tema vital, e hincarle el diente de una buena vez. La invisibilización del latifundio es el gran triunfo cultural de la derecha oligárquica.

Y su modelo productivo, el agroexportador, es el principal obstáculo político, económico y cultural a la industrialización de nuestro país, lo que equivale decir, a construir un país para todos/as. Si bien muchos (aunque no tantos como sería necesario) denunciaron el problema del latifundio y lo hostigaron discursivamente, a partir de la década del 70 del siglo pasado, se lo dejó de mencionar. Desde entonces, la derecha impuso su agenda de invisibilización y lo disfrazó de productividad abnegada y benéfica.

El único tiempo histórico en el cual se encaró seriamente este problema desde la acción gubernamental fue durante la década del 45 al 55. Entonces, Perón confiscó parte de la renta agraria para financiar la tardía industrialización del país y mudar inquilinos rurales a propietarios. Ahí nació la grieta.

En diez años, el peronismo logró transformar 50 000 arrendatarios rurales en propietarios. Fue un proceso fascinante y totalmente ignorado, aun por los propios peronistas. Se trató de una auténtica y exitosa Reforma Agraria, aunque Perón –con su astucia campechana– nunca la llamó así. La consigna que utilizó fue: “La tierra para quien la trabaja”. En ese momento, Argentina era un país de arrendatarios rurales, denominación que hoy no podría usarse, porque la tierra sería para los *pools*.

En ese proceso de transformación utilizó básicamente tres instrumentos:

- 1) Expropió latifundios. ¡Sí! Expropió y pagó, como los de Pereyra Iraola o los campos de los descendientes del coronel Rauch. No fue un método frecuente. Pero, cuando tuvo que usarlo, lo usó.
- 2) Dictó una serie de medidas que obligaban a los terratenientes a vender sus predios en forma “voluntaria” a sus inquilinos. Esto tuvo gran impacto. Dichas medidas incluían: prohibición de desalojos, congelamiento del precio de los arrendamientos, prioridad de compra al inquilino, otorgamiento de un crédito a treinta años para que este pudiera comprar, y el pago –por parte

del Estado– de la mensura y la escritura. Y, como si hubiera sido poco, en 1948 sancionó la Ley 13 246 que, entre otras cosas a favor del inquilino, prohibía el subarriendo. ¡Como para que la oligarquía no lo odie!

- 3) Otro instrumento que utilizó, especialmente en los albores del peronismo, fue la compra de tierras, para luego parcelarlas y entregarlas a sus ocupantes.

Este es el caso de la Colonia Cañada Rica, que tuvimos oportunidad de visitar hace unos días junto a Darío Baiocco, por gentil invitación del presidente comunal de dicha localidad, Oscar González (FPCYS). Esta fue una colonización de la primera época. En 1945 Perón dio la orden al Consejo Agrario Nacional (el CAN, disuelto por la dictadura en 1980) de comprar las tierras de los sucesores de Simón Sánchez (dirigente de la UCR) y de Paulina Sánchez de Guevara. El CAN fraccionó el latifundio en parcelas de entre 35 y 50 hectáreas, y se las vendió a los adjudicatarios a larguísimo plazo. Pero, además, construyó una casa para cada uno de ellos, y una escuela con pista de baile, cancha de fútbol y parque recreativo, todo realizado en forma admirable.

Después de 42 años de abandono, la escuela sigue erguida como un roble y espera que algún buen criollo o criolla la rescate del olvido. Hoy no solo la escuela está cerrada: la mayoría de aquellas casas son taperas, algunas demolidas y otras abandonadas. Quienes tuvieron el tino de conservarlas, los menos, las tienen impecables. Y todo, pero todo, está rodeado de un mar de soja, ese desierto verde. Muchos de los actuales dueños, descendientes de aquellos que recibieron la propiedad de manos del Estado, olvidaron cómo llegaron a ser propietarios y claman contra cualquier intervención del Estado. Paradojas de estos tiempos ingratos y sin memoria.

La reforma agraria de Perón no consideraba solo a la tierra, tenía una mirada global que incluía la tierra, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), el tren y las tarifas (creó la tarifa

diferenciada justicialista para la leche), la Marina Mercante y los puertos. Como buen estratega, no consideraba el precio de los alimentos como una cuestión autónoma del resto de los factores enumerados. Al revés de lo que ocurre ahora, donde se mira el precio desvinculado de otros componentes, Perón vio el conjunto de lo que ahora llamamos soberanía alimentaria.

El proceso de dividir y parcelar enormes cantidades de hectáreas, para que miles de colonos se transformaran en propietarios de un pedazo de tierra, fue también el origen de la chacra mixta. Si se pudo hacer entonces, se puede volver hacer.

En los tiempos que corren, volver al campo, a la producción de cercanía, con mixtura productiva y generando arraigo, no es una utopía loca: es una necesidad imperiosa si queremos salvar el planeta de la catástrofe. El futuro ya está acá. El modelo de sojización con concentración de tierra y rentas es parte esencial del problema; no es la solución de nada. Es otro mito del neoliberalismo que hay que derrumbar. Primero hay que derribarlo en la cabeza de los dirigentes del campo nacional y popular; y después, en la de nuestros ciudadanos de a pie. Por eso hay que urbanizar el debate rural.

Conocer la historia es fundamental para que no nos roben el país y podamos explorar alternativas. La derecha quiere analfabetos históricos, solo le sirven los ciudadanos robot, que sepan informática, idioma, matemáticas. No quieren la historia porque los incrimina y abre cabezas. Decía Rodolfo Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los de todas las cosas”.

No perdamos las experiencias valiosas. ¡Si se pudo, se puede!

Página/12, 23 de febrero de 2023.

Asamblea del 28 de la Federación Agraria Argentina

Que una organización gremial agraria, que históricamente representó (ya no) los intereses de los pequeños agricultores de nuestro país, llame a una asamblea para analizar los efectos de la sequía pareciera ser lo más lógico y natural del mundo.

¿Pero cuán fuerte y real es la sequía?, podría preguntarse algún ciudadano, teniendo en cuenta las reiteradas marchas, paros y movilizaciones que le hicieron a este Gobierno cuando el clima acompañaba a la producción y los precios también. La sequía es realmente muy fuerte, como nunca, impactante. Hay que remontarse a varias décadas atrás para encontrar algún evento climático similar. Y si a eso le sumamos una helada fuera de época (en febrero), el combo es letal. La seca –además– impidió la siembra de aproximadamente un millón de hectáreas. Estimar el daño es difícil y está lleno de cálculos tan interesados como antojadizos. Son cifras que provee el mercado para sacar partido de la desgracia. Pero el impacto fiscal y en la actividad económica será –sin duda– muy importante. El Estado debería tener (lo desarmó en los 90) su propio sistema de estadísticas agrarias y de evaluación de los cultivos, al estilo del Departamento de Agricultura del gobiernos de los Estados Unidos. Pero no lo tiene, usa los datos de las bolsas de comercio de Rosario y Buenos Aires. ¡Eso sí que es ir a comprar al almacén con el libro escrito por el almacenero!

A posteriori de un evento climático de esta envergadura, es casi una regla matemática que el productor pequeño quiebra o se va del circuito y el grande sale más grande. Por lo tanto, un gobierno popular debería cuidar ese gran “detalle”, si en realidad quiere una agricultura con agricultores como pregonan los manuales del progresismo agrario. Para lo cual hay un solo remedio: segmentar la ayuda y orientarla al productor genuino. Megaproductores, terratenientes y rentistas fuera de la fila de pago.

Ahora bien, que una organización de pequeños agricultores llame

a una asamblea por la seca y no diga una palabra de la segmentación o de la cuestión ambiental, que es en última instancia el problema del cual deviene la sequía, es por demás sospechoso. Y si los puntos centrales de la convocatoria presentan de primer plato unificar el tipo de cambio –es decir, una devaluación, para hablar más claro– y de “postre”, eliminar las retenciones, la sospecha pasa a ser certeza. Como si el dólar a 500 pesos garantizara que va a llover.

Después están los puntos de la convocatoria que son de cobertura, como para vestir a la ocasión, así parece que es lo que no es. Nos referimos al seguro multirriesgo, plan ganadero, suspender el impuesto a la ganancia, ejecuciones fiscales, apremios bancarios, embargados, todos pedido *urbi et orbi*, sin diferenciar a los productores por tamaño, sin segmentar. Termina el llamado a la “guerra” con un demagógico “atender la problemática de las economías regionales”, pero hacen la movilización en plena pampa húmeda. La mayoría de los puntos impositivos que reclama el petitorio ya fueron concedidos por el Gobierno. Así como a lo atinente a temas financieros en el Banco Nación. Además, el Gobierno creó un fondo rotatorio de 5000 millones de pesos para atender a los productores.

Ahora bien, el otro dato llamativo de la asamblea es la adhesión “espontánea e inmediata” de toda la Mesa de Enlace, Productores Autoconvocados, Grupo Independencia, y cuanto otro espécimen del cardumen neoliberal ande por ahí. Como moscas a la miel.

La convocatoria la hizo la FAA oficial, una organización que hoy no puede convocar a más de una docena de dirigentes rentados, la tropa la pone el ruralismo y autoconvocados, y el programa lo hizo la Rural. La única pizca de coherencia la puso la filial de la FAA, del sur de Santa Fe, que sacó un comunicado reclamando por los puntos genuinos e históricos de la FAA: segmentación, Ley de Arrendamiento y suspensión de desalojos. Siempre algún criollo/a queda en pie capeando el temporal.

Después de tres años de ceder e interactuar con la Mesa de Enlace y la cadena agroindustrial, de recular con Vicentin, de concederle

parcelas enteras del ex Ministerio de Agricultura a los de la Bolsa de Cereales, de los dólares soja, nuestro Gobierno se encuentra de repente con esta movida y lo toma por sorpresa, no logra entender qué pasa y el por qué. Se pregunta: ¿por qué, si les di todo? Buena parte de lo que reclaman hoy ya se les otorgó, e igual nos hacen la movilización. La respuesta es sencilla, no quieren al kirchnerismo en el gobierno, aborrecen a todo lo que huele a pueblo, a distribución de la riqueza, a bienestar para todos/as. Son supremacistas blancos. Es el bolsonarismo nativo. ¿Lo entenderán en la Rosada?, ¿lo entenderán los que quieren un peronismo, “que entienda al campo”?

Los ideólogos de la política agraria oficial, los que deambulan detrás de la escena, siempre están más preocupados en atender a estos sectores desestabilizadores y en sostener las ganancias de las empresas, que en entender las necesidades del pueblo y del movimiento nacional y popular. No ven agricultura sin concentración.

A nuestro Gobierno pareciera que no le importa la soberanía alimentaria ni la forma de producir, le da lo mismo. Solo le preocupa el volumen y los dólares, el resto es cartón pintado. Pero ni la cadena agroindustrial, ni la Mesa de Enlace o la Bolsa de Cereales, se van a preocupar por la suerte del FdT, no nos van a poner votos ni fiscales, se los ponen a Cambiemos. Tampoco nos garantizan los precios del pan y la carne. El pueblo paga los alimentos más caros de América Latina (de los que ellos tienen el monopolio), y nosotros perdemos 4 millones de votos, ¿se entiende?

Pareciéndonos a la derecha no vamos a conquistar el favor de la burguesía agraria que se nos alejó después de 2008, ni a mejorar la mesa de los argentinos. Es haciendo más y mejor peronismo. Eso al menos es lo que votamos.

Deberían meditar lo que tantas veces les han dicho mis compañeros, que no es con la Mesa de Enlace, es con la Mesa Agroalimentaria; no es con la FAA oficial, es con las Bases Federadas disidentes de la FAA. No es lisonjeado y concediendo, sino plantándose y negociando desde otro lugar e incorporando otros interlocutores al debate. La

asamblea de Máximo Paz, donde participó el ministro Wado de Pedro, es el mejor ejemplo de que hay otro camino que se puede recorrer con responsabilidad. No es fácil, no está exento de dificultades, pero es por el sendero que tenemos que ir para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. En paz y unidad, pero para transformar a la Argentina, no para consolidar la dependencia.

Página/12, 26 de febrero de 2023.

Alimentos: lo que no se discute

Acaba de conocerse el índice FAO de inflación para alimentos en América Latina:

Venezuela pica en punta con 110,4 %. Es un histórico importador de alimentos, situación que, bloqueo mediante, está revirtiendo aceleradamente y con éxito.

Le sigue con un 86,6 % Argentina, vendedora neta de materias primas con destino alimentario. Exportamos todo, pero todo lo que comemos: trigo, soja, maíz, poroto, lentejas, ajo, cebolla, carnes y un largo etc. Marcamos récord histórico de exportaciones, y tenemos 40 % de pobreza y una inflación por las nubes. Está claro que el modelo no funciona, ¿no? Sin embargo, no se les ocurre siquiera poner en debate la posibilidad de cambiar. Al contrario, ¡proponen profundizarlo!

El país de menor inflación en alimentos del continente es Bolivia, con el 2,2 %. Ahí la soberanía alimentaria es un valor tangible, no un mero discurso sobre lo que hay que conquistar.

El precio de los alimentos es un factor clave de la estabilidad democrática en todo el mundo; y es un instrumento central en la puja distributiva. Un gobierno peronista tiene atada su supervivencia política al bienestar de los sectores populares. Alimentos y salarios son inseparables, y bases esenciales para una buena salud electoral.

El debate de la producción y el precio de los alimentos en Argentina está dominado por falsos supuestos que propagan los voceros interesados de los agronegocios monopólicos. Para estos grupos, los parámetros se reducen a volumen, producción y exportación. Ellos invisibilizan “partes” que son centrales para entender el “todo”. ¿Cuáles? Van algunas, sustanciales, que nunca entran en debate: concentración de tierras, rentas y producción, medioambiente, deforestación, arraigo, migraciones rurales, logística y puertos. Como si dónde se siembra y quién lo hace fuera una cuestión inocua en el tema. Otro gran ausente en el debate, es el impacto del acuerdo con el FMI en el precio de los alimentos.

Veamos: el día 4 de junio se realizó en Rosario un encuentro sobre la soberanía. En el panel referido a soberanía alimentaria habló Albina Albides, productora hortícola del cordón verde platense, integrante de la organización Asociación de Medieros y Afines (ASOMA) y de la Federación Nacional Campesina. Albina produce verduras y hortalizas que comercializa a través de mayoristas que le pagan lo que se les antoja. Ella debe alquilar la tierra donde siembra por la que paga \$40 000 la hectárea. La superficie mínima para que pueda vivir una familia es de 2,5 hectáreas, es decir, \$100 000 mensuales; y no le permiten construir una casa de material, deben morar en casillas de chapas y plásticos. Es irracional e inexplicable que en la Argentina no se pueda garantizar tierras para la producción alimentaria de cercanía. Y más inexplicable aún, que el campo nacional y popular no lo ponga en agenda.

La contracara de Albina es la producción hortícola megaconcentrada; integrada verticalmente, con posición dominante en el mercado. Un ejemplo de esta forma de producción es Hijos de Salvador Muñoz: una empresa salteña, que maneja 28 700 hectáreas (contra ninguna de Albina). Esta compañía siembra 24 000 hectáreas de poroto (destinado a la exportación) y la complementa con ganadería. También planta unas 1700 hectáreas de pimiento, tomate, zapallo, berenjena y lechuga.

“La participación de la firma en el mercado argentino de conservas de pimientos alcanza a más del 70 %, siendo líderes absolutos en

todos los segmentos; ya sea de consumo domiciliario con marcas propias y de terceros, como a través del canal gastronómico. Los pimientos y tomates para ‘conservas’ salen a la venta enlatados con las marcas propias y con ‘marcas blancas’ destinadas a terceros clientes mayoristas locales, para atender el consumo minorista y el canal gastronómico”.³¹ Obsérvese el concepto: “líder absoluto en todos los segmentos” y 70 % del mercado del pimiento. Agreguemos que exporta a 15 países, lo que le permite elegir adónde van sus productos, en función del precio. “Parece” posición dominante, ¿no?

Ahora, cuando el pimiento aumenta, ¿este monopolio no tiene nada que ver? Y sumemos otro “detalle” no menor: de Embarcación (Salta) a CABA hay 1386 km, es un día y medio de viaje. Ese recorrido lo tienen que hacer los pimientos y demás productos para llegar a destino, todo en camión. Semejante travesía encarece el producto en un 30 % estimativamente. El 50 % de esa logística es en dólares. Cada vez que se devalúa, de acuerdo con las exigencias del acuerdo con el FMI, va al precio de los alimentos. A esto hay que sumarle pasivos ocultos que nunca se computan: costo ambiental, accidentes viales y mantenimiento de rutas.

Latifundio, destrucción de la chacra mixta, producción sin productores, integración vertical, posición dominante, deforestación, depredación ambiental, migraciones rurales y deslocalización productiva para sembrar soja hasta en las banquinas. Este es el modelo productivo dominante instalado por el mercado a partir de la década del 90. Todo está mal en esta forma de producir los alimentos. Y el precio que pagan los consumidores es la certificación final del desquicio productivo que padecemos.

La Argentina debe rediscutir su modelo agrícola. Hay tres interrogantes que la política debe responder en torno a este tema:

31 *Bichos de Campo* (03.06.2023).

1. ¿Quién es el sujeto que produce los alimentos? Se puede hacer de las dos maneras: con Albina o con los Hijos de Salvador Muñoz. Si es con Albina, hace falta más Estado y más recursos. Si es con los segundos, a no quejarse por los precios.
2. ¿Dónde se producen? O se garantiza el acceso a la tierra a los pequeños productores y se va a la producción de cercanía, con chacra mixta incluida, o se sigue con la deslocalización productiva como sucede hoy, con alimentos viajeros y caros.
3. ¿Cómo se produce? O se va hacia un modelo agroecológico, amigable con el medio ambiente y la salud, o se sigue este rumbo de producción industrial con uso de agrotóxicos.

Debemos cambiar la forma de producir alimentos. Cuanto más demoremos, más costo político pagamos. Uno cambia cuando toma la decisión política de cambiar; después, implementar el cambio lleva tiempo, ya sea por motivos políticos o biológicos. No es soplar y hacer botellas. Pero si se pudo, se puede.

Página/12, 14 de junio de 2023.

El Grito de Alcorta

El 25 de junio se cumple un nuevo aniversario de la emblemática gesta agraria que tuvo por protagonistas a los chacareros arrendatarios de la pampa húmeda, y que pasó a la historia con el nombre de Grito de Alcorta.

El Grito de Alcorta significó un modesto reacomodamiento de cargas dentro del subsector tierras del modelo agroexportador nativo. Ahí, en ese segmento específico, chocaron terratenientes y subarrendadores contra chacareros arrendatarios, por el *quantum* del alquiler de la tierra para sembrar. Las demandas chacareras eran por demás modestas: se reducían a algún retoque en los contratos de arrendamiento que

incluyera una módica rebaja en el canon. No hubo planteos “revolucionarios” ni figuró la reforma agraria en el pliego de demandas.

Continuamente referenciado para graficar cualquier conflicto agrario, incluido el de las retenciones móviles que está en sus antípodas, el Grito de Alcorta es –tal vez– el hecho histórico más citado, más tergiversado y, por ende, menos cabalmente comprendido de la historia agraria argentina.

Cada año, cuando llega la efeméride, se repiten como en un mantra una serie de inexactitudes que, a fuerza de ser reiteradas, parece que fueran verdad, mas no lo son. La falsificación de la historia nunca es inocente ni inocua: siempre responde a intereses económicos específicos.

En el caso del Grito, la deformación es ostensible, romantiza un hecho de lucha y resistencia, presentándolo como un evento “casi amistoso”, que se resolvió en una conversación dominguera entre tres hermanos: dos curas (que ni siquiera participaron en el hecho) y un abogado, que estaba en el polo ideológico opuesto a ellos.

Hay un ocultamiento sistemático de los presos de la huelga –que los hubo y muchos en diversas zonas del país– así como de la represión que se ejerció sobre los colonos en paro y el rol de los terratenientes, pidiendo la intervención del ejército y la represión a los huelguistas. Los ataques contra la integridad física de los dirigentes que lideraron la lucha agraria fueron innumerables. A Netri lo asesinaron; a Menna, también. A Juan B. Justo le pegaron cuatro balazos. Capdevila estuvo 18 meses preso y fue torturado. Manuel Sales, detenido junto a nueve agricultores de Máximo Paz, debió seguir el camino del exilio interno. En todos estos hechos de violencia y persecución estuvo el tándem Cepeda-Rodeiro, hombres fuertes del radicalismo conservador santafesino.

El déficit fundamental en el análisis histórico de esta gesta es no visualizar y conceptualizar correctamente el rol del subarrendamiento y de los subarrendadores en la colonización agraria argentina. El arriendo del arriendo fue el gambito que encontró la oligarquía terrateniente para incorporar sus tierras incultas a la agricultura, sin perder

la propiedad. Es LA CLAVE que explica el retraso del desarrollo industrial de nuestro país. El subarriendo fue prohibido por el peronismo, por Ley 13 246.

La “biblia” sobre la que se asienta el análisis histórico del Grito de Alcorta es el libro de Plácido Grela titulado *El Grito de Alcorta. Historia de la rebelión campesina de 1912* (Tierra Nuestra, 1958). Se trata de una obra plagada de inexactitudes y relatos claramente fraguados, con pasajes inverosímiles, sin ninguna base documental, lo que la convierte en un texto más cercano a la literatura de ficción que al análisis histórico riguroso. Es en este libro donde abrevan la mayoría de las “investigaciones” sobre las que se armó toda la memorabilia oficial del hecho. Así es como vemos repetir año tras año una serie de latiguillos que no tienen nada que ver con lo que realmente pasó.

Estos fueron algunos de los hechos más importantes:

- 1) El Grito de Alcorta comenzó en Bigand, el 15 de junio de 1912. Un millar de productores y comerciantes se reunió en la plaza, fogueado por el comerciante Luis Fontana. Ahí presentaron un pliego de demandas y dieron un ultimátum al terrateniente, don Víctor Bigand.
- 2) Diez días después, sobre la base de los reclamos de Bigand, se declaró formalmente la huelga en Alcorta, y se analizaron las modificaciones de los contratos, que había preparado Francisco Netri.
- 3) El principal orador de los dos actos fue Luis Fontana.
- 4) Francisco Netri no fue el gestor ni el organizador de la huelga, fue convocado como abogado porque reunía tres requisitos esenciales para la Comisión de Huelga que lo convocó: era italiano, ateo y militante mazzinista, una especie de progresista italiano de la época. Nunca fue socialista, ni líder de la huelga.
- 5) Pascual y José Netri, curas de Máximo Paz y Alcorta, respectivamente, no tuvieron nada que ver ni con el Grito ni con la fundación de la Federación Agraria Argentina. Tampoco fueron

responsables de convocar a su hermano Francisco, situación que este dejó más que clara en un reportaje que dio a la revista *Fray Mocho*, cuando dijo: “Jugamos en distintos equipos”.

- 6) Pascual Netri fue cura de Máximo Paz, no de Alcorta, como dice aviesamente el libro de Grela, a lo largo de más de cien páginas. Pascual y su familia vivieron en Máximo Paz durante 46 años. Tuvo un hijo llamado Mario, abogado, que ejerció la profesión en la localidad y fue uno de los primeros jueces del trabajo, designado por Perón. A su vez, Mario tuvo cuatro hijos que habitualmente participaban en las efemérides federadas como nietos de Francisco, cuando en realidad eran nietos de su hermano, el cura Pascual: otro fraude más, por si faltaran mentiras a esta historia. Hay que agregar que la iglesia incendiada intencionalmente el 17 de noviembre de 1912 es la de Máximo Paz (hay fotos) y no la de Alcorta, como erróneamente se repite.
- 7) La primera comisión de huelga de Alcorta estuvo inspirada y dominada por anarquistas. En su composición solo había un presidente designado; el resto de la comisión eran vocales y actuaban como secretarios por turnos. Los anarquistas no están contra la organización (como se suele suponer), sino contra las jerarquías y la desigualdad.
- 8) El verdadero líder de la primera comisión de huelga fue el anarquista Francisco Capdevila, no Francisco Bulzani, que actuó como presidente, pero sin ningún peso específico. Bulzani no fue socialista ni maestro de escuela, apenas sabía leer y escribir, y terminó expulsado de la filial Alcorta, por no cumplir los mandatos que se acordaban. Capdevila tuvo un protagonismo insustituible durante la huelga y después siguió luchando por la causa agraria, hasta que en 1916 fue detenido en Máximo Paz y salió muy deteriorado por las torturas sufridas en la cárcel. Se desconoce el rumbo que tomó.

La verdad de lo ocurrido en Alcorta está sepultada bajo una maraña de intereses que, a través de mentiras e inexactitudes, pretende despojar a la gesta de cualquier atisbo de lucha antiterrateniente. Todo debe estar en la historia para que la memoria sea como fue, y no como quiere y conviene a la derecha. Quienes se interesen en profundizar sobre este tema, con fuentes debidamente documentadas, pueden recurrir a los siguientes libros de mi autoría: *Olvido y falsificación en la historia del Grito de Alcorta*; *La fundación de la Federación Agraria Argentina. De los orígenes a la traición*; y *¿Quién mató a Francisco Netri?* ¡Ahí los espero!

Página/12, 24 de junio de 2023.

Las gallinas fusiladas

El sistema nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país es un orgullo nacional y un baluarte en la lucha por la soberanía política y económica: satélites en órbita, vacunas, desarrollo de lanzadores satelitales, investigación sobre enfermedades raras y no raras como el cáncer, creación de un trigo resistente a la sequía único en el mundo. En fin, un sinnúmero de proezas que exceden esta pequeña lista y ponen a nuestro país a la vanguardia de América Latina. Los científicos que lo integran son un ejemplo de compromiso y amor por la patria. Miles de ellos volvieron cuando CFK creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, puso en marcha el Programa Raíces y multiplicó por cuatro el presupuesto del área, en dólares. Cientos de ellos, pudiendo irse a cualquier lugar del mundo donde son buscados y respetados, se quedan trabajando aquí. Luchan y se movilizan con una conciencia admirable, a pesar de ser denostados y atacados permanentemente por una derecha cavernaria e inverosímil.

Este ataque de Milei no es el primero que recibe el complejo científico: ya Cavallo los había mandado a lavar los platos, y Macri los desfinanció sin pudor. Pero la dictadura instalada en 1976 directamente los persiguió y asesinó. El INTA fue uno de los destinatarios de su saña

represiva: diez científicos asesinados, diez desaparecidos y ochocientos trabajadores despedidos. Este prestigioso instituto es clave en la lucha por nuestra soberanía y seguridad alimentarias. Por eso es asediado permanentemente por las compañías transnacionales, tanto para cooperarlo como para infiltrarlo, con el objetivo de utilizarlo en su beneficio.

En su tesis doctoral “Ciencia, tecnología y dictadura. Producción de conocimiento e intervención militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1973-1983)”, la investigadora Cecilia Gárgano rescata una historia increíble, que me había llegado de mano de José Catalano, ex vicepresidente del INTA. Es el caso de Sigfrido Kraft, un investigador del INTA y sus gallinas fusiladas. En 1959, este hijo de pequeños productores chaqueños recibe una beca para estudiar nutrición animal en los Estados Unidos. Terminada la beca, vuelve al país con la intención de mejorar la calidad de vida de los agricultores chacareros (aún no eran sojeros). Por ese tiempo todos vivían en las chacras, y el pollo y el huevo se producían en el “patio chacarero”, pulmón de la economía familiar: proveía al consumo de cercanía y lo que sobraba era vendido al “gallinero”, comprador ambulante que luego lo enviaba a los mercados concentradores. Sé muy bien de qué hablo: mi abuelo materno era gallinero.

Sigfrido empieza a investigar una línea de alimentos para aves con materia prima no tradicional producida en la zona, como eran la semilla de algodón y el sorgo anti-pájaro. A la vez, empieza a seleccionar aves para mejorar la línea genética. El centro de esta investigación estaba radicado en INTA-Pergamino. Después de diez años de trabajo, el éxito de Sigfrido fue rotundo: consiguió una línea de gallinas resistentes a las zonas semiáridas y un alimento muy barato para ellas. ¡Soberanía y seguridad alimentarias a pleno! Pero no todos piensan como Sigfrido: “Sos un mal ejemplo porque, si vos lo haces, los otros lo van hacer también”, le dijeron los importadores, según le contó a la doctora Gárgano. Este experimento amenazaba los negocios de las grandes compañías transnacionales de genética animal, alimentos

balanceados y laboratorios veterinarios, que se estaban instalando en el país. Para Cargill o Purina (Nestlé), que la gente pueda comer bien y barato, sin depender de ellos, es un problema.

¿Cómo terminó la experiencia? En 1976, a los dos días del golpe, la Armada mandó un pelotón a fusilar las gallinas. ¡Sí, a fusilarlas! Entraron al galpón donde estaban los 1200 ejemplares seleccionados y a tiros los mataron. A las pocas que sobrevivieron, las hicieron puchero; y a Sigfrido Kraft lo cesantearon. Años de estudio, trabajo e inversión pública, de búsqueda y selección de ejemplares fueron a parar a la “olla”. Así es como los cipayos tratan a la ciencia, cuando se orienta a mejorar la calidad de vida del pueblo: tiros, asesinatos y represión, todo para no dejar de ser colonia.

Algo parecido pasa con nuestras semillas: importamos el 85 % de las semillas para huerta y alrededor del 50 % de las de pasturas para nuestra ganadería, depende el año. Hace solo noventa días, se reglamentó la Ley 27 188 de Agricultura Familiar. Esta habilitó la creación de Centros de Producción de Semillas Nativas y Criollas (CEPROSENA), en cinco regiones del país. Complementariamente, se creó el programa SEMILLAR, en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, para garantizar el libre acceso y la reproducción de estas semillas autóctonas. (Una labor como la de Sigfrido Kraft, aunque con un retraso de varias décadas). Es urgente rescatar la diversidad biológica para romper la dependencia, mejorar la alimentación, ahorrar divisas y generar trabajo genuino. Pero este programa tiene tanta demora y trabas, que parecería más fácil lanzar un satélite que producir semillas nacionales.

Milei no es una novedad en la sociedad argentina y su ataque a la ciencia, tampoco. Es Macri en la misma dirección, pero más rápido. Llevan aquí un par de siglos. Es Rivadavia contra San Martín, el golpe de 1930, la Revolución Fusiladora, la dictadura de 1976, Menem, Cavallo, De la Rúa. Son los que fusilan seres humanos o gallinas para servir a los mismos intereses. Parece mentira que no los hayamos visto venir. Fue CFK la única que los desenmascaró, les puso freno y los

desplazó, dándole a la ciencia el valor estratégico que tiene. Por cosas como esa, es que la persiguen, la proscriben y la quisieron asesinar.

La soberanía no debe ser solo un *slogan*: es un concepto que contiene un hondo sentido emocional, político y económico. Los sirvientes de la dependencia lo saben mejor que nadie, por eso la atacan. Ahora solo falta que el pueblo tome nota.

Página/12, 23 de agosto de 2023.

Políticas públicas diferenciadas

La definición de Políticas Públicas Diferenciadas (PPD) tiene que ver con que no se puede tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos, ya sea en términos sociales, tributarios, productivos, o económicos. No todas las personas físicas o jurídicas tenemos las mismas capacidades contributivas, económicas, de producción o de consumos de luz, agua y alimentos. Esta es una diferencia que el campo nacional y popular debería reconocer en forma automática a la hora de gestionar. Y casi nunca lo hace.

Las PPD son un instrumento para gestionar el Estado con mayor justicia social. Son muy útiles a la hora de favorecer a los sectores más débiles o más chicos. No son una aspirina que todo lo cura y/o que se pueda aplicar a toda política en todo momento. Pero es una forma de gestión que permite calibrar la democracia, darle contenido y sabor popular, merced a una discriminación positiva. Ayuda a dotar de contenido popular a las democracias, y reduce notablemente los índices de “insatisfacción democrática”, ese mal que abre las puertas a todos los demonios.

Un gobierno que se precie de popular no puede poner en la misma bolsa a todos sus ciudadanos, cualquiera sea su poder económico. No puede cobrar las mismas tasas o tarifas de luz a un millonario, clase media o un indigente que no llega a la canasta básica. ¿Cómo cobrar la

misma tarifa de luz a un casino, a una multinacional o a una pyme? ¿O los mismos derechos de exportación (DEX) a un terrateniente que a un chacarero o a un campesino?

Las políticas planas son la contracara de las PPD. A la hora de pagar, la derecha siempre se opuso a la segmentación. Generó un sentido común, a partir de consignas efectistas pero injustas y falaces: “Todos somos el campo”, “Todos somos Vicentin”. Es decir “unámonos”, ocultando las asimetrías sociales o productivas.

Es la construcción de un Estado que aplica un falso igualitarismo, aprovechando el componente aspiracional de esas consignas para congelar las injusticias distributivas. Es como poner a boxear a un peso pesado contra un peso pluma. El boxeo tiene más sentido de justicia que el neoliberalismo libertario. El universalismo plano que practica el Estado bobo es el escudo discursivo protector de la ultraderecha liberal.

En el último mes, el ministro Massa puso en práctica a pleno las PPD en materia impositiva, devolviendo el IVA a más de 20 millones de personas –de acuerdo con su capacidad económica– y eliminando la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. En el plano económico, segmentó apoyando a las pymes con créditos, subsidios y desgravación impositiva. En el ámbito agropecuario, subsidió en forma diferenciada el uso de fertilizantes para productores que siembren menos de 150 hectáreas de trigo y maíz.

Todo este esquema diferenciado es un verdadero cambio de paradigma a la hora de repartir las cargas tributarias de nuestro país, y sería muy bueno que se extendiese a la economía agraria. Tomemos un ejemplo: si un cultivo exótico como la soja, que no es parte de la cultura alimentaria de la Argentina, se empieza a expandir y reemplaza a los que efectivamente se usan en la mesa, afecta la soberanía alimentaria. Si en esa situación el Estado no regula, aplica una política plana, deja que el mercado fluya y trata a todos los productores por igual, sin diferenciar tamaño, ni escala, ni nada, el resultado es el que tenemos hoy: una Argentina sojizada, con tierras y rentas concentradas

en poquísimas manos, y alimentos deslocalizados geográficamente (un litro de leche recorre 1000 kilómetros en promedio), para no hablar del pasivo ambiental que pagamos todos. En este contexto, no se le pueden cobrar las mismas DEX a un megaproducer que a uno pequeño. No se le pueden cobrar los mismos impuestos a un tambero chico que a quien tiene miles de vacas en ordeño. No se le puede cobrar la misma retención a un productor que siembra 20 hectáreas de trigo o maíz, que a uno que siembra 200, 2000 o 200 000. Eso sucede hoy, sin que se reconozcan impositivamente las obvias diferencias, y es a causa de haber dejado actuar políticas planas que ponían a todos los productores, cualquiera fuera su tamaño, a competir sin reglas entre sí. Resultado final: desaparecieron más de 160 000 explotaciones agropecuarias, todas mixtas y pequeñas.

En cuanto a la instrumentación, no se hace sacando retenciones, sino segmentándolas por el tamaño de la explotación agropecuaria. Como tampoco se hace sacando el IVA, sino devolviéndolo a partir de los ingresos que percibe el beneficiario. Mientras más segmenta su política pública un gobierno, más progresista es y mejor Estado construye. Una política pública es todo lo que el Estado hace, deja hacer u omite, mirando para otro lado. El falso universalismo de las políticas planas se nutre esencialmente del Estado que no mira ni interviene; y si lo hace, lo hace a favor de los ricos. Es una forma de legitimación política que encubre a la mano invisible del mercado. El resultado es una regulación asimétrica que nunca se explicita, y facilita la concentración. El ejemplo es lo que sucede con el pago del Impuesto a las Ganancias: todos los Responsables Inscriptos tenemos que pagar una alícuota del 35 %; sin embargo, las grandes empresas pagan, en promedio, el 2,44 %, sacando provecho de dichas regulaciones, aparentemente igualitarias, pero totalmente asimétricas en la práctica.

Sin Estado conducido por un gobierno popular, que segmente, no hay justicia tributaria posible.

Conclusión: las políticas públicas diferenciadas ayudan a calibrar

la democracia, le dan contenido y le ponen justicia. Son una apuesta al sentido común político, social, productivo, tributario y cultural en favor del bien común. Cuanto más se diferencian, ayudando a los más débiles, mayor es la justicia social y la mejora comunitaria en todos sus aspectos.

El mayor bienestar económico trae aparejada una mejora en el humor social que, sin duda, impacta en la gobernabilidad. Cuanto más y mejores recursos se distribuyan segmentadamente a favor de los sectores populares, mejor será la *performance* electoral. Sin mejoría económica, no hay votos para un gobierno popular; y sin votos, no hay gobierno ni gobernabilidad posible. Por eso es tan importante que direccionemos los recursos correctamente; para lo cual hay que cobrar impuestos a quienes más tienen, no a todos por igual. Las PPD son para eso. Aunque su implantación y adaptabilidad están directamente ligadas al grado de movilización y respaldo popular con que cuente la iniciativa. Con diálogo y promesas no alcanza.

Página/12, 22 de septiembre de 2023.

Alimentos, insatisfacción democrática y gobernabilidad

La Argentina debe ser el único país del mundo que exporta todo lo que come, cuando digo todo, es todo: carne, harinas, cebolla, papa, lechuga, pimiento, lácteos, arvejas, lentejas, porotos, mosto, entre otros. Y lo hace con escasas (casi nulas) regulaciones y sin balanzas operadas por el Estado Nacional. Imposiciones del modelo sojero agroexportador que derrotó al Estado Nacional en la década del 90. Así se eliminaron la Junta Nacional de Granos, Carnes, la CAP, se privatizaron puertos, trenes, el Paraná y se liquidó a precio de chatarra la Flota Mercante. Triunfaron terratenientes, latifundios y agroexportadores, que hoy fijan el tipo de cambio y que obtuvieron un exitazo: instalar en la cabeza

de los argentinos y argentinas que “todos somos el campo” y que producimos y exportamos alimentos para 400 millones de personas. Verdaderos mitos urbanos. Menem, Cavallo y Felipe Sola lo hicieron.

La sojización trajo aparejada la deslocalización en la producción de alimentos, haciéndoles recorrer miles de kilómetros por camión hasta llegar a los consumidores. Una irracionalidad logística inexplorable, que vino unida a la concentración económica, el acaparamiento de tierras y el rentismo rural. Revertir esto no es trabajo de un día o de apretar un botón, lleva como mínimo una década: lo que demoró la sojización en imponerse a la chacra mixta.

La economista Julia Strada, entrevistada por Eduardo Aliverti, comunicó un dato asombroso sobre el precio de los alimentos. En los últimos 18 meses el IPC en alimentos aumentó un 30,7 % más que el dólar contado con liquidación. Y si tomamos el dólar oficial, los alimentos subieron un 48,8 % más. Aunque es un dato impactante, pasó absolutamente desapercibido. El que apuesta al dólar pierde: ¿gana la lechuga!

Es elemental vincular este índice de precios de alimentos con el 40,1 % de pobreza y el 9,3 de indigencia. “El trigo pone y saca gobiernos desde hace 5000 años”, dice un viejo aforismo, significando la incidencia del precio de los alimentos en la política y en la gobernabilidad. En el viejo FdT nunca llegaron a registrar tan simple razón.

El periodista Mariano Zalazar hizo un ranking de los diez productos alimenticios que más aumentaron en los últimos cinco años (3 del macrismo y 2 nuestros), son datos a abril de 2023: cebolla 1739 %, manzana 1557 %, papa 1443 %, zapallo 1420 %, lechuga 1186 %. En el mismo periodo el IPC general aumentó un 886 %, el salario registrado 679 %, y el salario informal 465 %. No busquemos más: ahí está la “insatisfacción democrática”, porque estos índices afectan a todos/as, pero no a todos/as por igual. Los trabajadores formales tienen las paritarias para amortiguar el deterioro. Pero los 1 439 000 desocupados, los 5 529 000 asalariados no registrados y los 4 275 000 cuentapropistas componen un universo de más de once millones de compatriotas que

están sin defensa frente a la inflación. Y en alimentos es devastadora. Ahí están los 4 100 000 votos que perdimos en 2021.

Ahora bien: ¿cómo puede ser que la lechuga o la acelga que vienen “guachas”, con solo tirar un puñado de semillas, o la papa o cualquier producto tan básico, cuyo cultivo lleva milenios, pongan en jaque a un gobierno popular que sacó doce millones de votos? Es realmente increíble. Este “detalle” lleva implícito un profundo desconocimiento del territorio que se gobernó, y de todo lo que se podría hacer con un poco de creatividad y audacia política. El Gobierno siempre termina negociando con los mismos que después suben los precios. Esta ceguera inducida genera mucha sospecha de connivencia entre funcionarios y monopolios integrados verticalmente, que extorsionan a la democracia escondidos detrás de cadenas agroindustriales. Por eso, la decisión de Sergio Massa de habilitar el Registro Único de Solicitantes (RUS) de lotes de hasta 10 hectáreas para la producción alimentos es muy positiva y esperanzadora. ¡Es por ahí!

Otra decisión urgente es crear el Ministerio de Agricultura Familiar, orientado a la producción de alimentos (no a generar una nueva burocracia agraria con residencia en las grandes urbes). Hay que fortalecer con plata –¡sí, plata!– las experiencias exitosas en los territorios, tanto de organizaciones sociales como de municipios, que producen para la soberanía alimentaria. Somos alrededor de 2800 pueblos con menos de 5000 habitantes. Empecemos por ahí, con un programa de producción local de alimentos financiado con las Leliq que amontonamos en el Banco Central, generando inflación y negocios financieros improductivos. Necesitamos una iniciativa como la de CFK y Boudou con los créditos del Bicentenario, pero ahora dirigidos a pequeños productores. Eso –además– es ARRAIGO.

Es imprescindible abrir un Registro de Chacra Mixta, para ofrecer una alternativa a quienes quieren abandonar el monocultivo o dejar de ser rentistas y reconvertirse. Para esto NO hacen falta dólares, todo se hace con pesos que “fabricamos” nosotros. La Argentina debe crear un

Instituto de Colonización Agraria, al estilo uruguayo o de lo que fue el Consejo Agrario Nacional. Y, como lo hizo Perón, abrir la Gerencia de Créditos Agropecuarios en la órbita del Banco Nación, para que sea la ventana que financie el cambio de modelo productivo. Hay que encaminarse hacia lo agroecológico, para lo cual, aparte del financiamiento, es necesario fomentar la transferencia de conocimiento y capacitación en esta forma de producir. Un ejemplo de esto es lo que se está construyendo en Máximo Paz entre la Comuna, el Ministerio del Interior y el de Ciencia y Técnica, junto con el INTA e ITEC YPF. Ese es el camino. Así lo hizo Perón, así lo está haciendo Axel Kicillof. Lo que NO podemos es seguir copiando recetas agrarias de derecha, designar funcionarios públicos empleados de agroexportadoras o directivos de la Bolsa de Cereales, que después aparecen con proyectos delirantes como las granjas chinas. Tampoco es posible que Cargill financie la siembra de maíz para la agricultura familiar. Ni hablar de los que operaron contra la estatización de Vicentin. Todas estas ideas las hemos desarrollado junto a Mempo Giardinelli en un libro que publicó *Página/12: 20 propuestas para una agricultura nacional popular*. Son fáciles, sencillas y baratas de aplicar: solo necesitan voluntad política.

Los gobiernos populares van a elecciones cada dos años; el poder nunca. Y los monopolios conspiran, siempre. Ellos no necesitan votos para llegar al gobierno: nosotros, sí. Y para que podamos obtenerlos es imprescindible que la gente viva mejor. Sergio Massa lo entiende muy bien. El precio de los alimentos es un arma letal para atacar la base de sustentación de los gobiernos populares. Pactar con los monopolios solo sirve, temporalmente, si hay en marcha un plan de sustitución y una alternativa a ellos. Si no, es rendición y no hay gobernabilidad popular posible.

Página/12, 3 de octubre de 2023.

Todo el poder a los *pools*

A partir del 10 de diciembre de 2023 dejó de existir la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, reemplazada por una Secretaría de Bioeconomía. Puro humo.

Domingo F. Sarmiento creó, por ley del 21 de julio de 1871, la Secretaría de Agricultura dependiente del Ministerio del Interior. Fue Julio A. Roca, padre de la oligarquía terrateniente argentina, quien le dio categoría de ministerio, en 1898; Emilio Frers fue su primer titular. Desde entonces hasta 1973 tuvo rango ministerial.

Juan D. Perón, en su tercera presidencia –con José Ber Gelbard al frente del Ministerio de Economía– puso el área de agricultura bajo la órbita de dicho ministerio y nombró a Horacio Giberti secretario de Agricultura. El criterio fue que la nueva secretaría estuviera subordinada al proyecto de país, y no que fuera un ente autónomo que actuara como garante de los intereses de la oligarquía terrateniente. El secretario debía ser el representante del Estado frente al sector, y no el representante del sector frente al Estado. Perón lo hizo.

Hasta el 27 de marzo de 2009 sigue revistando en la categoría de secretaría, a partir de ahí CFK le devolvió su rango de ministerio. Pero con un detalle (¡y vaya detalle!): por primera vez desde el retorno de la democracia, al principal funcionario del área no lo eligió el mercado sino la política: así fue elegido ministro Julián Domínguez. Macri nuevamente rebajó el ministerio a secretaría, pero con un objetivo distinto: achicar el gasto del Estado. Alberto lo subió a ministerio, no se sabe bien para qué. Lo concreto es que lo loteó por áreas-partes: quiso conformar a todos y no hizo nada. Luego Sergio Massa lo rebajó de nuevo a secretaría. “Para un barco a la deriva ningún viento es favorable”.

Fuera ministerio o secretaría, históricamente estuvo en manos de grandes terratenientes y grandes empresas, que se repartieron el control del área, excepto en tres periodos: del 45 al 55, del 73 al 75, y del 2009 al 2015. Pero uno u otro modelo siempre partían del axioma de

que la política agraria estaba dirigida al productor de rostro humano, quien debía producir comida para la mesa de los argentinos y exportar. La diferencia estaba, simplificando, en que la derecha defendía a los grandes productores y quería exportar todo, y el peronismo, a los pequeños y medianos, y se preocupaba centralmente de que la comida fuera accesible.

El gobierno de Alberto Fernández fue una excepción a esta diferencia histórica. Pero en los dos modelos el protagonista era un sujeto agrario de carne y hueso.

La novedad que nos trae la era Milei es que por primera vez en la historia agrícola argentina los *pools* de siembra (la agricultura buitre, sin rostro y de volumen a cualquier precio) asume la conducción del instrumento del Estado que debía controlarlos. Los *pools* de siembra son la introducción del capital financiero a la agricultura, apoderándose de una porción de la plusvalía que genera la aplicación de la ciencia y la técnica a la actividad agropecuaria. La Argentina hoy tiene una agricultura de “tres pisos”: uno es el terrateniente dueño de la tierra, el otro son los contratistas rurales (los que la trabajan efectivamente) y el tercer piso son los *pools* de siembra, grandes grupos financieros que se dedican a alquilar tierras y sembrarlas para exportar. El chacarero tradicional, como el gaucho, hoy ya es un mito urbano.

No hay en todo el elenco de funcionarios que acaba de asumir nadie que esté ocupándose o preocupado por el tema de los alimentos. Me refiero a su precio, a quién lo produce, dónde y cómo, a su distribución y a su accesibilidad. El mercado lo arregla todo. Chau, soberanía y seguridad alimentarias.

El nombre de la nueva estructura lo dice todo: Secretaría de Bioeconomía. El conocimiento está puesto al servicio de exportar más y no de producir más y mejor la comida. Cambiar el nombre es en sí mismo una declaración de principios.

En rigor, desde los 90 para acá –sojización mediante y con la destrucción programada de la chacra mixta–, ya había dejado de

priorizarse la mesa de los argentinos para centrar “todo” en el volumen para exportar. Una pésima forma de resolver la “restricción externa” o falta de dólares, como es hacerlo en base a encarecer el precio de la comida, para ampliar los saldos exportables.

Los productores dejan de ser productores para transformarse en auxiliares productivos de las grandes corporaciones exportadoras. Lo único que interesa es el volumen exportable, no quién, ni cuántos producen, ni dónde se produce, ni para qué. Por eso ni siquiera se tomaron el trabajo de invitar a la inefable Mesa de Enlace a la oficialización del nuevo secretario del área, el profesor Fernando Vilella. La presentación estuvo a cargo de José Demicheli, CEO de ADBlick, un mega *pool* de siembra que trabaja más de 50 000 hectáreas y arrenda más de 100 campos, con un fondo común de inversión propio con 800 inversores. Junto a Demicheli, estuvo lo más granado de la agricultura buitre: *pools* de siembra, exportadoras de granos, proveedores de insumos y difusores rentados de la sojización. Todo un símbolo de época. Transparencia y conflicto de intereses, ¡te los debo!

Lo triste es que buena parte del Justicialismo está cooptado por esta idea de agricultura sin agricultores, con sojización inducida y concentración de tierras y renta, que tanto daño le hizo y hace al país. Les hicieron creer que industrializar la ruralidad era el modelo de granjas chinas o el proyecto de las cadenas agro-bioindustrial. Patético.

No se puede seguir importando tripas para chorizo, carne de cerdo, maquinarias que podemos hacer acá, erogar más 3000 millones de dólares en fletes navieros o seguir pagando el flete más largo y más caro por el canal Punta Indio, en vez de hacer el Magdalena. Les da vergüenza o miedo hablar de la política agraria de Perón, o de sustitución de importaciones, o que con la comida no se jode. Pero ahí está “la madre del borrego”.

Industrializar la ruralidad es soberanía y seguridad alimentarias. Sin comer primero, poco es lo que se puede hacer después. Por eso necesitamos una agricultura con agricultores, desmonopolizada y

democrática. Para lo cual es vital volver a pensar la Nación, desde lo nacional y popular, desde adentro, al servicio de los argentinos no de las corporaciones exportadoras. ¡Si se pudo, se puede!

Página/12, 12 de diciembre de 2023.

Agarrá la pala

En la gigantesca movilización popular del 24E, una de las más grandes desde el retorno de la democracia, tiraron agua hirviendo (Santiago del Estero) y lavandina (CABA) desde los edificios. El grito de guerra era “vagos, vayan a laburar”. La inefable diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, fue en el mismo sentido: “Los artistas no son de primera necesidad [...] y pueden agarrar la pala”. Varias reflexiones. La violencia explícita de estas afirmaciones expresa una nula predisposición a tomar en cuenta los valores y reglas de la vida democrática. Si nos pudieran matar a todos, lo harían sin dudar, como en el 76.

Es útil recordar, el intento de magnicidio de la vicepresidenta, los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y las balaceras de 2016, cuando se atacó la inauguración de un local de Nuevo Encuentro. La derecha y la violencia son hermanas siamesas. La deriva del concepto es que todo el que protesta es vago, y por ende conecta directo con zurdo K y perteneciente a la Cámpora. Nada nueva ni original la idea de que hay trabajar y no reclamar ni protestar y, si lo haces, te mereces lo peor. Ese latiguillo está muy arraigado en nuestra derecha vernácula y especialmente en los sectores rurales, que es desde donde se nutre buena parte de nuestro fascismo político-cultural vernáculo.

Lemoine la emprende con los artistas, tampoco es nuevo “eso” en el gorilismo vernáculo. Las persecuciones a Tita Merello, Nelly Omar, Hugo del Carril, entre otros, son una prueba de ello. La derecha tiene una particular y añeja animadversión contra la cultura peronista,

siempre confrontó con ella: Borges, las Ocampo, Bioy Casares, Mujica Láinez. Según el fallecido, Felipe Boccoli, el antiperonismo del reputado intelectual Ezequiel Martínez Estrada provenía de haber heredado una pequeña chacra y no poder desalojar al inquilino, a causa de la Ley 13 246. Pero ese antiperonismo hermético y cerril no se jactaba de la ignorancia, como ahora, al contrario. Ni qué hablar de la oligarquía pre-peronista, la de la generación del 80: Paul Groussac, Miguel Cané, Eduardo Wilde, Joaquín V. González, Ricardo Güiraldes o el grupo Florida. Sin duda era otra derecha y otra oligarquía, aquella con olor a bosta tenía buen gusto (vaya paradoja), esta con sabor a soja literalmente es de cuarta.

Pero hay algo increíble. CFK repartió 92 millones de libros a escuelas y bibliotecas. Macri, en tres de sus cuatro años, ni un solo libro; y Milei desfinancia a las bibliotecas populares. CFK construyó más de 2000 establecimientos escolares. Ellos, tres. Y quedaron inconclusos. El gobierno K fundó 17 universidades nacionales. La derecha hizo su campaña electoral reclamando no crear más universidades, y además cerró escuelas públicas. También la emprenden contra los trabajadores de la cultura y desfinancian el INCAA, el teatro, las bibliotecas, y todo lo que huele a cultura. Ahora, son los K los quieren al pueblo ignorante para poder manipularlo. ¡Es de locos!, acá no entiende el que no quiere. Son francamente detestables.

Los 90 fueron la banalización y trivialización de la cultura, pero estaba dominada por la noche y la farándula urbana, a nadie se le ocurría mandar a otro a trabajar. La desocupación trepaba al 25 % y el “campo” estaba en llamas de bronca. El “agarrá la pala y andá a laburar” es un concepto rural, viejo en el campo y nuevo en la ciudad. Según mi observación, se hizo ciudadano a partir de la disputa de 2008, antes estaba confinado al interior profundo. Surge durante el conflicto de las DEX, cuando la soja invadió la ciudad y aparece la militancia de estos *slogans*.

Estas macarteadas contra la cultura nunca son inocuas, ni gratis, siempre traen mucho dolor. Cientos de trabajadores de la cultura

fueron torturados, encarcelados y desaparecidos durante la dictadura militar. También, en democracia, a partir de 1975, la Triple A se dedicó a amenazar y a atentar, preferentemente, contra artistas e intelectuales. La violencia empieza con discursos cargados de odio, escala, y después no hay cómo frenarla.

Fueron los trabajadores de la cultura los que nutrieron y acompañaron a los organismos de DDHH, junto a la juventud y el movimiento obrero. Ellos abrieron una brecha a la dictadura, Malvinas mediante. Me acuerdo de Teatro Abierto, o de una obra emblemática del teatro rosarino como lo fue *¿Cómo te explico?* puesta en escena por el legendario grupo Arteón. La derecha sabe mejor que nadie del poder de los artistas populares, por eso los ataca.

Vieron que siempre coincide el “andá a laburar” con los que denuncian alguna injusticia. La derecha pareciera que no tiene vagos. Tener plata y ser de derecha es un salvoconducto para que nadie te acuse de vago. Si heredaste un campo y lo alquilás (en soja), como sucede con en el 70 % de los dueños de la tierra en la Argentina de hoy, aunque vivas “de la siega a la siembra en la taberna”, nunca serás vago, ni te mandarán a agarrar la pala. Ahora, si sos un peón golondrina, que no querés juntar aceitunas o limones por “dos mangos” la hora y a destajo, sos un planero vago, que no te gusta laburar.

La derecha le adjudica al trabajo un valor supremo en sí mismo: es un remedio genérico que lo aplica sin interesarse por el contexto. Les da lo mismo que sea trabajo esclavo, o un siervo de la gleba o un trabajador post revolución industrial, sin horario. El trabajo *per se* no dignifica nada, lo que dignifica son los derechos. Trabajar sin derechos es como estar preso sin haber cometido ningún delito.

Mi teoría –de base empírica, lo aclaro– es que ese antagonismo facho contra la cultura y el trabajo intelectual viene del mundo rural. Lo he escuchado y visto en muchos de los pueblos rurales que recorro. Ese encono contra los artistas e intelectuales se percibe con más intensidad en el interior que en las grandes urbes. El “agarrá la pala”

porque trabajar es hacer pozos o cortar yuyos es un concepto típicamente rural, con reminiscencias feudales, que tiene mucha “hinchada” tierra adentro. La batalla cultural es distinta en la ciudad que en el pueblo.

Ante cualquier atisbo de cambio, la derecha emite una alerta temprana y comienza a hostigar, calumniar, perseguir, y más a los jóvenes. Te lanzan un “ñoquis”, “vagos”, “comunistas”, “zurdos”, “kirchnerista”, “gremialistas”, “derechos humanos que viven con la nuestra”, de inmediato. Y lo propalan y militan sin una sola prueba, con una envidia digna de mejor causa a base de chismes y anónimos en las redes sociales. Así aparecieron listas de compañeros, absolutamente falsas, en más de 30 localidades del sur santafesino y Córdoba, que supuestamente cobran como pilotos de Aerolíneas o azafatas. Eso sí, eran todos de la Cábora. Son de lo peor.

Recuerdo con mucha nostalgia una mesa de café en Máximo Paz, en los años 80, donde este tema del ataque al trabajo intelectual estaba en debate permanente y también el macartismo, que parece que fuera hoy. En el campo el tiempo es más lento. Uno de los contertulios era Narciso Mareque, un español, exiliado republicano, lector voraz, con varios libros escritos en su haber. En 1884 publicó *Las Madres de Plaza de Mayo*. Y un día, en medio del fragor del debate sobre el trabajo intelectual, contó la siguiente anécdota del escritor vasco, Pío Baroja (1872-1956). Este pasaba el verano en un pueblo rural donde era muy querido, tenía una casa con una huerta al frente y un ventanal que daba a la calle y era donde escribía. Todas las mañanas pasaba un campesino que iba a cultivar las tierras comunales y lo saludaba: “Buen día, Don Pío, ¿descansando?”. Y, Baroja, mientras escribía, respondía: “No, trabajando”. A la tarde, don Pío “hacía la huerta” y, cuando regresaba, el campesino lo saludaba con un: “Buenas tardes, don Pío, ¿trabajando?”. Y Baroja respondía: “No, descansando”. Hasta que un día el campesino se paró y le espetó: “No entiendo: cuando está sentado trabaja, y cuando trabaja, descansa”. Esa falta de comprensión de la realidad es la que la

derecha argentina hizo su bandera. Nuestros fachos no se detienen ni siquiera a preguntar cómo es lo que ven y no entienden. Todo lo que no les cierra, por las dudas, lo estigmatizan y atacan. La derecha argentina se ruralizó y absorbió lo peor del conservadurismo rural argen- to: sus prejuicios e ignorancia.

El conflicto de 2008 potenció esa arista conservadora que reproduce un macartismo cultural muy peligroso y le extendió el pasaporte ciudadano. La derecha lo urbanizó rápidamente, lo incorporó a su discurso político para quedar bien con las huestes agrarias, y eso –hay que reconocerlo– le dio muy buenos dividendos electorales. Pura demagogia barata y peligrosa. No solo está en riesgo la democracia, también nuestra libertad y nuestras vidas. Son peligrosos de verdad, fueron la cara y el apoyo civil a la dictadura, están ahí, solo la calle los puede frenar. Por ende, es tarea de todos/ todas.

Página/12, 30 de enero de 2024.

Realidad: matemáticas y estadísticas

Se ha visto, por estos días, a periodistas e historiadores tratando de explicar y justificar, el extravagante e inconstitucional DNU, que dictó el presidente de la República, apelando a una serie de datos estadísticos para justificar su dictación. Como si la política fuera una ciencia exacta que puede prescindir del contexto para su interpretación, estudio y ejecución. Nadie puede despreciar las matemáticas, ni las estadísticas, ni las encuestas, pero son auxiliares (solo eso) del análisis, no valores absolutos. Puestas solas en el centro de escena, sin contexto, no pueden darnos un diagnóstico certero. Así ayudan más a la confusión que a la comprensión del momento.

Los DNU son regulados por la Constitución reformada en 1994,

otro fruto del nefasto Pacto de Olivos.³² Según, la ONG Chequeado fue CFK la que menos DNU firmó: 78 en 2921 días de gobierno (0,03 por día); Macri decretó 78 en 1461 días, es decir (0,05 por día) y Menem fue el presidente que más días habitó la Rosada y dictó 195 (0,05 por día). Alberto Fernández utilizó 177. En la pandemia de 2020 usó 76, eso le da un promedio de 0,12 por día. Néstor dictó 236 en 1660 días, es decir, un promedio de 0,14 por día. El razonamiento sería: todos lo implementaron, empezando por Néstor Kirchner, el que más lo empleó, así que a no quejarse y bancarse el DNU de Milei.

Suman, restan y dividen DNU como si se tratara de “cosas” uniformes, sin diseccionarlos para su examen. Comparan peras con manzanas, sin ruborizarse. Y lo sirven en la bandeja radiofónica o en el set televisivo como una verdad revelada intocable, sin el para qué, sin incluir qué estaba sucediendo, ni a quién beneficia: no es análisis, es operación. No puede ponerse en un mismo plano el DNU de Milei, notoriamente inconstitucional, que modifica 360 leyes estructurales, fruto del consenso de cuarenta años de democracia, con el que declaró la emergencia sanitaria en la pandemia, o el DNU que se firmó para prohibir el corte de servicios esenciales u otro DNU como el que postergó el cierre de cuentas bancarias por cheques rechazados. ¿Les parece que son comparables?

Aplican el mismo método estadístico para las cuestiones gremiales, y enseguida sacan a relucir los 13 paros de Ubaldini a Alfonsín, y empiezan a contar y comparar con los paros que les hicieron a los otros presidentes. Los contabilizan como si fueran caramelos de un mismo gusto. ¡Pero no se toman el mínimo trabajo de contextualizar el momento histórico! Las matemáticas reemplazan al análisis.

32 El Pacto de Olivos fue un acuerdo firmado entre la Unión Cívica Radical, representada por el expresidente Raúl Alfonsín, y el Partido Justicialista, representado por el presidente Carlos Menem en 1993, en el que los dos principales partidos argentinos se comprometían a impulsar una reforma constitucional y votar en la asamblea constituyente a favor de un “Núcleo de Coincidencias Básicas” establecidas en el acuerdo.

Alfonsín metió un giro de 180 grados en su política, previo acuerdo con el FMI y un desembolso de este por 3000 millones de dólares. Sacó un DNU, el 1096/85, con el cual implementó el Plan Austral, un cambio de signo monetario y un fuerte deterioro de la calidad de vida y del salario. Ubaldini fue el primer dirigente gremial de la CGT que enfrentó el ajuste neoliberal en las calles, con paros y movilizaciones. ¡No sé qué pretenden!, que les destruyan el salario, las obras sociales y las posibilidades de vivir dignamente y no luchen. Lo bueno sería que el peronismo no se sume alegremente al olvido (ex profeso) de Ubaldini y reivindique su lucha. Necesitamos más de Ubaldini y menos Alfonsín, sin menoscabar su aporte a la democracia. Tampoco se pueden poner en un mismo plano los paros en defensa del salario y jubilaciones que se le hicieron a Macri, con los que Moyano le hizo a CFK, porque los trabajadores ganaban mucho y tenían que pagar impuestos a los altos ingresos. No se puede hacer promedio con esas dos realidades.

La ex gobernadora Vidal, a la que le explotaban escuelas, la que cerraba escuelas, ninguneó las paritarias docentes. Sí, la misma que decía que los pobres no llegan a las universidades, la que convocó a voluntarios para romper huelgas y perseguía dirigentes gremiales docentes, esa se queja porque le hacían paros a ella y a Kicillof no. ¡Más cínica no se consigue! Kicillof abre escuelas, crea universidades y las vincula con el interior profundo bonaerense, mejora salarios, abre paritarias, e hizo la mayor inversión en Educación Pública de los últimos cuarenta años de democracia. ¿Por qué le van hacer paros? No hay matemática posible que permita encapsular estas dos realidades tan disímiles en una estadística común. Es como analizar la vida de las ballenas prescindiendo del mar y del agua.

¿Por qué el campo le hace paro solo a los gobiernos populares? Milei-Caputo-Vilella les subieron las retenciones y piden superpoderes, dos cuestiones que encabezan todos los pliegos de demandas de la Mesa de Enlace a los Gobiernos peronistas. Pero ahora no abren la boca, porque se sienten parte del Gobierno. Si la CGT defiende un gobierno que

siente propio, está mal; si lo hace el “campo”, no. ¡Eso es política que los resúmenes estadígrafos no pueden explicar!

No es posible reemplazar el análisis político-gremial por las estadísticas o por matemáticas, por más Big Data que exista, son meros auxiliares. Un paro se propone sobre la base de condiciones objetivas del momento y a partir de cómo afecta el bolsillo de los sectores que se pretende representar. Si no te van hacer creer que es lo mismo “Juana que la hermana” o Vidal que Kicillof. Tampoco el análisis se puede hacer sobre la base de tapas de diarios que, parafraseando a Belgrano, “son partidarios de sí mismos”, ni con encuestas truchas o hechas a medida, que reproducen los medios hegemónicos. Nada reemplaza el contacto directo con la vida, es decir, la realidad. Y eso se hace en diálogo con el pueblo. Mao Zedong conminaba a sus militantes a que quince días al año fueran a cohabitar con los campesinos para que vieran cómo vivían los sectores populares. Es por ahí, sin duda.

Hay que salir a ver el país, pero con ojos propios, no prestados. Hay que abandonar ese pensamiento tan porteñocéntrico que nos lleva a confundir la realidad del Obelisco con la de la Argentina. Bienvenidos los prestigiosos y queridos intelectuales de países hermanos que nos ayudan en la reflexión. Pero el debate debe partir de acá, y mirando la totalidad del país, no una parte. Es hora de que se escuche a los intelectuales y militantes del interior profundo: formoseños, jujeños o neuquinos tienen mucho para decirnos. Es hora de que el campo nacional y popular mire hacia adentro, y atienda a la Argentina profunda. Como expresaba José Carlos Mariátegui: “Ni copia, ni calco: creación heroica”. Precisamos originalidad, fundada en la realidad que se construye en la vida cotidiana, y no en el delirio anarcocapitalista o en una virtualidad edificada con matemáticas y estadística. A la compu y al Obelisco, hay que sumarle interior y pueblo, así, seguro, nos va ir mejor.

Página/12, 5 de enero de 2024.

El Canal Magdalena vive

El discurso del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la apertura de las sesiones legislativas de la provincia, será recordado por la historia. En él volvió a reivindicar el Canal Magdalena y lo puso como una de las siete condiciones básicas para negociar con el Poder Ejecutivo Nacional. Es esta una obra de extraordinaria importancia para todos los argentinos, no solo para quienes habitan la provincia. En esto hay una confusión que nada tiene de inocente: se dice aviesamente que, como la obra se hace sobre costas de Buenos Aires, solo beneficia a los bonaerenses. Es más: el 18 de febrero de 2021, la diputada provincial santafesina Clara García (PS) dijo en un seminario en la Cámara de Diputados de esa provincia: “Tengamos cuidado con que detrás de frases épicas como soberanía se esté beneficiando a la provincia de Buenos Aires, derivando fondos del presupuesto nacional para la construcción del Canal Magdalena”. Y agregó, en defensa del canal Punta Indio: “Es como si estuvieras haciendo una ruta y al lado te hicieran otras”. Esto es falso y malintencionado.

Primero: la soberanía no es solo una cuestión de mera vecindad, hace a la unidad histórica de una nación, en todo tiempo y espacio. No es divisible. Es como considerar que las Malvinas solo deberían interesar a Tierra del Fuego o a Santa Cruz, por ser territorios colindantes. ¿Qué diría de estas afirmaciones el socialista Alfredo Palacios, más porteño que el Obelisco y gran defensor de la soberanía de las Malvinas? El dragado del Magdalena es soberanía sin peros. ¿Cómo puede ser que barcos nuestros, al navegar por el Paraná, tengan que ir a Montevideo para salir al Mar Argentino? Un disparate total. Es como si estuvieras en tu casa y para ir de la cocina al living tuvieras que pasar por el patio de tu vecino.

Pero más falso aún es que el dragado del Magdalena solo favorece a los bonaerenses. Toda la producción nacional se beneficia, y muy especialmente la agropecuaria, por ser la que más usa la vía navegable para exportar sus productos, y la que más costo de flete paga.

Veamos: al flete siempre, pero siempre, lo pagan los productores. El precio de la soja o el maíz se construye así: precio internacional menos gastos y flete. Es de sentido común estricto buscar el camino más corto para pagar menos flete. Una verdad elemental, ¿no? Si no, ¿por qué se hicieron el canal de Panamá y el de Suez? ¿O cuál es el motivo del conflicto que existe hoy en el Mar Rojo? Todo es para habilitar rutas más cortas, con el fin de ahorrar en flete. Una verdad de perogrullo.

Bueno, en Argentina, con el Canal Magdalena es al revés. Nosotros somos “innovadores” e invertimos esa lógica elemental: queremos ir por el camino más largo y pagar más flete y costos, por eso, defendemos el canal Punta Indio que, en lugar de llevarnos directo al Mar Argentino, nos hace un paseo previo por el puerto de Montevideo. Somos unos vivos bárbaros.

Y los representantes gremiales agropecuarios, los que tienen que defender el bolsillo de quienes pagan el flete, en vez de militar la ruta más corta en beneficio de sus bases agrarias, militan la más larga y onerosa. Harto difícil de entender, tanto para nativos como para foráneos. Como dijo Bilardo en Italia 90, cuando jugamos contra los brasileños: “¡Ojo, no se la den a los de amarillo porque son los contrarios!”.

Luciano Orellano, autor de *La Argentina sangra por las barrancas del Paraná*, nos ayuda a encontrar una respuesta en su libro que presenta claras infografías. A simple vista, se observa que el recorrido del Canal Magdalena es más corto. Y agregó: su mantenimiento es mucho y su navegación mucho más fluida, reduciendo sustancialmente los costos de espera. Estos dos últimos ítems, aparte de al kilometraje del recorrido, hacen al costo del flete.

El Canal Punta Indio es un canal *artificial* de 120 km de largo y unos 100 metros de ancho, donde se produce el 65 % de las demoras de los barcos, que por eso mismo tienen un alto costo. Es un canal de una sola mano, lo que significa que, mientras un barco pasa, los otros están en espera y, además, se necesita un esfuerzo sostenido y caro de dragado, que paga SIEMPRE el chacarero.

El Magdalena es un canal *natural*, orientado a favor de la corriente y los vientos, por lo que necesita mucho menos dragado y es más barato su mantenimiento. Tiene 54 km de longitud, 150 metros de ancho, y es de doble mano. O sea, 66 km más corto y 50 metros más ancho. Su navegación es mucho más rápida y de ese modo achica el costo del flete. Pero quieren ir por Punta Indio. ¡Qué vocación de colonia, hermano!

¿Por qué las compañías transnacionales, dueñas absolutas del comercio exterior, responsables de la fijación del tipo de cambio e ingresos de divisas al país, quieren ir antes a Montevideo y no ir directo por el Mar Argentino?

El puerto de Montevideo es un verdadero enjambre de empresas multinacionales, radicadas allí al solo efecto de evadir impuestos. Según los tributaristas, Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti, esas maniobras permiten embolsar entre 1200 y 2400 millones de dólares/año, por la manipulación de los *precios de transferencia* con sus propias *empresas cáscara*, montadas en el Uruguay. Por eso eligen este país de baja o nula tributación, que no cobra impuestos a las rentas provenientes de actividades realizadas en otros países.

El investigador norteamericano Raymond Baker estimó que el 62 % del comercio fraudulento se hace entre empresas. El negocio intrafirma en la exportación de granos supera el 80 % de lo comercializado por las grandes exportadoras. Uruguay y su puerto son un verdadero paraíso para estas maniobras *non sanctas*. Cantan ¡bingo!

La puesta en agenda del dragado del Magdalena nos muestra lo mejor y lo peor de la conciencia nacional. Lo que llama la atención en este tema tan sensible no es la conducta indoblegable del gobernador Kicillof, en defensa de la producción y la soberanía nacional, sino la posición de los sectores agrarios, de no reivindicar, empujar o reclamar a que se implemente esa vía de comunicación fluvial, que les va a permitir ahorrar mucho dinero. Según la excelente investigación del CEPA, el ahorro iría entre los 145 y los 243 millones de dólares por año.

No es una cifra menor, y el repago del dragado es en dos años aproximadamente.

El PS, la UCR y el PRO, totalmente alineados con las transnacionales exportadoras, operan a favor del Canal Punta Indio, al igual que la Mesa de Enlace, que se expresó en estos términos: “Nos genera inquietud el desarrollo del Canal Magdalena, la alternativa impulsada desde la provincia de Buenos Aires”. El vicepresidente de la FAA, Elvio Guía, todavía no se enteró que tiene que defender a los chacareros y no a Cargill, y se pregunta con sorna: “¿Qué tan necesario es el Canal Magdalena?”. El representante de SRA no le va a la saga: “La construcción del Magdalena es inoportuna”. La Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), dueña de puertos y exportadora, señala: “No es momento para discutir el Canal Magdalena, que le va a sacar tráfico troncal al Canal Punta Indio. A cualquier empresa le hace ruido porque altera el tráfico que se generó hace 30 años”. ¡Cuánto “patriotismo”! Por favor, no nos defiendan más.

Repasemos este verdadero mundo del revés. La Mesa de Enlace santafesina reclama y defiende ir a un país extranjero por la ruta más larga y costosa, esquivando la propia, de la mano de transnacionales, que pagan menos por los productos y venden más caros sus insumos a los chacareros que ella representa. Los monopolios le hacen costear el flete a los propios damnificados, para llevar la mercadería a un lugar seguro, donde pueden hacer sus fechorías tranquilos. Todo para evadir, con la complicidad de partidos políticos y gremialistas, cuyas bases son las perjudicadas por la maniobra. Sería algo así como que te asalten en la vía pública y el chorro te haga pagar el taxi hasta el lugar donde va a esconder el botín, y que después lo exculpes y lo defiendas públicamente. Acá no entiende el que no quiere.

Con patriotas así, ¿quién necesita cipayos?

Página/12, 10 de marzo de 2024.



TERCERA PARTE

45 propuestas para el debate de una
nueva política agropecuaria

MAREA
EDITORIAL



Falta nuestra voz y nuestra propuesta

¿Falta nuestra voz? Sin duda, al debate agrario nacional le falta una voz: la nuestra, la de los sectores populares. Desde mi punto de vista, el conflicto por las retenciones móviles de 2008 fue un punto de inflexión en la política argentina, tanto para el campo nacional y popular como para la derecha. Perspicazmente, la derecha ruralizó su discurso, absorbiendo lo más retrógrado del conservadurismo provinciano, lo cual le dio un buen rédito electoral y le permitió ganar la mayoría de los distritos rurales. Para el campo nacional y popular también fue un parteaguas. Si bien muchos señalan al “conflicto con el campo” como la partida de nacimiento del kirchnerismo y lo glorifican, para mí fue claramente un error.

Este escriba lo considera un yerro a enmendar, ya que fracturó la alianza histórica entre el peronismo y una parte de la pequeña y mediana burguesía agropecuaria, circunscribiendo al peronismo a una expresión urbana. En esa disputa perdimos la Federación Agraria Argentina (FAA), cuyo núcleo dirigencial mayoritario venía “jugando” políticamente con el kirchnerismo, y cambió radicalmente de trinchera. Se nos apagó una voz potente, respetada y escuchada en el sector y fuera de él, que expresaba las posiciones progresistas en el mundo rural.

A partir de su desertión, los sectores de la agricultura democrática perdieron una pieza clave en la confrontación política e ideológica con la agricultura buitre. Nosotros nos quedamos sin referencia y a la derecha le quedó todo el campo libre para hacer “su” política. ¡Peor negocio, imposible! La FAA cobijaba y representaba a todos/as los que querían una agricultura de rostro humano, de chacra mixta, defensora de las economías regionales con presencia del Estado, cualquiera fuera su pertenencia partidaria. Radicales, socialistas, comunistas, peronistas, cristianos: todos se ubicaban bajo las banderas surgidas en Alcorta en 1912. Era una organización de ideas, de defensa conceptual de lo nuestro, antioligárquica, diversa y popular. Su captura por parte de la derecha fue un enorme paso atrás. No solo para los federados auténticos, que vieron cómo se tiraban a la basura más de cien años de historia, sino para todo el campo nacional y popular, que se quedó sin referencia ideológica en el sector. El daño que le hicieron Buzzi, Barchetta y compañía a las luchas emancipadoras es muy difícil de mensurar hoy. Será una tarea de la historia. Los populistas no hemos logrado llenar ese vacío. No es fácil reemplazar a una organización nacional, con la historia y la envergadura que tenía la FAA. La decepción más grande siempre es la traición. Imagínense lo que significó en el corazón de los federados auténticos semejante bandazo. Es justo decirlo, el kirchnerismo nunca valoró en toda su dimensión la cuestión agraria y ni el rol de la FAA, lo cual fue una equivocación. Pero los errores del propio espacio no habilitan semejante cambio de bando, ni la adhesión a los intentos golpistas de la derecha. No se puede hacer tamaña felonía sin traidores que abran la puerta. Es la maldición de Malinche vernácula.

¿Solo traición?

¿La traición dirigencial lo explica todo o hay otros elementos que coadyuvaron? La cooptación y cambio de bando de la dirigencia no fue solo

por la debilidad ideológica de los líderes federados, sino que expresa –centralmente– las transformaciones estructurales que sufrió el sector, de los años 90 para acá. Las bases que nutrían a la FAA ya no son lo que eran ni en calidad, ni en cantidad: o habían quebrado y vendido su campo o se transformaron en rentistas. La entidad perdió buena parte de su base gremial en los tiempos del gorila de Anillaco. Se hipotecaron 12,5 millones de hectáreas, solo en el Banco Nación, y desaparecieron 103 000 chacras mixtas. Es decir, 103 000 productores de carne y hueso menos. No es “moco de pavo”. Esa era la “clientela” gremial donde pescaba la organización y la que le daba sustento y poder. Sin ese músculo vivo, la FAA solo es la “nostalgia de haber sido” y el deseo de algunos de volver a ser. Es lo que hay hoy, una cáscara vacía, solo sostenida por la oligarquía para usarla en su beneficio.

Segundo dato relevante: la desaparición de chacareros trajo como consecuencia inevitable la concentración de las explotaciones agropecuarias: “Entre 1988 y 2018 aumentó un 42 % la superficie promedio de los predios. En efecto, en 1988 la superficie promedio era de 469 hectáreas; en 2002 era de 588 y en 2018 era de 670 hectáreas”.³³ Si partimos de la base de que una Unidad Económica en la pampa húmeda ronda las 75 hectáreas, nos daremos cuenta del alto nivel de concentración de la propiedad. Dicha concentración trae como paso subsiguiente una derechización del sector. Ese aumento de los tamaños medios de las explotaciones agrarias, unido a la rentabilidad sojera, determinó el surgimiento de una burguesía agraria autosatisfecha, con una firme adhesión a los postulados de la derecha. En política son del PRO o radicales; en lo económico son anti Estado y bregan por la libertad de mercado y el libre cambio. Nada que ver con la historia federada.

Podrán decir los lectores que esos pasos no son matemáticos o que es una exageración de este escriba. Pues con mirar el resultado electoral

33 Marisa Duarte, directora de la revista *Realidad Económica*, conversaciones con el autor, octubre de 2023.

de la pampa húmeda se darán cuenta de que no es ninguna exageración. Por supuesto, hay excepciones. Y también hay brechas por donde volver a “meter” la política nacional y popular en el campo. Sí, ¡claro que las hay! Pero para eso hay que debatirlo y ponerlo en agenda, sin que sea el enemigo el que te provea los instrumentos y los términos para el análisis. Necesitamos un interlocutor gremial en el sector. Debemos recuperar la FAA para el campo nacional y popular, o crear una nueva organización. Es más que necesario tener una plataforma desde donde discutir y organizar a la base agraria. Esta es una cuestión estratégica. La FAA oficial fue “comprada” por la derecha a precio de saldo. ¡Sí, literalmente “comprada”, sobre la base de la adquisición de paquetes de filiales federadas truchas (que sustituyen a las reales en los congresos), conseguidas a fuerza del dinero que en el último congreso proveyó el gobierno radical de Mendoza!³⁴ La derecha le está sacando el poco jugo que le queda a la entidad, con el único objetivo de dividir y/o atacar al

34 El 26 de octubre de 2022, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, otorgó a la FAA un subsidio de 4 millones de pesos para organizar su congreso anual ordinario los días 21, 22 y 23 de septiembre en la ciudad de Rosario. Esta decisión desató un escándalo político en la provincia, porque es muy difícil explicar que Mendoza gire recursos para un evento en Santa Fe. Una parte de ese millonario subsidio se utilizó para la compra y puesta en orden estatutaria a las filiales truchas. Así se llaman en la jerga federada a las entidades de base a las que, sin existencia gremial activa, se les pagan las cuotas sociales desde la central federada, para que puedan votar. La estafa se termina de consumir con el traslado de punteros y militantes políticos desde otras provincias –en este caso de Mendoza– para que voten, como si fueran productores agropecuarios. La otra parte de los 4 millones recibida fue al pago de los micros para que trajeran a los punteros que votaron en nombre de las filiales truchas. Todo trucho, todo falso. A la FAA no la ganaron, la compraron. Una de las consecuencias de esta gran estafa fue el alejamiento de la mayoría de los productores federados auténticos. Las picardías siempre existieron en la FAA, pero quien las habilitó, no como excepción sino como una práctica extendida de construcción de mayoría interna, fue la cúpula federada que encabezaban Eduardo Buzzi, Omar Barchetta y Pablo Orsolini, entre otros. Son los que le abrieron la puerta a la derecha y los responsables de la debacle de la entidad. Hoy la FAA es una entidad bastardeada, sin productores ni militancia, nula presencia territorial. Y su prestigio social es prácticamente cero.

movimiento popular. Carlos Achetoni, el fraudulento ya fallecido presidente de la entidad, no era más que un títere de la oligarquía, que lo ponía y lo sacaba de escena de acuerdo a sus necesidades. La Mesa de Enlace es el brazo gremial agrario orgánico de la derecha política y usa a la FAA de pantalla. Es su mascarón de proa para mostrar a la sociedad que aún existe como ente plural de coordinación. La FAA actual es gerenciada desde afuera por una “banda” de punteros políticos, la mayoría, radicales (ninguno es productor), que solo buscan los altos sueldos de las entidades en las que FAA participa y nombrar a sus representantes rentados como: el RENATRE, IPCVA, INTA, entre otros. ¡Cómo se extraña a don Humberto Volando, Mariano Echaguibel, Daniel Boo, Carlos Paillole, Mario Fabro, Cholo Tarquini, y al recientemente fallecido, Hugo Angelini! Toda una camada de dirigentes federados que, más allá de diferencias coyunturales sostuvieron a la FAA junto al campo nacional y popular, honrando y construyendo lo mejor de la historia federada.

¿Qué hacer?

Es muy importante tener esta historia clara. Porque toda situación tiene su contexto y sus antecedentes. La pérdida de miles de chacareros más el desprestigio de la cúpula federada, trajo como consecuencia que hoy no exista una masa rural importante en número en los territorios, para poder asentar ahí una agenda de temas distintos a los del agronegocio. Es decir, nos estamos quedando sin chacareros genuinos.

¿Qué hacer entonces? Una política agraria no puede ser diseñada en un laboratorio intelectual, sin contacto con la realidad y sin protagonistas de carne y hueso. Necesita un sujeto concreto a quién dirigirse. Hoy ese sujeto no está en la magnitud necesaria. Por eso hay que urbanizar el debate rural e incorporar nuevos actores a la discusión y a la acción. Actores que le den volumen a la “idea” y releven las nuevas

demandas de la sociedad. Por ejemplo, en torno al precio y a cómo se producen los alimentos.

Hay que disputar otro sentido común productivo, con orientación social, para lo cual es imprescindible sumar a esta lucha a todos y todas quienes tengan contradicciones objetivas con el neoliberalismo agrario y con su forma de producir: movimiento obrero, consumidores, productores agroecológicos, universidades, proveedores de los mercados populares y los restos de la agricultura familiar que aún quedan en la pampa húmeda. Todos contra la derecha política y agraria, debería ser la consigna. Necesitamos reconstruir nuestra propia base social, hay que volver a una agricultura con agricultores. Todavía hay un 30 % de productores de chacra mixta en los territorios. El paradigma sojero debe dar lugar a uno nuevo, a partir de las franjas periurbanas donde está prohibido fumigar (que suman miles de hectáreas). Desde ahí saldrá el nuevo modelo de producción agroalimentaria para abastecer la mesa de los argentinos. Mientras haya un pedazo de tierra y una familia que quiera producir con sus propias manos, habrá esperanza.

Cambiar, ¿cómo?

Cambiar el modo de producir y comercializar alimentos no es tarea fácil ni de un día. Lleva, como mínimo, una década. Es lo que le llevó al monocultivo sojero imponerse sobre la chacra mixta. Pero el cambio empieza cuando uno toma la decisión de cambiar. Si la decisión es modificar, entonces hay que poner toda la plata “en lo nuevo” para que surja con toda la fuerza. Y a la vez tratar de que el modelo que se va, se retire haciendo el menor daño posible. No hay duda de que van a tener que convivir los dos modelos por bastante tiempo. En garantizar ese proceso de transición es donde el Estado popular debe poner sus mejores energías para controlar al que se va y apoyar al que viene. Transformar el modelo de producción de alimentos no es dar una

charla o bajar una palanca, es un proceso lento y conflictivo, que hay que saber bancar. Existen limitaciones políticas, económicas y también biológicas. No hay una vaca populista que dé tres terneros al año, ni una de derecha que dé cuatro. Todas paren uno y necesitan un año de gestación. El ciclo ganadero dura cuatro años, y no se puede acelerar. Al menos, hasta hoy. Hay un tiempo biológico que en la mudanza de modelo hay que tener muy en cuenta. Necesitamos, además, sumar praxis al debate. El cambio no se hace solo desde la teoría de una cátedra (que suma y es muy importante), sino también desde el enseñar a producir de otra forma, a cuidar las malezas, controlar las hormigas, los pájaros (cotorras y palomas) que son una plaga muy grande en la agricultura de hoy. Esto siempre genera tensiones (innecesarias) con los que se preocupan por el bienestar animal. En fin, son un sinnúmero de cuestiones prácticas, concretas, que hay que transmitir. Debemos formar una nueva camada de chacareros conscientes del medioambiente y de su rol de proveedor de alimentos sanos, frescos y seguros, en cantidad y calidad. Ojo: dije en cantidad y calidad. Porque hacer un almacigo de lechuga agroecológica es una cosa, y tener un plan para abastecer de lechuga a 47 millones de argentinos es otra. Está lleno de ecologistas de Barrio Norte o Recoleta, a quienes les parece que todo se puede hacer rápido y fácil. Se entiende, ¿no?

Aportes al debate con ideas

Estas son elucubraciones que he venido madurando desde hace muchos años, que volqué en *La chacra mixta y otras yerbas*³⁵ y luego maceré junto a otros compañeros, como Mempo Giardinelli, cuando

35 Pedro Peretti: *La chacra mixta y otras yerbas*, Buenos Aires, Perspectiva Bicentenario, 2014.

escribimos *La Argentina agropecuaria*,³⁶ y con Rafael Bielsa en *Lawfare, guerra judicial y mediática*.³⁷ Y ahora pongo a consideración de ustedes, incluidas una serie de propuestas para debatir.

Se preguntarán qué tiene que ver el *lawfare* con la política agraria. Mucho. La persecución, la calumnia, las injurias y el Poder Judicial fueron y son instrumentos esenciales para amedrentar, tanto a funcionarios de gobiernos populares como a dirigentes que plantean políticas disruptivas para el *establishment*. Cuando preguntan, solo por citar algunos asuntos, por qué no se discute o se ejecutan medidas más audaces en torno a la tierra, el control de las exportaciones, o las retenciones, una de las respuestas es: “por miedo”. Y la forma de generar miedo y disciplinamiento en los funcionarios es el *lawfare*. El conflicto mapuche en el sur, la prisión de Milagro Sala, la persecución judicial, mediática y policial al MOCASE por defender a los campesinos cuando les usurpan sus tierras, son muestras más que palmarias de lo que decimos. El tema agro/tierra es un campo de batalla donde la derecha despliega todo el arsenal jurídico, mediático y policial, en su máxima intensidad. Así genera pavor en el funcionariado poco comprometido con el destino de su pueblo.

El 18 de diciembre de 2020, CFK –víctima dilecta del *lawfare*– dio cuenta de esta situación y, ante la plana mayor del FdT, dijo: “Los funcionarios que tengan miedo, que se busquen otro laburo”. Lo dijo alguien que no tuvo miedo a la hora de gobernar; o si lo tuvo, lo supo vencer.

36 Pedro Peretti y Mempo Giardinelli: *La Argentina agropecuaria*, Buenos Aires, *Página/12*, 2018.

37 Pedro Peretti y Rafael Bielsa: *Lawfare, guerra judicial y mediática*, Buenos Aires, Planeta, 2019.

Los senderos del miedo

A la hora de ejecutar una política agraria hay dos caminos:

- 1) Administrar el *statu quo* y convertirse en un mero receptor y vehiculizador de las demandas de los dueños “de todo”. Si aceptás ese rol de funcionario, no te va a pasar nada, no vas a tener que ir a los tribunales por cualquier cosa, ni los medios te van a azotar. Para ser un “buen funcionario” hay que seguir el sendero de la obediencia debida a los grupos económicos. Si accedés a lo que te piden, te podés declarar marxista leninista, que te lo perdonan y hasta te premian, pero tenés que obedecer.
- 2) Representar a los que “nada tienen” e iniciar un camino disruptivo con el *establishment*. Y acá te la tenés que bancar. Si no, mejor no te metas.

¿De qué lado estás? Esta pregunta no es retórica ni es un detalle secundario. Si elegís la segunda opción, el principal escollo a vencer es el poderoso señor MIEDO, dueño de un inmenso poder disciplinador, que nuestra oligarquía terrateniente diversificada nunca se priva de implementar. “Mal compañero es el miedo que hace del mosquito un caballero”.

Aquel dirigente, militante o funcionario que ose meterse con estos temas, tomando la opción de defender los intereses populares, debe ser consciente de a qué se expone. Nunca fue gratis ni un paseo dominiguero oponerse a la oligarquía terrateniente. Hay que estar dispuesto a aguantar los azotes y persecuciones de la derecha. Prueba de ello son los desaparecidos, muertos y exiliados de las Ligas Agrarias, o el dirigente sindical salteño de la Federación Única del Sindicato de Trabajadores Campesinos y Afines, Felipe Burgos, desaparecido en 1976. O los casos de Cristian Ferreyra, asesinado en 2011, en Monte Quemado. O Miguel Galván, en 2012, en el límite de Salta con Santiago del Estero,

ambos muertos resistiendo a los desalojos. Los dos asesinados ante la vista gorda de jueces y policías. También debemos incluir en esta lista los asesinatos a manos de la Gendarmería de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, donde se ve nítida la mano del latifundio moviendo los hilos. O la referida prisión de Milagro Sala, que lleva más de ocho años, en cuya persecución tuvo un rol preponderante el poderoso latifundista Carlos P. Blaquier dueño del ingenio Ledesma.

Latifundio, violencia y represión son términos indisolublemente ligados que engendran miedo. Hay que estar dispuesto a complejizarse la vida personal a la hora de aceptar un cargo en la función pública en un gobierno popular y ser consecuente con el mandato electoral. “Tener miedo es de prudentes saberlo vencer es de valientes”. ¡Sepámoslo!

Sin política agraria no hay buen gobierno posible

No se puede gobernar bien este querido país con la mirada y el corazón puestos en los sectores populares, sin tener una política agropecuaria clara, definida y consensuada con determinados actores de la escena rural, que disputen en los territorios. Hay que salir del conurbanismo citadino y sumar otros protagonistas para pelear con éxito en el terreno electoral

Un gobierno popular debe necesariamente tener o construir un sujeto agrario aliado que sea la base de maniobra, donde poder asentar sus políticas públicas. No se puede hacer política pactando siempre con los monopolios formadores de precios, o con los terratenientes de la Mesa de Enlace, como pasó durante el gobierno de Alberto Fernández. Es un error. No se puede ir a la confrontación sin diferenciar a los actores agrarios, poniendo a todos en la misma bolsa. Tampoco es posible volver a errar en la elección de cuál es el sujeto agrario dinámico de la etapa, con el que se debe pactar, o el aliado que se quiere proteger, para mejorar la calidad de vida de los sectores populares. Hay que tener un modelo bien definido, saber con certeza a dónde se quiere llegar, para determinar qué

tipo de producción y a qué tipo de productor se quiere alentar o desalentar: “Para un barco a la deriva ningún viento es favorable”.

Es necesario construir un nuevo paradigma que vaya más allá de la obtención de volúmenes para generar divisas. La producción agropecuaria tiene que ver con el arraigo, con la generación de trabajo genuino, con industrializar la ruralidad, con combinar seguridad alimentaria y sustentabilidad ambiental, con la ocupación geopolítica del territorio. A través de lo expresado intentamos conformar una argamasa sólida de ideas a las que hay que sumarle militancia, para que el país se desarrolle de la forma más justa, armoniosa e integrada posible.

Además de urbanizar, ¡actualizar!

En casi 41 años de recuperada la democracia, el sector agropecuario –el más importante de la vida económica de la Nación– nunca mereció la atención política del campo nacional y popular. A excepción de alguna propuesta aislada o de ciertas consignas, cuyo solo fin era el de cumplir con las formas programáticas, las fuerzas progresistas se desentendieron literalmente de la cuestión rural. Es como que “se sacaron de encima el tema” y lo tercerizaron a manos de tecnócratas, sin compromiso ni anclaje con lo popular. Fue así y abundan las pruebas.

Hay que ventilar el debate agrario, liberarlo del gueto rural. Es tiempo de que todo el pueblo participe de la discusión. Por y desde la tierra surgen, corren o se producen los alimentos, el agua y el aire que consumimos los 47 millones de argentinos. Por ese motivo no es justo ni lógico que un minúsculo grupo de millonarios codiciosos (terrateñientes, transnacionales y empresas de servicios al agro) nos impongan las condiciones de uso y consumo, en cuestiones tan básicas como los alimentos para la supervivencia humana. Por eso hay que urbanizar, actualizar y popularizar el debate agrario. La alimentación es un derecho humano básico.

Como hemos expresado, el único proyecto agropecuario de la derecha es más volumen, con menos productores. Eso sí: con dosis de demagogia productivista difíciles de superar. Su planteo siempre tiene que ver con: ¡si nos sacan las retenciones!, ¡si nos bajan los impuestos! vamos a duplicar la producción y generar 900 000 puestos de trabajo en diez años. Lo que nunca dicen es sobre qué tierras van a duplicar la producción, ni dónde van a ubicar esos 900 000 nuevos trabajadores. Jamás dan una precisión verificable. Todo es demagogia pura y dura, para apretar al gobierno de turno y obtener alguna ventaja. Es un catálogo de medidas para volver al modelo agroexportador del siglo XIX. La única certeza de las medidas que proponen es que nunca funcionaron. Todo del tiempo de ñaupá (“antiguo”, en quichua). No se les cae una idea nueva, ingeniosa o solidaria para con los que menos tienen, ni por milagro del papa Francisco. Solo y siempre se limitan a recitar una retahíla de banalidades dogmáticas que no resisten el menor análisis. Sus discursos y propuestas únicamente tienen por objetivo generar una malla protectora de sus propios intereses económicos.

Lo pueden hacer por dos cuestiones. Una ya la vimos en varios artículos precedentes, pero vale la pena remarcarla: es el extraordinario blindaje mediático del que gozan, producto de las abundantes pautas publicitarias que las transnacionales derraman sobre periodismo y medios. Y la otra, que también vimos, es íntegramente “mala nuestra”, porque los sectores populares abdicamos de discutir, desde lo político e ideológico, qué tipo de agricultura y ganadería queremos. Les dejamos todo el campo libre. Solo así se explica cómo lograron invisibilizar el latifundio, la concentración monopólica, la irracionalidad logística y ambiental de la economía agraria. Solo les interesa mejorar sus balances. Si el resto del país come o se educa, les resbala olímpicamente. Nosotros pensamos exactamente al revés.

Esa es la grieta, la auténtica grieta, que tiene como punto de partida el 28 de mayo de 1946, cuando Perón fundó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), y capturó una parte de la renta

agraria para industrializar el país, garantizar el consumo interno a precios accesibles, hacer propietarios a 50 000 arrendatarios rurales y lograr que todo el pueblo comiera y se vistiera dignamente. Ese es el punto de partida de la grieta, no nació antes, nació ahí cuando, por primera vez y de verdad, alguien en nombre del pueblo se paró frente al poder real, que fue y es la oligarquía terrateniente argentina.

Sin debate no hay cambio posible

Tenemos todo para ganar el debate público, pero hay que darlo, ¡no esconderse! Empezando por la razonabilidad de nuestras ideas que siempre propenden al bien común, a que todos/as vivamos un poco mejor, a diferencia de la derecha a la que solo le preocupa cómo progresan sus cuentas bancarias.

Desde la restauración de la democracia en 1983, los sectores populares no hemos dado ningún debate ni desarrollado política alguna para lo específicamente rural: ni anticipatoria, ni protectiva, ni proyectiva. Faltaron lisa y llanamente propuestas para lo agrario. En la etapa kirchnerista, pletórica de transgresiones populares positivas, el agrario fue el segmento en que menos se cambió y donde tuvo el mayor conflicto político de la etapa. El 2008 puso en evidencia esa falencia.

Solo algún osado planteó la necesidad de una reforma agraria, sin demasiada precisión ni datos que pudieran conectar la consigna con la realidad. Fue una expresión de deseos, más que una propuesta seria, y desató las iras bíblicas en la derecha.

Para los sectores progresistas lo agropecuario fue siempre como un gueto inexpugnable: allí manda el mercado. A las políticas y a los hombres los pone ese Dios todopoderoso, que repele violentamente cualquier intromisión extra sector, con el argumento de que no se reúnen los requisitos de pertenencia o conocimientos. Llegó la hora de horadar esa lógica. Lo que encubre esa protección, que es estratégica,

son los números ilegales de sus negocios pocos claros. Esconden esos datos que delatan la inmensa concentración y ganancias que acumulan desde hace décadas, eludiendo los controles del Estado.

Hay que debatir de cara al pueblo, sin miedo ni complejos. Es imperativo dejar de comprar a libro cerrado las propuestas del neoliberalismo agrario. Los voceros del *establishment* nos recitan alegatos de oído, que nuestros dirigentes compran sin más trámite que la mansa aceptación, como la idea que nos “vendieron” las cadenas agroindustriales, o las propuestas siempre “simpáticas” que nos arriman los frigoríficos exportadores.

Es hora de que el campo nacional y popular escuche otras voces que provienen del propio espacio y deje de comprar chatarra ideológica del enemigo. Aun a los militantes federados más genuinos, que simpatizaban con la causa del pueblo, les resultaba muy difícil que se escuchara su advertencia sobre los peligros que acarrea la concentración de tierras y rentas con monocultivo e integración vertical de las empresas productoras de alimentos.

Hoy, cuando vemos los precios de la canasta básica familiar, tenemos a la vista las consecuencias de esa desidia política. Dimos mucha ventaja en este terreno, y ahora lo pagamos con Milei presidente.

La derecha ruralizó su discurso, asumiendo sin rubor lo peor del conservadurismo rural, y nos ganó la territorialidad. A su vez, aprovechó muy bien nuestra carencia de propuestas e información adecuada. Es una ventaja que no podemos seguir dando si queremos volver a gobernar nuestro país.

Hay que reconocer y valorar que el primer funcionario de la democracia que no impuso el “Dios mercado” en la conducción de la política agropecuaria fue Julián Domínguez. Y lo puso CFK. El segundo, Carlos Casamiquela, de notable gestión, le permitió al gobierno popular recuperar parte del terreno perdido durante la confrontación de la 125. Carlos tuvo gestos de acercamiento y propuestas para el sector de los pequeños y medianos productores, como nunca antes. Ese sendero

lo recuperó el ex ministro Wado de Pedro quien, en su fugaz candidatura a presidente, fue el primero que se animó a romper el “cerco sanitario” que los grandes medios tendieron en la relación del campo con el kirchnerismo, y participar de un acto con numerosos productores agropecuarios y cooperativistas en la localidad Máximo Paz (Santa Fe).

Hay que cambiar

Parto de la evidencia, hecha convicción, de que se necesita cambiar el modelo de producción agropecuaria (concepto reiterado en este opúsculo). Debemos pasar de un modelo de producción concentrado, sin agricultores, orientado esencialmente a producir forraje para los animales del sudeste asiático –y al que hemos definido como de *monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y rentas*– a otro que produzca alimentos para humanos, que democratice la producción, protagonizado por agricultores de carne y hueso y que corrija la pésima ocupación geopolítica de nuestro territorio. Que exporte todo lo que se pueda, sin sacarnos la comida de la boca a los argentinos/as, ya sea por precio de los alimentos, por bajos salarios o por producir solo para satisfacer al mercado internacional. Es con esa orientación que proponemos lo que proponemos.

Estas propuestas aspiran a ser un aporte al debate agrario, en el más estricto sentido del término debate. Por eso digo que estoy absolutamente abierto a cualquier sugerencia que las mejore. Y también a modificar conceptos, pero con argumentos convincentes. Creo firmemente que estas son ideas de juicioso sentido común, para desarrollar un programa de gobierno que se precie de nacional, popular, progresista, de izquierda, o como se lo quiera llamar. Me refiero a los que quieren enfrentar de verdad al neoliberalismo expreso o solapado, que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Esta es la verdadera divisoria de aguas en la política argentina, más allá de las siglas partidarias. Lo que importa acá y siempre

es el contenido, qué intereses defiende y no el nombre o el *packaging* que se exhibe en la esfera pública. Por eso son bienvenidos todos los que luchan, vengan de donde vengan.

Esta propuesta consta de cuarenta y cinco medidas para comenzar a recorrer el camino inverso del monocultivo de soja inducido y volver a la chacra mixta, preservar los volúmenes productivos y los saldos exportables. Siempre en busca de garantizar el abastecimiento interno a precios razonables, ayudar a desmonopolizar la cadena alimentaria de la nación, apuntalar la inversión pública y privada y optimizar los esfuerzos. Estos puntos propenden a beneficiar a toda la comunidad, y no a un solo pequeño grupo concentrado. Son medidas que van a impactar rápidamente sobre la coyuntura, por lo cual creo que se trata de una contribución seria al combate antiinflacionario. Tienen un costo fiscal casi neutro, son relativamente fáciles de ejecutar y, con seguridad, tienen un enorme retorno social y económico a corto plazo.

Pretenden ser el inicio del cambio de modelo de producción de alimentos que, como ya dijimos, lleva como mínimo una década instalar. No hablamos de reforma agraria, ni de expropiación, sí de colonización mediante compras de tierra, de regulaciones, de medioambiente, empresas públicas y de justicia tributaria.

La propiedad privada en función social

Todas las medidas que proponemos respetan el derecho a la propiedad privada y no alientan expropiaciones de bienes algunos. Creemos firmemente en la propiedad privada, pero con orientación social, tal como lo marca claramente la Doctrina Social de la Iglesia, definición a la que adhirió históricamente la FAA: “Por eso nos pronunciamos firmes sostenedores del derecho de propiedad privada, en íntima vinculación con la función social que aquella debe cumplir en beneficio

de la comunidad”.³⁸ Esto ha sido inalterable en el acervo doctrinario de la FAA, al menos hasta el año 2008. A partir del conflicto de las retenciones móviles, el concepto de propiedad privada en función social desaparece del discurso federado.

El peronismo hizo de la Doctrina Social de la Iglesia su principal fuente dogmática, a la hora de sentar posiciones en el tema de la tierra. Esto se expresa con claridad en el preámbulo del anteproyecto de Ley Agraria de 1974: “Tales son en esencia los objetivos que se procuran alcanzar con la sanción de esta ley [...] 1º) La tierra agrícola debe cumplir la función social para lo cual está naturalmente destinada. 2º) La tierra constituye un bien de trabajo, no de renta. 3º) La tierra vale por lo que produce. 4º) La riqueza que se extrae de la tierra debe ser aprovechada a los productores y la comunidad toda, en su justa proporción”.³⁹ Sería bueno que tanto el peronismo como la FAA recuperen la memoria histórica en este tema y dejen de actuar como súbditos temerosos de las filípicas de la derecha. El futuro, la historia y el pueblo argentino seguro se lo agradecerán.

Es tan inobjetable este concepto que, hasta el mismísimo Martínez de Hoz, el siniestro ministro de Economía de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, estuvo a favor del principio de propiedad privada en función social: “No es admisible –dice Martínez de Hoz– que, en las circunstancias económicas actuales, puedan existir tierras no explotadas de acuerdo a sus posibilidades. En esos casos, puede justificarse su expropiación por causa de utilidad pública, para ser otorgada con propósitos de colonización a quienes estén dispuestos a explotarlas debidamente”.⁴⁰

38 Federación Agraria Argentina: “Tenencia de la tierra en el agro argentino”, Rosario, 1972.

39 Anteproyecto de Ley Agraria, 1974, INTA, Estación experimental regional de Famaillá.

40 José Alfredo Martínez de Hoz (h): “La reforma agraria y las explotaciones agropecuarias de la región pampeana argentina”, *Revista Jurídica de Buenos Aires*, enero-abril 1966.

Un histórico asesor jurídico de don Humberto Volando, el Dr. Gey Abadis, lo expuso con claridad : “La FAA, a través de su fecunda trayectoria gremial, ha dado siempre prelación a los intereses generales sobre los particulares del sector; también su prédica se ha caracterizado por ceñirse a la realidad del momento histórico en que deben pronunciarse, sin ataduras a utópicos planteos teóricos ni a experiencias ajenas más o menos felices”.⁴¹ Me parece que ni Martínez de Hoz, ni Volando, ni Gey Abadis, pueden ser calificados de zurdos, comunistas o kirchneristas, ¿no?

Estas palabras van a modo de advertencia para no caer en la trampa de la derecha macartista que, ni bien ve algo relacionado a la tierra, empieza a agitar el fantasma del comunismo, la reforma agraria, las expropiaciones y otra sarta de sandeces que nada tienen que ver con lo que planteamos. Y estas simplificaciones reaccionarias impiden un debate serio y profundo sobre el tema.

La agitación fantasmagórica del “sucio trapo rojo” le ha dado muy buenos réditos políticos a la derecha. Con el espectro de un falso colectivismo, ha logrado correr del tema a amplios sectores populares, que deberían ser los primeros interesados. Estos miran con recelo y de lejos estas propuestas que son en definitiva acciones en favor del bienestar comunitario. Porque sin tierra no hay vida y si son pocos los que la tienen, esos son los que disponen la llave de los alimentos, el aire y el agua, de lo que dependemos los 47 millones de argentinos. Casi nada, ¿no?

Usando la calumnia y la injuria como método para debatir, han logrado generar un efectivo cordón de seguridad en torno al uso y tenencia de la tierra. Así es como lograron su mayor triunfo político-cultural, como es la invisibilización del latifundio y de la oligarquía terrateniente. Esto también va para los dirigentes del campo nacional y popular, que le escapan como el sapo a la guadaña a estas cuestiones de la tierra. Son los primeros en mirar para otro lado cuando se plantean

41 Ricardo Gey Abadis, asesor jurídico de la FAA, conferencia pronunciada en la CGE, CABA, 1972, Seminario sobre Tenencia de la tierra en el agro argentino.

estos temas. Siempre andan haciendo cálculos o testeando qué opina la derecha para no malquistarse con ella, y que no los vete. Temen al azote mediático-judicial más que al diablo. Mientras tanto el pueblo se muere de hambre.

Obstáculo psicológico

Tal vez el principal obstáculo que deben sortear estas medidas propuestas no sea el político, ni el económico, ni el operativo –que, sin duda, son todo un tema–, sino nuestra propia subjetividad negativa. El primer y principal escollo a vencer está en nuestro propio interior lleno de vacilaciones y miedos, que nos hace ver doble al enemigo y nos pone de rodillas. Esa traba invisible es la que más nos paraliza y a la que debemos sacudir. Nos la inocularon por décadas los sempiternos intereses creados, con los medios de comunicación como ariete. El pánico escénico que produce en los funcionarios de gobiernos populares enfrentar a la oligarquía les impide pensar libremente y los llena de “peros” paralizantes. Este es todo un dato que debemos tener muy en cuenta a la hora de analizar la factibilidad de la implementación de las medidas que proponemos. Nos hemos referido varias veces al rol del miedo como forma de conseguir que los “funcionarios no funcionen” en los gobiernos populares. Eso aplica también para el análisis de la viabilidad de estas propuestas.

La subjetividad chacarera cambió y mucho. Esto es importante en el análisis político del sector. Antes se nutría con los valores que derramaba la chacra mixta. La vinculación con la tierra, la forma de producirla y la interacción con la comunidad local eran la savia que alimentaba de valores a los que ejercían la actividad. La solidaridad entre vecinos fue todo un símbolo. En la chacra siempre se necesitaba una mano “para hacer algo” del que vivía cerca, que se devolvía cuando este la necesitaba. Era el sostenimiento de la escuela de campo, el trabajo en la

cooperadora, el club, el hospital de la localidad o la salita: un entramado social lleno de vínculos solidarios. Todos valores forjados en el trabajo, el arraigo, la austeridad, que tejían los vínculos con la comunidad. Eso ya desapareció o está reducido a una mínima expresión. Ese es un dato de la realidad a tener en cuenta a la hora de analizar detalles en la aplicación de nuestro programa. Es un dato, dije, no un escollo insalvable.

Todo cambió cuando en los 90 se empezó a modificar el modelo productivo. Aparecieron los nuevos valores esparcidos por el capital financiero en el mundo agrícola. La escala y los *pools* vinieron con el rentismo rural debajo del brazo, expresión feroz del individualismo extremo. También llegaron el repudio al rol del Estado, que “sostengo con mis impuestos” y la competencia a cualquier precio: si le puedo arrebatar el campo a mi vecino o compañero, se lo arrebato. No importan los pruritos éticos, es algo que está bien hacer. Por no hablar de la educación privada, especialmente la universitaria, para los hijos de los sojeros pudientes. Esta les modela la cabeza sin una gota de empatía con el pueblo que los rodea, les enseña a pisar la cabeza al vecino. Son todos valores que los alejan de la noción de comunidad, y los acercan a una jungla donde solo el más fuerte, es decir el más rico, puede sobrevivir. El sentido común productivo que se nos insufló por décadas, se vincula con estos valores y nos hace ver “al modelo” más grande y poderoso de lo que es. Ese es el campo ideológico que nos sembró la agricultura buitre, sin rostro, esa que tanto daño nos ha hecho, y que ha generado esta subjetividad tan negativa.

Sacarnos ese “no se puede” *a priori* implantado en nuestro interior, por medios de comunicación, cátedras y políticos de derecha, es el primer gran desafío que tenemos para cambiar el paradigma productivo.

Los sectores populares deben recuperar su autoestima, es clave para que estas medidas puedan aplicarse. No es imposible producir de otra manera y armar otro modelo de producción agraria. Insisto: ya lo hicimos, lo hizo Perón y sobrevivió hasta los 90. Si se pudo, se puede, es solo recuperar la memoria histórica y sacarse de la cabeza que le

debemos sumisión ciega a lo que dice la oligarquía sojera o pensar que sin ella nada es posible.

Tampoco te creas cuando te dicen que lo que estamos planteando es volver al caballo y al carro. Nada de eso, más bien todo lo contrario. Es lo que está discutiendo el mundo: agroecología, ambiente, producción de cercanía, no a los monopolios y latifundios, no a la deforestación, a los agrotóxicos: la modernidad va por acá, que no te la cuenten cambiada. ¡Cuánto verso, cuánta fábula nos han inyectado por décadas! Son años de un bombardeo constante, nos empacharon con lo excelso del volumen, el libre mercado y la libertad de comercio. De insistir con que no interesa quién ejerce la agricultura, ni dónde, ni cómo, ni con qué fin. Solo importa conseguir dólares a cualquier precio. Si el pueblo come o no, es un detalle. El monocultivo volumétrico es el único camino agrícola posible y va a derramar, algún día –algún lejano día– prosperidad a todos/as los argentinos. Esto es más falso e impostado que ver una tortuga arriba de un poste y pensar que llegó sola ahí.

Así como alguien puso a la tortuga arriba del palo, alguien nos puso a los argentinos las ideas del neoliberalismo en la cabeza. Bueno, ese es el primer obstáculo a remover si el objetivo es que haya alimentos sanos, baratos y accesibles, producidos por productores y cosechados para ser consumidos en la cercanía. Para eso es imprescindible sacarles la careta a los falsos profetas productivos; y pensar con cabeza propia, en función del interés de nuestro pueblo, y no de las compañías transnacionales y sus auxiliares productivos, la oligarquía terrateniente.

Como ya dijimos, lo que proponemos no es un paseo dominguero, lo sabemos, pero tampoco es un asalto al cielo. Son medidas más que razonables, sin costos fiscales excesivos, o con costos casi nulos, que van a generar nuevos ingresos al erario público y bienestar al pueblo. Se trata también, de decisiones que respetan la propiedad privada. Repito: respetan la propiedad privada y tratan, como dice la Doctrina Social de la Iglesia, de que lo privado esté en función social. Solo hay que animarse.

No nos asusta la disparidad de fuerzas en este debate, nos sobra fe en nuestro pueblo y confianza en la verosimilitud de nuestras ideas.

Propuesta política para ejecutar estas medidas

Dicen que el papel es el material más resistente que existe. Se puede poner cualquier cosa encima y él resiste. Cuando uno se entrega a escribir propuestas es fácil sobregirarse en los planteos teóricos, buscando el ideal. Después, la realidad impone sus límites. Pero les aseguro que no es este el caso. Toda y cada una de las propuestas esbozadas son de fácil o relativamente fácil implementación y ejecución desde lo instrumental. La clave está siempre en el poder político que se pueda construir y la decisión para encarar una reforma de esta naturaleza. Como ya dijimos, cuando se trata del tema uso y tenencia de la tierra, el factor “miedo” merodea siempre los despachos ministeriales. Pero no hay más remedio que vencerlo, si queremos la felicidad de nuestro pueblo.

La implementación de algunas propuestas llevará más tiempo y discusión que otras, y requerirá mayor poder político. Pero ninguna es inviable o puede considerarse irrealizable *a priori*. Son todas hechas con los pies muy sobre la tierra. Sí requieren decisión y coraje personal para llevarlas a cabo: no es para gobiernos “blandengues”, como el de Alberto Fernández. Se necesita un fuerte liderazgo político, como el de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, en la cabeza del Ejecutivo. Solo así se podrá garantizar que su puesta en práctica no se vea afectada por el primer tropiezo, como fue con el conocido caso de Vicentin. Se entiende, ¿no?

El deber de toda política popular es ampliar los límites de lo posible para cambiar la realidad en beneficio de los sectores menos favorecidos, nunca subestimarla ni desconocerla. Para eso hace falta construir poder popular. Sin eso, nada de lo que proponemos se puede hacer y no pasa de ser una retahíla de buenas intenciones.

Lo segundo que tenemos que desmitificar es el reduccionismo pro oligárquico de que todo el campo es lo mismo o todos somos el campo, o que es lo mismo un gran productor que un pequeño productor. Este concepto, totalmente erróneo y profundamente reaccionario, es de gran eficacia política. Le permitió a la derecha poner en la misma trinchera a un gran productor y a uno pequeño, para que el pequeño defienda los intereses del grande. Esta es “mala nuestra”, que los dejamos hacer este armado político-ideológico casi sin obstáculos. Tenemos por delante una gran tarea política como es la de desmontar esta construcción *contra natura* de la derecha, cuya piedra angular es lo mediático. Nuestro primer objetivo político debe ser recuperar a la pequeña y mediana burguesía rural como aliada del campo nacional y popular. ¡No es fácil, tampoco imposible!

Hay que poner a la política agraria en la agenda principal (no secundaria) del Partido Justicialista, de Unión por la Patria, del campo nacional y popular, y refundar un Frente Agrario Nacional, con los partidos, entidades gremiales agrarias y sectores rurales, campesinos, indígenas. El campo nacional necesita con urgencia un instrumento político organizativo del sector, específico para debatir, proponer y confrontar con la derecha neoliberal, aparte de tener un interlocutor de existencia real donde asentar la propia agenda de un futuro gobierno y contribuir así a agrandar los márgenes de gobernabilidad.

Este gran Frente Agrario Nacional deberá ser el instrumento organizativo, de agitación y urbanización del debate del sector. Deberá practicar la amplitud como una virtud insoslayable para recorrer el camino de fundar otra forma de hacer agricultura y producir alimentos. Ahí, en ese espacio plural, deben converger todos los sectores que tengan contradicciones objetivas con la derecha neoliberal agropecuaria. El Frente Agrario Nacional debe ser la peana donde se asienten y confluyan todas las partes que luchan por la soberanía y seguridad alimentarias de la Nación.

Necesitamos unidad con territorialidad, para generar poder popular.

Las 45 propuestas

1. Crear el Ministerio de Agricultura Familiar, Chacarera, Campesina e Indígena de la Nación. Su objetivo central será garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, propiciar y defender la agricultura de rostro humano, la chacra mixta y el abasto de cercanía. Este ministerio entenderá en todas las cuestiones agrarias que involucren precios, volumen, logística y producción, atinentes al consumo interno. El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena será absorbido por el nuevo ministerio. La dotación presupuestaria del mismo deberá ser “la que haga falta”.

La actual Secretaria de Bioeconomía conservará ese rango, y recuperará su anterior denominación de Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación. Se ocupará centralmente de la Agricultura de Escala y del control y fiscalización de las exportaciones.

La actividad pesquera tendrá una secretaría de Estado autónoma y específica.

2. Poner en plena vigencia la Ley 27 118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Fue sancionada en 2014 por el Gobierno de Cristina Fernández, aún sin reglamentar. Las funciones y partidas presupuestarias asignadas para esta ley pasarán a ser parte del nuevo ministerio.

3. Definición de productor agropecuario. Esto no es un tema menor ni de perogrullo, es central a la hora de diseñar una política agraria y elegir un sujeto determinado donde desarrollar la propia agenda. ¿Quién es productor agropecuario? Se puede llamar productor al dueño de un banco con tierras, o a un gran industrial, o a quien renta su tierra? ¡NO! A partir de esa definición, discriminamos al productor genuino del rentista.

4. Fideicomiso de Chacra Mixta y/o Agregación de Valor en Origen, e Industrialización de la Ruralidad. Capitalizado con *devolución de retenciones*, aportes del Tesoro y emisión de títulos públicos. Objetivo: retornar, en forma *voluntaria*, a la chacra mixta y/o diversificar la producción con agregación de valor en origen. Incluirá también proyectos para industrializar la producción. ¿Cómo lo haremos? Por medio de un fondo rotativo específico a partir de un fideicomiso, destinado a pequeños y medianos productores (sean personas físicas o jurídicas).

Diversificar la producción es volver a la mixtura productiva (no confundir con rotación). Agregar valor en origen genera más empleo decente, arraigo y ocupación del espacio geopolítico del territorio. Paralelamente esto aumentará la oferta en cantidad, calidad y diversidad de la producción y la elaboración de productos alimenticios destinados al mercado interno, así como de saldos sobrantes para la exportación.

Este regreso voluntario a la chacra mixta se financiará con recursos del monocultivo sojero. Para eso ideamos este fideicomiso, que necesita como complemento de una política de retenciones segmentadas. Así, los beneficiarios previamente seleccionados por sus proyectos productivos, pagarán los créditos con la devolución de retenciones. Estos deberán cumplir los requisitos oportunamente establecidos por la autoridad de aplicación. La devolución de retenciones tendrá como tope máximo sugerido hasta 10 000 quintales por productor, que podrán usar para aplicar al pago del crédito.

El fideicomiso se capitalizará con un porcentaje fijo de las retenciones a la soja, no menor al 5 % de la campaña precedente, y/o con fondos de organismos internacionales, no condicionantes, como pueden ser los del FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) u otros. La Ley de Solidaridad Fiscal faculta a subir –aún– dos puntos y llevar las retenciones de la soja al 33 %. Esos dos

puntos significan alrededor de 300 millones de dólares, dependiendo de varios factores como clima y precio. ¡Miren si hay plata, solo hay que usarla bien!

Este programa tendrá un requisito geopolítico ineludible: los proyectos deberán radicarse –indefectiblemente– en poblaciones menores a 5000 habitantes o en zonas rurales-rurales. Desaconsejamos que estén radicados en sitios que, aun siendo rurales, sean ciudades o pueblos con una cantidad de población importante. Se trata de ocupar mejor “todo” el territorio, no solo la parte que ya está bien poblada. También podrá usarse para que la lechería vuelva a la Patagonia (ver punto 2).

Administración: Será administrado por un ente público mixto, con participación y control social.

Adjudicatarios: Podrán ser beneficiarios productores individuales, cooperativas y sociedades comerciales de todo tipo. En los últimos casos, para la cancelación del crédito se sumarán las devoluciones de retenciones de acuerdo con la cantidad de socios contados individualmente.

Operatoria: Una vez aprobado el crédito productivo –que puede cubrir hasta el 70 % del proyecto– los beneficiarios recibirán un certificado de devolución de retenciones equivalente de hasta los 10000 quintales (qq) por productor, que irá directa e íntegramente para cancelar el crédito que tomó el beneficiario del proyecto del fideicomiso, eliminando todo tipo de demora, inconveniente o sospecha de no devolución, ya que la cuota a pagar está atada a la devolución de las retenciones. El crédito tendrá los años de gracia necesarios de acuerdo con la actividad elegida y será íntegramente calculado al valor producto del emprendimiento.

Importante:

- a) Los beneficiarios estarán obligados a invertir en las zonas rurales y/o en poblaciones menores a los 5000 habitantes, a fin de garantizar los objetivos manifestados.
- b) Deberán crearse unidades de asesoramiento, de armado de

proyectos y facilitación de acceso a los fondos, en el ámbito del Banco de la Nación Argentina, del Banco Provincia de Buenos Aires, y de bancos cooperativos que quieran adherir. Se crearán unidades administrativas descentralizadas con asiento físico en el interior profundo, con el objetivo de realizar las tareas de relevamiento y reclutamiento de interesados en comunas, municipios y entidades intermedias. En la evaluación de los proyectos deberá tenerse en cuenta la viabilidad económica del anteproyecto, con independencia de los análisis financieros del o los solicitantes. Si la fracción de tierra donde se asienta el proyecto está libre de gravámenes, no se solicitarán más requisitos para recibir los fondos que el compromiso expreso y fehaciente de no vender ni hipotecar la propiedad, hasta tanto se cancele el crédito. Se incorporará al INTA, el INTI y a las universidades públicas a las unidades de asesoramiento y evaluación. El fideicomiso también podrá subsidiar tasas y/o eventualmente garantizar proyectos, o incorporar al esquema sociedades de garantías recíprocas, siempre y cuando sean protagonistas pequeños y medianos productores.

A grandes rasgos, estos son los puntos que sugerimos para la realización del fideicomiso. Necesariamente hay que afinar el lápiz con los requisitos. Consideramos esta propuesta novedosa y atractiva, especialmente para los jóvenes herederos de fracciones de campo familiar. Además, operaría como una segmentación de hecho, ya que tiene tope en la devolución de las retenciones. Pone énfasis en la localización geográfica y ayudará a mejorar la ocupación poblacional de nuestro país. Aparte de radicar actividades que generarán mano de obra en el territorio, esta propuesta impactaría como un freno a las migraciones rurales descontroladas, apuntando a realizar la inversión donde está el problema, en el interior profundo.

Buscar la diversificación productiva, con agregación de valor, a partir de la redistribución intra-sector de las retenciones, apuntalando

a una política de soberanía y seguridad alimentarias de la nación, no es poco para empezar. Los detalles están a disposición de quien lo requiera.⁴²

5. Seguridad rural. Modificaremos el criterio operativo actual con el objetivo de garantizar una mayor efectividad de la acción. Partiremos de esta base: el despoblamiento rural cambió la escenografía del campo y hace más difícil la tarea de brindar la seguridad requerida por los productores de la pampa húmeda, que primero abandonan sus establecimientos y luego exigen que el Estado se los cuide. El modelo de sojización inducido produjo cambios profundos en la vida campestre. Este nuevo contexto rural, sin personas que habiten o trabajen cotidianamente en la chacra, impone nuevos modelos de seguridad rural. Por eso consensuamos algunas ideas básicas:

- a) Creación de un Consejo Federal de Seguridad Rural, en acuerdo con las provincias.
- b) Proponer a las provincias un pacto de seguridad democrática con participación y control popular en las poblaciones menores de 5000 habitantes. Esto significa un mejor control del accionar de la fuerza de seguridad.
- c) Trasladar las responsabilidades administrativas de las comisarías a la comunidad y a los municipios. Administración civil de las comisarías por empleados comunales y/o municipales. Todo el personal policial deberá estar orientado a patrullar las calles.
- d) La administración civil será dependiente del municipio y deberá hacerse cargo de lo atinente al mantenimiento edilicio, limpieza y otras necesidades de la comisaría, así como será responsable de la papelería y trámites que demande la sociedad civil.

42 A las propuestas de redistribución intra-sector de una parte de las retenciones las venimos planteando, sin éxito, desde hace casi treinta años. Véase “Las retenciones: algunas pautas para su mejor utilización”, diario *La Tierra* (23.9.1986) en Pedro Peretti: *La chacra mixta y otras yerbas*, Buenos Aires, Perspectiva Bicentenario, 2014, p. 279.

- e) Las provincias proveerán los fondos a una cuenta especial de los municipios. El control de todo lo atinente a móviles policiales, mantenimiento, reparaciones y nafta será responsabilidad de los municipios.
- f) Implementar una chequera de denuncia inviolable, con una copia al denunciante, otra que irá a la justicia y una tercera, a la comisaría. Esto nos permitirá seguir el curso de la causa, el desarrollo de la investigación y el armado de un mapa del delito, sin versos.
- g) Destinar una parte de lo recaudado por el inmobiliario rural a financiar una guardia rural local, comandada y dirigida por ciudadanos residentes en la localidad.
- h) Será obligatorio un registro local de motos, tractores y autos. Hay que derogar la Ley de Registros del Automotor (Ley 6582/58 y todas sus modificatorias) y transferirlos a los municipios con fiscalización del Ministerio de Justicia de la Nación.

6. Creación del Instituto de Colonización Agraria. Se haría por ley, como ente autárquico y con fondeo nacional e internacional. Se pueden emitir una serie de títulos públicos o cédulas hipotecarias con el objetivo de capitalizar al Instituto para la compra de tierras. El objetivo es intervenir en el mercado de tierras –al estilo del Instituto de Colonización del Uruguay– para que el Estado compre, parcelé y entregue tierras a nuevos colonos con fines estratégicos vinculados a la soberanía y seguridad alimentarias de la Nación. Sus beneficiarios serían, prioritariamente, hijos de chacareros, peones rurales, técnicos y profesionales vinculados con la actividad agropecuaria. Su capitalización anual y fondeo debe especificarse por ley, nunca podrá ser menor al equivalente del 5 % de lo que se recaude por retenciones. Pensamos en un organismo similar al viejo Consejo Agrario Nacional, fundado por Ley 12 636 del año 1940 y disuelto en 1980, por la dictadura militar. Obviamente, adaptado a estos tiempos.

La clave de este tipo de organismo está en el grado de capitalización

que tenga y en la obligación de su ejecución presupuestaria. Pues si no, únicamente decora la política sin incidir de modo positivo, y solo sirve para tranquilizar conciencias progresistas que confunden contenido con envase. No nos interesa crear un instrumento solo para salvar las formas, por eso hablamos de políticas públicas diferenciadas, que impliquen necesariamente grados de ruptura con el pensamiento dominante de la época en materia agraria. Las medidas que proponemos deben evitar la vaguedad y poder mensurar con resultados concretos.

7. Creación de una Agencia de Control del Comercio Exterior de Granos. Debe respetar los siguientes criterios generales:

a) Es muy importante no utilizar recetas, modelos, copias, ni calcos de viejos instrumentos de políticas agrarias, que fueron exitosos en su tiempo, como el IAPI o las juntas de granos y carnes. El mundo cambió y no es bueno practicar la “moda nostalgia” con la economía. La Agencia debe ser el producto de este tiempo y de este momento político. Hay que regular, pesar, medir y controlar, con instrumentos de hoy, no de ayer.

b) Esta agencia tiene que ser un ente público no estatal, entendiendo lo público como una superación de lo estatal: lo público es de todos y lo cuidamos entre todos.

c) Debe tener control social. En su conducción participará el Estado nacional, las provincias, los productores, los trabajadores y los consumidores, entre otros actores.

e) Sus directores no podrán ser reelectos por más de un periodo.

f) Los directores y funcionarios no podrán ejercer el comercio y tendrán terminantemente prohibido nombrar como empleados a familiares o personas que hayan tenido relación de dependencia con alguno de ellos.

8. Creación de una empresa pública de alimentos. Puede ser autónoma, o ser parte de la Agencia de Control del Comercio Exterior propuesta en el punto anterior. En este caso, debe reunir sus mismos requisitos: ser pública, no estatal y con control social. Actuará como

empresa testigo de costos, de precios, de importación y pago de impuestos. Seguimos pensando en la expropiación de Vicentin.

9. Creación de una Secretaría de Estado de Sustitución de Importaciones. Su función será detectar todas las áreas donde tenemos importaciones innecesarias. Por ejemplo, las tripas para embutidos, las carnes de cerdos, las maquinarias y los repuestos, que se pueden fabricar en el país. Se deberán elaborar los planes para producir esos insumos en nuestro país. Todo lo que se pueda hacer en el país lo haremos.

10. Sanción de una Ley de Arrendamiento y Aparcerías Rurales. La FAA difundió y debatió ampliamente este punto, a lo largo de toda su historia, con varios proyectos que tienen o tuvieron estado parlamentario, hacemos nuestra esa historia. La norma que se sancione, para ser efectiva, deberá contemplar, esencialmente, límites a la cantidad de hectáreas arrendadas por persona física o jurídica para que actúe como un freno a la voracidad de los *pools* de siembra; y, además, debe promover una promoción impositiva a aquellos propietarios de tierras que arriendan sus campos a productores de la agricultura familiar.

11. Todas las políticas públicas agrarias deberán segmentarse. Esta será una disposición administrativa *sine qua non* de gestión. Sí o sí se tendrá que tener en cuenta el tamaño en hectáreas de las explotaciones agropecuarias, a la hora de diseñar las políticas públicas del sector. Las retenciones serán segmentadas desde el minuto uno.

12. Sanción de una Ley Nacional de Unidad Económica Agraria. Será una ley complementaria de las provinciales, que actúe como referencia nacional del tema, adecuándose a las realidades de las regiones y las provincias.

13. Leche, carne, aceites y harinas serán declarados bienes estratégicos para la seguridad nacional. Se volverán a crear las Juntas Reguladoras por producto, a los fines de garantizar el abasto interno, en precio, cantidad y calidad. Un pueblo mal alimentado es un pueblo indefenso. Los campos del Ejército deberán ser puestos a disposición de estas producciones (preferentemente, la actividad láctea) con el objetivo de generar volúmenes de intervención y reserva para proteger el consumo interno, en caso de desabastecimiento, cataclismos o crisis alimentarias.⁴³

Los precios accesibles y estables de estos productos serán una contribución decisiva a la lucha antiinflacionaria y un aporte inestimable a la gobernabilidad democrática.

14. Creación de un Fondo Federal Agropecuario. Su uso debe estar específicamente predeterminado hacia la reconversión agroecológica de las franjas periurbanas impedidas de fumigar. Esto es perentorio. La salud de nuestra gente no puede esperar. Los índices de cáncer en las poblaciones expuestas a fumigaciones indiscriminadas son alarmantes. Todos los días salen fallos y disposiciones sobre la prohibición de fumigar en las franjas periurbanas y nadie se ocupa de hacerlas

43 En 1842 ya había vacas lecheras en Malvinas. Antonina Roxas, parienta en primer grado del brigadier Juan Manuel Rozas, se había casado con un señor llamado Kenney. Se establecieron en nuestras Islas Malvinas. Era una mujer muy prestigiosa y querida por la comunidad. Por su labor benéfica se le hizo un reconocimiento, ya que asistía enfermos, atendía partos y amansaba vacas lecheras: “Tan valiosa fue su tarea que, a modo de recompensa y en reconocimiento a su labor, el teniente Smith le entregó cinco vacas lecheras, tres bueyes y un toro, con las cuales debía proveer la leche y la carne, ya que se trataba de haciendas medianamente mansas. Por entonces la existencia era de catorce vacas lecheras y ciento noventa vacunos” (*La Nación*, 21/10/2023).

¡Esto sucedió hace 182 años! ¿Cómo puede ser que hoy no exista un solo tambo en toda la Patagonia y la leche deba hacer miles de kilómetros para llegar allí desde la pampa húmeda, ya sea por vía marítima o terrestre? ¿Se dan cuenta de qué significa “eso” en términos de costos, accidentes viales, gasto en combustible, emisión de gases de efecto invernadero?

cumplir efectivamente, ya sea en provincias o municipios. No alcanza con solo prohibir: hay que ofrecer una alternativa superadora de reconversión productiva a los propietarios de esas tierras (que suman miles de hectáreas) y que deben reorientarse a ofrecer alimentos sanos y de cercanía. Este fondo deberá negociar su integración y ejecución con las provincias, y capitalizarse con recursos nacionales y provinciales. Si se logra la sanción de un impuesto al latifundio, lo recaudado deberá estar orientado –en forma parcial o total– a financiar esta reconversión agroecológica, en especial, a pequeños productores que acepten de modo voluntario producir bajo otro paradigma. En su defecto, el fondeo deberá provenir del Tesoro Nacional. El esquema tiene una rápida capacidad de repago y no hablamos de cifras astronómicas. Además, solo se necesita capacitar a personas y/o financiar la compra de bienes de capital (semillas, máquinas, herramientas, etcétera) que se producen en el país. Todo se paga en pesos.

15. Fortalecimiento de los mercados locales o de cercanía. Es necesario avanzar en la construcción de mercados populares. Propender a los consumos de la comarca es el objetivo central a conquistar. Para lo cual hay que producir y tener dónde vender en la cercanía. Es imprescindible desalentar el traslado de alimentos y mercaderías a través de grandes distancias. Esto trae problemas de todo tipo. Tanto los costos económicos de la logística como los daños ambientales que genera, siempre los terminan pagando los consumidores, ya sea en el precio de los alimentos o en la afectación de su calidad de vida. Proponemos un esquema de operatoria similar al del Mercado Central, pero con un desarrollo federal. Este punto está íntimamente asociado al ítem anterior, en lo que refiere a dónde se van a vender los frutos de la reconversión productiva de las zonas periurbanas. Para lo cual incentivaremos la construcción de mercados populares con un esquema similar al de los parques industriales, que tienen un esquema organizativo: el RENPI (Registro Nacional de Parques Industriales) el cual dispone

de presupuesto con fondos especiales para construir o mejorar su infraestructura. La construcción física de esos mercados populares y de puntos de venta es esencial para el éxito del proyecto. Estos mercados deben ir acompañados de algunas medidas para expandir la agricultura familiar chacarera. Ejemplos: a) Liberar el expendio de leche cruda/pasteurizada en poblaciones menores de 5000 habitantes. b) Incentivar las plantaciones de frutas y hortalizas en las franjas mencionadas en el punto 2, así como en terrenos ferroviarios, baldíos y banquinas de nuestros poblados rurales y ciudades. Las anteriores son solo algunas de las muchas cosas que se pueden hacer, sin demasiado costo.

16. Plan lácteo integral, que declare a la leche un bien público básico universal. Vamos a garantizar a cada madre y niño que estén en la Asignación Universal por Hijo (AUH), 20 litros de leche fluida, más su correspondiente ración de yogures y quesos. Nuestros pibes y pibas no consumirán alimentos de segunda calidad porque sus familias no tienen dinero. Se desarrollará el programa “Cada pueblo, un tambo” en conjunto con los municipios, para fortalecer el abastecimiento de leche fluida. ¿Cómo lo haremos? Muy sencillo, igual que se hizo durante siglos: ordeñando vacas cerca del consumo. Instrumentaremos los fondos necesarios para que cada municipio tenga su tambo de cercanía y habilitaremos el expendio local de leche fluida. No es poner un satélite en órbita... ¡es ordeñar algunas vacas! Un oficio más viejo que la espalda. ¿Se entiende? Solo hay que tener la disposición política de hacerlo y ponerse a trabajar. Sin trabajo responsable, no hay leche, ni milagro. ¡Trabajar! Un litro de leche recorre en la Argentina un promedio de 1000 km. Este programa quiere revertir esa irracionalidad logística inadmisibles, cuyos costos paga el pueblo. Además, en paralelo, se debe crear un instituto lácteo promotor de la actividad, que proteja la lechería del avance de la sojización. Las tierras de nuestras cuencas lecheras son estratégicas. La leche es un insumo básico para la seguridad nacional, más importante que los tanques y los misiles. Niños/as bien

nutridos son la mejor arma de defensa de una nación. En salud y educación la alimentación es fundamental y la leche es un bien esencial, que el Estado debe garantizar.

17. Banco de la Nación Argentina. Se trata de un instrumento central para atender en forma específica y diferenciada al sector agrario. Evitar su privatización total o parcial es clave. Que siga en manos del Estado es estratégico. Creemos que es necesario reinstalar la gerencia de crédito agropecuaria en la entidad, tal como lo hizo Perón en su primer gobierno. Hay que cambiar el criterio de la elección de los directores, se debe volver a designar representantes de la producción real, incluyendo representantes de la agricultura familiar, campesina, chacarera e indígena. También propiciaremos líneas de créditos específicas orientadas a pequeños productores, a la chacra mixta, construcción, arreglo y refacción de viviendas rurales, bretes, corrales, molinos, compra de vientres, plantación de montes frutales familiares, etc. Plata sobra, hay que manejarla con transparencia y sentido patriótico; no como hizo el directorio del Banco Nación que presidió González Fraga, cuyo mayor ejemplo de malversación y corrupción es Vicentin.

18. Creación de un Banco de Fomento para el Desarrollo Rural. Este banco estará especialmente orientado a actividades que generen trabajo, bienestar y arraigo en el sector de las familias rurales: energía solar y/o eólica, refacciones, aguadas, alambres, máquinas, herramientas, movilidad, compra de parcelas en condominio, etc. Un requisito indispensable para acceder al financiamiento deberá ser la residencia efectiva del beneficiario en el medio rural. Tendrá prohibido usar fondos para financiar proyectos urbanos. Por cada dólar que se invierte en desarrollo rural en el interior profundo, hay que invertir tres en las ciudades para obtener el mismo resultado social. Son números del Banco Mundial.

19. Inmediato llamado a licitación para el dragado del Canal Magdalena. Nuestra soberanía reclama esta medida de forma perentoria. Esto significa un ahorro en pago de fletes de entre 145 y 243 millones de dólares/año, ya que, comparado con el trayecto actual por el Canal Punta Indio, los barcos reducen su recorrido en 66 km, lo que representa seis horas menos de navegación. Es inconcebible que aún no se haya dragado el Canal Magdalena.

20. Movimiento cooperativo. La mayoría de las poblaciones menores a 3000 habitantes carecen de servicios financieros. Los bancos solo se radican en comunidades donde la cantidad de población les permita buenos retornos de la actividad. Para resolver este problema vamos a propiciar la vuelta de las Cajas de Créditos a las poblaciones rurales menores a 5000 habitantes. Militaremos por una reforma a ley de entidades financieras, que derogue la que promulgó Martínez de Hoz, y que la actividad bancaria sea declarada servicio público. También fomentaremos el desarrollo del movimiento cooperativo en todos los rubros posibles, tanto el agrario como el de servicios. A los efectos de coordinar políticas y acciones, solicitaremos una representación permanente del futuro Ministerio de Agricultura Familiar, Chacarera, Campesina e Indígena de la Nación y otro del cooperativismo agrario, en el directorio del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social).

21. Conexión a Internet: Este es un factor definitorio para el desarrollo del interior productivo. Tener buena conectividad es la clave que posibilita el arraigo y resulta imprescindible para industrializar la ruralidad, mejorar la educación, la salud y el buen vivir de los compatriotas que eligen el campo para desarrollar sus vidas. En este rubro el movimiento cooperativo de servicios ya tiene un rol preponderante. Seguiremos apoyándolo e incrementando la inversión en su desarrollo.

22. Sanción de la Ley de Compra Pública para la Soberanía y Seguridad Alimentarias de la Nación. Esta debe fijar porcentajes similares a los que existen actualmente en Brasil. Según esta ley, el 30 % de las compras del Estado brasileño para sus programas sociales debe adquirirse a la agricultura familiar. Se deberán incluir en la ley, determinadas actividades prioritarias para la agricultura de rostro humano. Por ejemplo, la cunicultura, la porcicultura familiar y la lechería, entre otras. Esto propende a defender la seguridad alimentaria de la población y a evitar las prácticas monopólicas. Es muy riesgoso que actividades estratégicas para el consumo popular, como la producción de leche o la cárnica, queden en manos de un par de empresas.

23. Debate y sanción de una legislación antimonopólica. Sería una ley similar a la que rige en Estados Unidos, que impida la integración vertical de las empresas, fundamentalmente en el área de los alimentos. Se debe garantizar la libre competencia, evitando posiciones dominantes, y permitir que los mercados se expresen con fluidez. Ejemplo de lo anterior sería la prohibición de la venta directa del productor al exportador en el mercado de granos, o la venta directa de haciendas del ganadero al frigorífico. No se debe permitir que supermercados –Coto o La Anónima– tengan una integración vertical de sus actividades ganaderas. Son dueños de tierras, de vacas de cría, de los *feedlots* y de los mataderos donde faenan su propia hacienda. También son dueños de los frigoríficos donde la procesan; de los camiones con los que transportan la carne y de la góndola donde la venden. Finalmente, según su conveniencia, deciden si vender al mercado interno o exportar, sin intervención del Estado. Esa es una posición dominante, que encarece el consumo popular, incompatible con cualquier democracia moderna. Y a su vez, resulta un disparate monopólico inadmisibles.

24. Defensa y promoción de los Mercados de Referencia. Esto es clave. En todo el país deben existir mercados de vacunos como los de Cañuelas y Rosario. Al menos uno en cada zona geográfica ganadera

(NEA, NOA y Patagonia). Propiciamos la prohibición total o parcial (como mínimo en un 50 %) de la venta directa de hacienda del productor al frigorífico. Toda hacienda, cualquiera sea, debe pasar bajo martillo público físico o televisado, y los remates deben ser convenientemente publicitados. Es imperativo el regreso de los mercados de referencia de cerdos y ovejas, así como crear uno nuevo para los lácteos.

25. Fortalecimiento de la educación y de la cultura rural en todas sus formas y estamentos. Tendremos una dirección específica en el Ministerio de Agricultura que coordinará con el de Educación, a los fines de hacer un seguimiento minucioso de esta área clave para cualquier gobierno popular. A su vez se desarrollará un plan especial de becas para estudiantes que quieran ingresar a las escuelas agrotécnicas. Organizaremos una red entre los institutos para coordinar y organizar mancomunadamente el acceso de todos/as los jóvenes rurales a la educación superior, y un plan especial de financiamiento nacional y común a todas las escuelas agrotécnicas, para quienes quieran emprender alguna actividad productiva rural. Nos interesa sobremanera que el alumno termine su ciclo educativo completo y pueda tener perspectivas laborales acordes con lo que estudió y/o investigó. También nos ocuparemos de la educación técnica: vamos a incorporar el estudio formal de oficios criollos como la platería, los tejidos, la talabartería, la alfarería y el tratamiento del cuero, entre otras. A su vez crearemos especialidades de la agricultura familiar con salidas laborales vinculadas a los proyectos antes mencionados. Propiciaremos un plan nacional de fomento a la lectura y las artes visuales.

26. Las universidades públicas. Deben incluir en sus planes de estudio, la formación de técnicos, ingenieros y veterinarios al servicio de la agricultura familiar, campesina e indígena. En las currículas se deberán incorporar en forma permanente y obligatoria las cátedras de soberanía y seguridad alimentarias. A su vez, se proveerá de un plan de

financiamiento para ingenieros y veterinarios egresados de las universidades públicas, con proyectos para radicarse en poblaciones rurales menores a 5000 habitantes. Creación de Universidades Campesinas que recojan los saberes rurales y trabajen en un modelo de integración intercultural. En cuanto a médicos y enfermeras, es alarmante la falta de estos profesionales en el mundo rural. Vamos a discutir con el Ministerio de Educación y con el Consejo de Rectores la incorporación de la orientación de médicos y enfermeros rurales en la currícula universitaria.

27. Impuesto al latifundio. Se debe convocar al Consejo Federal Agropecuario, ya que el dominio del suelo es potestad de las provincias. En ese ámbito, consensuar una norma que grave a toda extensión de tierras mayor a cinco unidades económicas. Pueden ser el ya existente Impuesto Inmobiliario Rural o una ley específica de impuesto al latifundio. La provincia que no lo quiera aplicar o lo aplique sin un control efectivo real, será sancionada con un descuento, calculado en función del porcentaje de la recaudación que dejó de percibir, que les será devuelto de la coparticipación nacional. Los fondos de este impuesto deben aplicarse esencialmente a proveer de recursos, expresados en los puntos 6, 9 y 10.

En este sentido, un excelente punto de partida es el proyecto del diputado provincial santafesino (MC) Leandro Busatto, de cobro del inmobiliario rural diferenciado por tamaño de la explotación, zona y forma productiva.

28. Control de precios. A proveedores de insumos, fabricantes de máquinas agrícolas, herramientas y repuestos en general. Este tema es central para el correcto funcionamiento de la política de sustitución de importaciones, ya que muchos empresarios inescrupulosos aumentan desmedidamente los precios y perjudican, sobre todo, a los productores-consumidores. De este modo, en manos de los fabricantes

queda buena parte de la rentabilidad de los chacareros, mientras se encarecen artificialmente los insumos, que luego se trasladan a los precios al consumidor: es decir, al pueblo.

29. Plan de recuperación de taperas y/o vivienda rural. Incluir dentro de la operatoria del Plan Procrear un segmento especial para la vivienda rural-rural, y para el reciclado de taperas, con destino a la utilización como morada única para el chacarero y/o el personal. Esto debe estar vinculado con el Plan de reconversión a la chacra mixta. Es un complemento ideal y necesario. Propiciaremos el rescate de la construcción tradicional, con materiales locales, que es respetuosa del ambiente y energéticamente eficiente.

30. Plan ganadero integral. Que incluya todas las actividades pecuarias: bovinas, ovinas, porcinas, caprinas, cunicultura, etc. Estos planes sectoriales van de la mano con la recuperación de la chacra mixta (ver punto 4). Además, vamos a emitir un bono de deuda pública a diez años a valor producto para financiar la expansión de estas actividades.

Hay que modificar la Ley 25 507 de creación del IPCVA (Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina) y reemplazarlo por un Instituto de Promoción de las Carnes en general. El objetivo de este cambio es incentivar el consumo de carnes alternativas en el mercado interno. Buscamos liberar, sin desabastecer, saldos exportables de cortes bovinos y porcinos, entre otros. Este instituto deberá velar por el precio de la carne al público y por la desmonopolización y descentralización de la actividad. Toda la venta de carne minorista, cualquiera sea, se hará en carnicerías. Como ya dijimos, estará prohibido a los supermercados la venta de carne al público. Tendremos como Estado, un rol activo en la financiación y acople comercial, para que los empleados de las carnicerías de los supermercados se transformen en comerciantes independientes. Basta de monopolio e integración vertical de las empresas alimenticias, ¡a competir de verdad!

31. Plan de recuperación y control de puertos. Es imprescindible comenzar su recuperación por parte del Estado. Y mientras tanto, instrumentar seriamente el control en los puertos privados, por donde circulan todo tipo de mercaderías, legales e ilegales. Esa circulación condiciona fuertemente la recaudación tributaria, pues es allí donde se blanquean todos los granos “en negro” y de contrabando que ingresan y egresan del país.

32. Balanza pública a la entrada de cada puerto, convenientemente operada y controlada. Esto significa que no podrán ser “atendidas” por los mismos CEOs de las compañías exportadoras. Cuestión imprescindible, urgente e imperiosa para mejorar nuestras cuentas fiscales.

33. Control del contrabando. Desarrollaremos una lucha frontal contra esta práctica ilegal del comercio en cualquiera de sus formas. No es solo por los puertos privados que se va mercadería de contrabando. Los pasos fronterizos serán monitoreados en tiempo real y todo camión que sale o entra del país será pesado.

El camión que sea detenido con granos en contra flete, o con documentación irregular, será decomisado y subastado a beneficio de los hospitales públicos de la zona donde esté radicado el vehículo. Deberá publicitarse convenientemente la subasta a los efectos educativos y disciplinarios, para que se tome conciencia que causar un perjuicio contra el Estado no es gratis.

34. Creación de un seguro multirriesgo rural. Tendrá alcance nacional y para todos los productores, cualquiera sea su tamaño y ubicación.

35. Ley de semilla. Que defienda el patrimonio histórico y cultural de nuestro país y garantice el uso propio para pequeños y medianos productores. Debe propiciar la investigación y el desarrollo

de semillas nacionales, autónomas y públicas. Creación de Centros de Reproducción de Semillas Nativas y Originarias, en todo el país, tal como lo prevé la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. En este rubro se aplicará la política de sustitución de importaciones, ya que importamos el 70 % de las semillas de alfalfa u hortícolas, cuando podríamos “fabricarlas” en nuestros campos, ahorrando divisas y generando muchos puestos de trabajo.

36. Recuperación de nuestra Flota Mercante. Anualmente pagamos más de 3000 millones de dólares –que se van del país– en fletes a empresas mercantes extranjeras. Después nos quejamos de la restricción externa. Debemos recuperar nuestra flota porque, además del ahorro en divisas, significa la generación de miles de puestos de trabajo en astilleros y embarcados. Tenemos todo para hacerlo, solo falta decisión política: están las cargas, los puertos, los astilleros y los marineros. “Argentinos, a las cosas”, pongámonos manos a la obra y dejemos de tener miedo. Este es un tema central para nuestro desarrollo y nos haremos cargo de él.

37. Enviar al Congreso una ley de reforma del INTA. Que incluya la revalorización del Instituto y contemple la ampliación y modificación de su directorio. El objetivo de la reforma es su reorientación a la investigación científica en el sector, y a la agricultura familiar, campesina e indígena e intensificar la tarea de extensión. Debe propender a la formación y difusión de la agroecología, a la investigación y a prácticas autónomas productivas al servicio del país, y dejar de ser un apéndice de los agronegocios concentrados, tal como los ubica la derecha.

38. Descentralización y zonificación de INTA, SENASA, INASE. Sus sedes y direcciones se trasladarán al interior profundo. Por ejemplo, la sede central del SENASA debería estar en Santa Rosa, La

Pampa; la sede Central del INTA, en Santiago del Estero. Y el INASE, en Pergamino. No dejaremos a nadie en la calle, pero vamos a terminar con esto de que todo se centraliza en Capital Federal o en las capitales de provincias y todos viven ahí. Lo rural debe estar en el ámbito rural. No puede ser que los agentes públicos no pisén el campo ni para hacer un picnic. Si no te gusta el campo, no trabajes en cosas vinculadas con él, hay otros trabajos honestos. Necesitamos gente que ame y se comprometa con lo rural.

39. Arraigo. Crearemos la Secretaría de Arraigo, en el ámbito del Ministerio, con amplios poderes para coordinar con todas las áreas del Estado, a fin de garantizar salud, trabajo, cultura y educación en las poblaciones del interior profundo. Tendrá amplias facultades para desarrollar programas vinculados con la radicación de industrias. La prioridad de esta secretaría serán las poblaciones menores a 3000 habitantes y la recuperación de los pueblos en camino de transformarse en aldeas fantasma. Nos proponemos fundar nuevas localidades en el interior profundo de la patria.

Todas las acciones de esta secretaría deberán estar orientadas al repoblamiento del interior. Vamos a desarrollar una línea de créditos hipotecarios dirigidos a las familias que quieran relocalizarse en el interior profundo. En este punto, tendremos especial cuidado en no financiar la construcción de viviendas en los conurbanos de las grandes ciudades. Las líneas de financiamiento para viviendas, en el marco de esta secretaría, estarán disponibles, también, para la recuperación de casas abandonadas en los pueblos, preservando la construcción patrimonial que preserva la identidad.

40. Creación de una obra social para campesinos, chacareros, quinteros y otros. Que atienda la salud de productores familiares, hortícolas, pescadores artesanales, campesinos, indígenas, feriantes y todo aquel que de alguna manera esté vinculado con la soberanía y

seguridad alimentarias de la nación, y no se encuentre encuadrado en alguna obra social.

41. Cultura. Organizaremos concursos zonales, regionales y nacionales para rescatar la literatura, la música y la poesía de nuestra gente del interior profundo. Se deberá convenir con el Ministerio de Cultura de la Nación el rescate de actividades lúdicas del interior profundo, que tienen que ver con nuestra idiosincrasia como pueblo. Fomentaremos y apoyaremos al sostenimiento de los centros tradicionalistas que existen en casi todos los pueblos. Los apoyaremos con subsidios para fletes de caballos, forrajes, talabartería, pilchas camperas y otros insumos. Ejemplo: festivales, concursos de riendas y desfiles. También implementaremos cursos de tejeduría, alfarería, talabartería, e historia, capacitando a las personas en el área de la comunicación, para que dejen de ser narrados por otros.

42. Sancionar una ley de promoción de la cría de caballos. Tanto de trabajo como los destinados al polo o a las actividades hípicas. Propenderá y garantizará el buen trato animal. Tendrá una mirada puesta tanto en poseedores de caballos individuales, como en quienes quieran armar una tropilla, cualquiera sea el uso: paseo, *hobby* o deporte ecuestre. Esto, aparte de ser una actividad enraizada con el origen mismo de la patria, generará muchísimos puestos de trabajo y divisas a nuestro país, así como ayudará a diversificar el uso del suelo. Es una práctica más amigable con el medioambiente y muy adecuada para realizar en las zonas donde están prohibidas las fumigaciones.

43. Cuestiones de género. Todas las medidas enunciadas precedentemente serán tomadas desde esa perspectiva, porque existe una gran desigualdad de género en la ruralidad. El modelo agroexportador ha generado un papel de invisibilidad de la mujer rural. La pobreza está fuertemente arraigada en las zonas rurales y el contexto agrario

específico suma una presión adicional sobre la ya histórica desigualdad de oportunidades femeninas. Las compañeras son el eslabón más golpeado en la cadena de inequidades rurales, aunque la ley las ampara formalmente. Lo cierto es que abundan los ejemplos en los que, por prácticas machistas fuertemente arraigadas en las familias agrarias, las mujeres quedan afuera o son tratadas en forma desigual a la hora de repartir herencias, de acceder a la tierra, a los créditos o financiamientos diversos que las excluyen de hecho.

En lo que respecta a las leyes, existen muchos huecos por donde se cuele el patriarcado. Ha quedado ampliamente demostrado que, a la hora de cumplir con los préstamos a la agricultura familiar, las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. En la ruralidad existen varios factores que expresan en forma concreta la desigualdad de género y dónde hay que poner todas las energías para corregir:

- a) Ausencia de la mujer en la titularidad de la tierra y la producción.
- b) Acceso desigual a la educación.
- c) Falta de protección legal.
- d) Falta de autonomía corporal.
- e) Falta de atención en salud.
- f) Falta de representación política.
- g) Violencia doméstica.
- h) Falta de acceso al crédito y al financiamiento de proyectos específicamente para mujeres. Intervendremos fuertemente para superar estas formas odiosas de desigualdad. Intensificaremos los programas para el sostenimiento de la producción en la agricultura familiar, un ámbito donde la mujer es protagonista. Mejoraremos la asignación presupuestaria del programa EN NUESTRAS MANOS, específicamente diseñado para mujeres agricultoras. Es un plan que las empodera, dándoles la posibilidad de desarrollarse en la producción.

44. Ministerio de la Mujer. Un gobierno popular deberá reponer inmediatamente ese Ministerio específico, que deberá contar con una Secretaría de la mujer campesina. En el mundo rural es de gran importancia para desarrollar programas en contra la violencia machista en las comunidades pequeñas y medianas, donde el problema está totalmente invisibilizado y carece de un abordaje específico y eficiente de parte del Estado. Capacitaremos a todos los agentes públicos en la Ley Micaela, especialmente, a las fuerzas de seguridad. Pondremos personal especializado para organizar la recolección de denuncias y las formas de abordaje apropiadas a cada circunstancia, localidad y paraje. En el mundo rural la situación de las mujeres es la más precaria de todas: por el aislamiento geográfico, es mucho más difícil ponerse a buen resguardo de la violencia machista.

45. Promoción de la apicultura. Uno de los costos ocultos y menos evaluados de la sojización es la desaparición de la actividad apícola en la pampa húmeda. Las abejas tienen una importancia enorme que pocas veces se valora. Según la investigadora del INTA, Laura Curini: “Las abejas aportan numerosos beneficios a la vida humana, entre los que se destaca principalmente la función polinizadora, de la que solo en la Argentina depende el 74 % de los cultivos [...] la ausencia polinizadora impactaría en una reducción del 50 % en los rindes de las producciones”.⁴⁴ En Argentina se pierde anualmente el 34 % de las colmenas melíferas. La utilización indiscriminada de productos químicos y las fumigaciones son una de las principales causas de tales pérdidas. Entre 1997 y 2009, la Argentina disminuyó entre un 20 y un 30 % la producción de miel. Eso son miles de millones menos en exportaciones de miel y la pérdida de miles de puestos de trabajos.

44 INTA, 21 de mayo del 2020.

Proponemos:

- 1) Subsidiar el 50 % de la semilla de alfalfa (nacional) para la siembra en banquinas y zonas periurbanas, con destino a la producción melífera.
- 2) Hacer cumplir a rajatabla la disposición de no sembrar en las banquinas de rutas nacionales, provinciales, o caminos comunales, exceptuando alfalfa y/o producciones frutihortícolas.
- 3) Financiar la compra de colmenares con créditos a valor producto, a todo aquel que quiera incorporarse a la actividad.
- 4) Incluir la apicultura como materia optativa en las escuelas secundarias para capacitar nuevos apicultores.
- 5) Organizar un mercado público de referencia de la miel para que los productores no sean estafados por intermediarios y grandes monopolios.
- 6) Otorgar créditos a tasa diferenciada para aquel productor ganadero que quiera agregar la producción de miel como complemento de su explotación.

MAREA
EDITORIAL



Índice

Prólogo	
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.....	7
Introducción	
Salud y cosechas	9
PRIMERA PARTE	
Estado de situación.....	11
Capítulo 1	
El debate agropecuario pendiente	13
2008: ¿hubo debate?	14
¿Dónde se debate lo agropecuario?.....	16
No todo el campo es lo mismo	18
Modelo sojero, definición y costos.....	19
Contrarreforma y breve lista de costos ocultos	21
La estrategia del neoliberalismo	23
Los 70: lo agrario en debate	24
Rol del Estado	27
Un poco de contexto	29
Surgen las ligas agrarias	32

Capítulo 2

Agricultura de tres pisos	35
Primer piso: la tierra	39
Segundo piso: los contratistas rurales.....	47
Tercer piso: <i>pools</i> y megaprodutores.....	48
¿Qué es un productor agropecuario?.....	53

Capítulo 3

Terratenientes y glifosato	59
¡Cómo nos versean!.....	61
Los nuevos latifundios	63
La nueva oligarquía terrateniente.....	65
Aclaración indispensable.....	67
La agricultura buitre en acción.....	68
¡Qué detalle “el detalle”!.....	69
¿El campo es uno solo?	70
El uso del lenguaje como forma de encubrir.....	71
Chacra y chacareros	73
Definición de chacra mixta.....	74
Unidad Económica.....	75
Peronismo, chacra mixta y Unidad Económica	77
Vaguedad y eufemismo.....	79
Manipulación.....	81
Conocimientos, precisión y política	82

Capítulo 4

Unidad de medida	85
Cómo medir el modelo agrícola.....	85
Método propio	87
La dictadura del análisis	88
El campo nacional y popular no puede mirar a través de esa lente	89
Volumen y teoría del derrame	90
Sentido común productivo con orientación social.....	91
Cómo medir.....	92
Aclaración necesaria	93

SEGUNDA PARTE

El campo al día 2020-2024.....	95
Segmentación y puertos	97
Pandemia y latifundio.....	99
Vicentin: la lucha continúa	102
Los cerdos, ¿un negocio chino?	104
Falta un instituto de colonización agraria.....	106
Reflexiones sobre el paro.....	108
Las trampas de la Mesa del Maíz.....	110
De carne somos... ..	112
¿Por qué atacan a las retenciones?.....	114
La Argentina sangra por la Hidrovía S.A.	116
Campo y automotrices no son lo mismo	119
El vínculo entre pobreza, empleo y política agraria	121
Doble retención	123
Megaexportadoras vs. peones rurales.....	125
Los defensores de la ilegalidad	127
Ganadería: la ineficiencia privada.....	129
Pandora Papers, evasión y agro: pesar y medir	131
Razones y sinrazones del aumento de la carne.....	133
¿Cómo se mide el modelo agrícola?	136
China: déficit y registración.....	138
Resignificar las juntas reguladoras de precios	140
Trigo HB4: Estado o Monsanto, esa es la cuestión	143
Nacionalizar el Paraná.....	147
Retenciones: un debate clave	149
La soberanía es el tema.....	152
Atando cabos.....	155
Sequía: ¿a quién ayudar?.....	158
¡Si se pudo, se puede!	161
Asamblea del 28 de la Federación Agraria Argentina	165
Alimentos: lo que no se discute.....	168
El Grito de Alcorta.....	171
Las gallinas fusiladas.....	175

Políticas públicas diferenciadas	178
Alimentos, insatisfacción democrática y gobernabilidad	181
Todo el poder a los <i>pools</i>	185
Agarrá la pala	188
Realidad: matemáticas y estadísticas	192
El Canal Magdalena vive	196

TERCERA PARTE

45 propuestas para el debate de una nueva política agropecuaria.....	201
Falta nuestra voz y nuestra propuesta	203
¿Solo traición?.....	204
¿Qué hacer?.....	207
Cambiar, ¿cómo?	208
Aportes al debate con ideas.....	209
Los senderos del miedo	211
Sin política agraria no hay buen gobierno posible.....	212
Además de urbanizar, ¡actualizar!	213
Sin debate no hay cambio posible	215
Hay que cambiar.....	217
La propiedad privada en función social.....	218
Obstáculo psicológico	221
Propuesta política para ejecutar estas medidas.....	224
Las 45 propuestas	226

MAREA EDITORIAL



Esta edición de
El campo popular
se terminó de imprimir en Latingráfica,
Rocamora 4161, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el mes de noviembre de 2024.

MAREA
EDITORIAL